EN EL DESAMPARO

Los Zetas, el Estado, la sociedad
y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010),
y Allende, Coahuila (2011)

Sergio Aguayo Quezada
Editor

Investigación
Delia Sánchez del Ángel
Manuel Pérez Aguirre
Jacobo Dayán Askenazi

EL COLEGIO DE MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

Primera edición, 2017
D.R. © El Colegio de México, A. C.
Carretera Picacho Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
14110 Ciudad de México.
www.colmex.mx
ISBN: 978-607-628-146-8
Hecho en México

EN EL DESAMPARO

Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando,
Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)

Documentos de trabajo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, realizados con el auspicio de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV)

Editor:

Sergio Aguayo

Investigadores principales:

Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi

Apoyo en diferentes partes de la investigación:

Anuar I. Ortega Galindo, Maura Roldán Álvarez, José Díaz-Briseño y Zyanya Valeria Hernández Almaguer

Consejo Asesor:

Mariclaire Acosta Urquidi, Rubén Aguilar Valenzuela,
Javier Sicilia Zardain y Juan Villoro Ruiz

Índice

Capítulo 1
LOS ZETAS, EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LAS VÍCTIMAS DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (2010), Y ALLENDE, COAHUILA (2011)
Sergio Aguayo Quezada

Capítulo 2
PANORAMA DE LA VIOLENCIA EN EL NORESTE MEXICANO
Manuel Pérez Aguirre

Capítulo 3
LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
Manuel Pérez Aguirre

Capítulo 4
SAN FERNANDO. EL ESTADO MEXICANO
Delia Sánchez del Ángel

Capítulo 5
LA TRAGEDIA EN LA REGIÓN FRONTERIZA DE COAHUILA: ALLENDE, LOS CINCO MANANTIALES Y PIEDRAS NEGRAS
Manuel Pérez Aguirre y Anuar I. Ortega Galindo

Capítulo 6
DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA SOBRE EL CASO ALLENDE
Anuar I. Ortega Galindo

Capítulo 7
LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN ALLENDE, COAHUILA, A PARTIR DE MARZO DE 2011. EL ESTADO MEXICANO
Delia Sánchez del Ángel

Capítulo 8
RECOMENDACIONES HACIA LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL
Delia Sánchez del Ángel y Jacobo Dayán Askenazi

Capítulo 9
LA MASACRE DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, Y LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN ALLENDE, COAHUILA: UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Delia Sánchez del Ángel

Agradecimientos

En proyectos tan complejos se acumulan deudas porque participa un buen número de personas. El proyecto nace de una idea de Jacobo Dayán Askenazi que aceptan Jaime Rochín del Rincón y Miriam Morales Sanhueza (CEAV). En El Colegio de México el proyecto contó con el respaldo entusiasta de la presidenta, Silvia Giorguli, el secretario general, Gustavo Vega, y la directora del Centro de Estudios Internacionales, Ana Covarrubias.

A partir de ahí se fueron sumando las instituciones. Luis Raúl González Pérez y Joaquín Narro por la CNDH; Rubén Moreira Valdez (gobernador de Coahuila) y Luis Efrén Ríos Vega (Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila).

Mención especial merece nuestro Consejo Asesor, que nos acompañó durante el proceso: Mariclaire Acosta Urquidi, Rubén Aguilar Valenzuela, Javier Sicilia Zardain y Juan Villoro Ruiz.

Resultó también fundamental la colaboración del equipo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD): Ana Lorena Delgadillo, Rodolfo Córdova Alcaraz, Alma García Guevara, Nayely Lara García y Willy Arturo Hernández; asimismo, la de Blanca Martínez y Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y la de Ariana García, de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras. Ina Zoon, del Open Society Justice Initiative, nos compartió su experiencia.

Contamos también con la colaboración de Víctor Manuel Sánchez Valdez de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila; de Luis Daniel Vázquez y Karina Ansolabehere, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); de Artemisa López León, del Colegio de la Frontera Norte en Matamoros; de José Antonio Guevara Bermúdez, de Javier Garza (Torreón, Coahuila) y de Jorge Verástegui González (abogado independiente de Coahuila).

Nos compartieron archivos Jason Buch (*San Antonio Express News*), Alfredo Corchado (*Dallas Morning News*), Guadalupe Correa-Cabrera (Universidad de Texas), Michael Evans y Kate Doyle

(National Security Archive, George Washington University).

El enlace entre El Colegio de México y la CEAV lo llevaron Jacobo Dayán y Luis Rosas Ramírez. De la administración y finanzas se encargaron Georgina Romero Fuentes, Gerardo Gutiérrez Cortés y Mónica Hernández Fuentes.

Colaboraron en diferentes partes de la investigación: Anuar I. Ortega Galindo, Maura Roldán Álvarez, José Díaz Briseño y Zyanya Valeria Hernández Almaguer.

Capítulo 1

LOS ZETAS, EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LAS VÍCTIMAS DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS (2010), Y ALLENDE, COAHUILA (2011)

Sergio Aguayo Quezada

A. Introducción

El artículo 1 constitucional establece con toda claridad que "el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". En los municipios de San Fernando y Allende hubo dos tragedias; ¿cumplió el Estado con sus obligaciones? En caso contrario y poniendo en el centro a las víctimas de la violencia, ¿qué lecciones nos deja el estudio de esos casos paradigmáticos?

Existe suficiente información para afirmar que, en términos generales, el Estado no ha hecho la tarea. Ello profundiza y amplía la fractura entre Estado y sociedad. Es una fisura nociva porque, en asuntos de seguridad y respeto a la dignidad, son indispensables las convergencias entre gobernantes y gobernados. Una forma de lograr entendimientos y empatías es con acercamientos a la verdad en casos paradigmáticos que iluminen patrones y permitan hacer recomendaciones.

En marzo de 2016, El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) firmaron un convenio para que el primero realizara una investigación independiente sobre el **trato y reparaciones proporcionado por el Estado mexicano —Federación, organismos autónomos, estados y municipios— a las víctimas** de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010), y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila (marzo de 2011). Ambas tragedias fueron ordenadas por la organización criminal de los Zetas.

Este tipo de convenios son difíciles de implementar, pero se firman porque la tragedia humanitaria impone la obligación de buscar convergencias entre Estado y sociedad, convergencias facilitadas porque, en estos asuntos, se diluyen las diferencias ideológicas.

En nuestro caso, las dilaciones iniciales fueron resolviéndose en la medida en la cual se generaban entendimientos y se firmaban acuerdos de confidencialidad. Al final, tres instituciones públicas compartieron sus acervos: la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC). El expediente de Allende se revisó en la sede de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. También contribuyeron con información la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).

Para el proyecto, resultó fundamental la confianza de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), del Centro Diocesano para

los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila, y de Familias Unidas en laBúsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras. Esas organizaciones han acompañado a las víctimas de ambas tragedias.

Michael Evans, del National Security Archive (George Washington University), Jason Buch, periodista del *San Antonio Express-News*, y Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de Texas, nos compartieron material útil para la investigación.

Persisten huecos, es cierto, pero este diagnóstico preliminar tiene avances en la comprensión del trato que las instituciones del Estado concedieron a las víctimas de las dos tragedias. Es un trabajo que hemos hecho partiendo de una convicción: las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.

En consecuencia, adelantamos nuestra conclusión principal: es urgente e indispensable que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo. El estudio de dos tragedias nos acercará a una verdad que es un paso indispensable para lograr que en México se conceda prioridad a las víctimas.

B. Los Zetas y las dos tragedias

Las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Tres serían los principales:

a. El control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila.
b. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas iniciada en enero de 2010.
c. La complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.

B.1. San Fernando, Tamaulipas

San Fernando es un punto de cruce obligado para quienes utilizan las carreteras del Golfo de México para entrar a Estados Unidos por Reynosa y Matamoros. Según el historiador Carlos Flores, desde los años cuarenta del siglo xx, San Fernando "estuvo dominado por cacicazgos vinculados a actividades ilícitas".[1] La dominación se convirtió en férrea ocupación cuando empezó la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo en enero de 2010.

Los Zetas tenían dos objetivos prioritarios en San Fernando:

a) Mantener el control de un municipio estratégico para las comunicaciones y para extorsionar migrantes o utilizarlos como sicarios.
b) Evitar que le llegaran al Cártel del Golfo los refuerzos que les enviaba la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa para apoyarlos en su guerra contra los Zetas.

En el primer semestre de 2010 crecieron los homicidios y las desapariciones, pero ningún observador anticipó el nivel de salvajismo que significó la ejecución a sangre fría de 72 migrantes el 22 de agosto de 2010. El hecho se conoció porque, cosa rara, en San Fernando hubo dos sobrevivientes (según el entonces presidente de El Salvador, un ciudadano de su país también escapó).

Uno de ellos, ecuatoriano, brindó numerosos testimonios que difieren entre sí (para una revisión detallada véanse los capítulos 3 y 4. La declaración rendida por un hondureño a la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración es más precisa porque se corrobora con otras evidencias:

> [Los migrantes íbamos en] dos tráileres tipo TROCAS; [los traficantes de personas] nos dijeron que nos llevarían hacia Reynosa, Tamaulipas, [pero] en el camino nos informaron que había un retén de militares. Por ese motivo, nos dijeron que bajáramos de las trocas y continuáramos el viaje caminando para rodear el lugar en donde se encontraba el retén [...] caminamos una hora veinte [y] abordamos nuevamente las trocas [...] después de veinte minutos más de camino, fuimos interceptados por un grupo de personas [que] vestían de mezclilla, con chalecos antibalas, y con fornituras en la cintura, usaban armas de nueve milímetros, algunas tipo AK-47 y como de francotirador que nos apuntaban con un tipo láser color rojo.
>
> Nos llevaron a un lugar del cual no recuerdo el nombre, solamente logré ver que tenían en la entrada la leyenda "RANCHO" [...] nos dieron de comer tacos y sodas y en ese momento nos [dijeron] que pertenecían a un grupo denominado como **LOS ZETAS**, y que nos ofrecían trabajo porque se encontraban en lucha con otras personas del **GOLFO**, y en contra del **EJÉRCITO** [...] nos pagarían mil dólares por semana. Sólo aceptaron el ofrecimiento tres personas, una de nacionalidad hondureña, otra salvadoreña y una guatemalteca. [También les ordenaron quitarse la camisa] para ver si teníamos tatuajes y nos [preguntaron] si habíamos pertenecido a alguna pandilla o grupo de guerrilla en nuestros países, a lo cual todos dijeron que no.
>
> [Nos] volvieron a subir a los tráileres [que] se estacionaron frente a [una] casa blanca. [Un sicario] nos dijo que nos bajáramos [...] nos amarraron las manos hacia la espalda con unas sogas de plástico [...] nos vendaron los ojos, y [...] después nos fueron acomodando formando una U, primero las mujeres entre las cuales se encontraba una [señora] embarazada.
>
> Nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar. Momentos después [un sicario] comenzó a disparar a las mujeres; en ese momento un migrante de quien no recuerdo su nacionalidad les dijo a los sujetos que no les dispara[ran] y escuché que le dispararon y que lo azotaron en la pared; y en ese instante me deslicé hacia unos matorrales [...] después escuché que se alejaban las trocas [...] veinte minutos después escuché que un hombre se levantó [...] me acerqué a él [y] me percaté que se encontraba sangrando y le dije que lo iba a ayudar a salir del lugar.

Para facilitar la lectura se hicieron ligeros ajustes
a la redacción de esta y otras declaraciones,
teniendo cuidado de no alterar la esencia de los relatos.

En 2015, la reportera Marcela Turati dio a conocer la declaración ministerial de Edgar Huerta Montiel, *El Wache*, jefe de la plaza de San Fernando y segundo al

mando de los Zetas en la región. Él explica los motivos de los Zetas:

> En agosto de 2010, el encargado de Ciudad Victoria reportó a *El Coyote* que iban dos camionetas doble rodada con gente [y] que cuando llegaran a San Fernando, las checáramos […] *El Kilo* checó que eran indocumentados y se le reportó a *La Ardilla* [quien respondió] que los investigáramos bien, que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de *halcones* o para tenerlos de esclavos. *La Ardilla* dio la orden de que se mataran y *EL ALACRÁN, EL CHAMACO* y *EL SANIDAD* los mataron con tiro de gracia, calibre 9 milímetros. Cuando se terminó de matar a los migrantes nos fuimos a San Fernando a un rancho […] ahí dormimos normalmente y estuvimos como 15 días […] como ya era de noche, no se enterraron en ese momento, pero al otro día llegaría *EL CHAMACO* a enterrarlos, pero ya no fue porque llegaron antes los marinos.[2]

Aunque esta masacre ha sido bastante investigada, persisten dudas e imprecisiones que dejamos por el momento de lado; algunas de ellas se detallan en los capítulos 3 y 4. Sólo las ejemplificamos con el género de las víctimas:

a) Secretaría de Marina: a "22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas **(58 hombres y 14 mujeres)**";[3]
b) Ministerio Público de Tamaulipas: "setenta y dos personas sin vida, **trece del sexo femenino y cincuenta y nueve del sexo masculino**, los cuales se encuentran vendados de los ojos y atados de las manos con cinchos de plásticos color blanco".[4]

A reserva de seguir discutiendo San Fernando con otros enfoques, puede asegurarse que ese municipio tamaulipeco era en el 2010 un campo de exterminio. Las estadísticas sobre homicidios y desaparecidos lo demuestran:

- *Homicidios*. En el 2009 hubo 12.93 homicidios por cada 100 mil habitantes y en el 2010, 100.95. En el 2011 se recuperaron 196 cuerpos de fosas clandestinas sin que las circunstancias de sus muertes queden claras.
- *Desaparecidos*. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, entre 2005 y 2009 no hubo ningún desaparecido en la región que tiene como centro a San Fernando. En 2010 se disparó a 39.50 desaparecidos por cada 100 mil habitantes.

La ejecución en masa terminó de meter en la agenda nacional e internacional el viacrucis vivido por los migrantes que cruzan México.

B.2. Allende, Coahuila

Los Zetas llegaron al norte de Coahuila entre 2004 y 2005. Iban a reforzar al Cártel del Golfo. A medida que crecía la importancia de Piedras Negras en el tráfico de narcóticos, los Zetas incrementaron su autonomía. Armando Luna,secretario de gobierno de Coahuila, dio una buena explicación sobre la forma como consolidaron su poder en esa región: primero eliminaron la competencia y monopolizaron las actividades ilegales; para ello iban sometiendo a

las policías municipales y a las autoridades locales. El caso de Allende concuerda con esta secuencia y, para 2009, los Zetas tenían a la policía municipal a su servicio.[5]

Una versión muy extendida es que en Allende desaparecieron 300 personas. Es posible que así sea, pero el expediente de la PGJEC sólo tiene información sobre 42 desaparecidos de Allende en un periodo de 14 meses.

Desaparecidos de Allende entre enero de 2011 y agosto de 2012

Desapariciones entre enero y febrero de 2011	4
Desapariciones en el fin de semana del 18 al 20 marzo de 2011	26
Desapariciones posteriores hasta agosto de 2012	12
Total de desaparecidos que aparecen en expediente	42

La crónica que sigue se concentra en las 26 personas que desaparecieron en las 49 horas que inician el viernes 18 de marzo a las 7 de la tarde y terminan el domingo 20 de marzo a las 8 de la noche.

Debemos, primero, entender la racionalidad del operativo:

a) Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42) controlaban Allende desde Piedras Negras.[6] Ellos creían que había tres traidores en su organización. El principal era Alfonso *Poncho* Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, *El Negro*, y a Luis Garza Gaytán, *La Güiche* o *La Güichina*.

b) Según afirmaron Cuéllar y Moreno en juicios en Estados Unidos, los hermanos Treviño consideraron que los traidores estaban colaborando con las autoridades estadounidenses; les entregaban evidencia de operaciones, como el lavado de dinero con caballos pura sangre dirigida por José Treviño, hermano mayor del Z40 y del Z42. También los responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la ganancia obtenida por el tráfico de drogas a Estados Unidos a través de Piedras Negras. Los tres se encuentran en la actualidad en Estados Unidos donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas; en inglés: *Drug Enforcement Administration*).

c) Garza vivía en Allende y los Zetas ocuparon el poblado el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad desaparecieron a 26 personas: 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de *Poncho* Cuéllar y dos trabajadores de Héctor Moreno. También destruyeron 32 casas y dos ranchos "Los Garza" y "Los Tres hermanos".

> Hablamos de desaparecidos porque, aun cuando en el expediente se detallan las ejecuciones, los testimonios no deben ser la única evidencia. Faltan pruebas más contundentes sobre su muerte.

De acuerdo con los testimonios, el operativo tuvo cuatro etapas:

a) Los preparativos. Los sicarios recibieron la orden de "que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza [porque] los iban a levantar para matarlos". Los 20 efectivos de la policía municipal fueron instruidos para:

i. "No salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran"; y
ii. "Levantar a cualquiera de apellido Garza" para entregarlo a los Zetas.

> Las fuerzas del orden cumplieron eficazmente las directrices recibidas.

b) La captura. El 18 de marzo por la tarde llegaron, según el expediente judicial, al menos 60 sicarios fuertemente armados a Allende. "Como a las 6:30 o 7:00 pm", un grupo de Zetas "tumban con una camioneta el portón principal" del rancho Los Garza, y "entran tirando balazos y agarrando a quien se encontraba presente (de siete a diez personas)". Entre ellos estaban "cuatro mujeres de edad mayor y dos niños".

La búsqueda continuó durante el fin de semana. Por ejemplo, el domingo, un contingente de sicarios y policías municipales "llegamos y nos metimos a la fuerza y tirando balazos" a la casa de un Garza. Lo capturaron a él, a su esposa y a un hijo menor. Los Zetas lo subieron "a la patrulla" de la policía para llevarlo a uno de los dos ranchos donde concentraban a los condenados.

c) La ejecución y destrucción de casas. De acuerdo con estas versiones, el domingo los sacaron de las casas a eso de las 8 de la noche para llevárselos caminando a los lugares de ejecución, "para luego matarlos a todos, dispar[ándoles] en la cabeza". En el expediente se identifica con nombre a 26 personas presuntamente asesinadas. Durante el fin de semana saquearon, vandalizaron e incendiaron las propiedades. Los Zetas incitaban a los vecinos a robar las casas antes de incendiarlas y demolerlas con maquinaria pesada. Los policías que presenciaron el saqueo "nomás se quedaron mirando".

> En el expediente hay confusiones y contradicciones acerca del número de propiedades destruidas. Después de verificarlas cuidadosamente, sostenemos que fueron 32 casas y dos ranchos.

d) El manejo de los cuerpos. Destruyeron los cadáveres en dos ranchos y con métodos distintos.

En el rancho Los Garza llevaron en un camión con redilas "tambos metálicos grandes [con] "diésel o gasolina". Esparcieron el líquido por toda la casa y en la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida. Un sicario recordó años después que "tuve que matar a una persona [de] un balazo en la cabeza". Luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche "hasta que se *cocinaron*" los cuerpos.

En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de Zaragoza) también mataron y

cocinaron gente, utilizando otro procedimiento: llevaron tambos y "entre todos les hicimos agujeros en la parte de abajo y en los lados". Luego echaron "un muerto en cada tambo. [Después] bañar[on] los cuerpos con diésel para después prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos [...] quedaba pura mantequilla. [Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que] no se viera nada".

> En Allende hubo dos supervivientes. Una niña de cinco años y un niño de tres. Una policía integrada a los Zetas se los llevó y los entregó en una casa hogar de Piedras Negras. De ahí fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven desde entonces.

El expediente que nos entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones.

Lo anterior tiene relevancia porque lo acontecido durante esas 49 horas en Allende es un episodio de una oleada de violencia que afectó a toda la región durante bastante más tiempo que aquel fin de semana. Encontramos evidencia que apuntala la hipótesis:

a) En Allende castigaron a los Garza. Desconocemos el tipo de represalias lanzadas contra los familiares de Cuéllar y Moreno en Piedras Negras y otros municipios.

b) La operación duró bastante tiempo. Por ejemplo, un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y policías detuvieron y desaparecieron en Allende a cuatro Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.

c) Es posible que haya víctimas no registradas por la Procuraduría. Para verificarlo tendría que hacerse una compulsa entre los nombres que aparecen en el expediente con los que tienen las organizaciones que representan a víctimas.

d) El trabajo periodístico de Jason Buch y Guillermo Contreras, del *San Antonio Express News*, y de Alfredo Corchado, en el *Dallas Morning News*, entre otros, apuntala la hipótesis de una tragedia mucho más amplia, geográfica y temporalmente. De hecho, el expediente menciona de pasada posibles hechos de violencia en otros municipios (Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza). En esta investigación no tuvimos tiempo para seguir esas pistas.

> El acuerdo de confidencialidad que firmamos nos impide dar a conocer la identidad de víctimas y verdugos, salvo que ya se hubieran hecho públicos por otros medios.

En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos en Allende.

Por cierto, la primera vez que apareció una mención a 300 víctimas en Allende fue en una declaración del 2013 hecha por Héctor Moreno Villanueva, *El Negro*, en un juzgado de Estados Unidos en el juicio contra José Treviño (hermano mayor del Z40 y del Z42). Se desconocen los motivos de Moreno para dar ese número. Al ser testigo protegido de la DEA, desconocemos lo que sabe.

Este hecho conduce a una avenida muy poco explorada. La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México. El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, comentó que actores principales de la matanza se encuentran en Estados Unidos y que la Procuraduría de Coahuila no ha tenido éxito en la extradición ni en obtener información de estas personas.[7]

Como argumentaremos más adelante, estamos ante una violencia criminal binacional.

> Con el apoyo del National Security Archive, estamos solicitando a la DEA que nos dé acceso a las declaraciones de los testigos protegidos.

C. El Estado y las víctimas de dos tragedias

Es necesario recordar que el Estado tiene la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y, cuando éstas ocurran, debe establecer los hechos para contribuir a que se haga justicia y se reparen los daños causados. Para cumplir con esas tareas —y para que las víctimas y la sociedad puedan verificarlo —, una pieza clave son acercamientos rigurosos a la verdad.

Hay un gran obstáculo: el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva. Éste es uno de los motivos más frecuentes tras las tensiones con aquellos sectores de la sociedad convencidos de que el acceso a la información y a la verdad es un derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad.

Para este proyecto hubo dependencias —como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores— que no entregaron información. Las que sí lo hicieron —CEAV, CNDH y gobierno de Coahuila, entre otras— nos proporcionaron acervos donde se aprecian debilidades, omisiones y errores que iremos incorporando al análisis en el afán de hacer correcciones que permitan atender a las víctimas.

C.1. Municipios

Es indispensable entender el papel jugado por los gobiernos locales, ya que es el terreno donde interactúan cotidianamente el crimen organizado y el Estado. En esta investigación nos centramos solamente en las policías municipales de dos municipios. Adelantamos la conclusión principal:

> *En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes se involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar ni combatir a los delincuentes.*

A continuación, explicamos la manera como se ejercía esta dominación, aclarando que hay diferencias en la cantidad y calidad de la información disponible para ambos casos.

C.1.1. San Fernando, Tamaulipas

La CNDH hizo una investigación de tres años sobre la masacre, pero no se interesó en entender el papel jugado por la policía y el gobierno municipales. Pese a ello, hay algunos documentos oficiales mexicanos y estadounidenses que confirman la complicidad entre criminales y policías. La evidencia más clara apareció a raíz de que el ejército descubriera, durante abril de 2011, entre 193 y 196 cuerpos en fosas clandestinas cercanas a San Fernando (las cifras finales varían dependiendo de la fuente).

El cónsul de Estados Unidos en Matamoros se interesó por las fosas clandestinas porque hubo rumores de que entre los muertos había dos estadounidenses. En sus informes al Departamento de Estado, incluyó una afirmación bien importante: fueron detenidos 17 Zetas y 16 policías de San Fernando. Estos últimos fueron acusados de "proteger a los Zetas responsables de secuestrar y asesinar a los pasajeros de los autobuses".[8] Si tomamos a los 16 policías como indicador, al menos 44% de los 36 agentes estaban al servicio de los Zetas. Es probable que los otros no se opusieran.

Una evidencia documental igualmente importante es una escueta tarjeta informativa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, recuperada por Michael Evans del Archivo de Seguridad Nacional de Washington. Ese documento parafrasea declaraciones ministeriales de integrantes de los Zetas y de policías. Según un delincuente, "los policías y [agentes de] tránsito de San Fernando ayuda[ban] a la organización de los Zetas".

En la misma tarjeta se mencionan tres de las funciones que desempeñaba la policía al servicio del crimen organizado:

a) "Omisión en su deber en la observación de delitos cometidos" por los Zetas.
b) "Labores de *halconeo*".
c) Detención de personas que entregaban a los Zetas.[9]

La tarjeta informativa de la SEIDO se refiere a las fosas encontradas en el 2011,

pero entre los involucrados menciona al policía Álvaro Alva Terrazas, *El Junior*. Según la declaración de Edgar Huerta Montiel, *El Wache*, difundida por Turati, Álvaro también participó en la masacre de agosto de 2010. Puede inferirse, por lo tanto, que la policía era controlada por los Zetas al menos desde el 2010.

El documento de la SEIDO también habla de que la organización criminal pagaba a la policía, pero sin especificar el monto. Cuando se conocen los bajos salarios de los policías, se entiende la facilidad para corromperlos o cooptarlos.

	Monto
Sueldo mensual promedio de un policía municipal en la región.*	5,187.00

* El monto fue establecido a partir de los datos existentes de las policías municipales de Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso en 2010.[10]

C.1.2. Allende, Coahuila

En el expediente elaborado por la Fiscalía de Coahuila sobre Allende hay bastante más precisión sobre la relación entre la delincuencia organizada y la policía municipal.

Una de las declaraciones ministeriales más claras de ese expediente es la de un bombero. Él comenta que, a mediados de 2009, se dio cuenta de que la dirección de policía municipal de Allende ya "estaba involucrada con la delincuencia organizada". Otros testimonios aseguran que en el 2010 el control era total.

El testimonio de los policías que rindieron testimonio confirmó que "todos recibíamos dinero de los Zetas, unos obligados y otros por gusto". Si contrastamos las versiones aparecidas en estas declaraciones, 11 de los 20 policías municipales colaboraban activamente con los Zetas (entre ellos estaban el director y el comandante) y el resto lo aceptaba sin participar ni rechistar.

La policía tenía las siguientes funciones:

a) Ignorar las denuncias y "reportes de la ciudadanía".

b) El comandante colocaba a los "policías en diferentes puntos de la ciudad para que pasaran todas las novedades, es decir, ponía a *halconear* a los policías". Tenían instrucciones de avisar cuando llegaba o pasaba el Ejército, la Marina o los GATES (Grupo de Armas y Tácticas Especiales creado por el gobierno de Humberto Moreira en el 2009). También debían avisar del arribo de vehículos con matrículas de otras entidades porque, según un policía municipal, "los Zetas tenían temor de que entrara un grupo criminal para hacerles competencia".

c) Dejar que los Zetas entraran a la cárcel local para sacar personas o golpearlas dentro de las celdas. Un uniformado recordaba que el jefe de plaza visitaba la cárcel "como si estuviera en su casa sin que nadie le dijera nada".

d) Cobrar el derecho de piso para entregarlo a los Zetas. El director de la Policía daba a sus subalternos una lista de cantinas "para ir a cobrar cuotas". También recaudaban la "cuota de las prostitutas". Entre todos los establecimientos juntaban 14 mil pesos (no aclaran si esta cantidad era diaria, semanal o mensual).

e) Participar activamente en los *levantones* y en la entrega de personas a los criminales.

Una parte de los recursos obtenidos por los Zetas en Allende la dedicaban a la compra de la complicidad policiaca. Sorprende lo económico que les resultaba tener a su servicio a una corporación policiaca.

Pagos mensuales de los Zetas a la policía municipal de Allende 2011

Sueldo mensual promedio de un policía municipal en la región*	6 324.33
Pagos mensuales de los Zetas	**Monto**
Director de la corporación policiaca	20 mil
Comandante de la corporación policiaca	10 mil
Cuatro responsables de turno (RT), 3 mil c/u	12 mil
7 policías dispuestos, 2 mil c/u	14 mil
4 policías poco dispuestos, mil c/u	4 mil
3 policías que se negaron, 500 c/u	1 500
Gasto mensual de los Zetas en la policía	**61 500**

* El monto fue establecido a partir de los salarios de las policías municipales de Acuña, Piedras Negras y San Pedro en 2011, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.11

Las autoridades municipales eran, en el mejor de los casos, figuras decorativas. Quien fuera presidente municipal en marzo de 2011 manifestó por escrito a la Procuraduría que "no fui testigo presencial de los hechos", que "me enteré por comentarios aislados de personas que tampoco habían presenciado los acontecimientos", que "nunca recibí notificación alguna, queja o denuncia de personas o víctimas de los hechos violentos". El comandante de la Dirección de Seguridad Pública reveló que él no había recibido ninguna denuncia ni información de persona alguna o de otro medio y que, como no es facultad del municipio
emprender una investigación, pues él no hizo nada.

> Reiteramos lo ya dicho: estamos ante un caso de desaparición forzada porque en el expediente aparecen declaraciones sobre levantones o ejecuciones sin que se proporcionen evidencias más sólidas que confirmen su muerte. La Procuraduría de Coahuila ha clasificado a 26 de los desaparecidos como secuestrados.

Tomando como base esas declaraciones, puede asegurarse que:

a) En esos dos municipios la organización criminal controlaba el aparato de seguridad local y que algunos de los policías eran parte integral de los Zetas.
b) Hay similitudes en los métodos utilizados por los Zetas para controlar a las policías.

c) Los gobiernos municipales eran inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar “inmediatamente” los casos de desaparición forzada.
d) Si lo encontrado en San Fernando y Allende se reproduce en otros municipios —y hay evidencia en ese sentido—, los gobiernos locales son el flanco más débil del Estado mexicano.
e) La suma de lo anterior nos permite afirmar que los dos municipios revisados dejaron en el desamparo a las víctimas.

Queda una pregunta que abordaremos en las siguientes secciones: ¿qué papel jugaron los gobiernos de los estados, el gobierno federal y los organismos autónomos de derechos humanos?

C.2. Los gobiernos de Tamaulipas y Coahuila

Los tres gobernadores de Tamaulipas y Coahuila que analizaremos tuvieron comportamientos claramente diferenciados.

El tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López (enero-diciembre de 2011) evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos.

Rubén Moreira ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por las víctimas.

Fundamentamos a continuación estas afirmaciones.

C.2.1. Tamaulipas

El gobierno de Torre Cantú se distinguió por las negaciones y la ineficiencia:

a) Las negaciones. Durante abril de 2011 se descubrieron entre 193 y 196 cuerpos en fosas clandestinas de San Fernando. El cónsul de Estados Unidos en Matamoros categorizó en unas frases la reacción del gobierno tamaulipeco: “Funcionarios del gobierno de Tamaulipas intentan minimizar los descubrimientos y la responsabilidad del estado”. Luego añadió que se disculpan diciendo que “el crimen organizado es un problema federal y que el estado carece de los recursos para enfrentarlos”.[12]

Encontramos la misma actitud cuando le solicitamos información en el 2016 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET). Su respuesta fue escueta y evasiva. Se excusaron diciendo que la CNDH había iniciado de oficio una investigación y emitido una *Recomendación*. Es cierto que instituciones nacionales tomaron la responsabilidad del caso, pero la CODHET pudo haber hecho muchísimo más por los migrantes.

b) La ineficiencia. La Recomendación 80/2013 de la CNDH documenta muy bien el poco profesionalismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PFJET). Es el caso, por ejemplo, de la forma como manejaron los cuerpos de los 72 migrantes. Este ángulo se discute a profundidad en los capítulos 3 y 4.

> Ahora bien, ¿a qué se debe el comportamiento del gobierno tamaulipeco?, ¿era incompetencia o existían complicidades con el crimen organizado? De ser el caso, ¿cuál era el nivel y la profundidad de los lazos entre el gobierno de Torre Cantú y los Zetas o el Cártel del Golfo? Lo ignoramos en parte porque la CNDH no fijó responsabilidades ni profundizó sobre la actuación de los gobiernos del municipio y el estado; no lo hizo ni en su *Recomendación* ni en el expediente que la sustenta. Tampoco explica los antecedentes y el contexto, aun cuando en el acervo habría elementos para haber contribuido a la comprensión de lo sucedido.[13]

C.2.2. Coahuila

Ni la PGR ni la CNDH atrajeron el caso de Allende, cuyo manejo ha sido responsabilidad del gobierno de Coahuila. La manera como fue manejado por dos gobernadores muestra actitudes claramente diferenciadas.

La negación define el interinato de Jorge Juan Torres López (4 de enero a 1 de diciembre de 2011). La evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores estaban aterrorizados y porque el asunto fue ignorado inicialmente por los medios de comunicación. La Procuraduría sólo recibió una denuncia y realizó una visita a Allende, que se caracteriza por lo ambicioso de las instrucciones y lo magro de los resultados. Eso explica un comentario hecho por el gobernador Rubén Moreira (1 de diciembre de 2011 a la fecha) durante una conversación para esta investigación: en el tema de los desaparecidos, en “Coahuila no se había hecho nada”.

El gobierno de Rubén Moreira sí reconoció la gravedad de los hechos y sí se interesó por esa tragedia sin haber logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada.

a) Lo positivo del gobierno de Coahuila

Desde su campaña, Rubén Moreira reconoció que Coahuila tenía un problema grave de seguridad y derechos humanos. Como gobernador ha dedicado atención a las desapariciones. Entre las actividades más importantes estarían:

- Reunirse regularmente con los organismos civiles que representan a familiares de desaparecidos. Le reconocen el gesto y las políticas adoptadas, pero señalan los pocos resultados concretos y algunos condicionamientos inaceptables.
- Crear, en mayo de 2014, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila (CEEAV).
- Reformar la ley orgánica de la Procuraduría para crear la Unidad de Búsqueda especializada en desapariciones.
- Invitar a la Cruz Roja Internacional para hacer un programa de exhumación e identificación de cuerpos en fosas comunes.
- Responder por escrito —aunque de manera muy breve— el informe

Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, de Open Society Justice Initiative.

- Tener una mayor transparencia, lo que se refleja en el acceso al expediente dado a la CEAV y a un equipo de investigadores independientes.[14]

b) Insuficiencias y omisiones del gobierno de Coahuila

Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, asegura que el "peor hándicap del gobierno de Rubén Moreira es el de investigación, no le da prioridad al derecho a la verdad". Tiene razón y su diagnóstico se confirma con el análisis del expediente judicial y de lo hecho por dos organismos públicos del estado de Coahuila.

En el expediente aparecen las versiones de 61 personas que identificaron a 31 zetas y a cinco policías como participantes activos en los operativos de marzo de 2011 y marzo de 2012. Los otros integrantes de la corporación policiaca sirvieron de *halcones* o se encerraron en sus cuarteles.

Personas que declaran en el expediente de la Procuraduría de Coahuila

Familiares de víctimas	11
Policías municipales	18
Funcionarios públicos	2
Bomberos	4
Vecinos	16
Familiares de perpetradores	4
Zetas	6
Total	61

Como se verá en el cuadro siguiente, el tipo de actividades y las fechas en que se realizaron confirman:

- El peso desproporcionado que se concede a las declaraciones. 56 testimonios por cuatro visitas de peritos que incluyeron una recuperación de muestras casi tres años después.
- La lentitud extrema de un asunto que, por su gravedad, debería haber recibido más atención. De hecho, el caso es ignorado entre 2011 y 2013.
- Empiezan a darle prioridad a partir de enero de 2014, coincidiendo con una creciente atención mediática. Es hasta noviembre de 2014 cuando la Procuraduría envía, por primera vez, peritos al rancho Los Garza. Ayudados por un "binomio canino", recuperan 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales. Desconocemos si pudieron extraer DNA.

Acciones de la Procuraduría de Coahuila entre 2011 y 2016

Año	Acciones							
	Denuncias	Testimonios	Visitas oculares	Indagación entre población	Visitas de peritos	Tomas de muestras para análisis	Detenciones	Vistas de ejercicio de acción penal
2011	1	1	1	1	-	-	-	-
2012	1	3	-	1	-	-	-	-
2013	-	-	1	2	-	-	-	-
2014	8	37	-	3	4	2	6	1
2015	1	15	-	-	-	-	1	1
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11	56	2	7	4	2	7	2

Nota. Hasta principios de agosto de 2016 (fecha en la cual consultamos el expediente), no se había realizado otra diligencia en este caso, pese a que han estado saliendo testimonios sobre el caso en Cortes ubicadas en Texas. En el capítulo 5 se proporcionan más detalles sobre las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría.

El expediente deja la impresión de que Allende es una república independiente. Casi no hay menciones a otras partes del estado mexicano y carece de un análisis del contexto en el que ocurrieron las desapariciones y de los patrones sistémicos. Hablamos de requisitos esenciales para la conducción de una investigación con diligencia debida.

Tampoco se refleja el interés por relacionar Allende con otros municipios. El expediente se centra en las represalias contra Garza sin referirse a lo que seguramente hicieron los Zetas en municipios aledaños para castigar a Cuéllar y Moreno.

Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes —de este y otros casos— de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados. Una contradicción no resuelta es que en el expediente de la Procuraduría reciben el trato de “secuestro calificado”.

Un problema adicional es el escaso trabajo realizado por la CEEAV y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. La labor de ambas instituciones es inadecuada para la magnitud del problema. En el capítulo 8 se amplían estas reflexiones críticas.

Es entonces comprensible la profunda insatisfacción de los familiares de los desaparecidos a los que se les regatea un conocimiento preciso sobre lo que sucedió y que, además, constatan la lentitud e ineficacia de los procedimientos judiciales.

Por lo tanto, puede concluirse que las víctimas de San Fernando y, en menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados. Para establecer las posibles responsabilidades del gobierno de Tamaulipas, tendríamos que tener acceso a sus acervos porque, recordemos, el caso fue atraído por instituciones federales. En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política y, como permanecerá en el cargo hasta finales de 2017, tendría tiempo para acelerar los trabajos y consolidar una política bien intencionada, pero todavía no consolidada.

C.3. Gobierno federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

Los gobiernos municipales fueron cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Tamaulipas fue indiferente y el de Coahuila, insuficiente. Ante ello, ¿qué hicieron y qué dejaron de hacer las dependencias federales y los organismos autónomos?

La información que tenemos es insuficiente para entender las acciones y omisiones del Ejecutivo federal y esperamos cerrar ese hueco durante la Fase 2 de esta investigación. Al parecer, la PGR atrajo algunas investigaciones sobre Allende y el Ejército y/o la Marina tenían bases cercanas a las cabeceras municipales de San Fernando y Allende. Suponemos que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tenía agentes desplegados en esos lugares y que el Instituto Nacional de Migración tuvo un papel en la problemática de los migrantes.

Así, sabemos que estaban enterados de lo que sucedía, pero ignoramos cómo procesaban esos conocimientos y, sobre todo, cuál era la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los Zetas sobre los dos municipios revisados. En el caso de Allende, un bombero aseguró que los “elementos de Sedena jamás intervinieron en ningún enfrentamiento”.

En todo caso, pondremos el acento en la CNDH y la CEAV, los organismos públicos que nos dieron acceso a sus archivos.

C.3.1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la *Recomendación* 80/2013. El acceso a las 12 182 fojas numeradas que sustentaron dicha *Recomendación* nos permitió entender mejor sus métodos de trabajo y la forma como se autolimitaba.

Este análisis se centra sobre todo en el periodo de Raúl Plascencia como presidente de la CNDH: noviembre de 2009 a noviembre de 2014. Está incompleto el análisis sobre lo hecho durante la gestión de Luis Raúl González.

a) *San Fernando*. La *Recomendación* tiene partes positivas. Por ejemplo, hace una buena descripción de los errores cometidos por la Procuraduría de Tamaulipas. Asimismo, responsabiliza a los agentes del Ministerio Público por no realizar de manera adecuada la identificación, manejo y conservación de cadáveres, por incumplir con los procedimientos adecuados para el manejo de cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos y por entregar restos sin tener certidumbre sobre las identidades (enviaron a Honduras el cuerpo de una víctima de nacionalidad brasileña).[15]

Los aciertos quedaron opacados por la falta de seguimiento y por las omisiones que tiene. Ello, sumado a la gestación tan larga, terminó haciéndola irrelevante para la protección de las víctimas.

De hecho, la mayor falla de la CNDH en San Fernando es la falta de empatía hacia las víctimas. Independientemente de lo declarado a los medios por el titular de este organismo, la revisión del expediente que sustentó la *Recomendación* —acuerdos, actas circunstanciadas, dictámenes médicos, averiguaciones previas, comunicados de prensa, notas periodísticas, etc.— nos permite asegurar que hasta diciembre de 2013 la CNDH no entró en contacto con las familias de las 72 personas que perdieron la vida.

La CNDH hizo varias recomendaciones a la PGR y al gobierno tamaulipeco. Fueron regaños públicos sin consecuencia alguna, pero que permiten constatar la distancia entre lo pedido por la CNDH y lo sucedido. Por ejemplo, la CNDH hizo siete recomendaciones al gobernador de Tamaulipas. Las cinco primeras empiezan de la misma manera: que "se instruya a…" tal o cual autoridad; la sexta pide que "se giren instrucciones al Secretario de Seguridad Pública" y la séptima ordena que "se colabore ampliamente con" la CNDH.

Es notable la facilidad con la cual la CNDH consideraba que sus recomendaciones habían sido cumplidas. Bastaba con que el gobierno de Tamaulipas mandara un oficio "instruyendo" a tal o cual dependencia del gobierno a fin de que hiciera lo que la CNDH pedía para recibir el comentario de "cumplimiento" parcial o total. No hubo seguimiento para verificar si se estaba haciendo y si con ello se mejoraba la situación de las víctimas. Hay incluso indicios de que el gobierno de Tamaulipas lo único que hizo fue enviar oficios, lo cual, en México, es notoriamente insuficiente.

La CNDH tampoco investigó el papel jugado por la policía municipal y por otros agentes del Estado. Es una omisión notable porque, en su *Informe especial* de 2009 sobre el secuestro de migrantes, aseguró que en "algunos casos [hay] indicios que sugieren la participación o colusión de autoridades de los tres

órdenes de gobierno".[16] Llegó a tanto el descuido que en su *Recomendación* ni siquiera cita dicho *Informe*. De hecho, hizo a un lado los testimonios a su disposición; nos quedamos con la impresión de que se autocensuró.

La CNDH de Raúl Plascencia se abstuvo de intervenir en el caso de Allende pese a que, en septiembre de 2014, el titular declaró que tenían meses investigándolo y que habían recabado testimonios y recorrido el lugar de los hechos.[17] Según Juan Alberto Cedillo, de la revista *Proceso* (30 de junio de 2014), un oficio de la CNDH había respondido a una queja sobre Allende que el asunto "fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila".[18] El mismo reportero de *Proceso* entrevistó al presidente municipal de Allende, Reynaldo Tapia, quien refutó a Plascencia al decir que la CNDH se había presentado en Allende tan sólo unos días antes de la rueda de prensa.[19]

En la gestión de Luis Raúl González, la CNDH continuó la indagatoria sobre Allende, pero sin demasiada continuidad. De hecho, hay un periodo de inactividad entre junio de 2015 y agosto de 2016, cuando se reinician los trabajos. Es cierto que enfrentó obstáculos para acceder a la información, pero pudo haber tomado otras acciones para continuar con su indagatoria.

La reforma constitucional de 2011 concedió a la CNDH la capacidad de calificar una violación como "grave", lo cual da más recursos a las víctimas y a la sociedad para exigir la verdad y obtener reparaciones. Durante su gestión, Raúl Plascencia sólo calificó dos violaciones como graves: Chilpancingo, Guerrero, y Ocoyucan, Puebla.[20] Pensamos que una forma incorrecta de medir la gravedad es contando el número de muertos. Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos.

C.3.2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Durante el sexenio de Felipe Calderón apareció el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y otros organismos que exigían atención para las víctimas. Ellos y quienes los respaldaron metieron el tema en la agenda nacional e internacional. El Estado reaccionó aprobando leyes, creando instituciones y asignando presupuestos. Sin embargo, las víctimas, los organismos que las representan y quienes observan estos temas coinciden con lo insatisfactorio de los resultados.

Uno de los primeros actos públicos de Enrique Peña Nieto fue la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es la instancia superior de coordinación, formulación y evaluación de las políticas públicas dedicadas a brindar protección, atención, ayuda, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional. La documentación que nos entregaron y el acceso que nos dieron nos permiten asegurar que la Comisión ha

sido incapaz de dar una buena atención a las víctimas de San Fernando (sobre Allende no tiene un expediente abierto). En los capítulos 8 y 9 detallamos lo encontrado en la CEAV y presentamos recomendaciones muy puntuales. En este documento simplemente enunciamos las ideas centrales.

La CEAV tiene en su mandato una enorme capacidad potencial para asistir, proteger y reparar a las víctimas. Sin embargo, se ha distinguido más por lo que ha dejado de hacer que por sus logros. En buena medida, esto se debe a un deficiente diseño original y a un desorden burocrático causado en parte por una fractura entre los cuatro comisionados (debería haber siete), a la timidez en la interpretación de sus funciones, al excesivo énfasis que ha concedido a la indemnización individual olvidándose de la reparación integral, a la distancia que tiene con las organizaciones que atienden a víctimas y a la manera como está otorgando recursos del fondo de víctimas.

Este diagnóstico tan severo es compartido por diferentes actores públicos y es incluso la opinión de integrantes de la misma Comisión. Cuando entregamos este Informe está en marcha un esfuerzo del Ejecutivo federal y del Congreso por reestructurar a fondo esta organización, central en la atención de las víctimas. Esperamos haber contribuido con esta investigación a la reflexión colectiva.

En suma, la CNDH y la CEAV no atendieron adecuadamente a las víctimas de San Fernando y de Allende. Esta percepción —compartida por organismos y analistas mexicanos y extranjeros— ha provocado una crítica metódica y a veces destructiva que debe dar paso a una discusión más fructífera: ¿cómo fortalecemos los organismos públicos? A eso dedicamos las próximas secciones.

D. Las víctimas, la sociedad organizada y el Estado

Pese a las condiciones adversas, las víctimas han podido defender sus derechos porque han contado con el apoyo de organismos civiles, medios de comunicación y académicos de México y otros países. Es una telaraña de interacciones que no podemos, por ahora, reconstruir o describir con el detalle que se requiere. Hacemos un bosquejo que profundizamos en los capítulo 8 y que completaremos en la Fase 2 de esta investigación.

En términos muy generales, estos actores cubren tareas complementarias. Los medios llaman la atención sobre las tragedias dándoles, en muchas ocasiones, un rostro humano. Al ser visibilizadas, las víctimas se sienten reconocidas y en algunas ocasiones buscan el apoyo de los organismos civiles que, una vez involucrados, las acompañan durante el tiempo que sea necesario. Simultáneamente, los académicos van recuperando e interpretando los hechos para generar un conocimiento que alimenta el trabajo de activistas y periodistas. Estos actores sociales inician, solos o aliados, una interacción con algunas partes del Estado que en ocasiones lleva a la aprobación de leyes, la creación de instituciones y la aprobación de presupuestos.

D.1. Las víctimas

Conversamos con familiares de los asesinados en San Fernando y con organismos que representan a los desaparecidos en Allende. Acercarse a las consecuencias que tiene la violencia sobre individuos y familias sacude profundamente por la intensidad del sufrimiento y porque nos recuerda la vulnerabilidad de todos los que vivimos en México. Por ello resulta tan importante contar con instituciones de Estado que tengan un marco jurídico que facilite el compromiso con quienes vieron violados sus derechos.

La madre de una salvadoreña asesinada en San Fernando sintetizó en cuatro frases los deseos de los afectados y su sensación de abandono:

a) Vivo en una incertidumbre de no saber a quién tengo enterrada en el cementerio de El Salvador.
b) Tenemos el derecho a la verdad, a la justicia y a la medicina, a la educación y a muchas cosas que necesitamos.
c) Nos prometieron [el gobierno] y hasta [ahora] en realidad nada.
d) Juegan con la dignidad de nosotros.

Una madre guatemalteca verbaliza el dolor y la impotencia sentida por los familiares: “A nosotros nos dejan moribundos, con nuestro dolor […] quedamos con dolor, angustia, desesperación, porque nos sentimos inútiles, nosotros no podemos hacer nada”.

En suma, las víctimas buscan verdad, justicia y reparaciones. También quieren ser tratados con dignidad. Hasta ahora, las instituciones del Estado mexicano han sido incapaces de cumplir con sus expectativas.

D.2. Los organismos civiles

Los organismos civiles han sido fundamentales en el acompañamiento de las víctimas de San Fernando y de Allende, así como en exigir al Estado que se les atienda. Para esta investigación trabajamos, sobre todo, con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho con sede en la capital y con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila.

La Fundación es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha apoyado más de cerca a las familias de las víctimas de San Fernando. Su papel ha sido fundamental para que el asunto haya ido avanzando por los vericuetos de la justicia mexicana. Esta labor persistente ha influido en la aparición de una conciencia nacional e internacional sobre el drama de los migrantes que cruzan por territorio mexicano, lo que su vez ha llevado a la aparición de una organización regional.[21]

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, Coahuila, fue impulsado por el obispo Raúl Vera López, un personaje central en la lucha por los derechos humanos. El Centro es pionero en el tema de los desaparecidos en el estado de Coahuila (empezó a trabajar por ellos en 2009). Su presencia ha sido uno de los factores que explican por qué el gobierno de Rubén Moreira puso ese tema como una de sus prioridades.

En Coahuila existen otras organizaciones que —aunque surgieron posteriormente— apoyan a las familias de personas desaparecidas. Entre ellos, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), que ha denunciado más de 380 casos y es respaldado por el Centro Fray Juan de Larios. También están: Familias Unidas en laBúsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Alas de Esperanza y Grupo VIDA.

Estas breves referencias de ninguna manera agotan la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en Tamaulipas y Coahuila. A reserva de que revisemos en más detalle a este actor, adelantamos una hipótesis fundamental: el tejido social de una ciudad, región o estado está muy condicionado por el entorno. Si la tragedia de Allende ha quedado en manos de organismos civiles de Coahuila, se debe en buena medida a la mayor densidad en el tejido social de esta entidad frente al de Tamaulipas. Con menos habitantes, Coahuila casi triplica el número de organismos civiles que tiene Tamaulipas.

Organismos de la sociedad civil (osc) en Tamaulipas y Coahuila, 2012-2016

	Coahuila		Tamaulipas		Nacional	
Población según el censo de 2010	2 748 391		3 268 554		112 336 538	
-	Totales	Tasa*	Totales	Tasa*	Totales	Tasa*
2012	367	13.3	188	5.8	15 019	13.4
2013	414	15.06	203	6.2	16 255	14.5
2015	-	-	225	6.9	22 918	20.4
2016	414	15.1	234	7.2	21 122	18.8

* Tasas calculadas por cada cien mil habitantes. Sólo se consideran las OSC con denominación “activa”. Los cálculos se realizaron en diferentes meses para cada año.

Fuente: Corresponsabilidad del RFOSC, Indesol-SEDESOL e INEGI para población calculada según el censo de 2010.

Este análisis tendrá que complementarse con una peculiaridad nacida de las condiciones tamaulipecas. Como lo plantea Lucía Calderón en una tesis doctoral de 2016, la intensidad de la violencia tamaulipeca llevó a la aparición de organismos civiles clandestinos e informales que establecieron redes de resistencia ante la ausencia de Estado.[22]

D.3. Los medios de comunicación

Los periodistas, los medios y las redes sociales han tenido un papel central en la evolución vivida por las tragedias de San Fernando y Allende. Esto es así porque a las víctimas, a los Zetas y a algunos gobernantes sí les importa lo que aparece sobre ellos.

Enumeramos algunos de los medios y periodistas que han jugado un papel central en los casos aquí revisados. Los medios que informan de manera cotidiana sobre lo que sucede en estos temas son *Proceso, Grupo Reforma*, *La Jornada, Sin embargo* y *Animal Político*, los *Mañana* de Matamoros, Nuevo

Laredo y Reynosa, *La Vanguardia* de Coahuila y *El Siglo de Torreón*.

Sobre San Fernando se han distinguido Marcela Turati de *Periodistas de a Pie*, organismo que incluso creó el sitio web de investigación periodística "+de 72" para abordar las masacres de migrantes en México.[23] Alma Guillermoprieto y Gary Moore se han encargado de difundir en el mundo lo sucedido en San Fernando.[24] En el caso de Allende, deben mencionarse los trabajos de Juan Antonio Cedillo (*Proceso)*, Diego Enrique Osorno (*Vice*), Jason Buch y Guillermo Contreras (*San Antonio Express News*) y Alfredo Corchado (*Dallas Morning News*).

Informar sobre el crimen organizado es más riesgoso en Tamaulipas que en Coahuila, en parte, creemos, por las diferentes densidades de capital social positivo. La organización Artículo 19 ha documentado estas variaciones en los ataques a la libertad de expresión (confirmadas en estudios de Freedom House, entre otras organizaciones).

Periodistas asesinados (2000-2016): Tamaulipas 13 y Coahuila tres.

Periodistas desaparecidos a enero de 2015: Tamaulipas 17 y Coahuila cuatro.

Para que la prensa tenga efecto, debe tener como interlocutores a gobernantes a los que les preocupa —por los motivos que sean— lo que se diga en los medios acerca de ellos. Al gobernador de Tamaulipas no le importaba; al de Coahuila, sí.

En cuanto a la atención concedida por los medios a San Fernando y Allende, la masacre de migrantes fue, desde un inicio, un escándalo nacional e internacional. Allende es el caso inverso. Ha ido creciendo el interés en la medida en que pasan los años y se entiende que este caso es la puerta de acceso a una violencia extendida a toda una región y a un estado.

D.4. La academia

La violencia que aqueja a México ha ido modificando la actitud de diversos actores. Siempre ha habido académicos interesados en el crimen organizado y en su efecto sobre los derechos humanos. Un cambio verificable es que un número cada vez mayor de instituciones académicas, públicas y privadas, mexicanas y extranjeras, están creando programas de investigación sobre las muchas aristas que tienen la guerra y la paz. Entre ellas se distingue, por cierto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si a ello sumamos la aparición de centros de investigación especializados, se entiende el incremento en la calidad del conocimiento sobre estos temas y la exigencia, cada vez mejor fundamentada, de políticas públicas acordes a la gravedad de la situación.

E. Lecciones de San Fernando y Allende

La revisión de los acontecimientos de San Fernando y Allende nos permiten presentar algunas conclusiones, líneas de investigación e hipótesis de trabajo que armamos sobre los siguientes supuestos:

a) El sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas.

b) Ello exige, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad.
c) Con eso regresamos al hilo conductor de esta investigación. Los acercamientos a la verdad son una forma efectiva para generar acuerdos sobre políticas públicas. Cuando mejore la comprensión del fenómeno y de los "otros", resultará relativamente más sencillo lograr consensos entre víctimas, sociedad y Estado sobre las formas de armonizar los derechos humanos con la seguridad.

Este razonamiento lleva a enumerar algunos huecos que deben cubrirse si queremos entender a cabalidad las lecciones dejadas por San Fernando y Allende.

E.1. Los Zetas y la sociedad

Los trabajos de Primo Levi, Robert Antelme, Christopher Browning y Hanna Arendt se caracterizan por un esfuerzo por entender la lógica de los perpetradores.[25] Cuando entendamos a los violentos y el respaldo que tienen en la sociedad, será posible disminuir el número de víctimas.

Es decir, las personas y los grupos nutren al capital social positivo o al negativo. En los municipios estudiados, había quienes apoyaban el estado de derecho y quienes compartían las creencias y antivalores del crimen organizado. Lo ejemplificamos con dos historias de Allende.

El control sobre los policías municipales de ese municipio coahuilense no era absoluto. Sabemos, por el expediente, que nueve de los 20 policías no colaboraron activamente y que el cuerpo de bomberos incluso se rehusó a colaborar y a recibir dinero. Reproducimos el testimonio de un bombero sobre la relación que estableció su corporación con los Zetas (**relato no verificado**):

> El jefe de plaza "le enseñó una faja de mucho dinero" al comandante de los bomberos de Allende y le dijo "tengan para que se alivianen" y el comandante le contestó que no, que así estaba bien, que "no había bronca". Entonces los Zetas "se bajaron de sus vehículos y nos dicen: 'váyanse a la verga para atrás'" y en la parte de atrás nos bajan los pantalones y con un leño nos pegaron en las nalgas, nos tablearon a todos mis compañeros por habernos negado a recibir el dinero. Después de tablearnos se fueron del lugar y advirtieron que si [seguíamos negándonos] nos iría peor. El comandante luego "habló con ellos y convinieron no aceptar nada de ellos para no tener ningún compromiso".

Desconocemos cuántos habitantes de Allende pusieron distancia con los delincuentes. Sabemos que hubo quienes justificaron los hechos y hasta celebraron las desapariciones.

Un vecino de Allende declaró al Ministerio Público que "en la casa de XXXX Garza, vendían droga, y siempre iba mucha gente a comprar y eso era algo que todo el pueblo sabía". Otra persona reconoció haber subido a Facebook fotografías de casas derruidas acompañado de una frase inquietante: "todo se paga… ¿qué tal se siente?". Según el expediente de la Procuraduría de Coahuila, el comentario de esta persona se debía a que los Garza le habían arrebatado el

control de la plaza a su padre.

En otras palabras, ¿cuál es la magnitud de la base social que tenía o tiene el estado de derecho y el crimen organizado en San Fernando, Allende y otras partes del país?, ¿cómo vamos a reaccionar ante aquellos sectores de la población que optaron por entregar su lealtad a los violentos?, ¿tiene la misma responsabilidad el sicario que asesina y los jóvenes que lo protegen porque quieren seguir su camino?

¿Por qué permitieron, el gobierno del estado y la Federación, tantos márgenes de autonomía a los Zetas? Es insuficiente especular sobre sus motivos. Debemos tener certidumbre, lo cual requiere hacer entrevistas, trabajo de campo y diseñar metodologías adecuadas para cada región.

E.2. El Estado

Para hacer análisis más finos tenemos que desagregar al Estado en sus elementos. Llama, por ejemplo, la atención la aparente autonomía de los presidentes municipales de San Fernando y de Allende frente a sus respectivos gobernadores y su sometimiento a los Zetas. ¿Cuán generalizado es este control en otros municipios de Tamaulipas, Coahuila y otras entidades mexicanas? En la documentación revisada se insinúan los pasos que tiene la dinámica de la dominación. ¿Existe un protocolo para la emancipación?

Lo mismo podría decirse de la relación de los gobernadores con la Federación. El gobernador de Tamaulipas se desentendió de la masacre de San Fernando y delegó el problema íntegro en la Federación. Rubén Moreira tomó la actitud contraria porque en la conversación que tuvimos con él aseguró que ya en su discurso de toma de posesión anunció: “de la seguridad de Coahuila me encargo yo”. ¿Significa lo anterior que la variable fundamental es la voluntad del gobernador? Sabemos que también influye la presión de una sociedad organizada, pero ignoramos cómo.

En el Ejecutivo federal, ¿cuánto sabían sobre lo que pasaba en San Fernando y en Allende, en Saltillo y en Ciudad Victoria?, ¿estaban enterados, pero lo consideraban daños colaterales que la sociedad debía pagar como parte de la estrategia de fragmentar a los cárteles?

A lo que vamos es que **no todos los funcionarios son iguales** y que, por lo tanto, es posible que la sociedad y sus partes establezcan acuerdos con funcionarios con mayor sensibilidad. Sin embargo, ese entendimiento tiene como requisito previo que las diferentes partes del Estado dejen de negar el costo humano que está teniendo la violencia criminal. Hay millones de víctimas esperando ser atendidas.

E.3. La variable internacional

Falta dedicarle mucha más atención al papel jugado por otros países, en particular Estados Unidos. Los 72 migrantes buscaban ingresar a Estados Unidos y al menos dos de los causantes del ataque a Allende son actualmente testigos

protegidos de la DEA, que se rehúsa a compartir información con el gobierno de Coahuila, pese a la orden de aprehensión en Coahuila contra ellos. Estaría luego el salvadoreño que, según el entonces presidente de El Salvador, sobrevivió a la matanza y se encuentra en Estados Unidos, al parecer como testigo protegido.[26] Si agregamos otros factores, pensamos que, como hipótesis de trabajo, San Fernando y Allende deberían ser analizados como expresiones de una violencia binacional y regional. Que algunos criminales tengan doble nacionalidad refuerza la idea de que estamos ante una violencia internacionalizada.

E.4. La variable económica

Estaría, finalmente, el peso de lo económico tras las acciones de los Zetas. ¿Tiene algún significado que las zonas donde se dieron las dos matanzas sean ricas en gas y/o petróleo? Éste es uno de los argumentos de la profesora de la Universidad de Texas Guadalupe Correa-Cabrera, quien nos facilitó, en las etapas finales de elaboración de este informe, su obra en prensa.[27]

****

Éstas son algunas de las reflexiones y preguntas que nos deja el estudio de dos tragedias en municipios cercanos a la frontera norte. ¿Qué hacer?

En los capi´tulos 8 y 9 ya incluimos algunas ideas sobre lo que podrían hacer la CNDH y la CEAV. Sin embargo, dada la magnitud que tiene la tragedia humanitaria, la CNDH, la CEAV y el INAI deberían explorar un entendimiento. Entre los acuerdos que podrían tomarse estaría el seleccionar una docena de casos paradigmáticos para revisarlos a profundidad como insumos de un modelo mexicano de atención a las víctimas de la violencia.

De manera paralela, los organismos civiles, los medios de comunicación y los académicos interesados en las víctimas deben explorar agendas comunes orientadas a diseñar estrategias conjuntas para tener mejores políticas públicas.

El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México termina agradeciendo a la CEAV, la CNDH y el gobierno de Coahuila, entre otras instituciones, su disposición a colaborar en una investigación académica independiente sobre dos tragedias mexicanas.

Desde nuestra perspectiva, el modelo de acercamientos a la verdad por medio de acuerdos entre Estado e institución académica es fructífero y puede contribuir a una mejor interpretación de la violencia y la paz. El Estado y la sociedad están obligados a unirse tras un objetivo marcado claramente en el Artículo 1 de la Constitución: “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Y la sociedad debe exigírselo.

Notas

[1] Comunicación electrónica con Carlos Flores, 11 de septiembre de 2016. Carlos Antonio Flores Pérez, *Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Publicaciones de la Casa Chata), 2013, 409 pp.

[2] "Declaración ministerial de Édgar Huerta Montiel ante la Procuraduría General de la República", recogido de Marcela Turati, "La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades", *Proceso*, 23 de mayo de 2015. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/405140/405140-la-matanza-de-san-fernando-inconsistencias-y-falsedades>; consultado el 15 de septiembre de 2016.

[3] Secretaría de Marina, comunicado de prensa 216/2010. Disponible en <http://2006-2012.semar.gob.mx/sala-prensa/comunicados-2010/1436-comunicado-de-prensa-216-2010.html>; consultado el 3 de octubre de 2016.

[4] "Diligencia de inspección ministerial y levantamiento de cadáveres" del 24 de agosto de 2010, levantada por el Ministerio Público Investigador del Estado de Tamaulipas. Manuscrito. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[5] Jan Martínez Ahrens, "Silencio, aquí se mata", *El País*, 5 de julio de 2014. Disponible en <http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/05/actualidad/1404594964_269006.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[6] Un detalle que ilustra la cultura de la violencia es el brinco del Z40 al Z42. Puede deberse a que entre gente de armas no se usa el 41, número que se asocia en México a los homosexuales.

[7] Conversación con Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, 28 de julio de 2016.

[8] Consulado de Matamoros, "Tamaulipas' Mass Graves: Body Count Reaches 145", cable diplomático para la Secretaría de Estado, 15 de abril de 2011. Disponible en<http://nsarchive.gwu.edu/mexico/SF-20110415.pdf>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[9] SEIDO, "Tarjeta Informativa. Asunto: Policías relacionados con el hallazgo de Cadáveres en las Fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas", fecha testada. Desclasificado y publicado por el National Security Archive. Disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB499/TarjetaInformativa.pdf>; consultado el 28 de septiembre de 2010.

[10] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Sueldos de policías estatales y municipales 2010- 2011", p. 14.

[11] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Sueldos de policías estatales y municipales 2011", p. 9.

[12] Consulado de Matamoros, "Tamaulipas' Mass Graves: Body CountReaches145", *op. cit*.

[13] La *Recomendación* es parca. En la sección de "Hechos", dedica un párrafo (párr. 3) para decir cómo se enteró del asunto, mediante la nota de prensa de *El Universal*, y lo que decía. En el apartado "Evidencias", describe el comunicado de prensa de la Secretaría de Marina (párr. 5), la nota de *El Universal* (párr. 6) sobre el hallazgo de los cuerpos y una nota de *La Jornada* titulada "Indocumentados, reclutados por zetas desde hace un año" (párr. 24). En el apartado "Situación Jurídica", hay un párrafo sobre cómo los migrantes iban viajando en dos camiones y los secuestraron los Zetas (párr. 101), así como un párrafo refiriéndose a que el grupo de migrantes fue trasladado a un rancho, les dispararon y un sobreviviente narró lo sucedido a la Secretaría de Marina, siendo repatriado el 29 de agosto (párr. 102). Finalmente, en el apartado "Observaciones", hay unos párrafos muy pequeños (párrs. 116, 117, 118, 119, 120 y 121) en los que se hace mención a lo que narró uno de los sobrevivientes.

[14] Conversación con Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, 28 de julio de 2016.

[15] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas*, 23 de diciembre de 2013. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf>, párr. 175.

[16] CNDH, Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, 15 de junio de 2009, p. 11. Disponible en<http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf>.

[17] Véase "CNDH investiga caso de Allende", *El Siglo Coahuila*, 12 de septiembre de 2014. Disponible en <https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/18599.cndh-investiga-caso-de-allende.html>.

[18] Juan Alberto Cedillo, “Tres años después, la CNDH comienza a investigar la masacre de Allende”, *Proceso*, 17 de septiembre de 2014. Disponible en<http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=382282>.

[19] *Idem*.

[20] *Recomendación 1VG/2012. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero*; la recomendación fue publicada el 27 de marzo de 2012, es decir, poco más de tres meses después de los hechos. *Recomendación 2VG/2014. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el Municipio de Ocoyucan, Puebla*; la recomendación fue publicada dos meses después de los hechos, el 11 de septiembre de 2014. *Recomendación 3VG/2015. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de V44, V45, V46, V47 y V52, así como la ejecución extrajudicial de V49, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán*; la recomendación fue publicada el 24 de noviembre de 2015, diez meses después de los hechos. *Recomendación 4VG/2016. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 24 civiles y la privación de la vida de un civil; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el “Rancho del Sol”, Municipio de Tanhuato, Michoacán*; la recomendación se emitió el 18 de agosto de 2016, es decir, un año y tres meses después de los hechos (15 meses). Disponibles en <http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves>.

[21] La Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes tiene como objetivos principales: apoyar en la consolidación local y regional de comités de familias de personas migrantes que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos “con la intención de que sean los familiares los protagonistas en la búsqueda de su derecho a la verdad y acceso a la justicia”; instaurar mecanismos regionales de búsqueda de personas migrantes desaparecidas; crear protocolos de identificación y búsqueda de personas migrantes; e implementar un marco legal regional que beneficie a todos los agentes involucrados en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Véase FJEDD, *Red regional verdad y justicia para personas migrantes.* Disponible en <http://fundacionjusticia.org/red-regionalverdad-y-justicia/>.

[22] Lucía Calderón Santos,*Tamaulipas, un estado emblemático en la lucha contra la violencia. Prácticas comunicativas en un ambiente de excepción*. Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2016.

[23] Véase <http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/>.

[24] Nos resultó particularmente útil el texto de Gary Moore, “Lost Piece of the MassacrePuzzle”.Disponible en<https://garymoore22.wordpress.com/2011/09/12/lost-piece-of-the-massacre-puzzle/>; consultado el 28 de septiembre de 2016. **El texto también fue publicado en Insight Crime.**

[25] Primo Levi, “The Gray Zone”, en *The Drowned and the Saved*, Nueva York, Vintage Books, 1989; Robert Antelme, *La especie humana*, México, Era, 1996; Christopher Browning, *Ordinary Men. Reserve Police Batallion 101 and the Final Solution in Poland,* Londres, Penguin, 1992; Hannah Arendt, *Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal*, Barcelona, Lumen, 1999.

[26] “El testimonio de los tres sobrevivientes ayudará a la investigación, porque sabemos de un ecuatoriano, de un hondureño y ahora de un salvadoreño que se encuentra en Estados Unidos”, expresó el presidente de El Salvador, Mauricio Funes (*La Jornada*, 6 de septiembre de 2010). Según *Periodistas de a Pie*, en la página “+de 72”, el testigo salvadoreño podría ser testigo protegido de la justicia estadounidense. De ser cierto, hay posibilidades de conocer más sobre lo que pasó el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

[27] Guadalupe Correa-Cabrera, *Los Zetas Inc.:Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico*, Austin, University of Texas Press(aparecerá en la primavera de 2017).

Capítulo 2

PANORAMA DE LA VIOLENCIA EN EL NORESTE MEXICANO

Manuel Pérez Aguirre

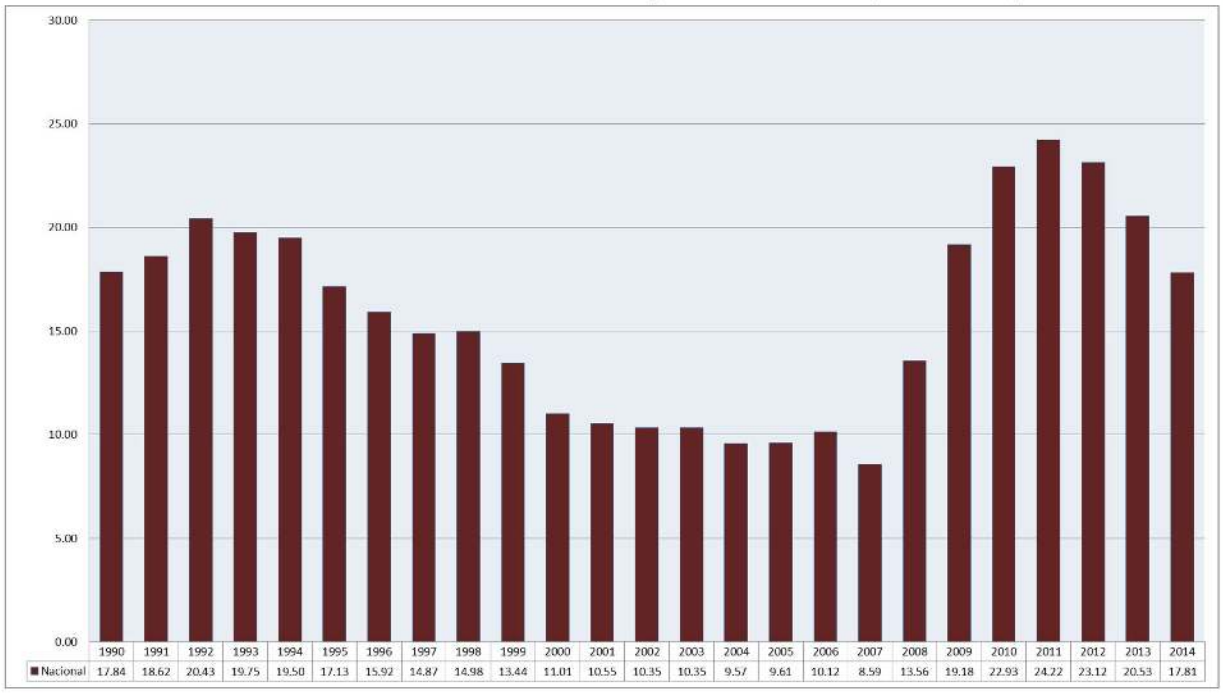
Para entender las matanzas de Allende y San Fernando es necesario analizar su contexto. Dicho de otra forma, Allende y San Fernando sólo son episodios visibles dentro de una ola de violencia que azotó al país. El noreste mexicano padeció una guerra entre organizaciones criminales que, definitivamente, trastornó la vida diaria de sus habitantes, sobre todo a principios de esta década.

Desde luego, el comportamiento de las organizaciones criminales mexicanas no puede entenderse sin considerar el papel que la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón tuvo como catalizador de la violencia criminal en México. Entre otras cosas, actualmente México es conocido como un país violento. No siempre fue así. A continuación se analizan los niveles de violencia en el país, utilizando los homicidios dolosos y las desapariciones como variables para aproximarnos al fenómeno[1] y para comprender cómo han variado su comportamiento a través del tiempo.

Los homicidios en México pueden dividirse a partir de los sexenios presidenciales, no sólo porque estos periodos sirven para establecer lapsos; también porque sus políticas de seguridad son determinantes. Como se aprecia en la siguiente figura, durante la década de los noventa y la primera del siglo XXI, el país mostraba una clara tendencia hacia la pacificación. La serie de tiempo inicia en el sexenio de Carlos Salinas, sin duda uno de los más violentos dentro del periodo. De hecho, pasarían casi dos décadas para alcanzar las tasas de homicidios del gobierno salinista.

El gobierno de Ernesto Zedillo se caracteriza por una disminución sistemática de los homicidios dolosos. Efectivamente, para el año 2000 había logrado reducir los niveles de violencia a casi la mitad del año más problemático de su antecesor. Vicente Fox continuó con esa tendencia, aunque no al ritmo de Zedillo y con una ligera tendencia creciente al final de su sexenio. Sin embargo, puede afirmarse que su sexenio es el más pacífico de las últimas décadas.

Tasas de homicidios dolosos de la República Mexicana (1990-2014)



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nacional	17.84	18.62	20.43	19.75	19.50	17.13	15.92	14.87	14.98	13.44	11.01	10.55	10.35	10.35	9.57	9.61	10.12	8.59	13.56	19.18	22.93	24.22	23.12	20.53	17.81

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Paradójicamente, el primer año de gobierno de Calderón es el menos violento de la serie. Es decir, su estrategia contra el crimen organizado no tuvo efectos inmediatos en la tasa de homicidios nacional. Es hasta 2008 cuando comienza a notarse el incremento exponencial que caracteriza al periodo calderonista. Sin abundar al respecto, basta decir que de 2007 a 2008 hay un incremento de casi 50% en la tasa de homicidios. Más aún, hacia el final de su sexenio, en 2011, las tasas de homicidios nacionales se habían incrementado casi tres veces respecto a 2007. El gobierno de Peña Nieto logró disminuir los homicidios dolosos en el país, aunque todavía está muy por encima de los niveles de violencia de hace poco más de una década.

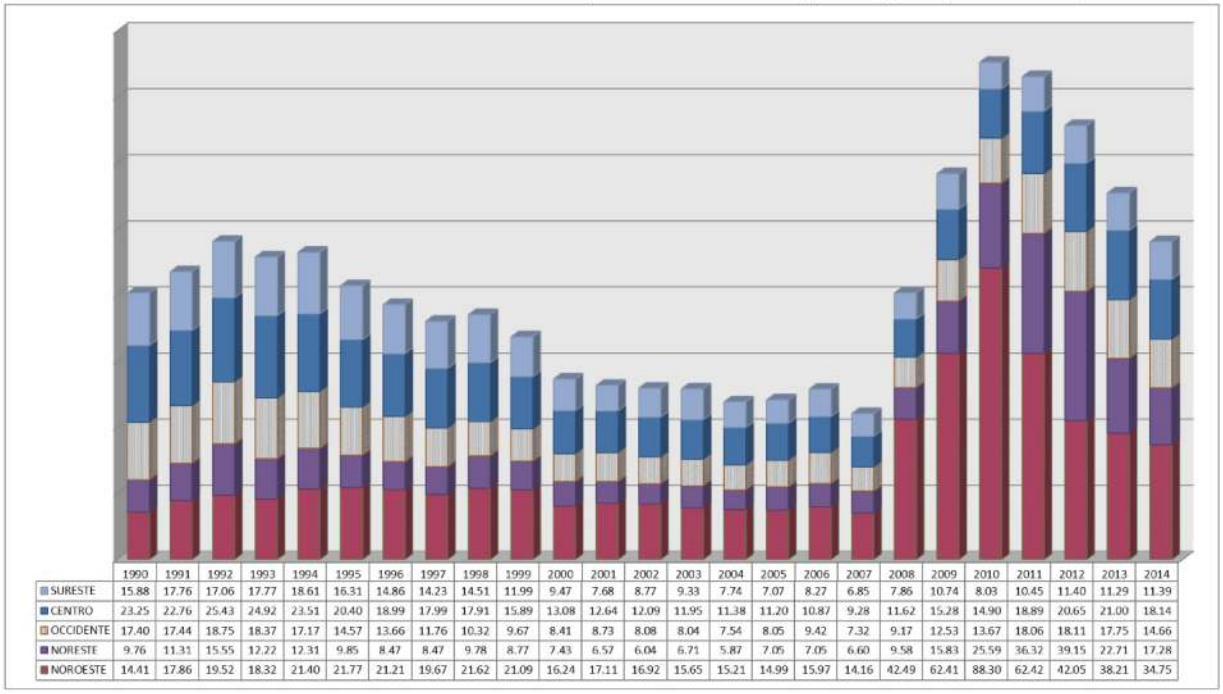
Así, resulta claro que la guerra contra el narcotráfico significó un punto de quiebre en la seguridad de los mexicanos. Básicamente, hay dos versiones sobre las razones del presidente Calderón para implementar esa política. La más difundida señala que el panista decidió involucrarse en el combate al crimen organizado para ganar legitimidad, considerando el conflicto poselectoral de 2006. A grandes rasgos, el presidente creyó que la lucha sería fácil, debido a

la superioridad de las fuerzas armadas mexicanas, y que le permitiría unificar al país en torno a una causa común. La otra versión sostiene que el presidente eligió la confrontación directa porque la situación era cada vez peor y necesitaba atención inmediata,[2] antes de que fuera incontrolable.

De cualquier forma, las consecuencias fueron brutales. Según Trejo y Ley, los efectos de la guerra calderonista no sólo deben medirse en el incremento exponencial de la violencia; también "en la expansión de los cárteles y sus socios criminales hacia nuevos mercados, incluyendo la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y el saqueo de recursos naturales".[3] Según Guillermo Pereyra,[4] las razones del incremento de la violencia deben rastrearse en la inestabilidad del mercado de drogas y en el combate militar que asumió el gobierno de Felipe Calderón.

Los homicidios dolosos en las regiones mexicanas

Tasas de homicidios dolosos de la República Mexicana por región (1990-2014)



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SURESTE	15.88	17.76	17.06	17.77	18.61	16.31	14.86	14.23	14.51	11.99	9.47	7.68	8.77	9.33	7.74	7.07	8.27	6.85	7.86	10.74	8.03	10.45	11.40	11.29	11.39
CENTRO	23.25	22.76	25.43	24.92	23.51	20.40	18.99	17.99	17.91	15.89	13.08	12.64	12.09	11.95	11.38	11.20	10.87	9.28	11.62	15.28	14.90	18.89	20.65	21.00	18.14
OCCIDENTE	17.40	17.44	18.75	18.37	17.17	14.57	13.66	11.76	10.32	9.67	8.41	8.73	8.08	8.04	7.54	8.05	9.42	7.32	9.17	12.53	13.67	18.06	18.11	17.75	14.66
NORESTE	9.76	11.31	15.55	12.22	12.31	9.85	8.47	8.47	9.78	8.77	7.43	6.57	6.04	6.71	5.87	7.05	7.05	6.60	9.58	15.83	25.59	36.32	39.15	22.71	17.28
NOROESTE	14.41	17.86	19.52	18.32	21.40	21.77	21.21	19.67	21.62	21.09	16.24	17.11	16.92	15.65	15.21	14.99	15.97	14.16	42.49	62.41	88.30	62.42	42.05	38.21	34.75

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

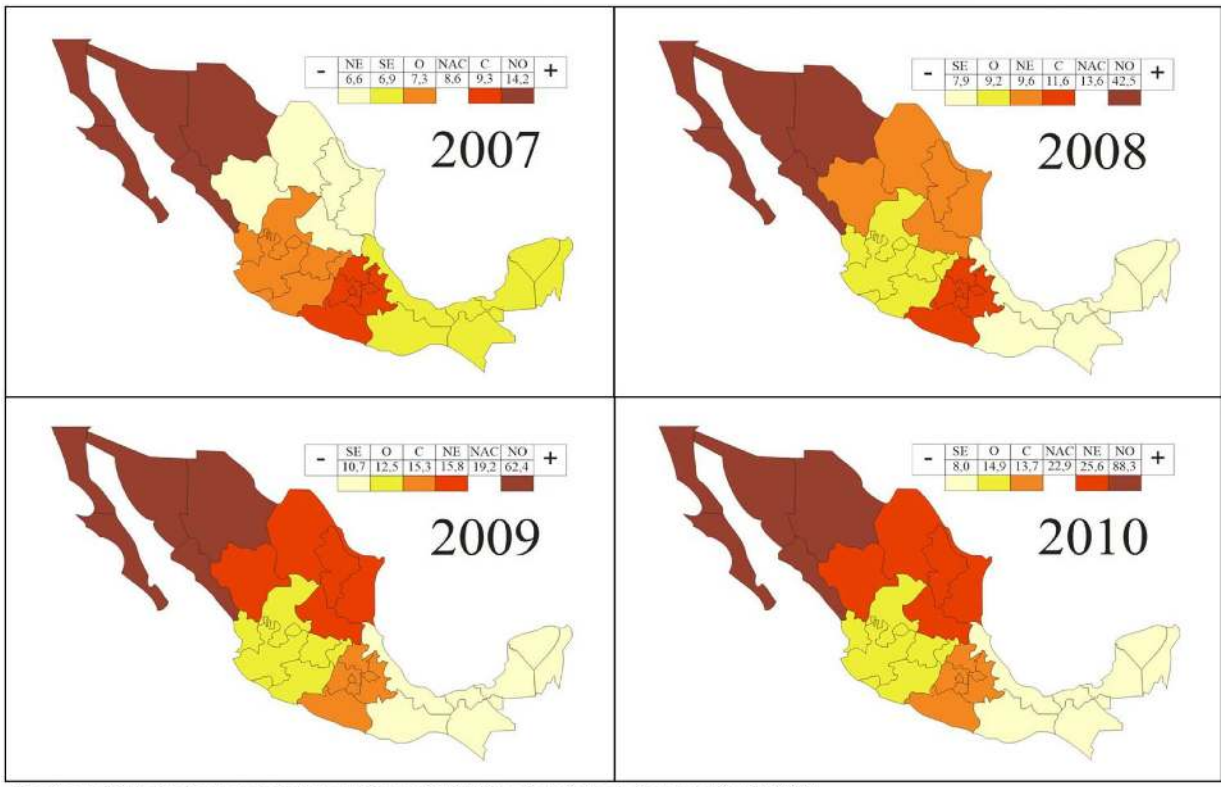
Desde luego, la violencia homicida no ha tenido el mismo comportamiento a lo largo del país. Vale la pena diferenciar entre las distintas áreas geográficas. Tomando como referencia las regiones

establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018,[5] y con base en los datos de homicidios dolosos del INEGI, la siguiente figura muestra los distintos comportamientos en esas zonas.

Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas) y Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) han sido las regiones más tranquilas del país a lo largo del periodo estudiado, con tasas inferiores a la nacional en todo momento. Vale la pena apuntar que la delimitación en sólo cinco áreas geográficas representa un problema para el análisis, porque obliga a juntar entidades muy conflictivas con otras mucho más pacíficas. Por ejemplo, en la zona Occidente coexiste Michoacán con Aguascalientes, o Veracruz y Yucatán en el Sureste.

No es de extrañar que el Centro del país muestre un patrón similar a la tasa de homicidios nacional a lo largo del periodo, considerando el peso poblacional del entonces Distrito Federal y el Estado de México. Sin embargo, vale la pena resaltar que la zona Centro (Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) ha sido más violenta que la nacional casi todo el tiempo, salvo en el periodo presidencial de Felipe Calderón. Esto no quiere decir que el Centro experimentara un periodo de paz durante el sexenio del panista; simplemente, el incremento en las zonas del norte del país opacó el de las demás.

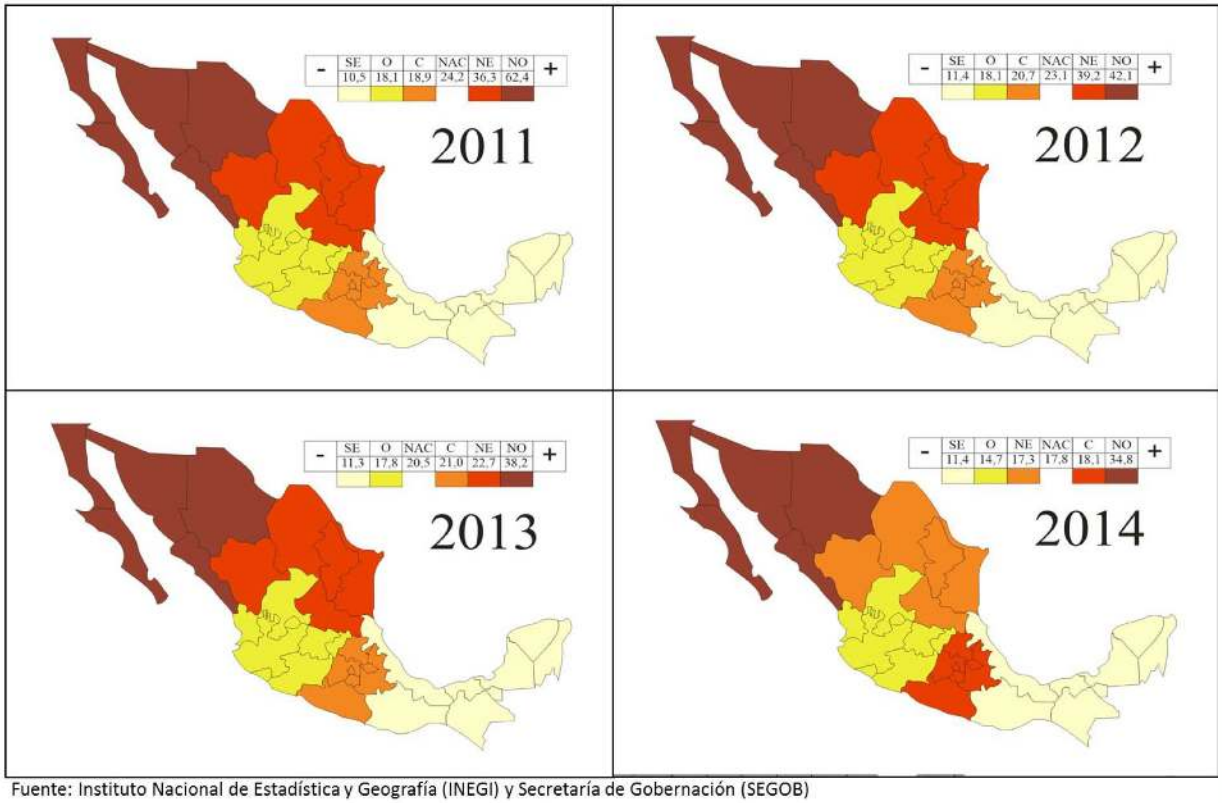
Evolución de las tasas de homicidios regionales (2007-2010)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

La zona Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas) pasó de ser la región más tranquila del país a experimentar un incremento brutal desde 2008 y hasta 2012. Nuevamente, los homicidios disminuyen cuando termina el periodo calderonista, regresando a la tendencia descendente que los caracterizaba. Aun así, los datos están muy por encima de los niveles que alguna vez tuvieron. Es necesario poner los datos en perspectiva. En primer lugar, esa región tuvo una tasa de homicidios dolosos menor a la nacional durante la mayor parte del periodo estudiado. En segundo, el incremento de 2008 a 2012 fue tan abrupto que en el último año casi rebasa al Noroeste, faltando muy poco para que se convirtiera en la región más violenta del país. Más aún, los estados fronterizos del noreste presentan una tasa mayor que el noroeste (42.7 contra 42.1). Nuevamente, el diseño de las regiones difumina la violencia regional. Para el caso del Noreste, la calma relativa de San Luis Potosí disminuye el impacto que los datos de Tamaulipas tienen sobre el conjunto, por ejemplo.

Evolución de las tasas de homicidios regionales (2011-2014)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

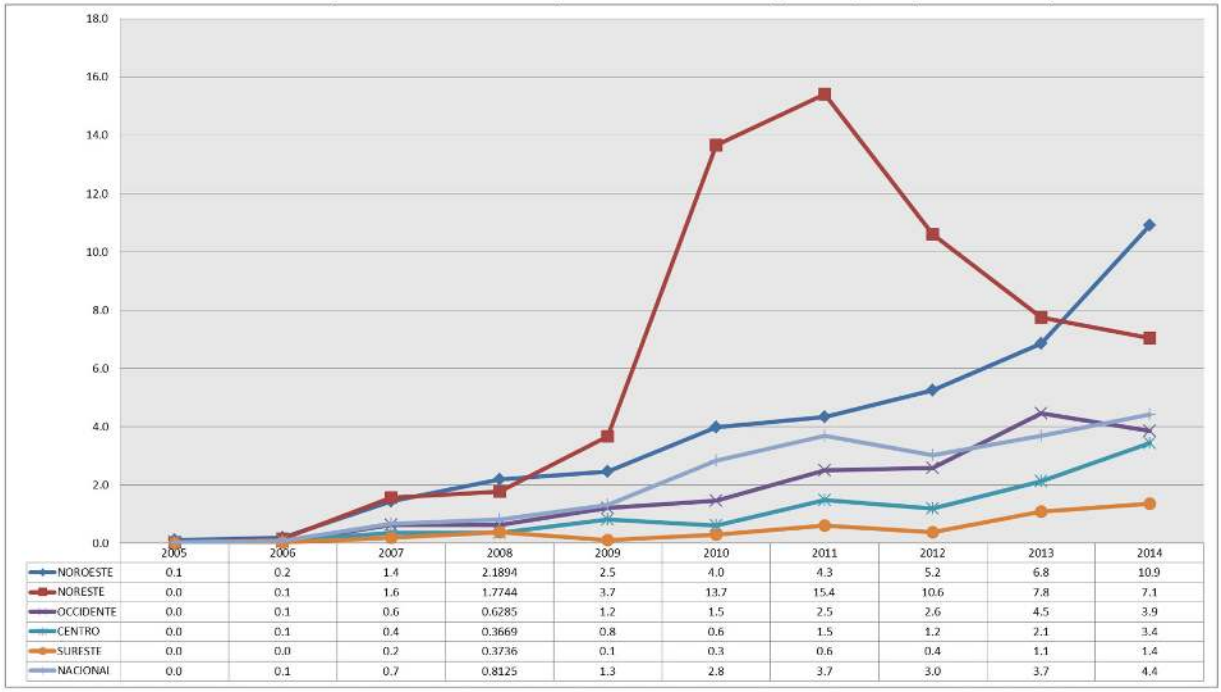
Uno de los argumentos más utilizados es que Felipe Calderón heredó un problema creciente y, simplemente, optó por combatirlo frontalmente. Sin embargo, las tasas de la zona Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora) muestran con mayor claridad los efectos de sus decisiones. Considérense dos datos: en primer lugar, los homicidios dolosos se incrementaron casi tres veces de 2007 a 2008; en segundo, el aumento persistió hasta llegar, en 2010, a tasas seis veces mayores que 2007; tercero, el noreste era más violento para 2010, la tasa se había elevado seis veces respecto a 2007.

Las desapariciones en las regiones mexicanas

Otra forma de aproximarse a la violencia es mediante el análisis de las desapariciones de personas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) tiene varios inconvenientes. Uno de ellos es que los registros pueden variar de un corte a otro, porque el RNPED se actualiza constantemente con

las personas que aparecen, con o sin vida. Otro es que, a decir de muchas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema,[6] los datos oficiales subregistran el fenómeno de los desaparecidos en México, aunque ese argumento podría hacerse extensivo a casi la totalidad de los delitos en el país.

Tasas de desaparecidos en la República Mexicana por región (2005-2014)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NOROESTE	0.1	0.2	1.4	2.1894	2.5	4.0	4.3	5.2	6.8	10.9
NORESTE	0.0	0.1	1.6	1.7744	3.7	13.7	15.4	10.6	7.8	7.1
OCCIDENTE	0.0	0.1	0.6	0.6285	1.2	1.5	2.5	2.6	4.5	3.9
CENTRO	0.0	0.1	0.4	0.3669	0.8	0.6	1.5	1.2	2.1	3.4
SURESTE	0.0	0.0	0.2	0.3736	0.1	0.3	0.6	0.4	1.1	1.4
NACIONAL	0.0	0.1	0.7	0.8125	1.3	2.8	3.7	3.0	3.7	4.4

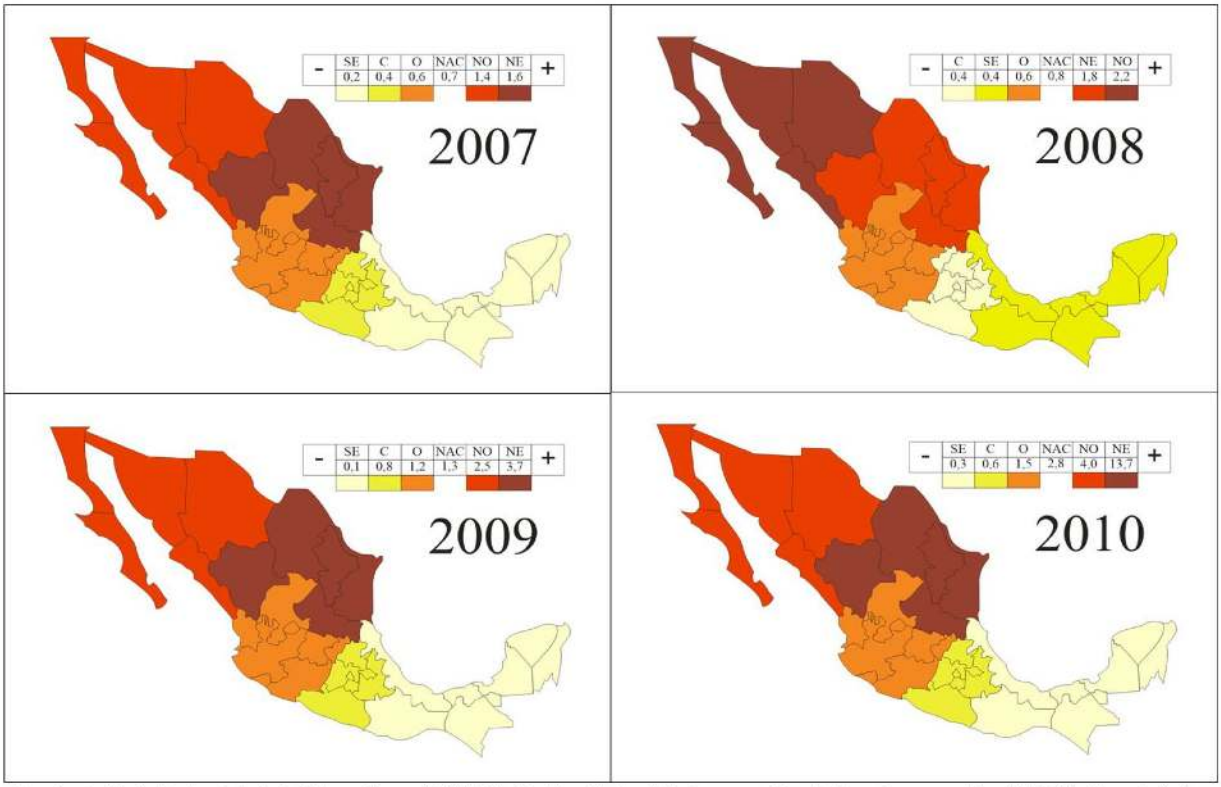
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Aunque las tasas de desaparecidos permiten visualizar el tamaño de la tragedia de una manera diferente a los homicidios, mantienen muchos puntos de coincidencia con las tasas presentadas con anterioridad. Sobresale la persistencia de la zona Sureste como la más pacífica del país, con tasas de desaparecidos muy por debajo de la media. Una diferencia menor es el lugar que ocupan las zonas Occidente y Centro, siendo la primera más violenta que la segunda, e incluso llegando a superar la tasa nacional en 2013.

Las regiones norteñas se mantienen como las más violentas si se utiliza el indicador de desaparecidos. Ambas están por encima de la tasa nacional desde antes del sexenio calderonista, abonando a las versiones que apuntan a un incremento de la violencia previo al gobierno del michoacano. Esto parece cierto en la zona Noroeste, que muestra una tendencia clara al aumento en las desapariciones,

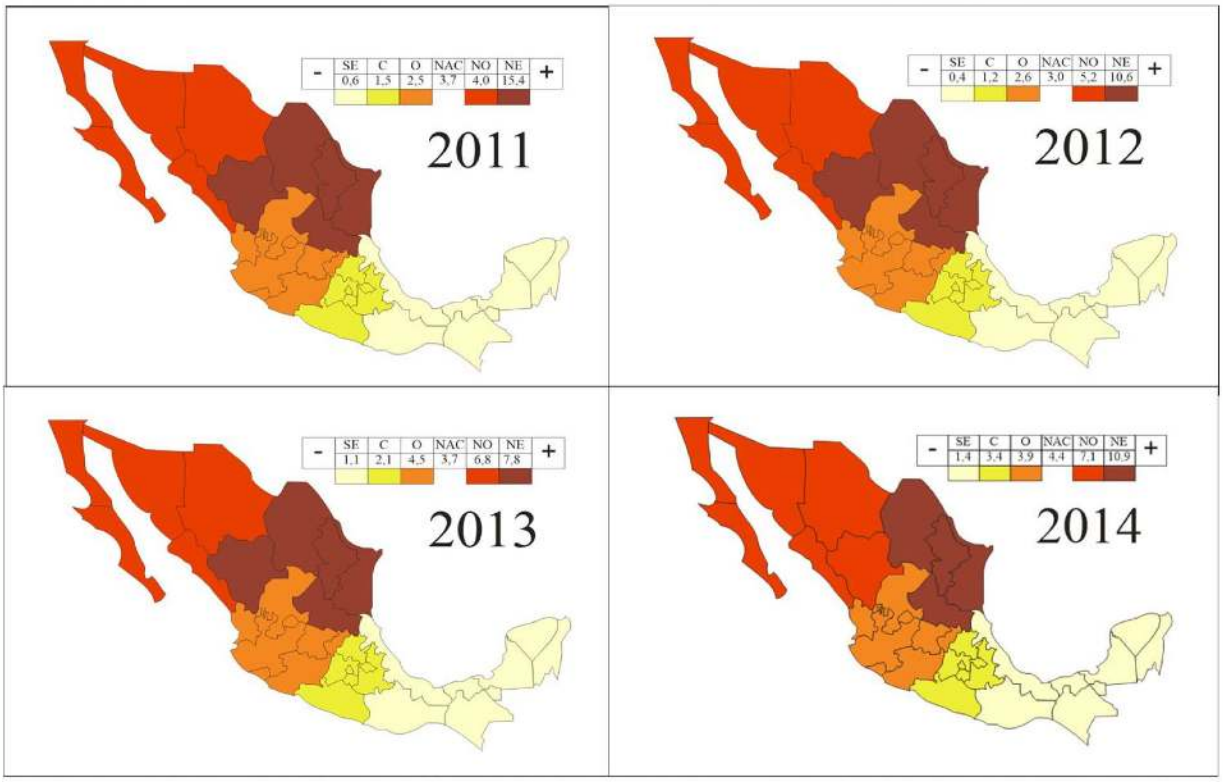
pero sin cambios drásticos en el periodo. Sin duda, la zona Noreste muestra un periodo alarmantemente alto de 2010 a 2012, coincidiendo con la guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo en esa zona geográfica. Ese tema se aborda con mayor profundidad en la siguiente sección.

Evolución de las tasas de desaparecidos por regiones (2007-2010)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Evolución de las tasas de desaparecidos por regiones (2011-2014)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

La violencia en el noreste mexicano

Desde luego, aunque las estrategias gubernamentales son imprescindibles para el incremento de los homicidios o para la elevación de las violaciones a los derechos humanos en la región, no pueden olvidarse las posturas de los grupos criminales. En el noreste mexicano fue muy evidente cómo la ruptura entre los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG) generó una ola de violencia terrible.

Según Guerrero,[7] uno de los pilares de la estrategia de seguridad calderonista se enfocó a capturar o eliminar a los líderes de los grupos criminales, generando inestabilidad e imposibilitando acuerdos duraderos entre las organizaciones. Es decir, la estrategia incrementaba las oportunidades para conquistar rutas y territorios, o la necesidad de defenderse de ataques, derivando en un mayor número de enfrentamientos. Además, la política gubernamental generaba tensiones en el interior de las organizaciones. En resumen, “los enfrentamientos entre cárteles de Sinaloa y del Golfo,

el desprendimiento de la organización de los Beltrán Leyva del primero y los Zetas del segundo, y la lucha entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez por la plaza de Ciudad Juárez produjeron un aumento drástico e inusitado de violencia".[8]

Estos procesos fueron visibles principalmente en las regiones norteñas de México. El Noreste, en particular, sufrió el enfrentamiento entre *La Federación*, coalición liderada por el Cártel de Sinaloa, y *La Compañía*, alianza entre el Cártel del Golfo y los Zetas, a principios del sexenio calderonista. Sin embargo, el incremento notable en los homicidios y desapariciones al inicio de esta década se debió a la disolución y enfrentamiento entre las organizaciones que conformaban *La Compañía*. Por ello, en la siguiente sección se hace un recuento breve de las organizaciones criminales en la zona del golfo de México.

El Cártel del Golfo

El origen del Cártel del Golfo (CDG) se remonta a los años treinta, cuando un criminal de Matamoros, Juan Nepomuceno Guerra,[9] comienza el contrabando de whisky durante los años de la prohibición en Estados Unidos, aprovechando la posición estratégica de Tamaulipas y su frontera con Texas. Tras la detención de Virgilio Barrera, "en los años setenta, en medio de la lucha entre bandas en Nuevo Laredo y contando con el apoyo de la policía judicial, Guerra se afianzó como el nuevo jefe de la plaza".[10]

Según el portal especializado *InSight Crime*, Juan Guerra comenzó a heredar el control de su organización a Juan García Ábrego, uno de sus sobrinos, desde 1984.[11] La transición fue paulatina, pero el liderazgo de García Ábrego incrementó la fuerza de la organización durante el sexenio de Carlos Salinas, convirtiéndose en la competencia directa del naciente Cártel de Sinaloa.[12] García Ábrego aprovechó hábilmente la coyuntura internacional del mercado de drogas, la localización estratégica del noreste mexicano y sus alianzas políticas para fortalecer la posición del CDG. Con seguridad, un elemento fundamental fue la alianza entre el CDG y el Cártel de Cali para pasar mercancía sudamericana por las rutas mexicanas hacia Estados Unidos.[13]

“Curiosamente, su liderazgo iba a durar sólo un poco más que el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues apenas 13 meses después de terminado éste, sería detenido el 14 de enero de 1996 y al día siguiente deportado a Estados Unidos por su calidad de ciudadano estadunidense”.[14] Este movimiento imposibilitó que García Ábrego aprovechase la corrupción del sistema penitenciario mexicano para continuar dirigiendo el CDG desde prisión. Sobre este punto vale la pena subrayar que la extradición a Estados Unidos no necesariamente significa el fin de los liderazgos criminales, como se mostrará más adelante.

La situación para el CDG era complicada pero no catastrófica. Según Valdés Castellanos,[15] el sucesor natural y hermano del líder, Humberto García Ábrego,[16] estaba preso desde 1994, por lo que el liderazgo recayó en el colaborador principal de Juan García Ábrego. Óscar Malherbe de León logró mantener los acuerdos con el Cártel de Cali para garantizar el abasto de drogas, aprovechando su función anterior de enlace entre el CDG y el cártel colombiano.

Esta situación duró muy poco. Las autoridades mexicanas capturaron a Malherbe en mayo de 1997. La falta de un heredero provocó una lucha intestina de manera inmediata. En este punto la historia se torna muy confusa. Siguiendo a Valdés Castellanos, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de 2007 a 2011, Salvador Gómez Herrera, *El Chava*, intentó asesinar a Baldomero Medina, *El Rey de los Tráileres.* Medina conservó la vida, pero decidió abandonar la competencia. Un liderazgo emergente resultó determinante para que Gómez alcanzara el control del CDG: Osiel Cárdenas Guillén, entonces conocido como *El Chaparrito*.

El reinado de Gómez fue efímero. Se dedicó a eliminar rivales y a controlar la organización, delegando en Cárdenas la operación y las actividades comerciales. Quizá por ello nunca logró afianzar su posición. Por ejemplo, el ejército capturó a Salvador Gómez y a Osiel Cárdenas en ese lapso, aunque los criminales fueron capaces de escapar del arraigo domiciliario impuesto por la PGR.[17] En junio de 1998, Osiel tomó el control del CDG de manera definitiva. Cárdenas y un guardaespaldas recogieron a Gómez en El

Mezquital, Tamaulipas. El líder del CDG decidió ocupar el asiento de copiloto, mientras Cárdenas conducía la camioneta. Arturo Guzmán Decena, el guardaespaldas, se sentó en la parte trasera. Desde ahí, el Z1 acabó con la vida de Gómez y con los problemas sucesorios del CDG, iniciando la etapa de Osiel Cárdenas como líder indiscutido del CDG.[18] Simbólicamente, este episodio convirtió a *El Chaparrito* en *El Mata Amigos*.

El nacimiento de los Zetas y su subordinación al Cártel del Golfo

Logan habla de tres fases en el desarrollo de los Zetas,[19] definidas por su relación con el CDG. La primera, que podría definirse como "subordinación", va de 1998 a 2003. El origen de los Zetas no puede entenderse sin Salvador Gómez, porque nacen como reacción a aquél. Según algunas versiones, Osiel Cárdenas, *El Chaparrito*, crea una guardia personal para defenderse de un ataque potencial de Salvador Gómez. Según otras, *El Mata Amigos* inventa a los Zetas para protegerse y consolidar su posición después del asesinato de Gómez, temeroso de que alguien intentara convertirse en el quinto líder del CDG en un lapso de apenas dos años. Sin conocer el momento exacto, se sabe que Cárdenas encarga a Arturo Guzmán Decena la conformación de una guardia personal: "quiero a los mejores", dijo, supuestamente.

El teniente coronel Arturo Guzmán Decena se da a la tarea de reclutar a otros desertores de las fuerzas armadas mexicanas, como él. Centra su atención en miembros de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), fuerzas de élite entrenadas por el ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas para labores de contrainsurgencia. En un primer momento, los GAFE fueron parte de la respuesta al alzamiento zapatista de 1994 y a la efervescencia guerrillera.[20] Posteriormente, el gobierno federal decidió utilizarlos contra el crimen organizado, movilizándolos hacia el noreste mexicano para combatir al Cártel del Golfo.

Según la declaración de Jesús Enrique Rejón Aguilar, *El Mamito*, o Z7, tras su arresto, los Zetas "inicialmente eran siete, y luego llegamos posteriormente siete más, que completamos los catorce, que fuimos los más viejos".[21] Es muy difícil determinar el número

original de desertores. Lo que queda claro es que Guzmán Decena reclutó miembros de élite del ejército durante algunos años. Según Logan,[22] Z1 convenció a 31 militares de élite en los primeros años. También debe apuntarse que, paulatinamente, el proceso de reclutamiento empezó a incluir a militares con menor entrenamiento y hasta criminales, a los que enviaban a las *Diestras*, campos de entrenamiento del grupo criminal.

Con el apoyo de su guardia pretoriana, Osiel Cárdenas inició un proceso de reestructuración en el interior del CDG. Rápidamente, el cártel abandonó una estructura jerárquica y empezó a organizarse mediante células, independientes entre sí, aunque relacionadas con el mando superior. El cambio no sólo obedecía a un proceso de modernización y eficiencia administrativa; también a la personalidad paranoica de *El Mata Amigos*, pues la nueva estructura permitía regular la fuerza de los liderazgos alternos, impidiendo que alguno pudiese disputarle el mando.

Según Dudley,[23] Osiel separó las áreas de su compañía. Los miembros tradicionales del CDG, como Ezequiel Antonio Cárdenas Guillén, *Tony Tormenta*, y Eduardo Costilla, *El Coss*, se enfocarían en el negocio de la distribución de drogas por Matamoros y Reynosa, bastiones tradicionales del CDG, con acceso a las vías de comunicación estadounidenses desde Texas. Por su parte, los Zetas ya no sólo se dedicarían a proteger a Osiel Cárdenas; también funcionarían como el brazo armado del CDG, por su conocimiento especializado de armas de fuego y tácticas militares. Según algunos analistas, esto tuvo implicaciones inmediatas en el mundo del crimen organizado mexicano. Sobre todo, obligó a las organizaciones rivales a profesionalizarse en el uso de la violencia, a mejorar sus procesos de entrenamiento y reclutamiento para poder combatir con los Zetas y su sofisticación y brutalidad en el uso de la violencia.[24]

Un momento trascendental en la historia de los Zetas fue la muerte de Guzmán Decena, acribillado en Matamoros el 22 de noviembre de 2002. Heriberto Lazcano Lazcano —conocido como Z3, *El Verdugo* o *El Lazca*— tomó su lugar. El movimiento es importante porque *El Lazca* era un criminal con un perfil y origen similar al de

Decena: un militar de élite con entrenamiento en contrainsurgencia y utilización de diversas armas de fuego, originario de la zona centro del país y, fundamentalmente, miembro de los “zetas viejos”, como se conocía a los fundadores de la organización. Lazcano forjó un liderazgo que se prolongó por casi una década, imprimiendo su sello personal a la organización.

Otro episodio clave fue la toma del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2000,[25] que le abrió las puertas de las rutas del Pacífico a la organización de Cárdenas Guillén. Desde ahí importarían cocaína, drogas sintéticas y precursores químicos para el CDG.[26] Sin embargo, según Dudley,[27] Cárdenas quería evitar que los Zetas se involucraran en el tráfico de drogas. Así, los obligó a buscar recursos por otras vías, principalmente mediante el “cobro de piso”, aunque limitado a la recolección de cuotas entre grupos criminales menores, como ladrones de casa, para que el grupo dominante los dejara operar. Siguiendo con Dudley,[28] el cobro de piso no fue una innovación de los Zetas, porque las pandillas fronterizas realizaban esa práctica con anterioridad. Los Zetas, simplemente, la perfeccionaron.

El periodo termina con la captura de Osiel Cárdenas en marzo de 2003, en Matamoros. Según el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, hubo tres enfrentamientos durante la captura, porque los sicarios de Cárdenas opusieron una resistencia encarnizada e incluso intentaron rescatarlo. Por la captura del líder del CDG, el jefe de la Sedena “pidió el reconocimiento de la sociedad a los integrantes de los grupos especiales, conocidos como grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército”.[29]

El establecimiento de La Compañía*: de la subordinación a la alianza*

¿Qué pasó tras la captura de Osiel Cárdenas? Según Valdés Castellanos,[30] el liderazgo recayó en el hermano de *El Mata Amigos*, Ezequiel Antonio Cárdenas Guillén, *Tony Tormenta*, y en Eduardo Costilla, *El Coss*. Además, también tomaban decisiones Lazcano y Miguel Ángel Treviño, Z40, un criminal local que había ascendido rápidamente por la jerarquía de la organización, a pesar de no

contar con entrenamiento militar.

Sin embargo, debe considerarse que Treviño tenía poco tiempo dentro de los Zetas y su ingreso como mano derecha de Lazcano fue decisión de Osiel Cárdenas, en lo que podría considerarse una maniobra para mantener vigilado a su personal y evitar el fortalecimiento de sus subordinados. Ese conjunto de razones hace difícil creer en la interpretación de Valdés. Una interpretación más plausible, sobre todo a la luz de los acontecimientos venideros, es la de Alfredo Corchado y Kevin Krause: Osiel Cárdenas manejaba al CDG desde la prisión de "máxima seguridad" de Almoloya, como antes y después hicieron líderes de otras organizaciones.[31] Esto es importante porque la corrupción intrínseca del sistema penitenciario mexicano no imposibilita la persistencia de liderazgos criminales desde prisión, como los del *Güero* Palma o el *Chapo* Guzmán.

Lo que ocurre en esta segunda fase, según Logan,[32] es que los Zetas ganan autonomía respecto al Cártel del Golfo. Lazcano aprovecha la captura de Cárdenas para fortalecer a los Zetas mediante una estrategia claramente militar, con la premisa básica de conquistar y controlar territorios. La concepción del cobro de piso se expande, incluyendo cada vez más a la ciudadanía: secuestro, extorsión y rentas. Por su parte, *Tony Tormenta* y *El Coss* conservaron los bastiones de Matamoros y Reynosa, así como los contactos con los narcotraficantes colombianos.

Los Zetas iniciaron un proceso de expansión de la organización, que paulatinamente iba reconociéndose como *La Compañía*,[33] por el peso creciente de los Zetas frente a las siglas tradicionales del CDG. Rápidamente fueron ocupando toda la costa del golfo de México y llegaron hasta Centroamérica. En Guatemala, particularmente, libraron una batalla durísima contra el Cártel de Sinaloa para acceder a la cocaína sudamericana y a las rutas de migrantes.[34] Además, comenzaron a reclutar kaibiles —militares de élite del ejército guatemalteco, entrenados en labores de contrainsurgencia y responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos— para cubrir sus bajas. Desde luego, la reducción del ejército guatemalteco facilitó el reclutamiento de esos militares de élite centroamericanos.

Según un reportaje de Francisco Gómez,[35] los Zetas combinaban el control vertical y jerarquizado con una estructuración flexible y celular, herencia tanto de la personalidad paranoide de Osiel Cárdenas como del origen militar de los Zetas. En la cúspide estaba *El Lazca*, quien designaba a los comandantes de plaza, los lugares donde se movía la gente, los jefes de operativos y los objetivos. Debajo estaban los "zetas viejos", compuestos mayoritariamente por los miembros originales y con entrenamiento militar en los GAFE. Muchos de los zetas más famosos pertenecían a esta jerarquía de la organización.[36]

En el siguiente nivel estaban los "Cobras viejos" o "L viejos", gente de confianza, sin formación militar que, originalmente, sólo podían llegar a comandantes de los Cobras. Por debajo se encontraban los "zetas nuevos", conformados por kaibiles guatemaltecos y desertores de los GAFE que ingresaron a la organización en un segundo momento. Sus tareas, sobre todo, eran de combate, considerando su entrenamiento especializado en tácticas militares. En la parte baja de la organización se encontraban los "L" o "Cobras", ayudantes de los Zetas, menos armados y encargados de asistirlos durante el combate.

El caso de los Treviño es realmente excepcional, porque lograron ascender en la organización sin contar con entrenamiento militar. Los Treviño son una familia de criminales originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque también operaban en Texas. Los principales son Miguel Ángel, Z40, y Omar, Z42. Sánchez de Tagle dice del Z40: "su historia, a diferencia del resto de los Zetas, es distinta. Este hombre escaló todas las estructuras y puestos del narco para llegar a ser el líder de la organización. De hecho, empezó lavando carros y como mensajero de Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera líder del Cártel del Golfo".[37] En buena medida, el control de los pasos fronterizos de Nuevo Laredo y, posteriormente, Piedras Negras y Acuña, facilitó su control posterior sobre los Zetas. Otra parte, sin duda, fue su utilización extrema de la violencia.

Paralelamente, cada jefe de plaza tenía una estructura propia, compuesta por su operador financiero o "contador", su "sicario" o encargado de la seguridad del jefe de plaza y una red amplia de

“informantes” y “*halcones*”. Los primeros son gente con buenos contactos en la región, sin problemas legales y disponibilidad permanente. Por su parte, los *halcones* se encargaban de vigilar y reportar los acontecimientos en el área. De hecho, gran parte del éxito de los Zetas está en su flexibilidad y, paradójicamente, en su estructura férrea, “que les permite desdoblarse geográficamente a gran velocidad sin afectar su cohesión interna”.[38]

El acontecimiento principal en este periodo es la extradición de Osiel Cárdenas Guillén a Estados Unidos a principios de 2007. Como parte de su lucha contra el crimen organizado, el presidente Calderón decide enviar a Estados Unidos a muchos narcotraficantes, entre ellos Héctor Palma, *El Güero*, y Osiel Cárdenas. Calderón buscaba mandar un mensaje de cooperación bilateral ejemplar, según Corchado y Krause.[39]

“Al principio, Cárdenas Guillén pensó en rechazar los cargos de narcotráfico y conspiración que le imputaba Estados Unidos, según dos antiguos socios, pero sus abogados le recordaron que el último capo mexicano que lo hizo, su predecesor, Juan García Ábrego, perdió el juicio y fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas y obligado a entregar millones de dólares en ganancias ilícitas. La mejor estrategia era cooperar, le aconsejaron”.[40] Según el relato de los periodistas de *The Dallas Morning News*, *El Mata Amigos* poco a poco entregó información sobre su organización, nombres de sus miembros y detalles operativos.

De 2007 a 2009, en sus primeros años de prisión en Estados Unidos, Cárdenas continuó influyendo en *La Compañía*, en parte porque las autoridades estadounidenses habían infiltrado, por lo menos desde 2001, a su operador favorito, Juan Jesús Guerrero Chapa y le permitían comunicarse. “Mientras cooperaba con el gobierno de Estados Unidos, Cárdenas Guillén continuó comunicándose con los líderes del Cártel del Golfo y de los Zetas a través de Guerrero Chapa, e incluso prometió nombrar a uno de ellos como sucesor, de acuerdo con un exagente estadounidense y un agente enterado de los asuntos de inteligencia sobre narcotráfico”.[41]

¿Por qué la violencia no estalla en el noreste mexicano en los años inmediatos posteriores a la extradición de Osiel Cárdenas? La razón principal es que *La Compañía* se mantuvo unida frente a la amenaza de *La Federación*, como se conocía a la coalición de organizaciones criminales liderada por el Cártel de Sinaloa, encabezada por Joaquín, *El Chapo*, Guzmán. Como se verá más adelante, sólo Durango modificó sustancialmente su tasa de homicidios durante la primera parte del sexenio calderonista. Además, los Zetas habían fortalecido su posición al permitir que los Beltrán Leyva operaran en Nuevo León,[42] y al aliarse al Cártel de Juárez,[43] ganando poderosos socios en la región.

Sin embargo, otros datos indican una violencia oculta, ignorada. Por ejemplo, el *Informe de secuestro de migrantes 2009* muestra datos alarmantes.[44] El mayor es que los estados donde los migrantes eran secuestrados y/o desaparecidos tendían a ser territorios de *La Compañía*: Veracruz y Tabasco en el sureste del país (2 944 y 2 378 migrantes secuestrados, respectivamente), Tamaulipas con 912, Coahuila con 17, San Luis Potosí con 15 y Nuevo León con cinco. Otro dato alarmante era la tasa de desaparecidos, mucho más alta que la de homicidios en la zona.

Estos indicios del informe de migrantes, sumados al comportamiento de la tasa de desaparecidos —diferente a la de homicidios, en la zona— y las posturas de muchas organizaciones de víctimas hacen pensar en un noreste mucho más cruento en los años finales de la década pasada. Desde luego, ése es un pendiente por investigar tanto de las autoridades como de la academia mexicana.

El Alzamiento*: la guerra por el noreste*

“Entonces ocurrió el alzamiento, fue cuando quienes lo encabezaron revivieron las siglas CDG para nombrar la alianza de algunos traficantes tamaulipecos con el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana en contra de Los Zetas”.[45] La tercera fase comienza a principios de 2010. Está enmarcada por la guerra entre el Cártel del Golfo (aliados al Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana) y los Zetas (auxiliados por los Beltrán Leyva). Sin la presencia de los

michoacanos, podría plantearse una coalición de viejos contra nuevos. Hay tres causas fundamentales, que no parecen contradecirse entre sí, sino que lucen como partes de un rompecabezas: el homicidio de *El Concord*, la traición de Osiel Cárdenas y, estructuralmente, el crecimiento de los Zetas a lo largo del país.

Sergio Peña Mendoza, *El Concord*, era el representante de los Zetas en Reynosa, bastión del CDG, aunque podía operar desde esa ciudad por la alianza entre organizaciones. Según las autoridades de la Policía Federal, *El Concord* era uno de los hombres de confianza de Miguel Ángel Treviño, Z40, el segundo al mando, sólo debajo de Heriberto Lazcano. Agentes federales capturaron a Peña Mendoza en marzo de 2009.[46] Sin embargo, inexplicablemente, para finales de 2009 estaba libre, haciendo evidente que el crimen organizado había infiltrado a las autoridades federales mexicanas. *El Universal* pidió información a la PGR sobre el estatus jurídico de *El Concord*, pero la respuesta fue que la fiscalía no podía cruzar información con el área de procesos penales de la entonces SIEDO.[47] De cualquier forma, el jefe de la plaza de Reynosa, Samuel Flores Borrego, *Metro 3*, siguiendo las órdenes de Eduardo Costilla, *El Coss*, envió un comando para secuestrar a Peña Mendoza.[48]

Supuestamente, *Metro 3* sometió a *El Concord* a un interrogatorio brutal.[49] Los líderes del CDG buscaban convencerlo de abandonar a los Zetas y ayudarlos en la ofensiva contra ellos, sobre todo aprovechando su cercanía con Miguel Ángel Treviño. Por negarse a traicionar a los Zetas, *El Metro 3* torturó y ejecutó a *El Concord*. Z40 envió un narcomensaje: “entreguen a los asesinos de mi amigo, hijos de puta. Tienen hasta el 25 de enero para hacerlo. Si no cooperan, habrá guerra”.[50] Los Zetas comenzaron la ofensiva a finales de enero.

Más allá de la tortura y ejecución de *El Concord*, la segunda razón del conflicto entre los Zetas y el CDG es la delación de Osiel Cárdenas de sus antiguos subordinados a cambio de una reducción en la sentencia. Según Corchado y Krause,[51] utilizando información desclasificada por la DEA (Administración para el Control de Drogas; en inglés: *Drug Enforcement Administration*), Heriberto Lazcano

manifestó dudas sobre la honorabilidad de Osiel Cárdenas en una reunión con Guerrero Chapa a finales de 2009. Días antes, las autoridades mexicanas casi logran capturar a Z3 en San Luis Potosí, pero *El Verdugo* logró esconderse gracias a su entrenamiento militar, teniendo que esperar algunos días hasta que sus subordinados pudieron localizarlo y rescatarlo.[52]

Según la versión que Guerrero Chapa relató a la DEA, Lazcano estaba intrigado por la precisión de las autoridades mexicanas para conocer su ubicación, por lo que utilizó un contacto en la DEA para esclarecer el intento de captura. Su contacto le informó que Cárdenas Guillén estaba negociando una reducción en la sentencia con las autoridades de Estados Unidos. Dicho de otra forma, Osiel estaba delatando a su organización a cambio de trato preferencial. Esta versión era compartida por el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, que en un cable diplomático decía que "la información recolectada por los servicios de inteligencia reflejan que esta separación fue el resultado de la extradición de [testado] a los Estados Unidos en 2007 y sentenciado el 25 de febrero de 2010".[53]

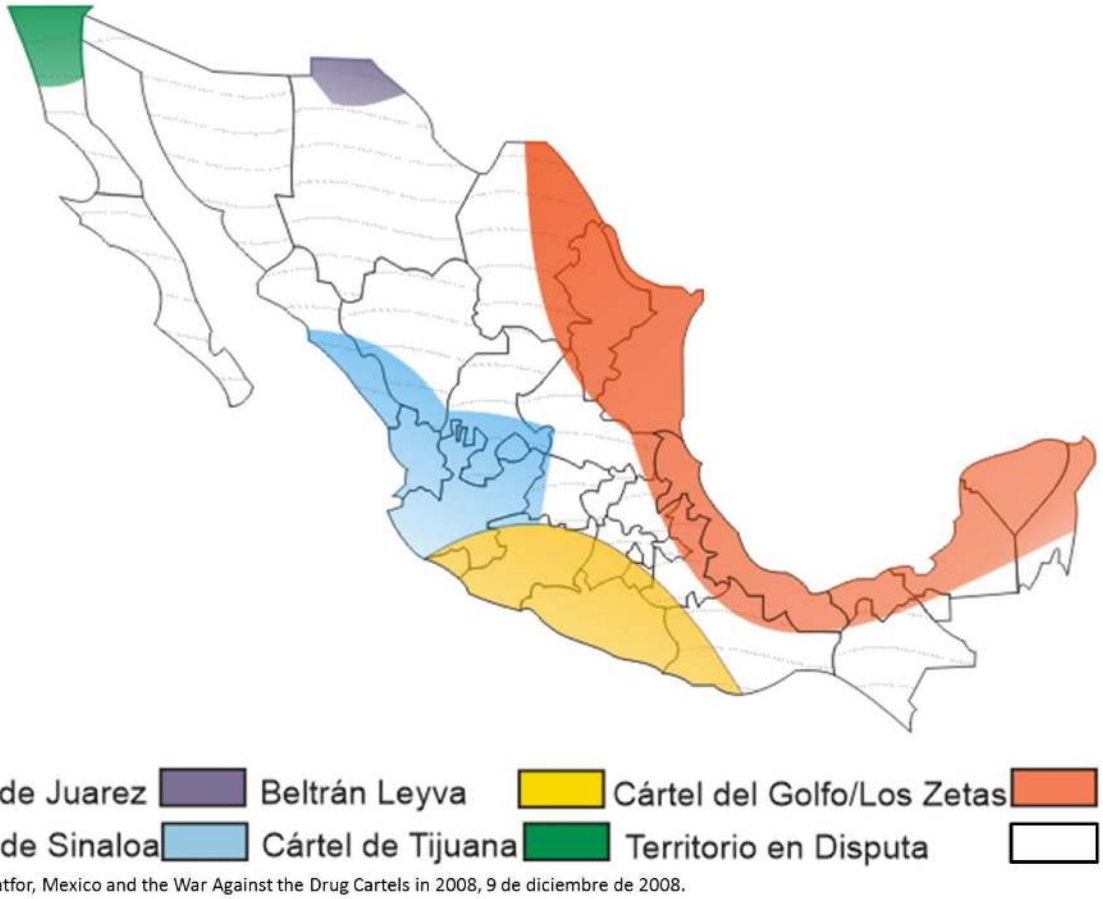
Ésa es una práctica sistemática del sistema judicial estadounidense. Según un informe de Human Rights Watch, el sistema judicial estadounidense, a través de sus fiscales, fuerza sistemáticamente las declaraciones de culpabilidad de los acusados por delitos de drogas mediante dos mecanismos: *a)* amenaza con imputar penas de la mayor severidad posible a todos los detenidos y, a la vez, *b)* ofrece sentencias reducidas a aquellos que se declaren culpables y colaboren con la DEA, principalmente denunciando tanto a cómplices como a rivales.[54] Es necesario apuntar que el sistema funciona generalizadamente: es decir, abarca desde el narcomenudista hasta los líderes de las organizaciones. Este punto es particularmente importante para explicar la situación del noreste mexicano, pues no se limita a los acuerdos de Osiel Cárdenas; también deben considerarse los que establecieron con criminales de menor envergadura, como Alfonso Cuéllar o Héctor Moreno, con consecuencias funestas para Allende, Piedras Negras y los Cinco Manantiales de Coahuila.

Las sospechas se confirman después de la sentencia a Osiel

Cárdenas Guillén. Por delitos que incluían lavado de dinero, asalto y asesinato de agentes federales, conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, entre otros, *El Mata Amigos* sólo recibió 25 años de prisión. Según Corchado y Krause,[55] las autoridades de Estados Unidos retiraron 12 de los 17 cargos por los que era enjuiciado. La sentencia fue dictada a puerta cerrada, sin escrutinio de los medios de comunicación. “Esto es inaceptable. Cárdenas no merece ese tratamiento especial”, decía una editorial del *Houston Chronicle* en Estados Unidos.[56]

Según la declaración de Jesús Enrique Rejón Aguilar, *El Mamito*, “los Zetas fueron leales a Cárdenas Guillén hasta febrero de 2010, cuando trascendió el acuerdo negociado por su sentencia”. En YouTube puede apreciarse el cambio de postura e incredulidad en los videos relacionados con la cultura de los Zetas. Por ejemplo, *El Mata Amigos* es ridiculizado en un video homenaje a Arturo Guzmán de 2013, aunque la letra, escrita con anterioridad, muestra respeto hacia Cárdenas Guillén.[57]

Áreas de influencia de las organizaciones criminales en México (2008)



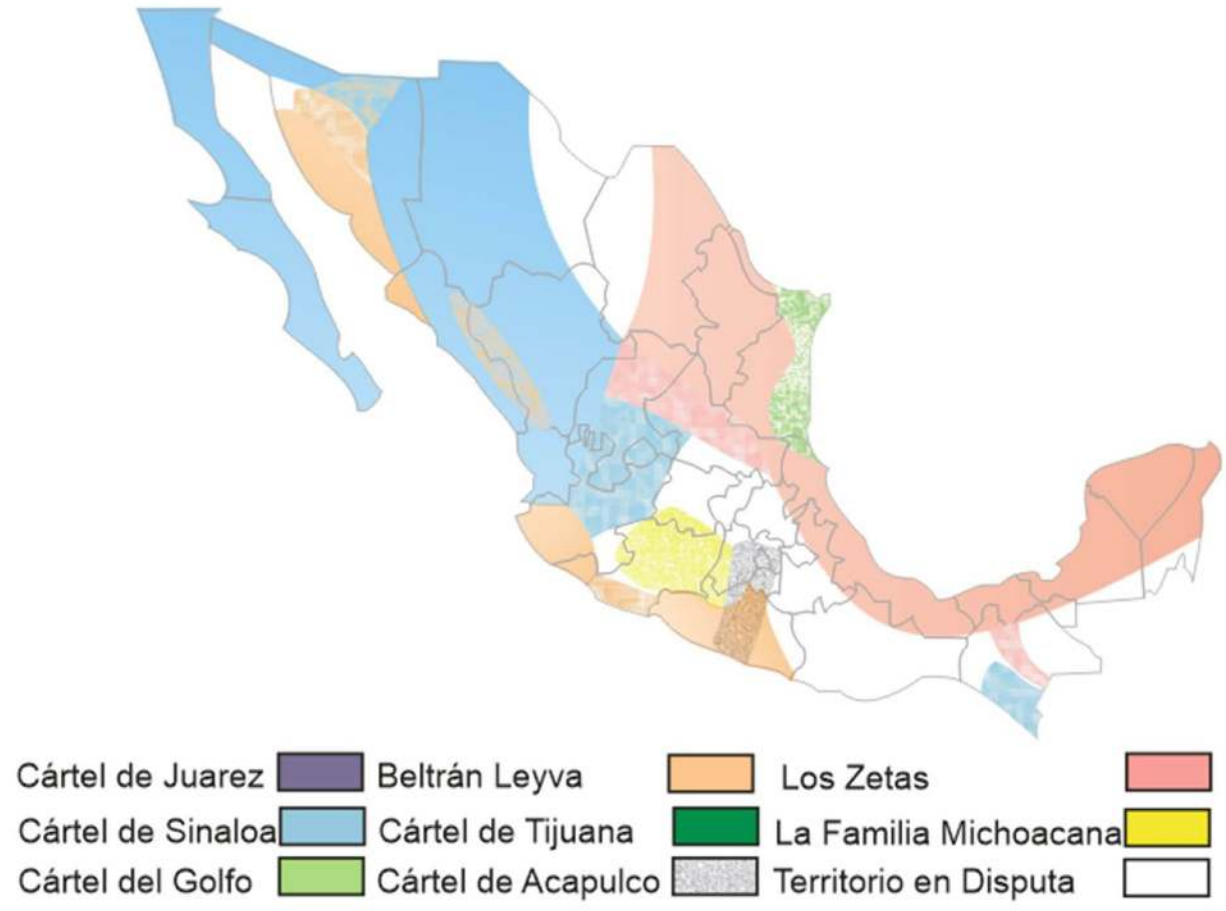
Fuente: Stratfor, Mexico and the War Against the Drug Cartels in 2008, 9 de diciembre de 2008.

Detrás de este par de acontecimientos, que en realidad pueden catalogarse como detonantes, la causa principal de la disolución y conflicto en el interior de *La Compañía* fue la expansión de los Zetas a costa del CDG, que mostraba un declive muy evidente. Según Stratfor,[58] consultoría especializada en seguridad, *La Compañía* controlaba todas las entidades mexicanas que colindan con el golfo de México, desde Tamaulipas hasta Yucatán, además de algunas cercanas, como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas o Campeche.

Sin embargo, en el momento de la ruptura, quedó claro que el CDG apenas controlaba sus plazas tradicionales en Matamoros y Reynosa, además de algunas zonas al sur y al noreste de Tamaulipas.[59] Sólo en Tamaulipas, los Zetas controlaban los puntos de acceso hacia Matamoros y Reynosa, como San Fernando y Ciudad Victoria. Además, tenían bajo su control, específicamente

del Z40, otros puntos fronterizos, como Nuevo Laredo, o Piedras Negras y Acuña, en Coahuila. Dicho de otra forma, la fuerza predominante en *La Compañía* eran los Zetas, limitando a sus antiguos jefes a algunos islotes en Tamaulipas y rodeados completamente por los Zetas.

Áreas de influencia de las organizaciones criminales en México (2011)



Fuente: Stratfor, *Mexico's Areas of Cartel Influence and Smuggling Routes*, 28 de octubre de 2011.

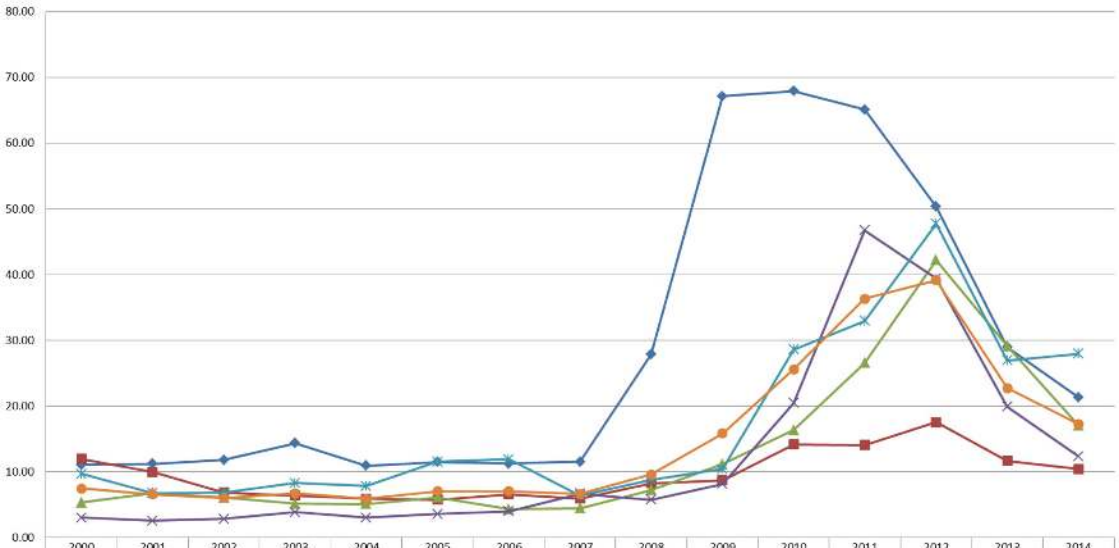
Según Osorno,[60] el ataque sorpresa del CDG a sus aliados tiene varios nombres, dependiendo del actor que lo mencionara: los miembros del CDG lo llamaron *La Vuelta* o *El Reto*; los Zetas hablaban de *La Traición*; para la población simplemente fue *El Alzamiento*. Tras la tortura y asesinato de *El Concord*, la respuesta de los Zetas fue violentísima. Un par de días antes de la sentencia de Osiel Cárdenas, el 22 de febrero de 2010, los Zetas lanzaron la contraofensiva en toda la zona conocida como "La Frontera Chica" de Tamaulipas. Sitiaron, literalmente, Ciudad Mier, Miguel Alemán y

Camargo.[61] La lucha más cruenta se dio en Ciudad Mier, porque marcaba la línea divisoria entre Reynosa (CDG) y Nuevo Laredo (Zetas). El conflicto se prolongó durante meses, sin que las autoridades intervinieran.[62]

Panorama de la violencia en el noreste mexicano

El noreste mexicano no era de las zonas más violentas del país, al menos hasta la década pasada.[63] Desafortunadamente, la guerra entre Zetas y CDG incrementó notablemente la violencia. Los resultados fueron terribles, especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esas entidades fronterizas experimentaron una violencia sin precedentes, brutal y desquiciada.

Tasas de homicidios dolosos en el Noreste mexicano por entidad federativa (2000-2014)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Durango	11.04	11.18	11.80	14.36	10.91	11.46	11.26	11.53	27.83	67.13	67.91	65.10	50.34	28.97	21.31
San Luis Potosí	11.96	9.96	6.83	6.39	5.87	5.73	6.55	5.93	8.26	8.71	14.16	14.08	17.56	11.68	10.40
Coahuila	5.31	6.74	6.05	5.13	5.09	6.09	4.29	4.45	7.21	11.14	16.34	26.56	42.21	29.11	17.06
Nuevo León	3.03	2.56	2.82	3.83	3.03	3.57	4.00	6.64	5.74	8.17	20.44	46.72	39.37	19.90	12.33
Tamaulipas	9.66	6.76	6.83	8.28	7.85	11.51	11.87	6.38	8.80	10.42	28.61	32.95	47.76	26.92	27.93
Noreste	7.43	6.57	6.04	6.71	5.87	7.05	7.05	6.60	9.58	15.83	25.59	36.32	39.15	22.71	17.28

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Como se aprecia en la figura anterior, Durango generalmente tiene las tasas de homicidio más altas de la región, excepto en 2000, 2006, 2013 y 2014. Así, el primer rasgo característico es que puede hablarse de una entidad tradicionalmente más violenta que las demás en la región. El segundo elemento es que el incremento abrupto comienza en 2008, dos años antes que el aumento radical de 2010 en los estados fronterizos del noreste. Vale la pena recordar que Durango estuvo en la línea de la guerra entre *La*

Federación y *La Compañía* desde los primeros años del sexenio de Calderón, mientras que los estados fronterizos eran parte integral del territorio de la alianza entre Zetas y CDG, por lo que la violencia estalla hasta la ruptura de esa coalición. Finalmente, es necesario subrayar que 2009 y 2010 son los años más violentos en Durango, con un crecimiento drástico de 2008 a 2009: 2.5 veces.

Como se ve, los niveles de violencia homicida de Durango muestran un comportamiento distinto al resto de las entidades del noreste mexicano. En las demás se aprecia un incremento drástico de 2009 a 2010. Nuevo León, por ejemplo, era una entidad con niveles de violencia bajos hasta la ruptura de *La Compañía*. Rápidamente alcanza un punto máximo en 2011 para descender sistemáticamente desde ese momento. Tamaulipas y Coahuila tienen comportamientos muy similares. En ambas se nota el incremento súbito a partir de 2010 y alcanzan sus máximos en 2012, para iniciar un descenso a partir de ese momento. La diferencia principal es que Tamaulipas siempre fue un estado más violento que Coahuila, a excepción de 2013. Además, como se aprecia en la figura anterior, no alcanzaron los niveles de violencia homicida de Durango.

San Luis Potosí también presenta un comportamiento atípico, distinto a las entidades fronterizas. Se aprecia un incremento de la violencia homicida a partir de 2008, aunque no puede catalogarse como abrupto, al menos comparado con el de las otras entidades. También alcanza su punto álgido en 2012, pero vale la pena recalcar que, para ese año, su tasa apenas representaba la mitad de la segunda entidad menos violenta de la región, Nuevo León.

Las tasas de desaparecidos por cada 100 mil habitantes muestran otra perspectiva de la realidad del noreste mexicano. Como ocurre con los homicidios dolosos, las desapariciones en la región se incrementan a partir de 2008, aunque el crecimiento abrupto se da en 2010. Las diferencias están en el comportamiento de las entidades, sobre todo porque Tamaulipas presenta una situación mucho más trágica que el resto de las entidades, en comparación, mientras Durango, Coahuila y Nuevo León mantuvieron tendencias similares y, por su parte, San Luis Potosí claramente era el estado

menos problemático de la región.

Las desapariciones en Tamaulipas crecieron a un ritmo desmesurado. Por ejemplo, la entidad tuvo un incremento de casi tres veces entre 2008 y 2009, pasando de 2.15 a 6.68 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. La situación era catastrófica con el paso de los años, llegando a tasas de 29.7 personas en 2010 y, el clímax, de 39.4 en 2011. Poniéndolo en perspectiva, la tasa de desaparecidos en Tamaulipas se había incrementado 18 veces respecto a 2008 y seis respecto a 2009.

Este panorama general de la violencia en el noreste mexicano buscó dar una idea regional del drama que supuso la combinación de la estrategia contra el crimen organizado del presidente Calderón con la ruptura de la alianza entre los Zetas y el CDG. Dentro de ellas se esconden un sinfín de tragedias de las que apenas conocemos una parte. En los siguientes capítulos de este *Informe* se tratan dos de ellas: la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y la de Allende, Coahuila, que también involucró a Piedras Negras y los Cinco Manantiales.

¿Qué hubiera pasado sin la milagrosa supervivencia de algunos migrantes en San Fernando, Tamaulipas? Con toda seguridad, no sabríamos de la matanza de 72 de sus compañeros en agosto de 2010 y, quizá, continuarían sepultos en algún lugar desconocido. Si "lo más cabrón que ha ocurrido en México" permaneció en tinieblas durante tanto tiempo y, más de cinco años después, sólo sabemos una parte, ¿cuántos dramas esconde la inmensidad del noreste mexicano?, ¿cuántos, el territorio nacional? Dicho de otra forma, la matanza de los 72 migrantes en San Fernando y la tragedia en Allende formaron parte de todo un clima generalizado de violencia que asoló la región, episodios paradigmáticos del drama en el noreste a principios de la década, que desafortunadamente no ha terminado y puede recrudecerse en cualquier momento.

Notas

[1] Para los homicidios dolosos se utilizó información de mortalidad del INEGI, que combina información de las Oficinas del Registro Civil con la de la Secretaría de Salud. Específicamente, se utilizó la información de "Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona": Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, *Registros Administrativos: Mortalidad*. Disponible en <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/encuestas.aspx?c=33398&s=est>; consultado el 4 de agosto de 2016. Para el número de desaparecidos se utilizó la información del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en su corte de abril de 2016. Disponible en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php>; consultada el 20 de abril de 2016. Para el número de habitantes, se utilizó la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Censo de Población y Vivienda 2010*, 2010. Disponible en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[2] Luis Astorga, *¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia en el gobierno de Felipe Calderón*, México, Grijalbo, 2015.

[3] Guillermo Trejo y Sandra Ley, "Federalismo, drogas y violencia: por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México", *Política y gobierno*, 2016, vol. XXIII, núm. 1, pp. 11-56.

[4] Guillermo Pereyra, "México: violencia criminal y 'guerra contra el narcotráfico'", 2012, *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 3, núm. 74, pp. 429-460.

[5] Secretaría de Gobernación, *Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018*, 30 de abril de 2014. Disponible en <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014>; consultado el 12 de agosto de 2016.

[6] Rubén Aguilar Valenzuela, "¿Cuántos desaparecidos hay en México?", *El Economista*, 15 de febrero de 2015. Disponible en <http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2015/02/15/cuantos-desaparecidos-hay-mexico>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[7] Eduardo Guerrero, "La estrategia fallida", *Nexos*, 1 de diciembre de 2012. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=15083>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[8] Guillermo Pereyra, "México: violencia criminal y 'guerra contra el narcotráfico'", *op. cit.*, p. 438.

[9] Véase el perfil de Juan Nepomuceno Guerra en *El Universal.* Disponible en <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/9048.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[10] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica*, México, Grijalbo, 2013, p. 194.

[11] Juan Guerra veía al negocio como asunto familiar. Por ejemplo, él también colocó a uno de sus sobrinos en la presidencia municipal de Matamoros a finales de la década de los ochenta. Este episodio sirve para mostrar otra característica del estilo de Guerra: su cercanía al poder político local, por sus vínculos con el PRI. *Idem*.

[12] Luis Astorga, *¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia en el gobierno de Felipe Calderón*, *op. cit.* Vale la pena apuntar que Astorga es muy reticente a la utilización del término "cártel" para las organizaciones criminales mexicanas. Así, se refiere al CDG como "la organización de Tamaulipas" y al Cártel de Sinaloa simplemente como "Sinaloa".
[13] Vale mucho la pena revisar el perfil de *InSight Crime* sobre el Cártel del Golfo, disponible en <http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil>.
[14] Guillermo Valdés Castellanos, "El nacimiento de un ejército criminal", *Nexos*, 1 de septiembre de 2013. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=15460>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[15] *Idem*.
[16] Otra característica definitoria en la historia del CDG es su relación con la justicia de Estados Unidos y los impactos que tiene en la organización. Por ejemplo, Juan Antonio Ortiz, miembro del CDG, da información de Humberto García Ábrego y de Óscar Malherbe en marzo de 1997, convirtiéndose en testigo protegido en una corte federal de Houston.
[17] Redacción, "Conozca la historia del Cártel del Golfo y Osiel Cárdenas", *La Crónica*, 14 de marzo de 2003. Disponible en <http://www.cronica.com.mx/notas/2003/54308.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[18] Redacción, "Sed de poder, sed de sangre; la vida de Osiel Cárdenas Guillén", *Zócalo*, 13 de septiembre de 2009. Disponible en <http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/sed-de-poder-sed-de-sangre-la-vida-de-osiel-cardenas-guillen>; consultado el 30 de septiembre de 2016. También véase, Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*.
[19] Samuel Logan, "A profile of Los Zetas: Mexico's Second Most Powerful Drug Cartel", *CTC Sentinel,* vol. 5, núm. 2, 2012, pp. 5-7.
[20] Guillermo Pereyra, "México: violencia criminal y 'guerra contra el narcotráfico'", *op. cit*., pp. 429-460.
[21] Declaración de Jesús Enrique Rejón Aguilar ante la PGR tras su detención. Véase la entrevista de la PGR a *El Mamito* durante su presentación. "Entrevista a el Mamito, presunto fundador de los Zetas". Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=HacDTEn2TDs>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
[22] Samuel Logan, "A profile of Los Zetas: Mexico's Second Most Powerful Drug Cartel", *op. cit*., pp. 5-7.
[23] Steven Dudley, "Los Zetas in Guatemala", *Informe especial de InSight Crime*, 2011.
[24] *Idem*.
[25] Guillermo Valdés Castellanos, *Historia del narcotráfico en México*, México,

Aguilar, 2013, p. 257.
[26] Raúl Zepeda, *Violencia en Tierra Caliente: guerra criminal e intervenciones federales de 2000 a 2014*, tesis de maestría, Ciudad de México, 2016, El Colegio de México, p. 92.
[27] Steven Dudley, "Los Zetas in Guatemala", *op. cit*.
[28] *Idem*.
[29] Gustavo Castillo García, Armando Torres Barbosa y Martín Sánchez Treviño, "Un comando militar condujo al jefe del Cártel del Golfo al DF tras los tiroteos", *La Jornada*, 15 de marzo de 2003. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2003/03/15/048n1con.php?printver=0>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[30] Guillermo Valdés Castellanos, "El nacimiento de un ejército criminal", *op. cit*.
[31] Alfredo Corchado y Kevin Krause, "Mexico's Drug Violence: Deadly Deal", *The Dallas Morning News*, 14 de abril de 2016. Disponible en <http://interactives.dallasnews.com/2016/cartels/>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
[32] Samuel Logan, "A profile of Los Zetas: Mexico's Second Most Powerful Drug Cartel", *op. cit*., pp. 5-7.
[33] John Sullivan y Samuel Logan, "Los Zetas: Massacres, Assassinations and Infantry Tactics", *Homeland 1*, 24 de noviembre de 2010. Disponible en <http://www.homeland1.com/domestic-international-terrorism/articles/913612-Los-Zetas-Massacres-Assassinations-and-Infantry-Tactics>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[34] Steven Dudley, "Los Zetas in Guatemala", *op. cit*.
[35] Francisco Gómez, "Los Zetas por dentro", *El Universal*, 31 de diciembre de 2008. Disponible en <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/164819.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[36] Por ejemplo, *El Mamito, El Hummer, El Cachetes, El Caprice*, etcétera.
[37] Omar Sánchez de Tagle, "Así es el 'Zeta 40' (semblanza)", *Animal Político*, 16 de julio de 2013. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2013/07/asi-es-el-zeta-40-semblanza>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
[38] Eduardo Guerrero, "La raíz de la violencia", *Nexos*, 1 de junio de 2011. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=14318>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[39] Alfredo Corchado y Kevin Krause, "Mexico's Drug Violence: Deadly Deal", *op. cit*.
[40] *Idem*.
[41] *Idem*.
[42] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*.
[43] Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Sin título, cable diplomático para la Embajada en México analizando el conflicto entre Zetas y CDG, 3 de septiembre

de 2010.
[44] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes*, México, 15 de junio de 2009, p. 19. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[45] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*., p. 155.
[46] Redacción, "Cae operador de Los Zetas en Tamaulipas", *El Universal*, 14 de marzo de 2009. Disponible en <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/583711.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[47] Francisco Gómez, "Los Zetas por dentro", *op. cit*.
[48] A causa de la violencia, buena parte de la información sobre criminales circula por medio de páginas electrónicas y muchas veces no va firmada por nadie. Dice Lucía Calderón "que los medios están ausentes en gran medida en el drama que está viviendo el estado, por la situación de terror que se vive. Hay una sistemática, permanente, agresión contra los medios que impiden cumplir con su función, tan claro queda que esta guerra no ha parado y que se ha recrudecido", Lucía Calderón, *Tamaulipas, un estado emblemático en la lucha contra la violencia. Prácticas comunicativas en un ambiente de excepción*, tesis de doctorado, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México 2016, p. 74.
[49] Redacción, "La historia de Samuel Flores el 'Metro 3' del CDG y el inicio de la guerra contra los Zetas", *NarcoViolencia*, 8 de diciembre de 2015. Disponible en <http://www.narcoviolencia.com.mx/2015/06/la-historia-de-samuel-flores-el-metro-3.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[50] George W. Grayson y Samuel Logan, *The executioner's Men. Los Zetas, Rogue Soldiers, Criminal Entrepeneurs, and the Shadow State They Created*, Nueva Jersey, Transaction Publishers, 2012, p. 198.
[51] Alfredo Corchado y Kevin Krause, "Mexico's Drug Violence: Deadly Deal", *op. cit*.
[52] *Idem*.
[53] Consulado de Estados Unidos en Monterrey, sin título, cable diplomático para la Embajada en México analizando el conflicto entre Zetas y CDG, 3 de septiembre de 2010.
[54] Human Rights Watch, *An Offer You Can't Refuse: How US Federal Prosecutors Force Drug Defendants to Plead Guilty*, 5 de diciembre de 2013. Disponible en <https://www.hrw.org/report/2013/12/05/offer-you-cant-refuse/how-us-federal-prosecutors-force-drug-defendants-plead>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[55] *Idem*.

[56] Redacción, “Justice hidden: Drug kingpin Cardenas’ sentencing hearing was wrongly kept from public view”, *The Houston Chronicle*, 26 de febrero de 2010. Disponible en <http://www.chron.com/opinion/editorials/article/Justice-hidden-Drug-kingpin-Cardenas-1709179.php>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[57] Véase el video llamado “Cartel Zetas, sr. Arturo Guzmán Decena Z-1 d.e.p.”, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=aoG4E-aW7eo>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[58] Stratfor, *Mexico and the War Against the Drug Cartels in 2008*, 9 de diciembre de 2008.
[59] Stratfor, *Mexico’s Areas of Cartel Influence and Smuggling Routes*, 28 de octubre de 2011.
[60] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*, p. 149.
[61] Eduardo Guerrero, “El dominio del miedo”, *Nexos*, 1 de julio de 2014. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=21671>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[62] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit.*
[63] Fernando Escalante, “Panorama del homicidio en México: esquema de análisis territorial 1990-2007”, en Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coords.), *Los grandes problemas de México: seguridad nacional y seguridad interior*, volumen xv, México, El Colegio de México, 2010, pp. 301-330.

Capítulo 3

LA MASACRE DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

Manuel Pérez Aguirre

El estado de Tamaulipas colinda al norte con Texas, Estados Unidos, al este con el Golfo de México, al oeste con Nuevo León y al sur con los estados de Veracruz y San Luis Potosí. Es la séptima entidad más extensa del país, con una superficie de 78 380 km^2. Está dividido en 43 municipios y su capital, Ciudad Victoria, se ubica en el municipio de Victoria. En 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) de Tamaulipas fue de 400 892 millones de pesos (a pesos constantes de 2008), lo que representó 3.1% del PIB nacional. La mayoría del PIB estatal se concentró en actividades del sector terciario, 57.8%, seguido por el sector secundario, 38.9%, y en último lugar el sector primario, con 3.3%. La distribución de personas ocupadas en cada sector es similar a la proporción que aportan al PIB estatal, 60.9, 29.6 y 7.9%, respectivamente.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2010,[1] el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Tamaulipas fue de 0.76, lo que ubicaba a la entidad en el décimo lugar nacional, justo por detrás de Aguascalientes y por delante de Sinaloa. En cuanto a las condiciones de vivienda, que dan una idea de las condiciones de vida de la población, puede mencionarse lo siguiente, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI: 95.5% tienen agua entubada (4% más que el promedio nacional), 3.3% de las viviendas tienen piso de tierra (2.9% menos que el promedio nacional) y el porcentaje de población analfabeta es de 3.61%, inferior al promedio nacional, que es de 6.88%.[2]

Hasta hace unos días, Tamaulipas se caracterizaba por el control de un partido sobre la vida política local. El PRI gobernó de manera ininterrumpida la entidad durante más de ocho décadas. Esto significó, en la práctica, que los gobernadores tenían márgenes de maniobra muy amplios en el interior de la entidad, porque la homogeneidad partidista ininterrumpida inhibe la división de

poderes, así como las elecciones limpias y competitivas, según Casar.[3] Este fenómeno, conocido como enclaves autoritarios subnacionales, básicamente consiste en la reproducción y adaptación del antiguo régimen posrevolucionario al ámbito local.[4] Esto se ve con claridad en la composición del Congreso local, en donde el PRI conservó la mayoría en todo momento: 57.14% en 2008, 60% en 2011 y 64% a partir de 2014.[5]

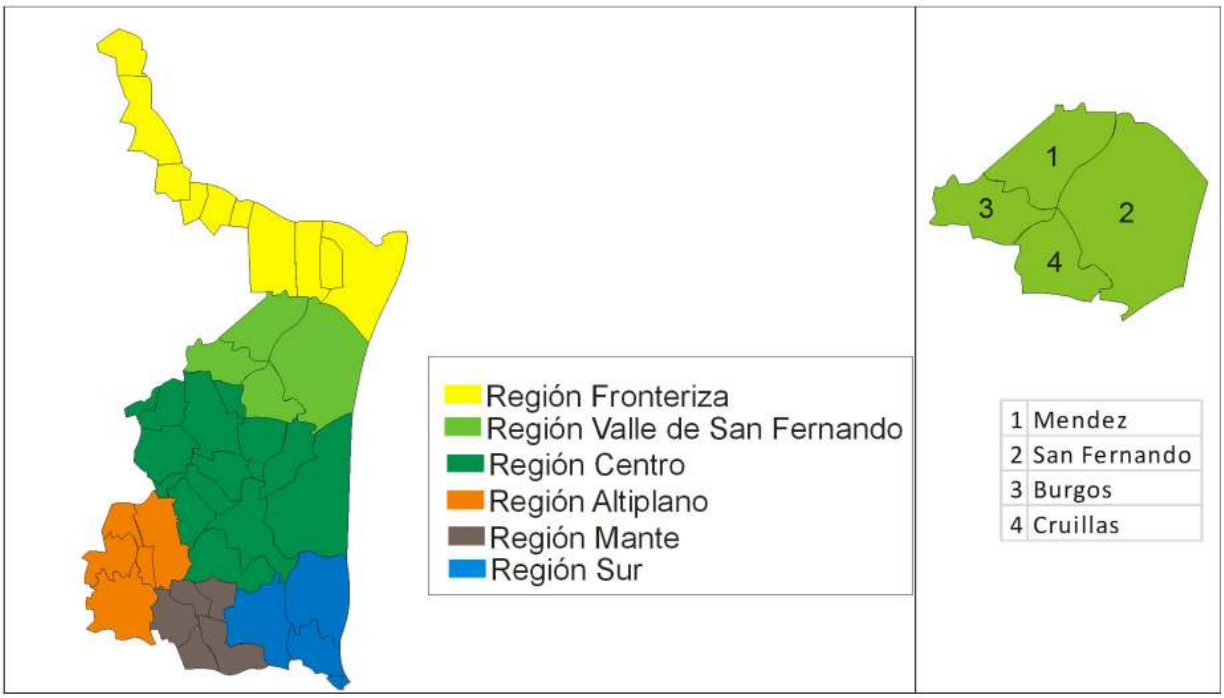
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, Tamaulipas tenía
3 268 554 habitantes. Reynosa era el municipio más poblado, con 18.6% de la población, seguido por Matamoros, con 14.97%, y por Nuevo Laredo, con 11.75%, todos ellos en la zona fronteriza. Cada uno de estos municipios encabeza una zona metropolitana importante, además de las ocho que complementan las manchas urbanas de la entidad: Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Miramar, Río Bravo, Mante, Altamira y Valle Hermoso. La entidad tiene seis regiones geográficas, según la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT): Fronteriza, Valle de San Fernando, Centro, Sur, Mante y Altiplano.[6]

La región Fronteriza abarca la zona norte del estado, a lo largo del río Bravo, y está integrada por los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso. Es la región más poblada de la entidad, con 52.94% de la población. Esta región, de clima cálido y seco, se caracteriza por la presencia de un número importante de empresas maquiladoras, aunque también la actividad agrícola es importante. Tres municipios concentran la mayor parte de actividad económica: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Por colindar con Estados Unidos, esta región tiene importantes relaciones, económicas y culturales, con el estado de Texas.

La región Sur se encuentra al sureste de la entidad. Es la segunda más poblada, con 23.85% de la población. Esta región colinda al sur con los estados de San Luis Potosí y Veracruz. De hecho, forma parte de la Huasteca, entendida como una región interestatal. Los municipios que la integran son: González, Aldama, Altamira, Tampico y Ciudad Madero. Esta región concentra una proporción

importante de las actividades económicas del estado, ya que en los municipios de Tampico y Madero se desarrollan actividades petroleras, industriales y comerciales; además, el puerto de Altamira es un punto de constante tráfico comercial.

Regiones de Tamaulipas y Municipios del Valle de San Fernando



Fuente: Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas

La región Centro está integrada por los municipios de Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Villagrán, Mainero, Jiménez, Soto la Marina y Casas, y concentra 14.12% de la población estatal. Ésta es la región más amplia del estado y se caracteriza por una intensa actividad comercial, financiera, política y cultural, debido principalmente, a que la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, forma parte de ella.

Los municipios de Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Mante, Xicoténcatl, Ocampo y Gómez Farías conforman la región Mante. Como se aprecia en el mapa anterior, es la parte central del sur de la entidad y colinda con las zonas Centro, Sur y Altiplano, además de tener fronteras con San Luis Potosí y Veracruz. La región Mante concentra 5.29% de la población tamaulipeca.

La región del Valle de San Fernando se encuentra entre la región fronteriza y el Centro de la entidad; colinda al oeste con Nuevo León

y al este con el golfo de México. A pesar de su extensión, es la segunda zona menos poblada de la entidad. Los municipios de Méndez, Burgos, Cruillas y San Fernando apenas tienen 2.09% de la población en la entidad. El clima de la región es cálido subhúmedo; una característica particular de esta región es la presencia de importantes cuerpos de agua: dos ríos, Conchos y Chorreras, y la Laguna Madre. Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Cabe mencionar que San Fernando es un paso obligado para dirigirse al norte del estado, ya que en ella convergen las carreteras que conectan a Matamoros y Reynosa con las localidades del sur del estado, como Ciudad Victoria y Soto la Marina.

Finalmente, la región del Altiplano se encuentra al suroeste del estado y colinda con San Luis Potosí y Nuevo León. La integran los municipios de Bustamante, Jaumave, Miquihuana, Palmillas y Tula. También se le conoce como la región del Antiguo Cuarto Distrito.[7] Esta región es la más alta del estado, pues se encuentra entre 735 y 1 892 metros sobre el nivel del mar; las zonas más altas son de clima templado subhúmedo y las más bajas, de clima cálido. Las principales actividades son la agricultura y la ganadería, aunque son principalmente para la subsistencia y no de tipo comercial.

Incidencia criminal en las regiones de Tamaulipas

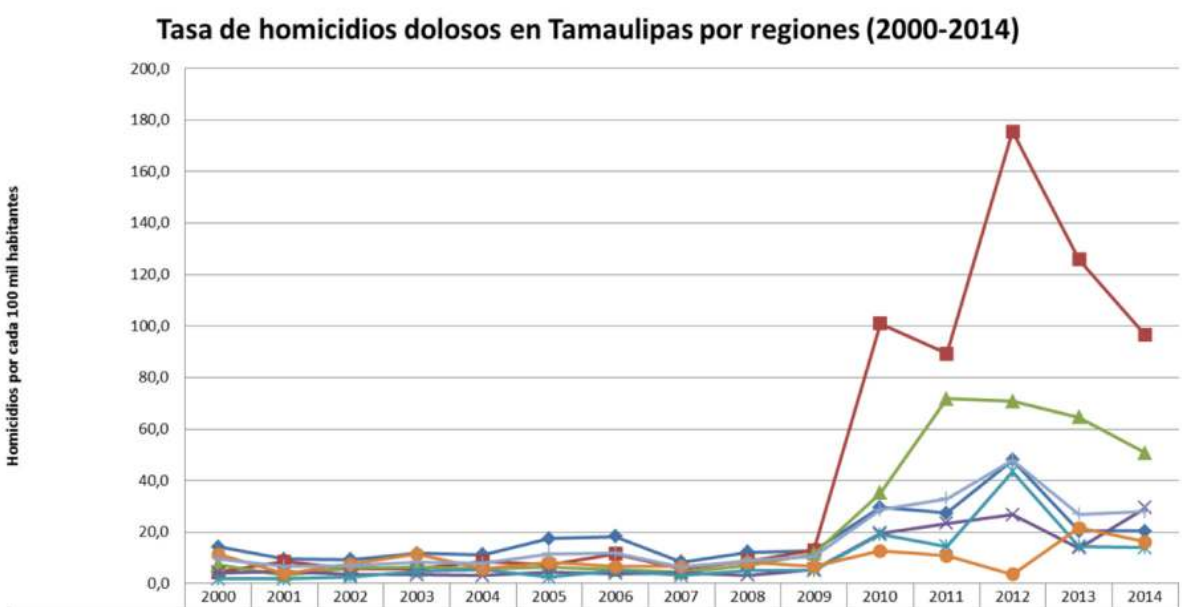
> Tamaulipas debe ser el estado más codiciado por los narcotraficantes mexicanos (dado su papel central como transportadores de drogas a Estado Unidos): tiene una larga frontera con la Unión Americana, cuenta con una extensa costa oceánica y, frente a otros estados fronterizos y costeros como Baja California y Sonora, sus ciudades de frontera (Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros) son los destinos más cercanos.[8]

A continuación, se presenta un breve análisis de las regiones tamaulipecas, utilizando la división de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas: Fronteriza, Valle de San Fernando, Centro, Sur, Mante y Altiplano. Al observar los siguientes gráficos, se aprecia que las regiones mantienen un comportamiento similar, moderado incluso, a lo largo de la década pasada. Resulta visible que el año 2010 es el punto de quiebre, como consecuencia directa de la

guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG) por el control del noreste mexicano y, particularmente, de la entidad. En términos relativos, considerando que la violencia en la década pasada fue mucho menor que en la actual, los niveles de violencia han sido generalmente mayores hacia el norte, especialmente en la región Fronteriza. La situación crece desmesuradamente en el estado a partir de 2010, particularmente en la parte norte de la entidad. De hecho, vale la pena subrayar que el Valle de San Fernando se constituyó en la región más violenta de la entidad, en términos per cápita.[9]

> De esta forma, la ciudadanía tamaulipeca vio trastocada su vida cotidiana de manera casi intempestiva, convirtiéndose en presa del miedo y la desconfianza. Lejos quedó la sensación de protección y tranquilidad. A la fecha, las familias en Tamaulipas afrontan una de las realidades más violentas de que se haya tenido memoria en la época moderna. El alcance de la violencia supera cualquier periodo anterior, la afectación generada por la inseguridad abarca prácticamente toda la población que radica en el estado.[10]

En este sentido, cabe resaltar algunas particularidades del aumento de los homicidios en las regiones de Tamaulipas a partir de 2009. Los casos más drásticos son las regiones Valle de San Fernando y Centro. Los homicidios se incrementaron 2.3 veces de 2009 a 2010 en la primera región. Se pasó de una tasa de homicidios en 2009 de 12.8 a una de 29.6 para 2010. Sin embargo, para 2012 la región Valle de San Fernando presentaba una tasa de 47.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes para 2012. Es decir, los crímenes letales se triplicaron en tan sólo cuatro años.



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FRONTERIZA	14,2	9,5	9,3	11,7	11,1	17,4	18,2	8,3	12,2	12,8	29,6	27,3	47,9	20,3	20,3
V. SAN FERNANDO	4,3	8,5	5,7	5,7	8,5	7,2	11,5	5,7	8,6	12,9	101,0	89,2	175,6	125,8	96,6
CENTRO	7,4	3,2	5,9	6,2	5,7	6,3	5,3	4,4	7,0	11,6	35,1	71,7	70,8	64,6	50,7
SUR	4,1	4,6	3,4	3,4	3,1	4,3	3,9	4,2	3,2	5,5	19,5	23,3	26,7	13,7	29,4
MANTE	1,8	1,8	2,4	4,7	5,3	2,5	5,0	3,1	5,0	5,0	19,1	14,5	43,4	14,5	13,9
ALTIPLANO	11,4	3,8	7,6	11,4	5,7	8,2	6,5	6,5	8,2	6,5	12,6	10,8	3,6	21,6	16,2
ESTATAL	9,7	6,8	6,8	8,3	7,8	11,5	11,9	6,4	8,8	10,4	28,6	33,0	47,8	26,9	27,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT).

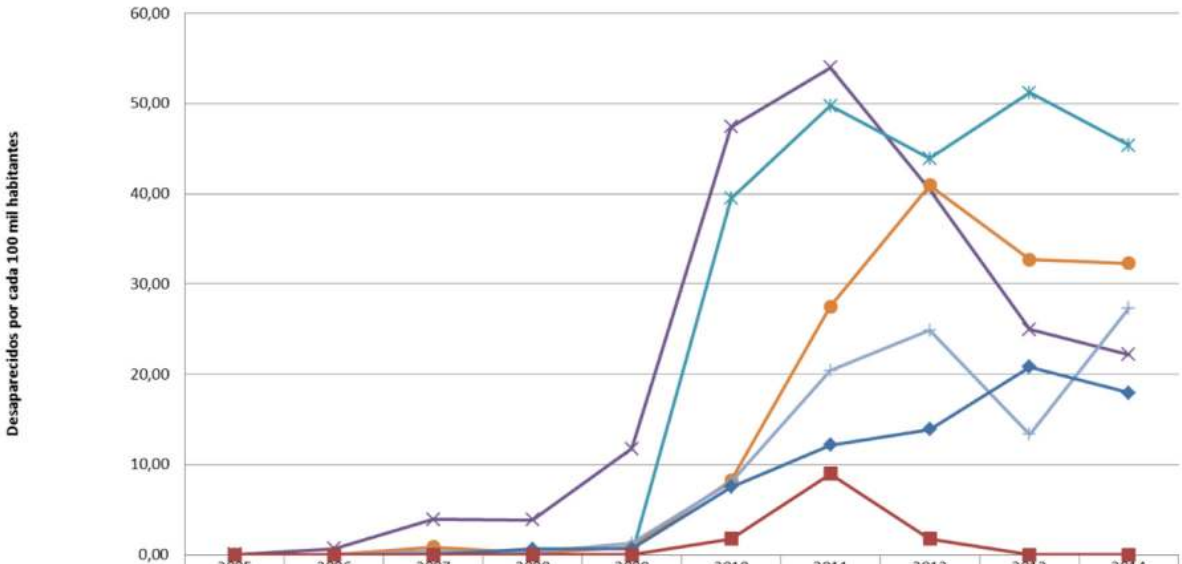
Por su parte, la región Centro presentó una tendencia similar a la región Valle de San Fernando. En esta región, aunque no alcanzó las tasas de San Fernando, sí se observa un importante incremento en 2010 y 2011, los primeros años de la guerra entre los antiguos miembros de *La Compañía*, alcanzando una tasa de 71.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, casi siete veces superior a la que había en 2009. La violencia homicida disminuye paulatinamente a partir de 2011, pero manteniendo cifras muy superiores a las de la década pasada.

La región Fronteriza y Mante alcanzan sus picos de homicidios en el año 2012. Esas regiones manifiestan patrones similares en sus tasas de homicidios. La primera, por su peso poblacional, condiciona la tasa de Tamaulipas. Además, a pesar de que muchas de las masacres y batallas más importantes de la guerra entre Zetas y CDG ocurrieron en municipios fronterizos, como la tragedia que cubrió a Ciudad Mier durante meses,[11] el peso demográfico de sus centros urbanos evita que sus tasas se disparen de una forma tan abrupta como ocurrió con una región poco poblada como San

Fernando. Dicho de otra forma, aunque seguramente los habitantes fronterizos supieron o presenciaron enfrentamientos entre las organizaciones criminales, la probabilidad de morir era menor que en la región de San Fernando, poco poblada pero muy violenta.

Por otro lado, la región Sur y el Altiplano se mantuvieron, después de 2009, como las regiones con menores tasas de homicidios dolosos. Llama la atención el caso de la región Altiplano que, incluso, registró una disminución de homicidios para el año 2012. Nuevamente, debe considerarse la configuración de la población, pues esa región es de las menos pobladas, donde un cambio abrupto en el número total de homicidios es muy notorio en la tasa de homicidios, a diferencia, por ejemplo, de la región Fronteriza.

Tasa de desaparecidos en Tamaulipas por regiones (2005-2014)



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FRONTERIZA	0,06	0,70	3,92	3,86	11,77	47,44	53,97	40,51	24,96	22,19
V. SAN FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	49,74	43,89	51,21	45,35
CENTRO	0,00	0,00	0,88	0,22	0,88	8,23	27,51	40,94	32,71	32,28
SUR	0,00	0,00	0,43	0,29	1,29	8,08	20,39	24,88	13,34	27,32
MANTE	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	7,52	12,15	13,89	20,83	17,94
ALTIPLANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	8,99	1,80	0,00	0,00

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT).

Los desaparecidos en Tamaulipas son una cuestión aparte. La entidad es, de lejos, la que tiene mayor número de desaparecidos en el país, casi una quinta parte del total, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en su corte de abril de 2016: 5 752 de 28 161. Los desaparecidos son una forma de violencia menos visible que los homicidios, pero, a la vez,

más dolorosa para sus familiares. La siguiente figura muestra las tasas de desaparecidos por regiones. Nuevamente, las zonas más hacia el norte presentan más violencia y también se aprecia con claridad el punto de quiebre en el año 2010.

Como se ve, sólo la región Fronteriza presentaba tasas altas de desaparecidos en 2009. El resto de las regiones mantenía cierta calma, según los datos oficiales del RNPED, hasta que los números se dispararon en 2009 y 2010. Otro rasgo interesante es la similitud que mantienen San Fernando y Fronteriza hasta 2012, cuando se desplomaron los niveles de la frontera. Sobre todo, la gráfica muestra que la tragedia en el Valle de San Fernando persistía hasta 2014. La región Centro también muestra un crecimiento desmesurado en los primeros años de la guerra entre Zetas y CDG, que tampoco desciende significativamente.

En comparación con las regiones Valle de San Fernando, Centro, Sur, Mante y Altiplano, la región Fronteriza mostró un aumento creciente de las desapariciones a partir de 2006; para un año posterior (2007), la tasa de desaparecidos pasó de 0.7 a 3.92 y en 2009 dicha tasa fue de 11.77. Es decir, la tasa de desaparecidos se incrementó 16.81 veces entre 2006 y 2009.

Llama la atención lo que sucede con las regiones Mante y Sur. La primera mantuvo un incremento en su tasa de desaparecidos desde 2009 a 2013, pasando de 0.62 a 20.83, respectivamente. Sin embargo, para 2014 hubo una disminución en sus registros. En contraste, la región Sur, que para 2013 registró una disminución en la tasa de desaparecidos, presentó un incremento al año siguiente, 2014.

En resumen, como apunta Lucía Calderón, “la posición geográfica es un factor que incide en la violencia; los polos de desarrollo que significan para Tamaulipas la zona fronteriza en el norte y la zona conurbada en el sur determinan, hasta cierto punto, que la región esté asolada por los grupos delictivos. Estos factores geográficos son como imanes para que se instalen personas cuyas intenciones están ligadas a actividades ilícitas”.[12]

El municipio de San Fernando

Como se mencionó antes, el municipio de San Fernando se localiza en la planicie costera de Tamaulipas, en la región del Valle de San Fernando. El municipio colinda al norte con los municipios de Río Bravo y Matamoros, al este con la Laguna Madre y el golfo de México, al sur con los municipios de Abasolo y Soto la Marina, y al este con los de Méndez, Burgos y Cruillas. La extensión del municipio es de 6 923 km^2, equivalente a 6.9% del territorio estatal. Cuenta con siete localidades: San Fernando, donde se concentra más de la mitad de la población, General Francisco Villa, Carboneras, General Francisco González Villarreal, Alfredo V. Bonfil, San Germán y El Barrancón del Tío Blas.

En 2010, la población total del municipio era de 57 220 personas, lo que representa 1.75% de la población estatal, cifra que contrasta claramente con la extensión del municipio e indica una baja densidad poblacional. Para el mismo año, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del municipio fue de 0.697, más bajo que el IDH estatal, que era de 0.760. Esto coloca a San Fernando en el lugar número 17 del estado en calidad de vida, de 43 municipios que integran Tamaulipas. De las 15 447 viviendas registradas en el Censo de Población de 2010, 14 469 tienen piso de un material distinto a la tierra y 13 512 cuentan con agua de la red pública.



Fuente: *El Universal* con información de CNDH

La ubicación geográfica del municipio lo coloca como un punto obligado de paso para dirigirse hacia la región fronteriza de Tamaulipas; como se mencionó antes, diversos caminos lo atraviesan, sin contar la multitud de vías rurales que conectan a la región fronteriza con el centro y el sur de la entidad. Esto hace que, entre otras cosas, San Fernando sea una importante estación en la ruta migratoria de Tamaulipas.[13] Dada la presencia de recursos hidrológicos, la actividad pesquera es de importancia para el municipio, aunque también la agricultura y la ganadería. Cabe mencionar que las actividades comerciales, principalmente las de baja escala, también son importantes.

La masacre de 72 migrantes

"Comparezco voluntariamente para manifestar que es la primera que ingreso a México y que salí de mi país […] el día siete de

agosto del año en curso [2010], con la intención de llegar a Estados Unidos", declaraba el sobreviviente hondureño el 26 de agosto de 2010 a la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración,[14] documento que forma parte del expediente de la CNDH al que tuvimos acceso. Continúa:

> primero nos trasladamos a Guatemala a través de un autobús, y que pasando por migración de Guatemala en donde sellaron mi pasaporte y a mi primo un permiso para internarse de manera legal en ese país. Llegamos a Tecún Umán […] contratamos los servicios de un pollero guatemalteco, que nos cobró ciento cincuenta quetzales para trasladarnos hacia un lugar denominado El Paraíso.

Los migrantes viven en constante peligro en territorio mexicano. Siguiendo con el testimonio del sobreviviente hondureño:

> estuvimos caminando alrededor de un día y medio; quiero manifestar que en el camino fuimos interceptados por un grupo de seis personas de sexo masculino que iban vestidos de color negro y con pasamontañas, y que nos dijeron que eran de "Migración" [esta indumentaria no corresponde a la vestimenta del personal del Instituto Nacional de Migración], encañonándonos con escopetas y pistolas nueve milímetros.

Es decir, esa persona sufrió dos agresiones durante su intento por llegar a Estados Unidos.

El migrante hondureño establece contacto con otro pollero, éste de nacionalidad salvadoreña, quien les ofrece trasladarlos a Houston, Texas, a cambio de 2 500 dólares. El grupo continúa la caminata, agregando migrantes en el camino, futuras víctimas de la masacre de San Fernando: "viajaban tres personas de nacionalidad brasileña, un hombre de nacionalidad hindú [india, en realidad], cinco personas ecuatorianas, el resto del grupo eran centroamericanos".

El hondureño afirmó que "escuché que decía [el pollero] que todos los setenta y cuatro migrantes venían bien y que pronto llegaríamos a Reynosa". En algún punto no identificado los polleros avisan al grupo de migrantes que abordarán unos vehículos: "se encontraban dos tráileres tipo trocas, los cuales tenían rejillas, uno de ellos llevaba una lona de color rojo y el otro una lona de verde, quiero decir que recuerdo que ambas trocas tenían placas de Veracruz y

eran de la marca Ford", puede leerse en la declaración del hondureño. Los migrantes viajaron en esos vehículos durante dos noches, con destino a Reynosa, Tamaulipas.

El secuestro sobre la 101

La narración de la Procuraduría General de la República tras los lamentables acontecimientos fue reproducida por las autoridades estadounidenses, como demuestran los cables diplomáticos revelados por el National Security Archive. Uno de ellos, titulado "Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas", enviado por el Consulado de Matamoros al Departamento de Estado el 26 de agosto de 2010,[15] trata a profundidad el tema. El cable dice que el Consulado conversó con el CISEN, la PGR, la Policía Estatal, la Oficina Forense estatal y la Semar. Así, la versión que narran es la siguiente:

2. El 22 de agosto, aproximadamente 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador (incluido uno descrito simplemente como "hindú") viajaban en tres camionetas de paneles en la carretera entre Ciudad Victoria y San Fernando, fueron detenidos por un número indeterminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando. El CISEN cree que el secuestro se habría realizado al norte de un retén fijo del ejército sobre la carretera a través de pequeños caminos rurales [conocidos como brechas].
3. De acuerdo con el sobreviviente, los miembros del grupo criminal les ofrecieron la oportunidad de trabajar para la organización de tráfico de drogas Las [*sic*] Zetas a cambio de 500 dólares semanales. A los hombres les ofrecieron convertirlos en "sicarios" o pistoleros, mientras a las mujeres les ofrecieron convertirse en empleadas domésticas. Todos declinaron la oferta de trabajar para los Zetas, a excepción de uno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación 80/2013,[16] hace suya esta versión:

> El sábado 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, un grupo aproximado de 74 personas migrantes, de diversas nacionalidades, entre éstos V73 [sobreviviente ecuatoriano] y V74 [sobreviviente hondureño], cuando

> viajaban a bordo de dos camiones, rumbo a la frontera norte de México, fueron interceptados en las inmediaciones del municipio de San Fernando, Tamaulipas, y secuestrados por un grupo de hombres armados,

dice el punto 101 de la recomendación de la CNDH. Continúa, en el punto 102, "al día siguiente, el mismo grupo de personas migrantes fue trasladado a un rancho ubicado en el referido municipio".[17]

Las versiones del sobreviviente ecuatoriano

Las declaraciones del sobreviviente ecuatoriano, conocido como V73 en el expediente de la CNDH, fueron difundidas ampliamente, así como su nombre, de manera inapropiada. En torno a sus testimonios se construyó el relato sobre la masacre de San Fernando. El equipo de investigación revisó tres testimonios de la víctima: uno ante el director de Cooperación y Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Migración, con la fecha oculta en el expediente de la CNDH, a la que se llamará Versión 1 en el texto; otro en el acta circunstanciada de la entrevista del visitador adjunto de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, del 26 de agosto de 2010, que será Versión 2; y la desgarradora entrevista de la televisora pública ecuatoriana *Gama TV*, Versión 3.

La Versión 1 es muy escueta e incoherente, probablemente por el estado de la víctima. "No exigieron ninguna cantidad de dinero. No recuerdo cuándo me detuvieron, pero fue por la noche, no recuerdo. Pasé dos días detenidos con ellos, **20 de abril**, por la noche. Me detuvieron en un cuarto, grande, como tráiler. Dos días fuimos detenidos […] Me acompañaron todos los que fallecieron, como 75 personas hombres y mujeres".[18]

Debe considerarse que las preguntas son muy rígidas, en un formato poco empático, mucho más para alguien en las condiciones del ecuatoriano. Por ejemplo, la pregunta 7 dice textualmente: "Señale el lugar, día y hora en que fue detenido por sus captores para ser trasladado al municipio de San Fernando, Tamaulipas, así como la fecha y hora de su arribo". La respuesta no es muy elocuente y arroja una fecha distinta a la de la masacre: "El día 20 de agosto, 9 de la noche". Luego, al ser cuestionado sobre un posible rescate o móvil del secuestro, contesta: "Ya no recuerdo, me

olvidé”.

Sin embargo, uno de los puntos en los que la Versión 1 es consistente con la 2 y la 3 es en lo siguiente: “No nos dijeron nada, sólo ofrecieron trabajar con ellos. Nadie aceptó. Cuando dijimos no, no dijeron nada. No pidieron dinero”. Este punto es muy importante porque la reconstrucción de los hechos se basa en una supuesta información del ecuatoriano en la que afirmaba que uno de los migrantes había aceptado unirse al grupo criminal. Sin embargo, esa afirmación no aparece en ninguna de las versiones revisadas. Por lo demás, la Versión 1 incluye muchas contradicciones o incoherencias, como la fecha “20 de abril”, permitiendo pensar que fue una entrevista casi inmediata a la masacre, con el sobreviviente en condiciones de salud muy precarias y sin conciencia plena.

La Versión 2 es mucho más coherente.[19] Debe considerarse que el entrevistador fue mucho más empático:

Entrevistador: (¿) Qué fue lo que te pasó (?)
Migrante: Me secuestraron
Entrevistador: (¿) Cuándo fue eso (?)
Migrante: El sábado en la noche
Entrevistador: (¿) Este sábado que acaba de pasar (?)
Migrante: Sí
Entrevistador: (¿) A qué horas te secuestraron (?)
Migrante: Como a las diez de la noche
Entrevistador: (¿) Quién te secuestró (?)
Migrante: Que eran los Z
Entrevistador: (¿) Y cuántas personas los detuvieron a ustedes todos (?)
Migrante: Eran como 8
Entrevistador: (¿) Portaban armas (?)
Migrante: Sí
Entrevistador: (¿) Qué tipo de armas les viste, largas o cortitas (?)
Migrante: Sí, largas
Entrevistador: (¿) No había armas cortas (?)
Migrante: No
Entrevistador: Y qué les dijeron, (¿) para qué los querían (?)
Migrante: Nos secuestraron ellos, nos rodearon a todos, nos rodearon y los coyotes se escaparon; y el mismo carro nos llevó, un carro quedó y el otro nos llevó

Entrevistador: (¿) Y los metieron a todos en un solo carro (?)
Migrante: Sí. Luego llevó a cinco minutos de viaje a una casa que no había luz, una casa de madera y nos ataron las manos de cuatro en cuatro y al día siguiente, por la mañana nos desataron las manos
Entrevistador: (¿) Que sería el domingo en la mañana (?)
Migrante: Sí
Entrevistador: (¿) Y qué pasó (?)
Migrante: Nos desataron las manos y nos subieron a un camión por atrás
Entrevistador: (¿) Y a dónde los llevaron (?)
Migrante: Llevó […] una puerta de rancho, que había una casa grande antes de la casa, en la entrada había una puerta de fierro y cadena, la cortaron para entrar y después entraron en la casa, allá adentro había 02 tráileres
Entrevistador: (¿) Dos tráileres (?)
Migrante: Sí, con cosas raras también dentro de los tráileres
Entrevistador: (¿) Y para que los querían (?)
Migrante: No nos dijo nada, alguien nos dijo quieren trabajar con nosotros y nadie quería [ilegible] en la tarde
Entrevistador: (¿) Del domingo (?)

La Versión 3, difundida ampliamente tras la repatriación de la víctima, presenta a dos entrevistadores ecuatorianos cuestionando a su compatriota, aún herido, aunque emocionado por regresar a su país. El canal ecuatoriano *Gama TV* transmitió la entrevista el 2 de septiembre de 2010.[20] Sin duda es la versión más coherente y extensa de las tres, probablemente porque la salud del sobreviviente había mejorado. La víctima explica:

Víctima: anochecer de sábado, nos rodearon tres carros. Salieron como ocho personas bien armadas [...] nos sacaron del carro y nos metieron a otro carro. Llevó a una casa, ahí nos amarró de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenía una noche. Siguiente para amanecer domingo nos llevó a otra casa [...] y al anochecer domingo, nos llevó a otra casa [...] una casa vieja que estaba llena de hierba por adentro, había una casa bien vieja, llenos de hierbas, ahí nos botaron adentro [...] y vendaron los ojos […]

Entrevistador 2: ¿Cómo eran estos tipos?
Víctima: Ellos estaban bien armados.
Entrevistadora 1: Pero, ¿y el rostro?, ¿te acuerdas cómo eran?
Víctima: Los pasamontañas no tenían nada [...] no tenían nada, vestido así, nada más, normal.

Entrevistadora 1: ¿Qué aspecto tenían?
Víctima: Estaban bien armados. No nos pidió nada.
Entrevistadora 1: ¿[Inaudible] mexicanos?, o sea, en cuanto les oyeron hablar...
Víctima: No se parecía mucho a mexicanos que hablaban. Hablaban como nosotros, no como mexicanos.
Entrevistador 2: ¿Qué les decían?, ¿qué te dijeron?
Víctima: No nos pidieron nada. Sólo dijeron "¿quieres trabajar con nosotros?", y nadie quiso trabajar con ellos [...] sólo eso y no nos dijo nada más.

Como se aprecia, no puede hablarse de una sola versión del sobreviviente ecuatoriano porque sus distintos testimonios varían significativamente entre sí. Esto es perfectamente comprensible por su estado de salud, el golpe emocional que significó la masacre y la exposición mediática que aguantó. El relato del hondureño es mucho más claro y sirve para cotejarse con los del ecuatoriano.

La versión del sobreviviente hondureño

Según la declaración del sobreviviente hondureño, conocido como V74 en el expediente de la CNDH, el grupo de migrantes llevaba dos noches viajando en "dos tráileres tipo 'trocas', los cuales tenían rejillas, uno de ellos llevaba una lona de color rojo y el otro una lona de verde [...] tenían placas de Veracruz y eran de la marca Ford".[21] La noche del 21 de agosto transitaban por la carretera federal 101, en su camino a Reynosa, Tamaulipas.

> En el camino nos informaron que había un retén al parecer de militares. Por ese motivo, nos dijeron que bajáramos de "las trocas" y continuáramos el viaje caminando para rodear el lugar en donde se encontraba el retén, los **setenta y cuatro migrantes** caminamos una hora veinte minutos hasta que llegamos a un lugar del cual no recuerdo el nombre, en donde abordamos nuevamente "las trocas" que nos esperaban sobre la carretera,[22]

cuenta el testimonio del sobreviviente centroamericano a la Coordinación de Control y Verificación Migratoria.

Como se aprecia, la versión del hondureño es más explícita que la del ecuatoriano, lo cual es perfectamente comprensible considerando que el sudamericano resultó herido y perdió mucha sangre, mientras el centroamericano resultó ileso:

> fuimos interceptados por un grupo de personas que viajaban en cuatro vehículos nuevos color gris, de cuatro puertas, vidrios polarizados con placas de Tamaulipas, y una camioneta color blanca tipo van con placas de Texas, aunque no recuerdo el número de placas, ninguno de los vehículos tenía alguna característica particular, aunque solamente las nueve personas bajaron de los vehículos y nos interceptaron, quiero manifestar que todos vestían de mezclilla, con chalecos antibalas, y con fornituras en la cintura, usaban armas de nueve milímetros, algunas tipo AK-47, y como de francotirador que nos apuntaban con un tipo láser color rojo.[23]

Además, según las declaraciones del hondureño, había un criminal de origen salvadoreño y otro guatemalteco.

Según el relato del hondureño, los choferes también fueron víctimas de los Zetas: “bajaron a los conductores de las trocas, amarrándoles las manos […] los separaron del grupo y les preguntaron que para quién trabajaban, pero como los choferes no respondieron, los golpearon con la culata de las armas […] los subieron a un vehículo”.[24] Como puede apreciarse, resulta imposible determinar si los choferes conservaron la vida o fueron asesinados. Su paradero es uno de los grandes misterios que rodean a la masacre.

Hay muchas diferencias en la narración del trayecto respecto a las versiones del ecuatoriano. Como se recordará, según la víctima sudamericana, primero llegaron a un edificio a unos cuantos minutos de camino y, al día siguiente, los llevaron a otro edificio para llevarlos al punto final al atardecer. El hondureño dice que sólo estuvieron en un lugar antes del edificio de la masacre:

> condujeron las trocas y nos llevaron a un lugar del cual no recuerdo el nombre, solamente logré ver que tenían en la entrada la leyenda “Rancho”, ese lugar estaba bardeado con (¿?) reja ciclónica con un portón de color rojo, el cual fue abierto con una llave [...] había un galerón grande color blanco y con piso de tierra, en donde había dos tráileres, uno de color azul y el otro rojo, y una máquina al parecer utilizada para la siembra; quiero decir que a ese mismo lugar nos llevaron a todos, es decir a los **setenta y tres migrantes** que viajábamos juntos [...] en donde nos dieron de comer tacos y sodas a las setenta y cuatro personas. En ese momento nos dijeron que pertenecían a un grupo denominado como “Los Zetas”, y que nos ofrecían trabajo porque se encontraban en lucha con otras personas del Golfo y en contra del ejército, a

cambio nos pagarían la cantidad de mil dólares por semana. De las **setenta y cuatro personas**, sólo aceptaron el ofrecimiento tres personas, una de nacionalidad hondureña, otra salvadoreña y una guatemalteca, de quienes no recuerdo su nombre, ya quienes pasaron al frente diciéndoles que los llevarían con […] para entrenarlos […] en ese rancho permanecimos durante aproximadamente veinticuatro horas.[25]

La matanza

En términos generales, los testimonios de los sobrevivientes coinciden sobre el lugar y los hechos del asesinato masivo. Sin embargo, conviene presentarlas por separado para el análisis posterior. La Versión 1 del ecuatoriano en realidad no arroja información porque, como se dijo líneas arriba, su declaración es muy escueta y el sobreviviente parece desorientado.[26] La Versión 2, que también forma parte del expediente de la CNDH para la recomendación 80/2013 al que tuvo acceso el equipo de investigación,[27] dice lo siguiente sobre esos momentos:

Migrante: Sí, el domingo llegó a una casa y ahí los pusieron [ilegible], ahí de vuelta ataron las manos y vendaron a todos.
Entrevistador: (¿) Y qué les decían (?), (¿) por qué motivo les ataron las manos (?)
Migrante: No nos dijo nada, sólo dijo que ahí van a amanecer y nosotros creíamos que íbamos a amanecer, entonces nos vendaron los ojos a todos.
Entrevistador: (¿) A todos los tiraron al piso (?)
Migrante: Sí, boca abajo, yo estuve [h]incado, escuché las balas de aquí arriba abajo, por todos lados disparaban, disparaban, a un lado estaba un amigo, a él le disparaban, ahí sentí, está matando y después me disparó a mí [ilegible]
Entrevistador: (¿) Y te dispararon y qué pasó (?)
Migrante: Y a todos mató
Entrevistador: (¿) Tú viste cuántos eran los que disparaban (?)
Migrante: No sé, estaba vendado de los ojos, no pude ver
Entrevistador: (¿) Con qué te vendaron los ojos (?)
Migrante: Con papel
Entrevistador: (¿) Papel de baño (?)
Migrante: Casi, era más grueso
Entrevistador: (¿) Estabas amarrado de las manos (?)
Migrante: Sí
Entrevistador: (¿) Y con qué te amarraron (?)

Migrante: [ilegible], eran de este largo, amarraron los dos juntos
Entrevistador: Ah, ya sé, eran cinturones de seguridad de plástico
Migrante: Sí
Entrevistador: Y luego, (¿) qué pasó (?), (¿) cómo te salvaste (?)
Migrante: Seguían disparando a otros, yo me hice que estuve ya muerto, para que no me dieran más balazos y de ahí ya se fueron, traía un dije de corazón
Entrevistador: (¿) Un tatuaje (?)
Migrante: No, un[a] cadena. Al dispararme mi cadenita se cayó y prendió las luces, no tenía pila ni nada y con la luz se llevaron mi corazón, y después ya se fueron y me levanté.

En la Versión 3, el ecuatoriano describe brevemente el lugar, como una casa vieja y llena de hierba a la que los llevaron al anochecer. Ahí "vendaron los ojos [...] y después nos botaron boca abajo, y después escuché el ruido de que disparaban, escuché que disparaban mis amigos y después disparaban a mí, disparó a mí y mató a todos los otros. Acabó de disparar y se fueron, mataron a todos".[28]

Nuevamente, el hondureño presenta muchos más detalles. En su declaración, ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dice que los atacantes les avisan que cambiarán de lugar **y les ordenan quitarse la camisa "para ver si teníamos tatuajes y nos preguntó si habíamos pertenecido a alguna pandilla o grupo de guerrilla en nuestros países, a lo cual todos dijeron que no**".[29]

Los migrantes secuestrados abordaron las camionetas y viajaron por la brecha durante 20 a 30 minutos. Ahí, uno de los criminales abre las cadenas de un portón con unas pinzas muy grandes, una acción que el ecuatoriano afirmó que pasó el domingo 22 en la mañana, y no al atardecer, como afirma el hondureño. Describe la construcción en los mismos términos que el ecuatoriano, como "una casa grande descuidada, de color blanco, con una ventana en la parte trasera y con techo al parecer de hierro casi derrumbado, al lado derecho había una casa pequeña".[30] Los dos están hablando del mismo rancho abandonado, alguna vez utilizado como bodega y localizado 22 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de San Fernando, en el ejido de El Huizachal, según la Procuraduría

General de la República,[31] o El Huizache.[32] El hondureño continúa su relato:

> Los tráileres y/o trocas se estacionaron frente a la casa blanca, y [testado] no dijo que nos bajáramos, en ese momento nos amarraron las manos hacia la espalda con unas sogas de plástico, y fuimos ingresando [ilegible] al interior de la casa, aproximadamente diez minutos después una vez estando dentro de la casa nos vendaron los ojos, y permanecimos de pie durante veinte minutos creo que los sujetos esperaba a que anocheciera, después nos fueron acomodando formando una U alrededor de la casa […] permanecimos boca abajo alrededor de un minuto, y nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar, momentos después el hombre apodado como [testado] les comenzó a disparar a las mujeres, en ese momento un migrante de quien no recuerdo su nacionalidad les dijo a los sujetos que no les dispararan y en ese momento escuché que le dispararon y que lo azotaron en la pared; y en ese instante me quité [ilegible] me deslicé hacia unos matorrales que se encontraban aproximadamente a unos cuatro o cinco metros del lugar de donde estaba acostado y los disparos se escucharon aproximadamente como cinco [ilegible], después escuché que se alejaban los tráileres y/o las trocas.[33]

¿Quiénes fueron los atacantes? En sus tres versiones, el migrante ecuatoriano habla de ocho personas fuertemente armadas y con el rostro descubierto, vestidos como civiles. Por su parte, el hondureño habla de nueve, con las mismas características de armamento y vestimenta que el ecuatoriano. De hecho, parece que en su declaración abundan los nombres, apodos, nacionalidades —en esta parte también la Versión 3 del ecuatoriano señala que “no se parecía mucho a mexicanos que hablaban. Hablaban como nosotros, no como mexicanos”—,[34] rasgos físicos de los agresores, aunque es imposible afirmarlo con certeza porque esos detalles estaban testados en el expediente al que tuvo acceso el equipo de investigación. **La declaración ministerial de uno de los perpetradores –recogida por Marcela Turati–, Edgar Huerta Montiel, *El Wache*, jefe de la plaza de San Fernando y segundo al mando de los Zetas en la región durante la masacre, detrás de Salvador Martínez Escobedo, *La Ardilla*, señala:**

> Esto fue en agosto de 2010, por la noche llegamos en tres carros […] llegamos

El Chamaco, El Sanidad, El Alacrán, El Coyote, El Junior, El Cóndor y yo, dimos la seguridad fuera del rancho, los que ejecutaron fueron *El Alacrán, El Chamaco, El Sanidad*, nada más los tres, los mataron con tiro de gracia, calibre 9 milímetros, esto tardó como dos horas; en donde yo estaba dando seguridad se escuchaban las detonaciones, era tiro tras tiro, hasta que terminamos. Como ya era de noche, no se enterraron en ese momento, pero al otro día llegaría *El Chamaco* a enterrarlos, pero ya no fue, porque llegaron antes los marinos.[35]

Los sobrevivientes

A la fecha, se tiene la certeza de dos sobrevivientes de la masacre, el ecuatoriano y el hondureño, cuyos testimonios se han presentado en el texto. Sin embargo, hay dudas razonables de que otros dos o tres migrantes conservaron la vida. Entonces, estaríamos hablando de un grupo de 76 a 77 víctimas, sin considerar a los choferes de las camionetas secuestradas.

Los primeros sobrevivientes potenciales serían una mujer embarazada y una niña. Hay dos fuentes que permiten tener dudas razonables acerca de su existencia y, en consecuencia, su paradero. La primera es la Versión 3 del ecuatoriano, en la que dice: "Entrevistador 2: ¿A cuántos mataron? Entrevistadora 1: Eran en total 76, dijiste. Sobreviviente: 76, y había una mujer embarazada como 9 meses, o diez, y con una niña, pero a ella no la mataron, no sé a dónde se llevaron. Me dijo que estaban muertos sólo 73, no sé del resto. Y yo me salvé. Como cuatro personas quedamos salvadas".[36] Un cable diplomático narra que "una mujer y un menor supuestamente fueron separados de este grupo y su paradero permanece desconocido hasta el momento".[37] El hondureño también habla de una mujer embarazada, pero, según su narración, los sicarios la formaron dentro del edificio momentos antes de la balacera. No menciona a una niña.

Es bastante probable que un salvadoreño conservara la vida. ¿Por qué? Retomando el cable diplomático del párrafo anterior, el Consulado de Matamoros señala que el sobreviviente ecuatoriano afirmó que sólo él y un salvadoreño permanecieron con vida, aunque él creía que posteriormente fue capturado y asesinado.[38] Sin embargo, eso sólo podría ser una equivocación en los primeros

informes del cónsul. Muy distinto es que un Jefe de Estado confirme esa versión: **“El testimonio de los tres sobrevivientes ayudará a la investigación, porque sabemos de un ecuatoriano, de un hondureño y ahora de un salvadoreño que se encuentra en Estados Unidos”, expresó el presidente de El Salvador, Mauricio Funes.[39] Según los *Periodistas de a Pie*, en la página de internet “+de 72”, el testigo salvadoreño podría ser testigo protegido de la justicia estadounidense.[40] De ser cierto, hay posibilidades de conocer más sobre lo que pasó el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.**

El sobreviviente hondureño y el ecuatoriano lograron escapar y dar testimonio de la masacre. Sin ellos, sobre todo sin el aviso del ecuatoriano a los marinos mexicanos, los 72 migrantes posiblemente engrosarían la lista de desaparecidos de Tamaulipas o, probablemente, ni siquiera sabríamos de ellos. ¿Cómo lo lograron? Los dos sobrevivientes dicen que permanecieron inmóviles durante unos minutos después de que se fueran los sicarios —dos minutos, según el ecuatoriano, y 20, según el hondureño—.[41] Después de eso, el hondureño ayuda al ecuatoriano, aunque no queda claro cómo lograron desatarse.

Aquí las versiones vuelven a diferir radicalmente. Según el ecuatoriano, los migrantes ven una luz muy lejana y corren hacia ella, durante muchos kilómetros. Según la Versión 3, el hondureño se separa pensando que el ecuatoriano iba a morir y no iba a avanzar.[42] En la Versión 2 abunda al respecto: “Migrante: Sí, salimos los dos, nos fuimos caminando, caminando, al revirar para atrás vi que nos estaban siguiendo como cuatro carros. Entrevistador: (¿) A ustedes (?) Migrante: Sí. Al ver eso, mi amigo que venía conmigo se separó […] separó, se fue a otro lado y caminé viendo la luz de la lámpara”.[43] Esta versión coincide plenamente con la del hondureño, quien en su testimonio indica que, al percatarse del acercamiento de cuatro carros, “yo me dirigí hacia los matorrales y le dije al ecuatoriano que continuara caminando hacia la carretera”.[44] No han vuelto a cruzar sus caminos.

El camino del hondureño hasta Matamoros y el Grupo Beta

El hondureño camina y se oculta en los matorrales. Después, camina durante cinco horas, hasta que llegó

> a las orillas de un poblado del cual no recuerdo el nombre, todo el tiempo permanecí oculto dentro de los matorrales hasta que amaneció. Continué caminando por los matorrales hasta llegar una parada de autobús, quiero decir que una señora me regaló cuarenta pesos, abordé un autobús que tenía un letrero que decía “Matamoros”, en el cual viajé entre cuarenta y cincuenta minutos, y me bajé hasta llegar a la Central de autobuses.

Después de eso, la víctima pregunta por la Casa del Migrante, ya que recordó que algunos amigos la habían mencionado antes. Pregunta a una mujer si había una y dónde estaba; ella le da la dirección. Después de eso, abordó una combi y entregó el papel con la dirección al chofer, quien lo transportó hasta la Casa del Migrante. Lo atiende una religiosa y ahí permanece la tarde y noche.

En la Casa del Migrante “escuché a otros migrantes que decían que los Grupos Beta los apoyaban en realizar llamadas a [ilegible] con sus familiares; por ese motivo decidí dirigirme a un Puente del cual no recuerdo el nombre; al llegar a ese lugar el día veinticuatro de agosto, vi una oficina que decía ‘grupo beta ayudar y proteger al migrante’, me acerqué y pedí ayuda”.[45] Cuenta la historia al personal de esa oficina y ellos le piden que no le cuente a nadie. Posteriormente arriba gente del Instituto Nacional de Migración, quienes lo trasladan a la Ciudad de México. Ahí rinde su declaración.

Según *Periodistas de a Pie*, existen rumores de que el migrante hondureño regresó a la ruta migratoria. Su paradero es desconocido.[46]

El camino del ecuatoriano hasta los marinos

En la noche del 22 de agosto, tras separarse, el ecuatoriano pensó que los Zetas volvieron a capturar al otro migrante, porque escuchó disparos en la dirección que tomó el otro sobreviviente. Según la Versión 1, “no recuerdo cuánto caminé. Seguí una carretera. Sangraba y sentía debilidad. Me recibió un marino. Me atendieron primero, me llevaron a un hospital […] llegué caminando. Ya no recuerdo cuánto tiempo. Como de las 9 de la noche hasta las 6 de la

mañana caminé. No vi a nadie. No hacía frío, fue caliente".[47]

Según la Versión 2, "caminé toda la noche, llegué a la lámpara, pedí ayuda y no me quisieron ayudar, sólo me dieron un vaso de agua [ilegible] seguí caminando, llegué a una casa [ilegible] seguí caminando",[48] hasta llegar a los marinos. La Versión 3 abunda sobre la lámpara, a la que dice haber seguido por más de 10 kilómetros:

> Caminé toda la noche y al llegar a esa lámpara, estaba muy lejos, pedí ayuda. Salieron dos hombres, pero no me quisieron ayudar. Al ver que, al lado de la casa, diez metros, pasaba una vía grande, una vía grande, llegué a la vía. Caminé más. Caminé, caminé con dolor, pidiendo auxilio, nadie me quiso ayudar. Al caminar, caminar, ya se hizo de día. Se hizo de día. Caminé más. Como a las 7 de la mañana vi a los marinos, los migra. Llegué donde ellos. A ellos les pedí ayuda. Y ellos me ayudaron. Me llevaron al hospital. Y me llevaron a [Ciudad de] México. Ahí me tenían en el hospital. Le doy gracias a ellos, que me ayudaron.[49]

Gary Moore es un periodista norteamericano que recorrió la zona de la matanza en 2011, generando detalles valiosos para el esclarecimiento de los hechos. Moore señala que la brecha que conduce hasta la finca donde ocurrió la masacre en el ejido El Huizachal, al que llama El Huizache, se conoce como "La Noventa", a 16 kilómetros de la carretera 101 entre Ciudad Victoria y San Fernando.[50] Según Moore, gracias a versiones recopiladas entre vecinos de la zona, la luz que seguía el ecuatoriano en sus distintas versiones no era un almacén de granos, que existía pero estaba cerrado, sino la Estación 10 de inspección de ganado. El portal "+de 72" reproduce el texto de Moore, publicado originalmente en InSight Crime:

> De acuerdo con los habitantes —y esta versión es la que se conoce en la región— el vigilante en el almacén dijo al fugitivo que no podía ayudarlo, pero que al sur por la autopista había un retén de la Marina mejor equipado para esta peligrosa ayuda. De acuerdo con esta historia, el joven ecuatoriano no encontró a los marinos por un accidente milagroso, sino que fue dirigido hacia ellos por el vigilante del almacén.[51]

De cualquier forma, el ecuatoriano tuvo que caminar, herido y consternado, de 16 a 19 kilómetros en la oscuridad, desde El Huizachal hasta el punto de control de los marinos. Sus condiciones

para recorrer esa distancia por sí mismo fueron excepcionales, por lo que más de uno ponen en duda su versión, obtenida y difundida por la Secretaría de Marina (Semar).[52] Sin embargo, el mismo Moore dice que su investigación en campo "sugiere que muchos puntos en la encriptada narración no eran mentiras o historias para encubrir algo, sino que reflejan eventos reales".[53] Es muy probable que el ecuatoriano llegase por su propio pie al puesto de control al amanecer del lunes 23 de agosto de 2010, entre las 6 y 7 de la mañana.

El hallazgo

Los marinos atienden al sobreviviente ecuatoriano y solicitan una ambulancia. Le preguntan sobre su estado y el ecuatoriano narra los hechos. Infantería naval comienza la búsqueda del lugar de la masacre por tierra y por aire. En este punto hay versiones encontradas. Según el cable diplomático del Consulado de Matamoros dedicado exclusivamente a la matanza,[54] los marinos localizan grupos de zetas y comienzan un ataque terrestre. La versión oficial, manejada por la prensa nacional y local, afirma que un grupo de zetas enfrentó a los helicópteros de la Marina.[55] Concuerdan en que hubo cuatro muertos, tres zetas y un marino, además de un menor de edad detenido, posteriormente identificado por el sobreviviente ecuatoriano. Es importante mencionar que no queda claro si estas personas estaban relacionadas con la matanza, aunque su presencia en la zona y el hecho de que dispararan contra los marinos así lo sugieren. Sin embargo, la declaración de *El Wache* dice, textualmente: **"cuando se terminó de matar a los migrantes, que eran como 72, nos fuimos a San Fernando a un rancho […] ahí dormimos normalmente y estuvimos como 15 días"**.[56]

Según el consulado estadounidense en Matamoros, es hasta la tarde del 24 de agosto cuando los marinos hallan a las víctimas en el rancho abandonado.[57] Los sicarios habían apilado los cuerpos contra el muro del edificio. **Esa misma tarde, la Semar emite el comunicado de prensa 216/2010, titulado "Personal de la Armada de México descubre rancho de presuntos delincuentes**

en San Fernando, Tamaulipas".[58] En el comunicado, la Semar narra el encuentro de los marinos con el sobreviviente ecuatoriano, y el despliegue posterior:

> Personal de infantería con el apoyo de unidades aeronavales se dirigió al área indicada, avistando desde el aire a los infractores de la ley, quienes al notar la presencia de los elementos de la Armada de México abrieron fuego e iniciaron la huida a bordo de varios vehículos. Al repeler varias agresiones fue asegurado un presunto delincuente que es menor de edad, quien se encuentra a disposición de la Procuraduría General de la República. En el enfrentamiento perdió la vida un elemento de la Armada de México y tres presuntos delincuentes.
>
> En seguimiento a la investigación, el personal naval se desplazó nuevamente al área con el fin de ubicar el lugar referido por el herido. **En este sitio a 22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas.**
>
> El Agente de Ministerio Público Federal se presentó al lugar tomando conocimiento de los hechos, quedando a su disposición el menor de edad, e inició la Averiguación previa PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010, por los delitos de homicidio y lo que resulte. Las armas, municiones, vehículos, pertrechos y efectos asegurados, para los efectos de ley correspondientes. La persona herida que denunció los hechos se encuentra resguardada por autoridades federales.

Los marinos reportan a 72 personas sin vida, 58 hombres y 14 mujeres. Éste es uno de los puntos más oscuros del caso. Hasta la fecha se desconoce el número exacto de personas secuestradas por el comando de criminales. Si a las 72 víctimas fatales sumamos los sobrevivientes conocidos, el ecuatoriano y el hondureño, más uno potencial proveniente de El Salvador, estaríamos hablando de 75 personas. Faltaría agregar a la mujer y al menor separados del grupo. Así, el número de víctimas directas podría alcanzar a 77 seres humanos. Por su parte, el sobreviviente ecuatoriano afirma que eran 75 y, después, en una entrevista a CNN habló de 76, mientras el hondureño, en la declaración a la que tuvo acceso el equipo de investigación, mencionó 73 y 74 personas.

¿Qué pasó? Consideraciones acerca de las diferencias en las versiones

En la sección anterior se hizo un repaso de la información disponible sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, tomando como base los testimonios de los sobrevivientes, a los que tuvo acceso el equipo de investigación, y complementándolos con documentos oficiales, cables diplomáticos, reportajes y videos relacionados con declaraciones de actores clave.

Por las lagunas en la investigación y las condiciones mismas de la tragedia, es muy difícil hablar siquiera de una versión definitiva. El siguiente cuadro sólo busca sintetizar los elementos comunes y las diferencias para tener un panorama más claro. El cuadro esquematiza los rasgos más importantes de la masacre a partir de los testimonios disponibles de los participantes directos.

La fecha del secuestro es un elemento persistente en las declaraciones de las víctimas, a excepción de la Versión 1 del ecuatoriano que, como se dijo líneas arriba, parece un testimonio en condiciones precarias de salud.[59] El punto es importante porque se ha puesto en duda la fecha. Según el portal “+de 72”:

> Las inconsistencias prevalecen en la identificación de la fecha de la masacre. Los reporteros tamaulipecos que cubren San Fernando supieron del hecho el día 23 —al escuchar la frecuencia de radio de las patrullas de los policías municipales— y acudieron al rancho a tomar fotografías de la escena del crimen, que encontraron con cadáveres y sin resguardo ni presencia de autoridades. Pero embargaron la información durante un día: lanzaron la noticia hasta después de que la Marina hiciera público el hecho un día después.[60]

Sin embargo, los testimonios de las víctimas a las que tuvimos acceso parecen muy claros al respecto.

Versiones de la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010)

	Versión 1 del ecuatoriano	Versión 2 del ecuatoriano	Versión 3 del ecuatoriano	Sobreviviente hondureño	'El Wache'
Fecha del secuestro	20 de abril y 20 de agosto	21 de agosto	21 de agosto	21 de agosto	Agosto
Fecha de ejecución	22 de agosto	22 de agosto	22 de agosto	22 de agosto	Agosto
Número de migrantes	75	77	76	73-74	72
Camionetas	-	2	2	2	-
Número de perpetradores	8 civiles fuertemente armados	8 civiles fuertemente armados	8 civiles fuertemente armados	9 civiles fuertemente armados	7 zetas
Suerte de los choferes	-	-	-	Golpeados y secuestrados	-
Petición de rescate	-	-	-	-	-
Oferta de unirse a los Zetas	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Migrantes que aceptaron la oferta	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Tres: guatemalteco, hondureño y salvadoreño	-
Sobrevivientes potenciales	-	-	Embarazada y niña	-	-
Número de estaciones utilizadas	2	3	3	2	-
Huida conjunta de ecuatoriano y hondureño	-	Sí	Sí	Sí	-
Camionetas persiguiendo durante la huida	-	-	Sí	Sí	-

Fuente: Expediente de la CNDH sobre San Fernando, Declaración del sobreviviente ecuatoriano a Gama TV y Turati, Marcela, "La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades", *Proceso*, 23 de mayo de 2015.

Un elemento persistente en los testimonios es que los migrantes viajaban en dos vehículos antes de su secuestro. Otro es que los sicarios no pidieron rescate. Los sobrevivientes también coinciden en que los sicarios ofrecieron a los migrantes unirse a los Zetas para pelear contra el Cártel del Golfo. De hecho, la versión dominante es que sólo uno de los migrantes aceptó, generando la furia de los sicarios y detonando la masacre contra los secuestrados.[61] En el mismo sentido, uno de los primeros cables diplomáticos sobre el tema refuerza la versión de un migrante que aceptó la oferta.[62] Sin embargo, la revisión de las declaraciones del sobreviviente ecuatoriano es muy clara. Según sus tres versiones, ninguno de los migrantes aceptó. El hondureño, en cambio, afirma que tres migrantes aceptaron, pero también dice que los sicarios regresaron

a todos al grupo al que balacearon.[63]

El número original de migrantes es un tema difuso en las declaraciones de los actores. Édgar Huerta Montiel, *El Wache*, declaró "que eran como 72",[64] aunque debe considerarse que, en su posición, buscaría reducir el número de víctimas al mínimo posible. Ni el hondureño ni el ecuatoriano recuerdan con claridad el número total de migrantes, lo cual es comprensible considerando que eran varias decenas. Si a las 72 víctimas fatales sumamos los sobrevivientes conocidos, el ecuatoriano y el hondureño, más uno potencial proveniente de El Salvador, estaríamos hablando de 75 personas.[65] Faltaría agregar a la mujer y a la menor separadas del grupo, según la Versión 3 del ecuatoriano.[66] Así, el número de migrantes oscilaría de ٧٤ a ٧٧ personas, sin considerar a los choferes, cuatro según el testimonio del hondureño,[67] cuyo destino varía significativamente dependiendo el sobreviviente que narre.

Finalmente, **un punto importante que no viene en los relatos, pero sí en el expediente de la CNDH, es el género de las víctimas fatales.** Dicen los *Periodistas de a Pie*: "Una duda básica es la cantidad de mujeres y hombres muertos, pues mientras el gobierno federal sostiene los 14 y 58, la procuraduría de Tamaulipas dice que fueron 13 mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos duda del sexo de un cadáver".[68] Al respecto, la diligencia de inspección ministerial y levantamiento de cadáveres, realizada en el lugar de los hechos el 24 de agosto de 2010, dice:

> **A la vista una bodega de concreto de aproximadamente doce metros por nueve, la cual se encuentra abandonada y llena de maleza en su interior y sobre la brecha hacia el lado norte. Se da fe de que en el interior de la misma se encuentra aproximadamente setenta y dos personas sin vida, trece del sexo femenino y cincuenta y nueve del sexo masculino, los cuales se dan fe de que se encuentran vendados de los ojos y atados de las manos con cinchos de plásticos color blanco, los cuales dichos cuerpos se encuentran afilados sobre las paredes de dicha bodega.[69]**

Desafortunadamente, el Ministerio Público fue asesinado dos días después.[70] Además, el 26 de agosto apareció el cadáver del director de la policía municipal de San Fernando en el municipio de Méndez, junto a un grupo de cuerpos no identificados.[71]

¿Por qué? La masacre de San Fernando en el contexto de la guerra en el noreste

Los testimonios de los sobrevivientes coinciden en que los Zetas les ofrecieron integrarse a las filas del grupo criminal, pero que la mayoría se negó. Además, les ofrecían mucho dinero, entre 2 mil y 4 mil dólares mensuales, por sus servicios como sicarios o empleadas domésticas. Según la nota diplomática del Consulado de Matamoros, "el salario parece demasiado generoso y era probable que no fuera la remuneración real que hubieran recibido de haber aceptado, si es que en realidad tenían planeado pagarles".[72] No queda claro por qué ambos sobrevivientes lo mencionan. Fundamentalmente, no tiene mucho sentido contratar a personas que, simple y llanamente, podían esclavizar. De hecho, en los relatos, las tres personas que aceptaron la oferta, según el relato del hondureño, porque ninguna lo hizo en los relatos del ecuatoriano, fueron asesinadas con el resto de migrantes. Además, como apunta Turati,[73] el asesinato masivo no buscaba una recompensa económica inmediata, porque los agresores ni siquiera intentaron pedir rescate por ellos.

Así, la masacre de San Fernando debe analizarse como un episodio más de la guerra entre Zetas y el CDG.

Como se recordará, el CDG ataca a sus antiguos subordinados y entonces aliados en febrero de 2010, en lo que se conoce como *El Alzamiento, La Vuelta* o *La Traición*.[74] Sin embargo, los Zetas defendieron sus posiciones y contratacaron con brutalidad. En un cable diplomático anterior a la masacre, el consulado estadounidense en Matamoros reportaba una ofensiva generalizada de los Zetas a lo largo del noreste.[75] La Embajada de Estados Unidos alertaba sobre bloqueos carreteros, toma de localidades y ataques a las fuerzas de seguridad en toda la región en marzo de 2010. **A decir de los estadounidenses, las fuerzas locales no actuaban contra el grupo criminal. Por ejemplo, meses después se sabría que la policía municipal de San Fernando estaba completamente penetrada por los Zetas**.[76] La Embajada reporta violencia en el área, destacando las fugas en la prisión de Matamoros.

Había enfrentamientos a lo largo de los pueblos fronterizos. Por ejemplo, los Zetas asesinaron a más de 20 miembros del Golfo en una emboscada en Jiménez, Tamaulipas. “El Cártel del Golfo ha estado atacando pequeñas plazas de Tamaulipas, incluso si no están ocupadas por los Zetas. Los ataques ocurren sólo porque el área pertenece a los Zetas”.[77] Marcela Turati, corresponsal de *Proceso*, reportaba que “el pánico se apoderó de Ciudad Victoria —capital del estado—, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y los rumores obligaban a cerrar escuelas. Matamoros —preveía el consulado— podría ‘ser escena de confrontación en un futuro’ por ser cuartel del CDG y valor estratégico para una futura ofensiva”.[78]

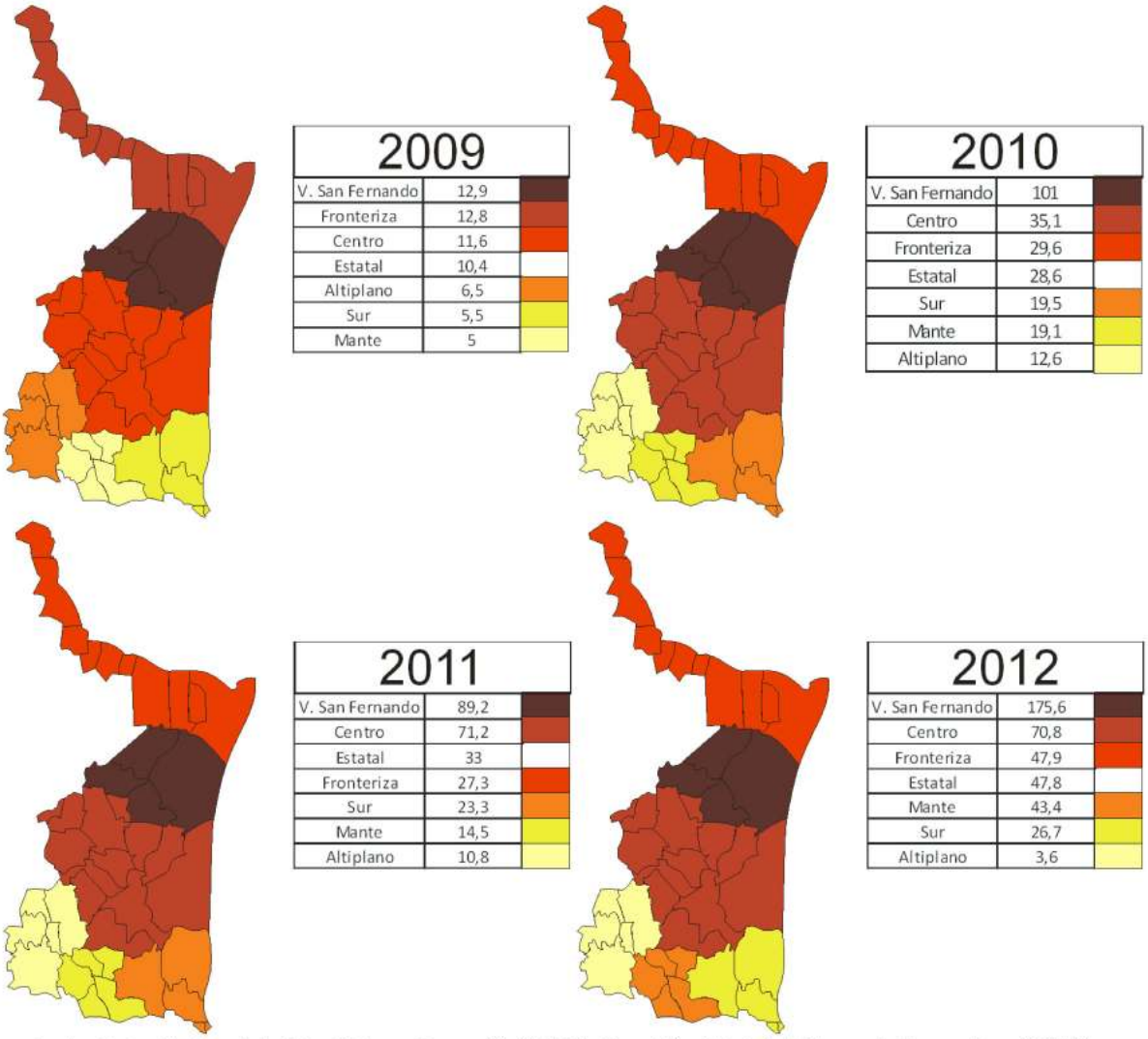
Para 2010, los Zetas habían sobrepasado a sus antiguos jefes en territorio y fuerza. La situación era de supervivencia para el CDG. De hecho, de acuerdo con la consultoría Stratfor,[79] tras la ruptura con los Zetas, el CDG sólo conservaba sus bastiones de Matamoros y Reynosa, y algunos lugares al sur de Tamaulipas. Todo lo demás era territorio zeta. Las opciones eran claras para cada bando, el CDG debía resistir y esperar a que sus nuevos aliados, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, debilitaran a los Zetas, además de contratacar y expandirse cuando fuera posible.[80] Esta organización, por su parte, se había aliado con el Cártel de Juárez[81] y con los Beltrán Leyva[82] para eliminar lo que quedaba del CDG, sobre todo para conquistar alguna de sus posiciones fronterizas a fin de estrangularlos económicamente.

En este contexto, la lógica de los Zetas detrás de la masacre de San Fernando tendría dos elementos. El primero, siguiendo las declaraciones de Edgar Huerta Montiel, *El Wache*,[83] jefe de la plaza de San Fernando durante la matanza, los Zetas temían que entre los migrantes llegaran refuerzos del Cártel de Sinaloa o de La Familia Michoacana para las posiciones del CDG. Considérese que los Zetas controlaban regiones amplias del país, por lo que un rescate frontal no era posible. De esta forma, las órdenes de Lazcano, transmitidas hacia su hombre de confianza, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, *El Comandante Ardilla*, jefe regional de la organización, era revisar a los migrantes para localizar posibles enemigos: “En agosto

de 2010, el *Moneneke* [Emanuel Larios], que en ese entonces era el encargado de Ciudad Victoria, reportó a El Coyote [Román Ricardo Palomo Rincones], que iban dos camionetas doble rodada con gente, que cuando llegaran a San Fernando las checáramos, para lo cual *La Ardilla* [Salvador Martínez Escobedo], dio la orden a *El Kilo* [Martín Omar Estrada de la Mora] para que checara. *El Kilo* checó que eran indocumentados y se lo reportó eso a *La Ardilla*, dijo que investigáramos bien, que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de *halcones* o para tenerlos de esclavos, y *La Ardilla* dio la orden al *Coyote* de que se mataran", declaró Édgar Huerta Montiel en su declaración ministerial.[84]

El segundo elemento detrás de la lógica de los Zetas sería económico. Dicho de otra forma, **detrás de la masacre de San Fernando también hay una lógica que concuerda con la visión territorial de los Zetas.[85] Se trataba de hostilizar una ruta migratoria altamente lucrativa. Turati, siguiendo la información del NSA, da algunos datos escalofriantes: más de 200 personas secuestradas en las carreteras, decenas de cadáveres en sitios diversos. Por ejemplo, en la primera semana de abril de 2011, unos días después de la matanza de Allende, fueron encontrados 81 cadáveres en 17 sitios distintos. "El 19 de marzo miembros del crimen organizado secuestraron a 24 personas de un autobús público originario de San Luis Potosí que viajaba a Reynosa. El 24 de marzo secuestraron a 12 personas de un camión originario de Michoacán. También el 24, plagiaron a los 48 pasajeros de un camión de Guanajuato que iba a Reynosa. Los tres cerca de San Fernando".**

Tasas de homicidios en Tamaulipas por región (2009-2012)



2009	
V. San Fernando	12,9
Fronteriza	12,8
Centro	11,6
Estatal	10,4
Altiplano	6,5
Sur	5,5
Mante	5

2010	
V. San Fernando	101
Centro	35,1
Fronteriza	29,6
Estatal	28,6
Sur	19,5
Mante	19,1
Altiplano	12,6

2011	
V. San Fernando	89,2
Centro	71,2
Estatal	33
Fronteriza	27,3
Sur	23,3
Mante	14,5
Altiplano	10,8

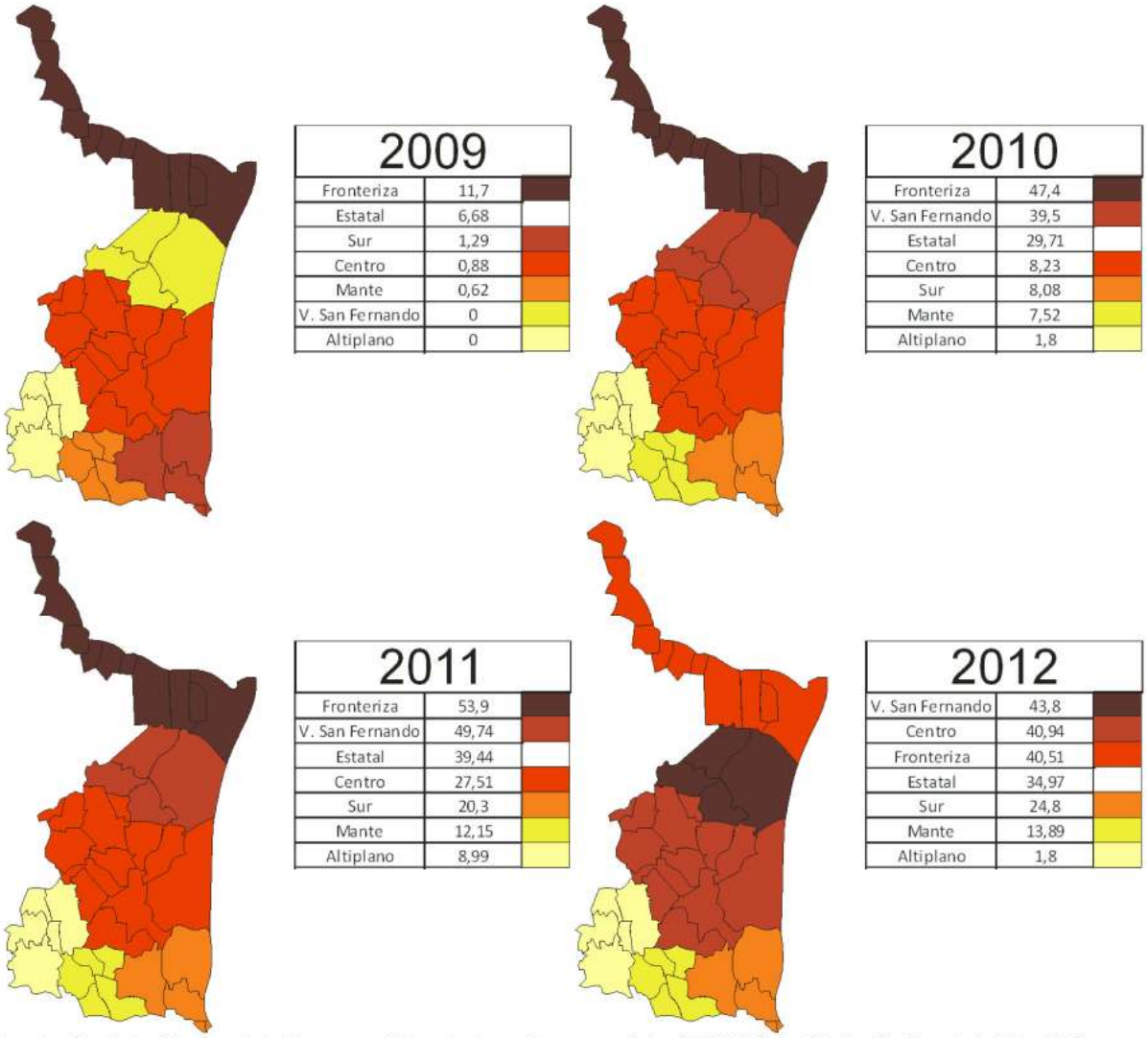
2012	
V. San Fernando	175,6
Centro	70,8
Fronteriza	47,9
Estatal	47,8
Mante	43,4
Sur	26,7
Altiplano	3,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT).

Este punto es muy importante. Los datos muestran un patrón muy evidente: homicidios y desapariciones en una región que colindaba con los bastiones del CDG. En este sentido es importante apuntar que los Zetas consideran las rutas como **elementos estratégicos. Aparentemente, el tráfico de drogas del CDG no resultaba afectado por las redes marítimas y aéreas con las que contaba. Sin embargo, el control de los Zetas sobre la región de San Fernando les permitía afectar otros negocios del CDG, como el tráfico de personas. De esta forma, en tan sólo un par de años, el Valle de San Fernando pasó de ser una zona con niveles**

medios de homicidios y muy tranquila en cuestión de desaparecidos a la región más problemática en ambos rubros. Los siguientes mapas dan cuenta de esta situación.

Tasas de desaparecidos en Tamaulipas por región (2009-2012)



2009	
Fronteriza	11,7
Estatal	6,68
Sur	1,29
Centro	0,88
Mante	0,62
V. San Fernando	0
Altiplano	0

2010	
Fronteriza	47,4
V. San Fernando	39,5
Estatal	29,71
Centro	8,23
Sur	8,08
Mante	7,52
Altiplano	1,8

2011	
Fronteriza	53,9
V. San Fernando	49,74
Estatal	39,44
Centro	27,51
Sur	20,3
Mante	12,15
Altiplano	8,99

2012	
V. San Fernando	43,8
Centro	40,94
Fronteriza	40,51
Estatal	34,97
Sur	24,8
Mante	13,89
Altiplano	1,8

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT).

¿Por qué es importante? En realidad, el Valle de San Fernando sufrió una crisis de violencia terrible que se mantiene hasta ahora. Simplemente, el patrón ha sido sistemático para la región. Un ciclo de violencia recurrente, de homicidios y desapariciones por una guerra entre el crimen organizado, con vínculos con el aparato estatal, como demostró la sumisión de la policía municipal de San Fernando a los Zetas. Así, es posible

argumentar que San Fernando I, como se conoce a la masacre de los 72 migrantes, es parte del mismo proceso de San Fernando II, el descubrimiento de narcofosas en la región durante 2011. La diferencia sería la supervivencia de dos o más víctimas que pudieron contar su historia y, así, evitar que los cadáveres de sus compañeros desaparecieran en algún lugar de la inmensidad tamaulipeca.

Notas

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología*, México, PNUD, 2014.

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Censo de Población y Vivienda 2010*, 2010. Disponible en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[3] María Amparo Casar, "Las bases político-institucionales del poder presidencial en México", *Política y Gobierno*, 1996, vol. III, núm. 1, pp. 61-92.

[4] Muchos académicos han estudiado el fenómeno en México. Véase Edward Gibson, "Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries", *World Politics*, 2005, vol. 58, núm. 1, pp. 101-132; Agustina Giraudy, *Subnational undemocratic regime continuity after democratization: Argentina and Mexico in comparative perspective*, tesis de doctorado, North Carolina, The University of North Carolina at Chapel Hill, 2009.

[5] Con información de la Dirección General de Documentación, *Información y Análisis de la Cámara de Diputados.* Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/edos/index.htm>; consultado el 30 de septiembre de 2016 y en la página electrónica del Congreso de Coahuila: <http://congresocoahuila.gob.mx/portal/?page_id=13300>; consultada el 30 de septiembre de 2016.

[6] Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Tamaulipas, "Regiones del Estado de Tamaulipas". Disponible en <http://ceat.tamaulipas.gob.mx/informacion-sector-agua/regiones-del-estado-de-tamaulipas>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[7] Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), *Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México*, 2010. Disponible en <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/>.

[8] Eduardo Guerrero, "La guerra por Tamaulipas", *Nexos*, 1 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.nexos.com.mx/?p=13889>; consultado el 2 de octubre de 2016.

[9] En 2013, Tamaulipas tenía 14 órganos estatales de seguridad y justicia por cada 100 mil habitantes, el doble del promedio nacional. Para ese mismo año, en la

entidad había 88.6 personas por cada 100 mil habitantes ingresadas a centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común, casi la mitad del promedio nacional, que es de 153.8 personas presas por cada 100 mil habitantes.

[10] Lucía Calderón, *Tamaulipas, un estado emblemático en la lucha contra la violencia. Prácticas comunicativas en un ambiente de excepción*, tesis de doctorado, Ciudad de México, 2016, p. 16.

[11] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica*, México, Grijalbo, 2013.

[12] Lucía Calderón, *op. cit*., p. 99.

[13] Véase Miguel Ángel Sosa, "Limitadas, medidas contra plagio de migrantes: CNDH", *El Universal*, 19 de abril de 2011. Disponible en <archivo.eluniversal.com.mx/nación/184876.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[14] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[15] Consulado de Estados Unidos en Matamoros, "Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas", cable diplomático para la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Estado, 26 de agosto de 2010. Desclasificado y publicado por el National Security Archive. Disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB499/DOCUMENT22-20100826.pdf>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[16] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas*, 23 de diciembre de 2013. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf>.

[17] *Idem*.

[18] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante el Instituto Nacional de Migración, recopilada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[19] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recopilada el 26 de agosto de 2010 por el visitador adjunto de la Quinta Visitaduría General de la CNDH en el hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[20] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV*. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=AGIYa1TnmR8>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[21] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la

CNDH sobre San Fernando.
[22] *Idem*.
[23] *Idem*.
[24] *Idem*.
[25] *Idem*.
[26] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante el Instituto Nacional de Migración, recopilada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[27] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[28] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV, op. cit*.
[29] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[30] *Idem*.
[31] Procuraduría General de la República, "Acuerdo Específico A/009/11 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente en la identificación, localización, detención o aprehensión de los sujetos que planearon y ejecutaron el multihomicidio de 72 personas de origen extranjero, cometido en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas y los delitos que resulten", emitido el 31 de enero de 2011. Disponible en <http://pgr.gob.mx/normatec/Documentos/a-09-11.pdf>; consultado el 28 de septiembre de 2016.
[32] Gary Moore, "Lost Piece of the Massacre Puzzle". Disponible en <https://garymoore22.wordpress.com/2011/09/12/lost-piece-of-the-massacre-puzzle/>; consultado el 28 de septiembre de 2016. El texto también fue publicado en *InSight Crime*.
[33] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[34] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV, op. cit*.
[35] Marcela Turati, "La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades", *Proceso*, 23 de mayo de 2015. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/405140/405140-la-matanza-de-san-fernando-inconsistencias-y-falsedades>; consultado el 28 de septiembre de 2016.
[36] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV, op. cit*.
[37] Consulado de Estados Unidos en Matamoros, "Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas", *op. cit*.

[38] *Idem*.
[39] Redacción, “Revelan que salvadoreño sobrevivió a la masacre”, *La Jornada*, 6 de septiembre de 2010. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2010/09/06/politica/003n2polA; consultada el 28 de septiembre de 2016.
[40] Los *Periodistas de a Pie* crearon la página “+de 72”. Disponible en <http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/>; consultada el 28 de septiembre de 2016.
[41] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[42] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV, op. cit*.
[43] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recopilada el 26 de agosto de 2010 por el visitador adjunto de la Quinta Visitaduría General de la CNDH en el hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[44] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[45] *Idem*.
[46] Página web “+de 72”, *op. cit*.
[47] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante el Instituto Nacional de Migración, recopilada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[48] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recopilada el 26 de agosto de 2010 por el visitador adjunto de la Quinta Visitaduría General de la CNDH en el hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[49] Declaración del sobreviviente ecuatoriano *a Gama TV, op. cit.*
[50] Gary Moore, “Lost Piece of the Massacre Puzzle”, *op. cit*.
[51] Página web “+de 72”, *op. cit*.
[52] Secretaría de Marina, “Comunicado de Prensa 216/2010, Personal de la Armada de México descubre rancho de presuntos delincuentes en San Fernando, Tamaulipas”, 24 de agosto de 2010. Disponible en <http://2006-2012.semar.gob.mx/sala-prensa/comunicados-2010/1436-comunicado-de-prensa-216-2010.html>; consultado el 28 de septiembre de 2010.
[53] Gary Moore, “Lost Piece of the Massacre Puzzle”, *op. cit*.
[54] Consulado de Estados Unidos en Matamoros, “Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas”, *op. cit*.
[55] Secretaría de Marina, “Comunicado de Prensa 216/2010, Personal de la

Armada de México descubre rancho de presuntos delincuentes en San Fernando, Tamaulipas", *op. cit*.

[56] Marcela Turati, "La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades", *op. cit*.

[57] Algunas versiones de medios informativos locales sugieren que la policía municipal y algunos reporteros locales sabían de la masacre desde el 23 de agosto; incluso se sugiere la captura de fotografías sin que alguna autoridad resguardara la zona del crimen. La tesis de Concepción Peralta recoge esos testimonios y plantea muchas interrogantes aún sin resolver. Véase María Concepción Peralta Silverio, *Los 72 migrantes que avergonzaron a México. Ni muertos los pudieron cuidar*, tesis de Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

[58] Secretaría de Marina, "Comunicado de Prensa 216/2010, Personal de la Armada de México descubre rancho de presuntos delincuentes en San Fernando, Tamaulipas", *op. cit*.

[59] Declaración del sobreviviente ecuatoriano ante el Instituto Nacional de Migración, recopilada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[60] Página web "+de 72", *op. cit*. La tesis de Concepción Peralta, al parecer, fue la primera en recoger y presentar estos argumentos. Véase María Concepción Peralta Silverio, *Los 72 migrantes que avergonzaron a México. Ni muertos los pudieron cuidar, op. cit*., pp. 12-17.

[61] María Concepción Peralta Silverio, *Los 72 migrantes que avergonzaron a México. Ni muertos los pudieron cuidar, op. cit*., p. 10.

[62] Consulado de Estados Unidos en Matamoros, "Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas", *op. cit*.

[63] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[64] Marcela Turati, "La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades", *op. cit*.

[65] Redacción, "Revelan que salvadoreño sobrevivió a la masacre", *op. cit*. También véase: Consulado de Estados Unidos en Matamoros, "Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas", *op. cit*.

[66] Declaración del sobreviviente ecuatoriano a Gama TV, *op. cit.*

[67] Declaración del sobreviviente hondureño ante la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, recopilada el 26 de agosto de 2010 por la Subdirección de Verificación Migratoria. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.

[68] Página web "+de 72", *op. cit.*

[69] "Diligencia de inspección ministerial y levantamiento de cadáveres" del 24 de

agosto de 2010, levantada por el Ministerio Público Investigador del Estado de Tamaulipas. Manuscrito. Expediente de la CNDH sobre San Fernando.
[70] Jesús Aranda, “Buscan más cadáveres en San Fernando; matan al MP que indagaba el caso”, *La Jornada*, 27 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2010/08/27/politica/002n1pol>; consultado el 28 de septiembre de 2016.
[71] *Idem*.
[72] Consulado de Estados Unidos en Matamoros, “Zetas massacre 72 migrants in Tamaulipas”, *op. cit.*
[73] Marcela Turati, “La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades”, *op. cit*.
[74] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*.
[75] Embajada de Estados Unidos en México, “Narcotics Affairs Section Mexico Monthly Report for March 2010”, cable diplomático para la Secretaría de Estado, 16 de agosto de 2010. Desclasificado y publicado por el National Security Archive. Disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB445/docs/20100416.PDF>; consultado el 28 de septiembre de 2016.
[76] Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, “Tarjeta Informativa. Asunto: Policías relacionados con el hallazgo de Cadáveres en las Fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas”, fecha testada. Desclasificado y publicado por el National Security Archive. Disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB499/TarjetaInformativa.pdf>; consultado el 28 de septiembre de 2010.
[77] Department of Homeland Security, “[testado] continuing violence in Northern Mexico Between Gulf Cartel and Los Zetas”, memorándum interno, 25 de marzo de 2010. Disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/mexico/SF-20100325.pdf>; consultado el 28 de septiembre de 2016.
[78] Marcela Turati, “La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades”, *op. cit*.
[79] Stratfor 2011.
[80] Consulado de Estados Unidos en Monterrey, sin título, cable diplomático para la Embajada en México analizando el conflicto entre Zetas y CDG, 3 de septiembre de 2010.
[81] *Idem*.
[82] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*.
[83] Marcela Turati, “La matanza de San Fernando: inconsistencias y falsedades”, *op. cit*.
[84] *Idem*.

[85] Samuel Logan, “A profile of Los Zetas: Mexico’s Second Most Powerful Drug Cartel”, *CTC Sentinel*, vol. 5, núm. 2, 2012, pp. 5-7.

Capítulo 4

SAN FERNANDO. EL ESTADO MEXICANO

Delia Sánchez del Ángel

Los dos casos estudiados en la presente investigación han ocasionado y siguen generando terribles afectaciones a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general. Lamentablemente, a pesar del tiempo que ha pasado y a la gravedad de lo sucedido, la verdad de los hechos aún no ha sido esclarecida; todos los responsables no han sido identificados, procesados ni sancionados; las víctimas y sus familias no han recibido una reparación integral del daño, y se les han violado derechos del debido proceso. Este capítulo analizará las acciones y omisiones del Estado mexicano en el caso de las 72 personas migrantes, identificando el cumplimiento o incumplimiento de las diversas autoridades involucradas con las obligaciones en materia de derechos humanos.

Antes de proceder es importante destacar que las personas en México gozan no solamente de los derechos humanos y garantías que se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también de aquéllos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.[1] A su vez, de forma expresa el texto constitucional indica que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia (*interpretación conforme*), buscando favorecer en todo momento a las personas con la protección más amplia (*principio pro persona*). Por otra parte, es importante destacar que la Constitución establece que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de **promover, respetar, proteger y garantizar** los derechos humanos de conformidad con los principios de **universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**",[2] y que eso implica que el Estado debe "**prevenir, investigar, sancionar y reparar** las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley" .[3]

Desde su sentencia en el emblemático caso de *Velásquez Rodríguez*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los Estados tienen "el deber jurídico de **prevenir**, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de **investigar** seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las **sanciones** pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada **reparación**".[4] Estas obligaciones también han sido identificadas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.[5]

El análisis que procede tomará como base las obligaciones derivadas de la Constitución, las leyes mexicanas y diversos tratados internacionales suscritos por México. Asimismo, utilizará como sustento la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, así como información y recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de Naciones Unidas creados en virtud de tratados y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.[6]

La masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas

En el capítulo anterior[7] fue descrita en detalle la información existente en torno al hallazgo de los cadáveres de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Como puede apreciarse, las interrogantes sobre lo sucedido siguen siendo muchas y el Estado mexicano —a pesar de algunos esfuerzos realizados en este sentido— aún no cumple de forma adecuada con sus obligaciones en materia de prevención, investigación, sanción y reparación integral.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El 18 de marzo de 2016, se solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que realizará las gestiones necesarias para obtener acceso al expediente completo de la Recomendación 80/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos (CNDH). El 20 de julio de 2016, pudo consultarse una versión pública del expediente en las instalaciones de la CEAV.

La Recomendación 80/2013

El 23 de diciembre de 2013, más de tres años después de que tuviera lugar la masacre de San Fernando, Tamaulipas, la CNDH emitió la Recomendación 80/2013.[8] La CNDH concluyó que, en relación con la privación de la vida de las 72 personas migrantes, se habían cometido violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor.[9] En relación con los atentados contra la vida de los dos migrantes sobrevivientes, se habían violado sus derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, y en el caso de uno de los dos migrantes que sobrevivieron a los hechos, la CNDH indicó que se habían violado también sus derechos a la privacidad y protección de datos de identidad.[10] Las recomendaciones de la CNDH fueron dirigidas al procurador general de la República y al gobernador constitucional del estado de Tamaulipas.

La Recomendación 80/2013 está compuesta de cinco apartados:

a) Hechos. El primer apartado, referente a los hechos, consta de dos párrafos en los que la CNDH indica que el 25 de agosto de 2010 se inició de oficio[11] el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q, después de que se tuviese conocimiento de lo acontecido en San Fernando, Tamaulipas, por la publicación de la nota titulada "Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas"[12] en el portal de internet del periódico *El Universal.* Como resultado de esto, personal de la CNDH fue enviado al lugar de los hechos para llevar a cabo la investigación y se solicitaron informes a diferentes instituciones del Estado mexicano.[13]

b) Evidencias. En este apartado se enumera, y en algunos casos es descrita brevemente, la evidencia recabada y utilizada por la CNDH para elaborar la Recomendación 80/2013. De la lectura de la lista de evidencias[14] —entre las que se encuentran comunicados de prensa, notas periodísticas, acuerdos, actas circunstanciadas, dictámenes médicos y averiguaciones previas

—, se destaca que la CNDH no entró en ningún momento en contacto con las familias de las 72 personas que perdieron la vida. Esto último ha ocasionado la crítica de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes han señalado que la *Recomendación* "no toma en cuenta en ningún momento a los familiares de restos identificados en dicha masacre como víctimas y por lo mismo dicha recomendación no cumple con su cometido de ser parte de la reparación integral del daño para las víctimas".[15]

c) Situación jurídica. La CNDH analiza la información que recabó durante el desarrollo de la investigación, identificando las acciones y omisiones de las diversas autoridades involucradas que fueron contrarias a la normativa nacional e internacional. El análisis de la CNDH se centra en evaluar lo sucedido después de que los cuerpos fueron encontrados. La CNDH analiza si las autoridades involucradas cumplieron o no con los procedimientos adecuados en materia de identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. Debe destacarse que la **CNDH en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión y/o aquiescencia de funcionarios públicos en la matanza**.

d) Observaciones. En este apartado, la CNDH hace un recuento de los hechos y un resumen de las conclusiones a las que llegó después de realizar un análisis lógico jurídico al conjunto de evidencias. La CNDH identifica la violación de los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la procuración de justicia, trato digno, verdad, honor y privacidad, pero **no señala en ningún momento violaciones a los derechos a la vida y a la integridad**. Asimismo, en esta sección destaca el énfasis que la CNDH hace en los "**obstáculos y dilación en la colaboración por parte de la Procuraduría General de República**, en el sentido de haberse impedido a esta Comisión Nacional el acceso inmediato a la información que obraba en su poder, indispensable para conocer la verdad histórica de los hechos".[16]

e) Recomendaciones. La CNDH emite siete recomendaciones dirigidas al procurador general de la República y siete recomendaciones dirigidas al gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. Su cumplimiento será analizado a continuación.

Cumplimiento de la Recomendación 80/2013

En la sección sobre seguimiento de recomendaciones de la página web de la CNDH, existe un buscador en el que se determina el estado y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido la CNDH.[17] La Recomendación 80/2013 se encuentra en estado de "en trámite" y con un nivel de cumplimiento de "Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial", en relación tanto con las recomendaciones dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR) como al gobierno del Estado de Tamaulipas.[18]

Para junio de 2016, de acuerdo con el *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales* de la CNDH (en adelante *Informe Especial*), de los siete puntos recomendatorios dirigidos a la PGR, tres aparecen como "en trámite" y han sido cumplidos parcialmente.[19] Consecuentemente, se infiere que los otros cuatro ya se cumplieron en su totalidad.[20] En cuanto al gobierno del Estado de Tamaulipas, en dos puntos recomendatorios se presentan pruebas de cumplimiento parcial.[21] Consecuentemente, esto implica la existencia de cumplimiento parcial de cinco puntos recomendatorios y el total de los cinco restantes, es decir, un cumplimiento total de 64.25% de la *Recomendación*.

De acuerdo con la información anterior, puede decirse que las autoridades han realizado diversas acciones para dar cumplimiento a los diversos puntos recomendatorios. Lamentablemente, las respuestas proporcionadas por las autoridades como pruebas de cumplimiento indican que los criterios utilizados por la CNDH para determinar que un punto recomendatorio ha sido cumplido de forma total o parcial no son los adecuados, pues no permiten evaluar un cumplimiento efectivo. Asimismo, debe señalarse que la forma en como la CNDH redacta recomendaciones limita los posibles efectos

positivos que pudiera llegar a tener, por ejemplo, en materia de reparación integral del daño, y es utilizada por las autoridades como una excusa para no tomar medidas verdaderamente efectivas con el fin de dar cumplimiento al sentido de la *Recomendación*.

Las siguientes dos tablas contienen los puntos recomendatorios emitidos por la CNDH en la Recomendación 80/2013 y su estado de cumplimiento; en las observaciones se indican las pruebas de cumplimiento presentadas por las autoridades y los problemas que presentan.

Procuraduría General de la República

Punto recomendatorio	Texto del punto recomendatorio	Estado del punto recomendatorio	Observaciones
1	*Se instruya a quien corresponda*, a efectos de que se tomen las medidas necesarias *para que los agentes de esa Institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, ejerciendo sus atribuciones como garantes de tales derechos y asegurando que no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de éstos.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento parcial	La PGR indicó que se habían girado oficios instruyendo a los titulares de diversas subprocuradurías para atender lo solicitado por la CNDH. La PGR le hizo saber a la CNDH "que la interpretación y el alcance de cada punto recomendatorio es de aplicación estricta y no puede ampliarse ni modificarse su contenido". Por esa razón, consideran que no existe una obligación de implementar mecanismos que permitan medir la actuación ministerial, y que con los oficios emitidos ya dieron cumplimiento a lo requerido. El texto del punto recomendatorio únicamente señala: "instruya a quien corresponda" y eso podría llegar a implicar la mera

			emisión de oficios. Cabe destacar, sin embargo, que la frase indica “a efectos de que se tomen las medidas necesarias”, lo que debería interpretarse en el sentido de que las instrucciones deben tener como resultado la implementación de las medidas. Para que la CNDH evalúe si las medidas implementadas fueron las necesarias, deberían generarse mecanismos para determinar su efectividad. Por otra parte, debe mencionarse que al señalar la *Recomendación* que la PGR observe *“a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”*, esto implica que la PGR debe respetar los derechos de las víctimas durante la investigación y el proceso penal. Como se mencionará más adelante, la PGR no ha garantizado la participación de las víctimas ni las ha mantenido informadas sobre el desarrollo de la investigación y el proceso penal, derechos establecidos en el artículo 20, C, constitucional; artículos 7, 12, 22, entre otros, de la Ley General de Víctimas; y en diversos instrumentos internacionales. Consiguientemente, en sus acciones de seguimiento, la CNDH debería solicitar pruebas a la PGR sobre el

			cumplimiento en este sentido de la Recomendación 80/2013.
2	*Se instruya a los agentes del Ministerio Público y peritos de esa Procuraduría sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a efectos de que reciban la capacitación necesaria para que en la integración de averiguaciones previas en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	La PGR informó a la CNDH que desde antes de la emisión de la Recomendación 80/2013 y que también después de su emisión se han llevado a cabo cursos de capacitación en materia de identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procedimiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos; se han instrumentado instructivos de trabajo, guías metodológicas de intervención pericial, y se aplicaba la Guía de Manejo de Cadáveres en Situación de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud; asimismo, indicó que se han elaborado protocolos de actuación pericial y un protocolo para el manejo de identificación de cadáveres. Señaló también que, a raíz de los hechos, se creó un Centro Médico Forense Federal. Las pruebas de cumplimiento proporcionadas por la PGR dan muestra de los esfuerzos realizados por la institución para capacitar a su personal en los temas objeto del punto

			recomendatorio. La efectividad de la capacitación y la aplicación adecuada de los protocolos debería ser también objeto de estudio por parte de la CNDH.
3	*Se practiquen todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y adoptar las medidas necesarias para que en un plazo razonable se concluya la AP6.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento parcial	La PGR pretende dar cumplimiento a la tercera recomendación girando múltiples oficios e instrucciones a diversas instancias y argumentando que “el agente del Ministerio Público de la Federación responsable de la integración de la averiguación previa ha realizado diversas diligencias tendientes a la recolección de elementos probatorios necesarios para el ejercicio de la acción penal”, así como su solicitud de colaboración con instancias en El Salvador, Honduras, Ecuador y Guatemala, para localización y notificación a los familiares de las víctimas. El derecho a la verdad no es entendido ni por la PGR ni por la CNDH, quien lo da por cumplido parcialmente. Lo descrito no abona ni en calidad ni en tiempo al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.
4	*Se instruya a quien corresponda para que los servidores públicos encargados del manejo del Banco Nacional de Datos Genéticos actúen en coordinación con las*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	De acuerdo con la PGR, antes de la emisión de la Recomendación 80/2013, ya habían celebrado diversos convenios de colaboración nacionales e internacionales, que

	instancias competentes, para alimentar esta base de datos y enriquecerla mediante la comunicación con los diversos países de origen de la migración hacia México, de manera que la actuación del Estado mexicano provea a la identificación de las personas migrantes víctimas de la vulneración de los derechos humanos en forma sistemática y coordinada.		buscan permitir el intercambio de perfiles genéticos. Informó que, a partir del año 2013, se han tomado las acciones necesarias sobre la creación del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas, en el que participa la PGR, la Secretaría de Gobernación, el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros. La PGR informó también sobre la creación de la Comisión Forense (que es descrita con mayor detalle en el apartado relativo a la PGR). Deben reconocerse los esfuerzos que en la materia ha realizado la PGR; sin embargo, para que el objeto del punto recomendatorio se cumpla de forma efectiva, aún es necesario que terminen de concretarse muchos de los compromisos asumidos por diversas entidades federativas y que se ejecuten adecuadamente los convenios nacionales e internacionales a los que se han llegado. Asimismo, de acuerdo con la FJEDD, no tienen conocimiento sobre la existencia del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas que menciona la PGR y tampoco existe claridad sobre el banco genético de la PGR, pues puede determinarse cuántas muestras son de homicidios o de restos

			encontrados, y cuántas provienen de familias de personas desaparecidas.
5	*Se giren instrucciones a quien corresponda, a efectos de que se realicen acciones de coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recabar información respecto de la comisión y combate del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes, a fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	En materia de garantías de no repetición, la CNDH solicita la elaboración de un diagnóstico para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes; se da por cumplida la recomendación con el simple hecho de "analizar la propuesta de conformar Fiscalías Especializadas de Atención al Migrante", incorporar "a la agenda temática de las Reuniones de Zona de los Titulares de las Unidades Especializadas en el Combate al Delito del Secuestro" la realización del estudio solicitado, la manifestación del "compromiso de atender, como hasta la fecha lo han hecho, los casos que se susciten, independientemente de la calidad migratoria de las víctimas", "acordaron estudiar la posibilidad de incorporar a los protocolos de actuación, un apartado de atención a migrantes". Al igual que en el punto anterior, la FJEDD —representante de varías víctimas indirectas y una organización de la sociedad civil clave en este tema— reporta no tener conocimiento de estas

			acciones. Respecto a cifras, sólo se manifiestan ideas de líneas de trabajo y la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que tendrá que responder a esta recomendación. De nuevo, el Estado mexicano considera que la creación de leyes e instituciones es suficiente para garantizar que los problemas desaparecerán.
6	*Se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y trámite de la denuncia que se promueva ante la Visitaduría General en esa Procuraduría, para que se inicie una investigación administrativa respecto de los servidores públicos de esa institución que omitieron dictar medidas tendentes a la protección de los datos de identidad de V73 y sus familiares, así como respecto de la responsabilidad por la dilación en la identificación de los cuerpos pendientes.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento parcial	De acuerdo con la última información presentada el 16 de septiembre de 2014 por la PGR, ya se había dado inicio al expediente de investigación en relación con la conducta de los servidores públicos. El 19 de septiembre de 2014, la CNDH solicitó a la PGR la actualización sobre la información que había presentado sobre este y otros puntos recomendatorios. Dado que aún no se tiene información sobre la conclusión de la investigación, es necesario continuar dando seguimiento a este punto recomendatorio.
7	*Se instruya, a quien corresponda, para que, en lo subsecuente, los agentes del Ministerio Público de la Federación atiendan, en tiempo y forma, las solicitudes de información que esta Comisión Nacional formule con motivo de las*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	La PGR informó que se habían enviado oficios al personal ministerial y que con esas acciones estaba dando cumplimiento al punto recomendatorio de “instruir”. A pesar de que la PGR anexó copia u original de los oficios enviados, la CNDH notó que en algunos

	investigaciones que lleva a cabo por presuntas violaciones a los derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las evidencias que les sean solicitadas.		casos no viene la firma autógrafa de los servidores porque se encontraban de "vacaciones" o de "comisión". Éste es otro ejemplo en el que la redacción de la recomendación limita sus efectos, pues con el simple envío de oficios se da cumplimiento a un punto recomendatorio y no es necesario tomar medidas para asegurar su ejecución efectiva.

Gobierno del Estado de Tamaulipas

1	*Se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen las medidas necesarias para que en todos aquellos casos en que los cuerpos de las personas sean enviados a la fosa común, se adopten protocolos de identificación de cadáveres que garanticen a los familiares de las víctimas el conocimiento del destino de sus parientes.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	El gobierno de Tamaulipas informó a la CNDH que se había instruido a la PGJE que diera cumplimiento a los puntos recomendatorios pertinentes en diversas ocasiones. Se informó a la CNDH que se había solicitado a la PGJE pruebas de la publicación de una circular en el *Periódico Oficial* mediante la cual se hace de conocimiento a todo el personal de la PGJE para que se adopte el protocolo requerido en la Recomendación 80/2013. La información indica que el gobierno de Tamaulipas ha tenido intenciones, pero que éstas no se han concretado años después de emitida la *Recomendación*.
2	*Se instruya a quien corresponda, para que se expidan protocolos o directivas de identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como de procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, de conformidad con los estándares internacionales aceptados, con objeto de prevenir en el futuro*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	En materia de garantías de no repetición, la CNDH solicita la elaboración de un diagnóstico para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes; se da por cumplida la recomendación con el simple hecho de "analizar la propuesta de conformar Fiscalías Especializadas de Atención al Migrante", incorporar "a la agenda temática de las Reuniones de Zona de los Titulares de las Unidades Especializadas en el Combate al Delito del Secuestro" la realización del estudio

	violaciones como las advertidas en el caso que nos ocupa.		solicitado, la manifestación del "compromiso de atender, como hasta la fecha lo han hecho, los casos que se susciten, independientemente de la calidad migratoria de las víctimas"; "acordaron estudiar la posibilidad de incorporar a los protocolos de actuación, un apartado de atención a migrantes". Respecto a cifras, sólo se manifiestan ideas de líneas de trabajo y la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, que tendrá que responder a esta recomendación. De nuevo, el Estado mexicano considera que la creación de leyes e instituciones es suficiente como para garantizar que las problemáticas desaparecerán.
3	*Se instruya a los agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a efectos de que esos servidores públicos reciban la capacitación necesaria para que en la integración de averiguaciones previas en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	Informó sobre la implementación de los protocolos respectivos, de la aplicación de diversos exámenes y pruebas periciales en los cadáveres y/o restos humanos no identificados, o de muerte violenta. Señaló que se habían enviado diversos oficios instruyendo que deberían aplicarse los protocolos antes mencionados. El gobierno de Tamaulipas ha cumplido con instruir; sin embargo, es necesario que la CNDH evalúe si esto ha generado que efectivamente los servidores públicos reciban la capacitación necesaria.
4	*Se instruya al procurador general de Justicia de esa entidad federativa para que,*	Aceptado, con pruebas de	El gobierno de Tamaulipas informó que el 28 de noviembre de 2014 se había publicado en el *Diario Oficial de la*

	en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscriba, de inmediato, con la Procuraduría General de la República, el convenio de colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito.	cumplimiento total	*Federación* el *Convenio de Colaboración para la Homologación de Criterios para la Regulación e Instrumentación de la Cadena de Custodia de los Indicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso y de los Instrumentos, Objetos o Productos del Delito,* suscrito por el procurador general de la República con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
5	*Se instruya al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de la entidad, a efectos de que se realicen acciones de coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendentes a recabar información respecto de la comisión y combate del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes, para generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento parcial	El gobierno de Tamaulipas cumple parcialmente, según la CNDH, las recomendaciones para garantizar la no repetición mediante “juntas de coordinación para la implementación de las bases de operaciones mixtas”, “recorridos de seguridad y vigilancia en el tramo carretero” y “revisión aleatoria a diferentes líneas de transportes de pasajeros”. A estas medidas, insuficientes para lo que se solicita, agregan participación en foros y capacitación. Las respuestas del gobierno de Tamaulipas no indican que se estén tomando medidas para generar el diagnóstico mencionado en el punto recomendatorio.
6	*Se giren instrucciones al secretario de Seguridad Pública del estado, a efectos de que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de San Fernando, y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se intensifiquen*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento parcial	El gobierno de Tamaulipas informó sobre la realización de juntas de coordinación con los presidentes municipales de Cruillas, Burgos, Méndez y San Fernando, así como con representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal, para la implementación de las Bases de Operación Mixtas; la realización de recorridos de seguridad y vigilancia en el tramo carretero que comprende del

	las acciones de vigilancia en cualesquiera de las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, a fin de evitar que resulten víctimas de abusos o de conductas delictivas.		entronque Reynosa-Matamoros al punto Rayones, y la revisión aleatoria a diferentes líneas de transporte de pasajeros que circulan por el municipio con el fin de detectar anomalías o recibir quejas por parte de personas migrantes. También informó que coadyuvaban con el Instituto Nacional de Migración en los operativos denominados Programas Paisano. Las respuestas indican que se están intensificando acciones en las rutas migratorias y que se han llevado a cabo acciones de coordinación entre diversas autoridades, pero no presentan información que permita evaluar si están teniendo como resultado evitar abusos o conductas delictivas en contra de las personas migrantes.
7	*Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en la presentación y trámite de la queja que se promueva ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para que se inicie una investigación administrativa respecto de la actuación del personal ministerial y de servicios periciales de esa institución involucrado en los hechos violatorios a los derechos humanos, así como el incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por esta institución nacional.*	Aceptado, con pruebas de cumplimiento total	El gobierno de Tamaulipas informó a la CNDH que se había dado inicio en la Coordinación de Asuntos Internos de la PGJE al procedimiento administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos involucrados, y posteriormente se informó que se había dado inicio a la averiguación previa. El gobierno de Tamaulipas informó las diversas acciones realizadas en el marco de estos dos procesos; sin embargo, a decir de la misma autoridad, en septiembre de 2015 “tanto el procedimiento administrativo que se integra en la Coordinación de Asuntos Internos de la PGJ, como la averiguación previa, tienen un 50% de avance” y en octubre de 2015 señaló que se encontraban en integración. Aunque a tres años de emitida la recomendación no existen avances concretos, puede decirse que la autoridad ha cumplido con la recomendación, pues ha “colaborado ampliamente” para que “se inicie una investigación”.

Juicios de Amparo contra la CNDH

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

(FJEDD), junto con familias de personas migrantes cuyos cuerpos fueron identificados tras la masacre de agosto de 2011, interpusieron en enero de 2014 dos demandas de amparo en contra del proceso de investigación llevado a cabo por la CNDH y la Recomendación 80/2013.[22] Los argumentos esgrimidos en estas demandas fueron:[23]

- La CNDH no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de las 72 personas migrantes; no señaló si se había violado el derecho a la vida ni si el Estado estaba involucrado por acción y/u omisión.
- La CNDH no actuó ni en el procedimiento de investigación ni en la *Recomendación* de acuerdo con el principio *pro personae*, dado que no procuró la alternativa de solución más beneficiosa para las víctimas: una recomendación de la CNDH debe ser tomada como una medida de reparación para las víctimas, pero en este caso la CNDH no tomó en cuenta a las familias de éstas y, de esa forma, las dejó en un estado de completa indefensión y afectando de forma directa sus intereses.
- Las familias de las víctimas no fueron buscadas por la CNDH y, consiguientemente, no fueron escuchadas y no pudieron participar en el proceso de investigación. No se respetó su derecho de acceso a la justicia ni se tomaron en cuenta las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encontraban por no ser nacionales mexicanos.
- La CNDH tiene la facultad para determinar cuándo ciertos hechos son graves violaciones de derechos humanos; sin embargo, no clasificó lo sucedido en este caso como tal. Esta omisión impacta no solamente a las víctimas sino también el derecho a saber de la sociedad.
- Es cuestionable la constitucionalidad del artículo 47 de la Ley de la CNDH, dado que no se prevé un medio de inconformidad en contra de las resoluciones de la CNDH al establecer que “en contra de las Recomendaciones,

acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso".

La CNDH presentó en ambos casos un recurso de inconformidad en contra de la decisión de abrir a trámite.[24] El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la admisión del amparo y declaró infundada la queja interpuesta por la CNDH.[25] Más de dos años después de presentada la demanda, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México determinó, el 13 de septiembre de 2016, lo siguiente: *i)* en referencia a la inconstitucionalidad de la Ley de la CNDH, que "ante la ausencia de conceptos de violación respecto del refrendo y publicación de la norma reclamada, se debe **sobreseer** en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos **61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII**, ambos de la Ley de Amparo"; y *ii*) "en cuanto al procedimiento de investigación y la recomendación 80/2013 de veintitrés de diciembre de dos mil trece se actualiza la causa de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 102, apartado B** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El juez se basó en lo argumentado por la SCJN al resolver los amparos en revisión 448/2015 y 1066/2015. Señaló, entre otros aspectos, que la posibilidad de promover un juicio de amparo en contra de la CNDH "obstaculizaría que […] realice su función de manera ágil y autónoma, pues el posible cumplimiento a la recomendación emitida, en caso de que sea aceptada por la autoridad o servidor, se encontraría sujeta a su posterior validación por parte de los órganos de amparo".[26] Estableció que el artículo 47 de la Ley de la CNDH es constitucional, ya que "por la propia naturaleza de las recomendaciones emitidas por la [CNDH], se advierte la idoneidad de que no respondan a un sistema recursal".[27] Asimismo, indicó que la improcedencia de recursos "no implica la generación de un estado de indefensión, toda vez que acorde al artículo 32 de la Ley de la [CNDH], las recomendaciones que se emitan no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de

defensa que pudiesen corresponder a las personas cuyos derechos fueron afectados, por lo que no interrumpirán los plazos preclusivos de prescripción o caducidad".[28]

Esta decisión limita de muchas maneras las posibilidades que tienen las víctimas en éste y otros casos de exigir el respeto, la protección y garantía de sus derechos humanos. Asimismo, justificándose en el respeto a la autonomía de la CNDH, las personas no tienen acceso a recursos por la vía judicial incluso ante la existencia de violaciones a derechos humanos como el del debido proceso. A pesar de que las recomendaciones de la CNDH no tienen un carácter vinculante, si sus procesos de investigación y recomendaciones son inadecuados sí tienen un efecto nocivo. Un claro ejemplo de ello son las consecuencias que han generado para las víctimas y la sociedad en general el que la CNDH no haya clasificado este caso como una grave violación de derechos humanos, pues ha limitado el acceso a la información sobre la averiguación previa.

- *Intimidación por parte de personal de la CNDH a las familias de las 72 personas migrantes*

Después de que fueron interpuestas las demandas de amparo, algunas familias reportaron haber sido intimidadas por personal de la CNDH en sus comunidades. De acuerdo con la FJEDD, personal de la CNDH acudió en cuatro ocasiones a los domicilios de las familias intimidándolos para que no continuaran con el amparo y criticando a la organización que los representaba. Los funcionarios públicos les dijeron que ellos eran quienes representaban sus verdaderos intereses, y que las familias no sabían quién era realmente la FJEDD y qué es lo que buscaba. Estas acciones generaron miedo en las familias, quienes por unos momentos pensaron en desistir de las demandas. Por otra parte, en entrevistas con el equipo de la FJEDD señalaron que "la CNDH no litigó como una institución que respeta y garantiza los derechos humanos, sino como un despacho particular, sin velar en todo momento por los derechos de las familias".[29]

- *Transparencia y acceso a la información del expediente de la*

La FJEDD nos informó que durante el proceso del amparo, aunque el juzgado dio inicialmente la autorización para que pudieran revisar el contenido íntegro del expediente de la investigación realizada por la CNDH y obtener copias, la CNDH interpuso un recurso oponiéndose a ello.[30] El Tribunal Colegiado determinó que las víctimas solamente podrían tener acceso a una versión pública del expediente a pesar de ser víctimas. Por esa razón, las copias entregadas no permiten una lectura adecuada del expediente y, consiguientemente, no puede entenderse la investigación realizada por la CNDH.[31] Los derechos de acceso a la información y a la verdad de las víctimas no se han respetado.

La reapertura de la investigación

El 19 de marzo de 2014, más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentaron una solicitud a senadores de diferentes partidos políticos para que citaran a comparecer públicamente al entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, por "violaciones graves a derechos humanos y omisiones en el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando y restos cremados de fosas clandestinas de San Fernando".[32] Si bien no se logró una comparecencia, el 20 de mayo de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Senado sostuvo una reunión de trabajo con el ombudsman, algo sin precedentes, pues no se tiene conocimiento de otro momento en el que un titular de la CNDH haya sido citado para rendir cuentas sobre su desempeño en casos concretos.

En esta reunión, Plascencia fue fuertemente criticado por algunos senadores, principalmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT). Ante los cuestionamientos directos sobre por qué no había incluido a las víctimas como parte del procedimiento de investigación y en la *Recomendación*, Plascencia indicó que se había intentado localizar a las familias, pero que no había sido posible porque "ninguna de las víctimas traía identificaciones que permitieran reconocerlos fácilmente".[33] Manifestó que el expediente sería reabierto y este proceso estaría a

cargo de la Sexta Visitaduría General, por lo que se buscaría y escucharía a todas las víctimas.[34] Añadió que el sexto visitador de la CNDH ya se había trasladado a Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, y que habían entrevistado a cinco familiares y a los dos sobrevivientes.[35]

El proceso pasó de haber estado a cargo de la Quinta Visitaduría General —que es responsable del Programa de Atención a Migrantes— a la Sexta Visitaduría General, como una forma de demostrar la importancia y el interés por el tema, pues esta última se encarga de los casos relacionados con la facultad de la CNDH de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. A pesar de ello, a más de dos años de la reapertura de la investigación, el caso no ha sido aún clasificado como grave violación a los derechos humanos y no existe información sobre lo que haya sucedido en este nuevo proceso. De acuerdo con la FJEDD, a pesar de reuniones celebradas en 2016 con el actual titular, Luis Raúl González Pérez, no ha habido un acercamiento con las víctimas, nada se sabe del nuevo expediente iniciado en la Sexta Visitaduría y la CNDH continúa litigando en contra de las víctimas en los tribunales, como se señaló en el apartado anterior.

El 15 de julio de 2016, se solicitó a la CEAV que realizara las gestiones necesarias para poder tener acceso a lo actuado hasta la fecha por la CNDH en relación con la reapertura —anunciada en mayo de 2014— del expediente de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. La CEAV solicitó esta información a la CNDH mediante oficio entregado el 8 de agosto de 2016. Hasta la fecha de publicación de este informe, no se ha recibido respuesta.

Consideraciones

En cuanto al proceso de elaboración de la *Recomendación*, es importante reconocer el hecho de que la CNDH decidiera involucrarse de oficio en el caso inmediatamente después de tener conocimiento de lo sucedido. Lamentablemente, a pesar de su rapidez para comenzar a actuar, la emisión de la *Recomendación* fue tardía —más de tres años después de los hechos— y su

contenido, deficiente.

Como se ha evidenciado con las demandas de amparo interpuestas en contra de la CNDH, no existieron esfuerzos por parte de la CNDH para investigar si el Estado fue o no responsable por acción o por omisión en la privación de la libertad y de la vida de las 72 personas migrantes.[36] En la *Recomendación* no se reconoce una violación a los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas y no se analiza si las diversas autoridades del Estado mexicano cumplieron o no con las obligaciones generales de garantía y protección del derecho a la vida.[37]

En relación con lo anterior, es importante destacar que la situación de violencia en contra de migrantes ha sido una situación generalizada desde hace varios años y la matanza de los 72 migrantes no puede considerarse un caso aislado. La misma CNDH publicó en junio de 2009 el *Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, y en febrero de 2011, el Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México*. En el primer informe, detectó que "el secuestro de migrantes es frecuente e incluso cotidiano en diferentes lugares del país", que "los casos de secuestro quedan, en su mayoría, impunes", "el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada", pero "en algunos casos [hay] indicios que sugieren la participación o colusión de autoridades de los tres órdenes de gobierno".[38] Una de las propuestas presentadas en el informe de 2009, dirigida a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue que emprendieran "acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno para dar un impulso decisivo al combate al secuestro de migrantes, incluyendo el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito y procuración de justicia, y el respeto de los derechos humanos".[39]

En el informe publicado por la CNDH en febrero de 2011, seis meses después de la matanza de San Fernando, se señaló que la violencia en contra de las personas migrantes no presentaba una disminución y que los grupos que cometían las violaciones habían especializado y diversificado sus estrategias. La CNDH manifestó

que “no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices de secuestro en perjuicio de la población migrante”. Tamaulipas es identificado por la CNDH como el tercer estado con el mayor número de testimonios de víctimas y testigos de secuestro, y San Fernando, como una de las zonas de alto riesgo para la comisión de secuestros.[40]

La CNDH y las demás instituciones federales, estatales y municipales sabían de la situación cada vez más crítica de las personas migrantes en su cruce por México y no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de actos. La CNDH había señalado las omisiones del Estado mexicano en sus propios informes; sin embargo, en la Recomendación 80/2013 no hace análisis alguno en este sentido. De la lectura de la versión pública del expediente, se aprecia que la CNDH sí recopiló notas de prensa que indicaban esta situación; sin embargo, esto no se ve reflejado en la *Recomendación* ni se detecta un esfuerzo mayor de investigación en este sentido.

Debe recordarse que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida. La CIDH ha manifestado que existe “una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos”, cuando en el momento de los hechos, las autoridades sabían o debían saber de “la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros”.[41] Cuando las autoridades, teniendo conocimiento de este riesgo, no toman “las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas racionalmente, podían esperarse para evitarlos”, surge entonces un incumplimiento de esta obligación.

Otra cuestión que merece ser destacada es el hecho de que la CNDH no clasificó esta situación como un caso de violación grave de derechos humanos, a pesar de tener la facultad para hacerlo.[42] Al no clasificar la *Recomendación* dentro de este tipo de casos, se han generado limitaciones y obstáculos en materia de acceso a la

información, derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, así como en materia de reparaciones. La CNDH estaba ante un caso que reunía los elementos para ser considerado como tal y no lo hizo.

Por otra parte, si bien algunos de los puntos recomendatorios de la Recomendación 80/2013 son relevantes y necesarios, otros son demasiado vagos y su redacción misma da pie a que las autoridades puedan argumentar que han cumplido con ellos por el solo hecho de haber emitido oficios o girado instrucciones, sin que tengan que mostrar pruebas sobre la efectividad de las acciones emprendidas. La CNDH desaprovechó la oportunidad de emitir una recomendación que verdaderamente contribuyera a impulsar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano tiene de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas del caso, y de la población migrante en general. Asimismo, es fundamental que la CNDH replantee su modelo de seguimiento de recomendaciones, pues aceptar oficios como únicas pruebas de cumplimiento, y no buscar que la interpretación de sus puntos recomendatorios sea para el máximo reconocimiento de los derechos humanos, deja a las víctimas en aún mayor indefensión.

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, la CNDH fue absolutamente omisa. De acuerdo con la Ley de la CNDH, en los proyectos de Recomendaciones deben señalarse "las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado".[43] A su vez, de acuerdo con la Ley General de Víctimas (LGV) y con los estándares internacionales en la materia, las víctimas de violaciones de derechos humanos o de la comisión de un delito tienen derecho a recibir una reparación integral que comprenda "medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica".[44] Los 14 puntos recomendatorios de la Recomendación 80/2013 no cumplen adecuadamente con estos objetivos.

La *Recomendación* resalta la existencia de problemas serios en

materia de reparaciones, sobre todo en el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La CNDH también concluye que "la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor, de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades".[45] A pesar de ello, es preocupante que ante violaciones a derechos humanos y violencia en los niveles en que se manifiestan en contra de las personas migrantes, y tantos otros en el país, la CNDH y otras autoridades mexicanas no entiendan de forma adecuada los conceptos de garantías de no repetición y derecho a la verdad. Esta situación genera que las recomendaciones emitidas por la CNDH y las acciones emprendidas por las autoridades para pretender dar cumplimiento a éstas no abonen de forma verdadera y efectiva a generar verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Es fundamental que se establezcan exigencias apegadas a estándares internacionales.

En la Recomendación 80/2013, la CNDH reconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos "ha señalado que el proceso destinado a establecer la verdad requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información, así como de la formación de comisiones investigadoras y la adopción de las medidas necesarias para emprender y completar las investigaciones correspondientes".[46] Más adelante, la CNDH afirma que "se presentaron obstáculos y dilación en la colaboración por parte de la Procuraduría General de República, en el sentido de haberse impedido a esta Comisión Nacional el acceso inmediato a la información que obra en su poder, indispensable para conocer respecto de la verdad histórica de los hechos".[47] Cabe recordar que el derecho a conocer la verdad no se limita a las víctimas y a sus familiares, sino que es un derecho de toda sociedad que experimenta hechos de violencia. Es fundamental la colaboración entre instituciones del Estado mexicano para garantizar el derecho a la verdad en lugar de obstaculizarlo.

La CNDH le pide a la PGR y al gobierno de Tamaulipas que "giren

instrucciones” para coordinarse junto con las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y así “generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes”.[48] Al gobierno de Tamaulipas se le recomienda que, junto con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y con el Ayuntamiento de San Fernando, intensifiquen la vigilancia en las rutas de tránsito de migración y en particular en zonas de alto riesgo.[49] Estos puntos recomendatorios son clasificados como garantías de no repetición por parte de la CNDH.[50]

De acuerdo con el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, las garantías de no repetición tienen un propósito preventivo; se refieren “a una combinación de diversas intervenciones deliberadas que contribuyen a reducir la probabilidad de que se repitan las violaciones”.[51] A su vez, la LGV establece, en su artículo 74, que “las medidas de no repetición son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza”. La CNDH recomienda la “generación de un diagnóstico”, acción que no puede ser considerada una garantía de no repetición. La “intensificación de vigilancia en rutas migratorias”, por otra parte, tampoco puede ser en sí misma una garantía de no repetición, especialmente en un contexto como el que se vive en México, pues, a pesar de que las autoridades indican haber cumplido con esta intensificación, los homicidios, desapariciones y violencia en contra de migrantes continúa.

La CNDH no tomó en cuenta a las familias de las víctimas para la elaboración de la Recomendación 80/2013. Es muy importante que en el proceso que se siga en la reapertura de la investigación, ahora a cargo de la Sexta Visitaduría, se respeten sus derechos y sean escuchadas. En este sentido, de acuerdo con información proporcionada por la FJEDD, el 29 de febrero de 2016 algunas familias de los casos San Fernando I y II sostuvieron una reunión con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. En esa

reunión, se solicitó que la CNDH se allanara en la demanda de amparo, a lo que el ombudsman respondió que se analizaría la petición. Entre otras peticiones, las familias solicitaron el apoyo de la CNDH para que entregaran a la Comisión Forense la información que tienen en el expediente de la Recomendación 80/2013 y así ésta pudiera ser analizada, para que las exhumaciones que han solicitado se realizaran lo más rápido posible y para que se avanzara en el tema de reparaciones. El presidente de la CNDH manifestó que se analizarían las peticiones, pero que tenían todo su apoyo para hacer lo que estaba dentro de su competencia. Siete meses después de la reunión, este compromiso aún no se ha reflejado en acciones. La CNDH debe hacer un esfuerzo para dar una verdadera respuesta a las víctimas.

La Procuraduría General de la República

El 18 de marzo de 2016, se solicitó a la CEAV que realizara las gestiones necesarias para obtener acceso a los expedientes de las diversas autoridades involucradas en el caso, entre ellas la PGR. El 7 de julio de 2016, la directora general de Vinculación Interinstitucional de la CEAV solicitó a la titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR el "expediente completo y las actuaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República en el caso de San Fernando (I), Tamaulipas".[52] Mediante oficio núm. SDHPDSC/UIDPM/1216/2016 de 21 de julio de 2016, la CEAV recibió respuesta a la solicitud:

> La solicitud que respetuosamente nos expone resulta inatendible en virtud de lo establecido por nuestro marco legal tanto en materia penal, sustantiva y adjetiva, como en materia de transparencia.
>
> Primeramente, el artículo 225 fracción XXVIII tipifica como delito cometido por servidores públicos en contra de la administración de justicia, el dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos constancias o información de una investigación que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales, por lo cual el permitir el acceso a tal investigación implicaría una conducta ilícita por parte del personal de la Unidad a mi cargo.
>
> En tal sentido, las constancias a las que solicita acceso esa Comisión por sí, y a nombre de El Colegio de México, son personas jurídicas que no cuentan con

> derecho para acceder a las constancias de la indagatoria, al no contar con la calidad de víctima, ofendido o imputado, en sí mismas cuentan con la calidad de información reservada en su totalidad, además de que cuentan con datos personales plasmados en ellas que cuentan con la calidad de confidenciales.
>
> En efecto, de acuerdo con los artículos 113 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera información reservada aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y que es precisamente la hipótesis aplicable al especie, dado que la investigación de los hechos a los que hace referencia en su oficio sigue abierta y en conocimiento del Ministerio Público.
>
> Asimismo, los artículos 116 y 113 fracción I de tales leyes señalan como información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, los cuales obran en los expedientes a los que se pretende tener acceso.

En la respuesta, se hace mención también al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, haciendo énfasis, entre otros aspectos, a que "la averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados". La PGR continúa escudándose en esta disposición legal para evitar garantizar el derecho a la verdad, tal como lo hizo en el pasado ante las solicitudes de organizaciones de la sociedad civil que han buscado tener acceso a la averiguación previa. Los litigios que la FJEDD y la organización Artículo 19 han llevado a cabo por esta razón serán explicados posteriormente. Éste es un claro ejemplo de las consecuencias que tiene la falta de clasificación de un caso como graves violaciones de derechos humanos, ya que, por ejemplo, la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa está disponible en el sitio web de la PGR y cualquiera puede acceder a ella.[53]

Ante la negativa de la PGR, no se tuvo acceso a la información contenida en la averiguación previa del caso y el análisis que se realiza a continuación está basado únicamente en información

publicada en medios de comunicación, informes de organizaciones de la sociedad civil, así como información publicada por diversas autoridades.[54]

La averiguación previa

De acuerdo con la información contenida en la Recomendación 80/2013 de la CNDH, en la Subdelegación de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República en Matamoros, Tamaulipas, los días 23 y 24 de agosto de 2010 se dio inicio a una averiguación previa por el delito de homicidio, y a otra por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.[55] Posteriormente, estas dos averiguaciones previas se acumularon en una sola. A su vez, el 24 de agosto de 2010, el agente del Ministerio Público Investigador de San Fernando inició una averiguación previa contra quien o quienes resultaran responsables por la comisión del delito de homicidio y el que resultare.[56] Unos días después, el 29 de agosto de 2010, la Procuraduría General de la República decidió ejercer su facultad de atracción sobre esta averiguación previa.[57]

La averiguación previa iniciada por la PGR comprende los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corrupción de menores de 18 años, homicidio con modificativa agravante de ventaja, en grado de tentativa y homicidio calificado en contra de ٧٢ personas de origen extranjero.[58] El 6 de septiembre de 2010, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGR radicó la averiguación previa y ésta fue consignada el 13 de septiembre de 2010 ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas, y se ejercitó acción penal contra ocho personas.[59]

Entre las acciones emprendidas por la PGR, se encuentra la publicación, el 31 de enero de 2011, del Acuerdo Específico A/009/11 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente en la identificación, localización, detención o aprehensión de los sujetos que planearon y ejecutaron

el multihomicidio de 72 personas de origen extranjero, cometido en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y los delitos que resulten.[60] Las recompensas ofrecidas por la PGR son de hasta ocho millones de pesos por Román Rincones, *El Coyote*, y Juvenal Burciaga, *El Alacrán*, y hasta de cinco millones de pesos por José Guadalupe Reyes Rivera, *El Sasi*.[61]

La detención de diversas personas presuntamente vinculadas a la masacre de las 72 personas migrantes en 2010 ha sido documentada por diversos medios de comunicación, así como en comunicados de prensa emitidos por la PGR y la Secretaría de Marina.[62] A pesar de ello, es importante destacar que el estado de los procesos seguidos en contra de las personas detenidas es incierto y existen varias interrogantes: ¿continúan en prisión? ¿Existen sentencias dictadas en su contra? Asimismo, las mismas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias de las 72 personas migrantes han indicado su preocupación en relación con los procesos penales que se han seguido en contra de las partes imputadas, pues se han mantenido en la opacidad y no existe información sobre si fueron sujetos de tortura con el objetivo de inculparlos.[63]

La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes

El 18 de diciembre de 2015 fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización*.[64] De acuerdo con el considerando del acuerdo, se tomó la decisión de crear la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para dar respuesta a las recomendaciones que en ese sentido habían realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.[65]

La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes está adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Esta Unidad es

> competente para facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes, con estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables, además de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas.[66]

Desde febrero de 2016, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes se encarga de la averiguación previa de la masacre de las 72 personas migrantes. Se espera que la Unidad cumpla adecuadamente con sus funciones, generando avances en las investigaciones y respetando en todo momento los derechos de las víctimas. Preocupa el hecho mencionado por la FJEDD, respecto de que los recursos humanos y materiales son aún muy limitados. Su fortalecimiento en estos rubros, así como la elección correcta del personal que ahí laborará, es fundamental para garantizar investigaciones efectivas.

Debe señalarse que, en marzo de 2016, la PGR sostuvo una reunión con algunas familias de las víctimas y les dio un informe de tan sólo 10 minutos sobre la investigación. Ante la pobre explicación que recibieron, las familias se retiraron y exigieron una reunión con la procuradora Arely Gómez González,[67] ya que el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos, tampoco estuvo presente en la reunión, a pesar de que se había comprometido a estarlo. Después de la reunión, la PGR se comprometió a estar en contacto cercano y constante con las familias para darles un informe exhaustivo sobre la investigación; sin embargo, más de seis meses después de la reunión aún no lo habían hecho.[68]

Problemas en la identificación de restos

A pesar de que el 29 de agosto de 2010, la PGR ejerció su facultad de atracción sobre la averiguación previa iniciada por el Ministerio Público Investigador de San Fernando,[69] la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET) tuvo a su cargo ciertos procesos en los que se violaron los derechos humanos de las

víctimas, principalmente vinculados al manejo e identificación inadecuados de restos. Esta situación fue documentada por la CNDH y plasmada en la Recomendación 80/2013.

De acuerdo con la *Recomendación*, el personal de la PGJET fue omiso, desde el levantamiento de los cuerpos de las 72 personas, "en preservar adecuadamente el lugar de los hechos, en reunir los elementos e indicios que deban ser investigados o recabados, en efectuar las acciones de investigación para la acreditación del cuerpo del delito y en realizar las diligencias adecuadas, a fin de brindar un trato digno y de respeto a los cadáveres hallados".[70] Asimismo, debe destacarse que agentes del Ministerio Público de la PGJET hicieron la entrega de 16 cuerpos al representante del Consulado de Honduras sin que existiera constancia de que se hubiesen agotado todas las diligencias necesarias para lograr la plena e irrefutable identificación de los cadáveres.[71] Uno de los más graves errores que se cometieron durante estos procesos fue el de la **entrega equivocada de restos**: entre los cuerpos repatriados a Honduras se encontraba el cuerpo de una víctima de nacionalidad brasileña.[72]

La Recomendación 80/2013 no señala otras de las irregularidades que ocurrieron durante la entrega de restos y no refleja las terribles afectaciones que estas situaciones tuvieron y siguen teniendo en las familias de las víctimas. Existe información que indica que, poco después de que la PGJET realizara las autopsias, el 1 de septiembre de 2010, los restos de 16 migrantes hondureños fueron entregados al consulado de Honduras.[73] De acuerdo con la Recomendación 80/2013, para ese día solamente se habían identificado los cuerpos de 14 hondureños, y sigue sin estar claro a quiénes correspondían los otros dos cuerpos. Además, no se sabe cómo realizaron la identificación en tan poco tiempo: una semana no es suficiente tiempo para realizar pruebas de ADN y obtener los resultados. Asimismo, aunque algunos llevaban identificaciones, no se asentó qué pertenencias traía cada cuerpo; la cal con la que fueron rociados la mayoría de los cuerpos destruyó los rasgos.[74]

Es importante destacar que las autoridades hondureñas y las guatemaltecas ordenaron a las familias no abrir los ataúdes por

cuestiones sanitarias, y les indicaron que debían confiar en que recibían el cuerpo correcto, aunque no les presentaron pruebas sobre el proceso de identificación.[75] Las familias de Guatemala y El Salvador han indicado que había militares vigilando que nadie abriera los féretros. No todas las familias acataron las órdenes; de los 16 cuerpos trasladados a Honduras, únicamente 12 fueron aceptados por las familias. Cuatro cuerpos fueron rechazados porque las familias no reconocieron los restos que les entregaron.[76]

El cuerpo de la víctima brasileña fue repatriado con el nombre de una de las víctimas hondureñas.[77] La familia del brasileño indica que, en lugar de los restos de su familiar, el gobierno mexicano le entregó un ataúd lleno de arcilla y hasta la fecha no sabían en dónde fue enterrado su familiar.[78] Por otra parte, la madre de una de las víctimas hondureñas continúa esperando —más de seis años después de los hechos— los restos de su hijo, pues aunque recibió una llamada del gobierno mexicano en la que le informaron que su hijo había sido identificado entre los 72 cadáveres, el ataúd no llegó.[79]

En el caso de una madre salvadoreña, recibió el cuerpo de su hija el 5 de septiembre de 2010 y al día siguiente le dio sepultura. Antes de eso, la llevaron a la Procuraduría de su país para tomarle muestras de ADN y tan sólo unas horas después le avisaron que habían identificado a su hija. Ella manifiesta siempre haber tenido dudas sobre el proceso de identificación, pues nunca le dijeron cuál fue el proceso que se siguió, y tampoco le dieron ropa u objetos encontrados con el cadáver y que ella hubiera podido reconocer como pertenencias de su hija. Hoy en día, sigue exigiendo que se exhume el cuerpo de su hija para repetir los procesos y saber si el cuerpo que enterró fue el de su hija o no.[80]

La Comisión Forense

La situación narrada anteriormente, así como muchos otros incidentes en la identificación y entrega de restos, dieron lugar a que diversos comités de familiares de migrantes desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil se dieran la tarea de impulsar la creación de un mecanismo que permitiera generar avances en el

tema.[81] El 22 de agosto de 2013, fue suscrito, y el 4 de septiembre de 2013, fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el *Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, que se llevará a cabo por conducto de una Comisión Forense, que celebran la Procuraduría General de la República, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" A.C., la Asociación Civil Voces Mesoamericanas,; la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. y el Foro Nacional para la Migración en Honduras* (en adelante *Convenio*). Con la publicación de este acuerdo, se concretó la iniciativa que diversas organizaciones de la sociedad habían estado impulsando para posibilitar la identificación de los restos de personas migrantes, dada la desconfianza de los procesos de identifícación,[82] la victimización causada por parte de los servidores públicos de México y de los países de Centroamérica, y el gran número de obstáculos existentes para lograrlo ante la falta de coordinación entre áreas de las mismas instituciones, entre las instituciones y entre los diferentes países involucrados.[83]

El objeto del *Convenio* es "la identificación y determinación de causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con homicidios de migrantes, 72 localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas; un mínimo de 193 restos localizados entre abril y mayo de 2011 en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y 49 localizados en Cadereyta, Nuevo León, el 14 de mayo de 2012", mediante una Comisión de Expertos Forenses (en adelante Comisión Forense).[84] La Comisión Forense es un equipo de trabajo formado por expertos forenses adscritos a la PGR y expertos forenses independientes (designados por el Equipo Argentino de Antropología Forense) en antropología genética,

patología y medicina, y cualquier otra especialidad forense que sea necesaria.[85]

Las funciones principales de la Comisión Forense son las de llevar a cabo el proceso de identificación de los restos que se encuentran pendientes de identificar, y llevar a cabo un proceso de revisión de la identificación de casos que ya habían sido identificados por la PGR, a petición de las familias.[86] El *Convenio* permite que la información forense que se ha almacenado en bancos forenses conformados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, los Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Centroamérica y organizaciones de la sociedad civil, pueda compararse con los perfiles genéticos y otra información forense que se haya obtenido de los cuerpos localizados, y realizar dictámenes multidisciplinarios que permitan la identificación de los cadáveres.[87] Asimismo, también permite que se haga la revisión de casos que fueron previamente identificados por las instituciones del gobierno mexicano, donde las familias tienen dudas sobre la identidad de los restos identificados.

El 8 de abril de 2014 se firmó una adenda al *Convenio*, que posteriormente fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de octubre de 2014.[88] Mediante esta adenda, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León se adhirieron al *Convenio*,[89] haciendo posible que la Comisión Forense tuviese acceso a las investigaciones y a la investigación forense que estas instituciones tienen en su poder.[90]

La Comisión Forense ha contribuido en la mejora de los procedimientos y la metodología para la identificación de restos, la notificación de las identificaciones a las familias y la entrega de los restos.[91] Por ejemplo, la Comisión Forense suscribió el “Protocolo para la notificación de identificación de restos de personas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León”. Este Protocolo provee una serie de lineamientos para la notificación de identificaciones dirigidos tanto al Ministerio Público como a las familias, en la cual la participación de los peritos expertos que realizan los dictámenes de identificación es más

activa, e incluye un apartado sobre el apoyo psicosocial para las familias en el momento de recibir la notificación de identificación.[92]

Desde la creación de la Comisión Forense se han identificado 53 personas migrantes nacionales de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, y, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, parte de esta iniciativa son "los primeros casos donde las familias de Centro América y México reciben en su país de origen una explicación puntual del procedimiento de identificación por parte de quienes intervinieron en el proceso y una copia del dictamen".[93] A pesar de la importancia de estos avances, estas mismas organizaciones han hecho notar los obstáculos que aún existen para el adecuado funcionamiento de la Comisión Forense. En la notificación y restitución de 11 restos de personas migrantes hondureñas que fueron identificados en Cadereyta, Nuevo León, y en San Fernando I —llevada a cabo del 20 al 25 de julio de 2014—, fue manifiesta la falta de coordinación y comunicación entre México y Honduras. Esta situación resultó en retrasos en la fecha de repatriación y notificación que había sido previamente acordada, así como en dificultades para que las organizaciones de la sociedad civil fueran una parte activa en el proceso.[94]

En febrero de 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron notar al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que la Comisión Forense se enfrentaba particularmente a dos obstáculos que retrasaban las identificaciones: *i)* La Comisión Forense no ha podido contar con las copias completas de los expedientes de la masacre de las 72 personas migrantes y de los hechos de Cadereyta, Nuevo León, a pesar de que los ha solicitado en diversas ocasiones; y *ii)* los servidores públicos que participaban en las sesiones de la Comisión Forense han obstaculizado el acceso a los expedientes, a información valiosa para encontrar a las familias vinculadas a los restos y a otras evidencias.[95]

Una madre de las víctimas directas del caso, por ejemplo, ha pedido que su caso sea revisado por la Comisión Forense. Desgraciadamente, se ha enfrentado a un gran número de obstáculos para que esto suceda, desde el hecho de que no se le

permitía a la Comisión Forense el acceso al expediente, así como que le digan que no es necesario exhumar el cuerpo de su hija, pues cuentan con unas molares del cuerpo que le entregaron y en ella pueden hacerse pruebas. Ante eso, la madre se pregunta, ¿cómo puede saber que esos dientes pertenecen efectivamente al cuerpo que sepultó? Todos estos retrasos perpetúan el dolor y extienden la incertidumbre en la que se encuentra ella y su familia, pues siguen sin saber si el cuerpo que enterró pertenece o no a su hija.

En una entrevista realizada, señaló: "están diciendo que van a hacer la [exhumación] y todo, pero hasta aquí y pues no se ha visto nada claro y yo pues vivo en una incertidumbre de no saber [a] quién tengo acá en el cementerio, […] entonces yo quisiera de que por medio de la Comisión Forense [se] apresuren […] porque es algo de que uno está acabándose en vida".[96] Expresó que le pedía a las autoridades que "hagan todo lo que puedan por los familiares que lo necesitamos, saber la verdad, verdad de todos nuestros casos […] Que estamos en el dolor y lo que queremos es pues que nos ayuden y no sólo con palabras sino con hechos".[97]

Aunque la Comisión Forense sigue realizando su trabajo, los comités de familiares de migrantes y las organizaciones de la sociedad civil participantes han solicitado puntalmente al subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y a la procuradora General de la República, que se amplíe la comisión a otros casos y a los demás estados donde pasan las principales rutas migratorias, a fin de que pueda haber mayores posibilidades de identificación. En un principio, las autoridades señaladas se habían comprometido a hacerlo, pero posteriormente negaron esta posibilidad, sin tener una explicación clara del porqué de esta negativa.[98] Como ha sido señalado por diversos organismos internacionales, es fundamental que la recolección y cruce de información genética se amplíe a nivel nacional y se incluya a los demás países de la región centroamericana.[99] De acuerdo con la información que nos proporcionó la FJEDD, organizaciones y familias seguirán insistiendo, ya que la ampliación de la Comisión Forense representa para ellas

el único espacio de legitimidad para que pueda seguirse avanzando en las identificaciones.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Durante 2011 y 2013, Artículo 19 y la FJEDD presentaron solicitudes de acceso a la información en relación con el caso de la masacre de las 72 personas migrantes.[100] Ambas organizaciones buscaban tener acceso a una versión pública de la averiguación previa por el hecho de tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos. La negativa de la PGR y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a proporcionarles la información las llevó a interponer demandas de amparo que fueron eventualmente atraídas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La solicitud de la FJEDD

El 1 de abril de 2013, la FJEDD presentó dos solicitudes de acceso a la información, una relativa a la identificación y ubicación de los restos implicados en las masacres de San Fernando I, San Fernando II y Cadereyta, y otra en la que pedía acceso a las averiguaciones previas relacionadas con los tres casos. Ante estas solicitudes, la PGR clasificó la información como reservada por 12 años por tratarse de averiguaciones previas.[101] La FJEDD interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, argumentando que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad".[102]

El recurso de revisión fue resuelto el 1 de octubre de 2013 por el Pleno del IFAI, confirmando la reserva de la averiguación previa de la masacre de San Fernando:

> el IFAI no cuenta con las facultades, la aptitud, la pericia, el conocimiento o el personal para investigar y calificar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sin embargo, a partir de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de

> Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), es evidente que bastará la declaración de cualquiera de las autoridades competentes, para que el IFAI proceda a determinar la improcedencia de reserva de las investigaciones de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; lo cual no acontece en el caso que nos ocupa.[103]

De acuerdo con el IFAI, las únicas autoridades competentes para interpretar y calificar determinados hechos como violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad serían la CNDH, las comisiones estatales de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y, eventualmente, el Poder Judicial de la Federación.[104]

La FJEDD promovió un juicio de amparo en contra de la resolución del IFAI. El 16 de diciembre de 2013, la demanda fue admitida por el Juzgado Octavo de Distrito (1371/2013). El 11 de abril de 2014, el juez Fernando Silva García dictó una sentencia innovadora que protegía los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la información y a la verdad. De acuerdo con la sentencia:[105]

i) "El IFAI sí tiene facultades para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos respecto de los hechos consignados en averiguaciones previas". La sentencia indica que estas facultades son para efectos exclusivos de "asumir y ejercer sus propias competencias en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas".

ii) Los migrantes han sido objeto de **violaciones graves** de derechos humanos tal como lo pusieron de manifiesto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, las Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos. Para el juez, se satisfacen los requisitos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la existencia de una violación grave de derechos humanos: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación con la naturaleza de los

hechos afectados; aquiescencia, tolerancia y, en algunos casos, participación importante del Estado. Consecuentemente, consideró "**prima facie que sí existieron violaciones graves a los derechos humanos exclusivamente** para efectos del acceso a la información sobre las averiguaciones previas en relación con los hechos acontecidos en San Fernando, Tamaulipas. y Cadereyta, Nuevo León".

iii) "El Instituto Federal de Acceso a la Información violó el derecho a la debida fundamentación y motivación del acto reclamado, al basar su decisión en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales el cual viola el derecho al acceso a la información".

El Juez Octavo de Distrito concluyó la sentencia señalando:[106]

> que cuando existan *violaciones graves a derechos humanos*, éstas afectan a toda la colectividad, por lo que debe operar una excepción a la restricción de la información de las averiguaciones previas, puesto que la sociedad está interesada en conocer la verdad histórica de los hechos, y exigir la rendición de cuentas para que la investigación sea llevada con la debida diligencia a fin de sancionar y enjuiciar a las responsables, y de esta manera, evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro. […]
>
> Dichos casos de violaciones graves de derechos humanos representan una afectación a toda la sociedad, por lo que sólo con la máxima publicidad se garantiza que los ciudadanos tengan la información sobre lo que de manera indirecta les está afectando.

El amparo se concedió en los siguientes términos: *i)* al establecerse *prima facie* que existieron violaciones graves de derechos humanos para efectos del acceso a la información pública, ese reconocimiento constituía en sí mismo una forma de reparación; *ii)* el Instituto Federal de Derecho a la Información y Protección de Datos dejara sin efectos la resolución de **1 de octubre de 2013** y en su lugar dictara otra y ordenara a la PGR entregar una **versión pública** de las averiguaciones previas solicitadas por la fundación quejosa; y *iii)* el Instituto Federal de Derecho a la Información y Protección de Datos se abstuviera de utilizar como fundamento el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales o cualquier otra norma secundaria de contenido análogo para negar el

acceso a la información de averiguaciones previas sobre violaciones graves de derechos humanos.

En contra de la sentencia de amparo, la PGR, el IFAI y el agente del Ministerio Público de la Federación interpusieron recurso de revisión. Los recursos de revisión fueron admitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo en revisión 661/2014). El 4 de junio de 2014, la PGR solicitó a la SCJN el ejercicio de la facultad de atracción. El 3 de septiembre de 2014, la Primera Sala de la SCJN accedió a la solicitud de la PGR.[107] Dos años después de esta decisión, la SCJN aún no se ha pronunciado en este caso.

La solicitud de Artículo 19

El 6 de diciembre de 2011, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, solicitó a la PGR la versión pública de la averiguación previa del caso de la matanza de los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas. La PGR contestó que la información solicitada se encontraba clasificada como reservada, por lo que se interpuso un recurso de revisión ante el IFAI. El 20 de junio de 2012, el IFAI confirmó la clasificación de reserva de la información que había sido solicitada. Consecuentemente, en octubre de 2011, promovió un recurso de amparo en contra del IFAI. El 11 de febrero de 2013, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal, concediendo el amparo y protección de la justicia federal, "al considerar que el acto reclamado no precisó si la causa de excepción del último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cobraba vigencia en el caso; ni expuso las razones por las cuales no se abordaba el estudio de ese tema".[108] El juez ordenó que se dejara insubsistente la resolución del IFAI y se dictara una nueva.

El 28 de febrero de 2013, el IFAI y la PGR interpusieron recursos de revisión. El 1 de agosto de 2013, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia confirmó la sentencia recurrida. El 4 de septiembre de 2013, el IFAI emitió una nueva resolución en la

que confirmó la reserva de la información sobre la versión pública de la averiguación previa, en conformidad con el artículo 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.[109]

El 27 de septiembre de 2013, Ana Cristina Ruelas interpuso una demanda de amparo indirecto en contra de la nueva resolución del IFAI. El 1 de octubre de 2013, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió la demanda de amparo y el 13 de marzo de 2014 dictó sentencia en la que concedía el amparo. El IFAI y la PGR interpusieron recursos de revisión —a los que se adhirió un particular— que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.[110]

El 20 de mayo de 2014, una particular solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción sobre este amparo.[111] Ante la falta de legitimación para realizar esta solicitud, el 18 de junio de 2014, la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas hizo suya la petición de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.[112] El 18 de febrero de 2015, la Primera Sala de la SCJN decidió ejercer la facultad de atracción sobre el asunto.[113] Hasta hoy en día, la SCJN no se ha pronunciado.

El Proyecto Memoria y Verdad

Como puede verse en los párrafos anteriores, el IFAI obstaculizó, más que garantizó, el acceso a la información y el derecho a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Es por esa razón que el anuncio público del 18 de mayo de 2015, en el que se comunicó la instalación del grupo de trabajo[114] del Proyecto Memoria y Verdad coordinado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la organización de la sociedad civil Artículo 19,[115] puede verse como un cambio positivo en este sentido. De acuerdo con la descripción general del proyecto, publicada en la página web del INAI, el objetivo de este proyecto es:

> Desarrollar un espacio para la recuperación y construcción de verdad y

> memoria colectiva acerca de presuntas violaciones graves a los derechos humanos y la probable comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, con el objetivo de promover las garantías de no repetición, el derecho a la verdad, facilitar el acceso a la información a víctimas, instancias investigadoras, órganos jurisdiccionales y/o garantes de los derechos humanos, tribunales y cualquier otro interesado.

En la primera fase de operación, se propone trabajar con los casos Atenco, Acteal, San Fernando I y II, Cadereyta, Tlatlaya, Ayotzinapa, Tlatelolco, El Halconazo y la Guerra Sucia, Campo Algodonero, Aguas Blancas, Apatzingán, Guardería ABC. En una segunda fase, el proyecto buscaría ampliar su acervo y mantenerse como "un espacio vivo que se actualice y fomente la colaboración entre la sociedad y las instituciones públicas". El proyecto implica el desarrollo de un sitio web que presente la siguiente información de forma sistematizada y ordenada: solicitudes de información y las respuestas a éstas; recursos de revisión; cumplimientos a resoluciones; informes de organismos internacionales; informes, análisis, casos e investigaciones públicas de organizaciones de la sociedad civil; información que remitan autoridades en colaboración del proyecto; infografías; material audiovisual; estadísticas, indicadores, análisis cuantitativo; resoluciones y sentencias de tribunales nacionales e internacionales.

De acuerdo con el Anexo 1 de la descripción general del proyecto, el grupo de trabajo quedaría instalado el 18 de mayo de 2015, la primera versión del sitio web estaría disponible el 31 de agosto de 2015, y su difusión y socialización comenzaría el 11 de septiembre de 2015. El documento contiene también una propuesta preliminar de plan de trabajo con diversas actividades y los responsables de cada una.

El Proyecto Memoria y Verdad es una iniciativa que pudiese llegar a ser de gran importancia en materia de acceso a la información y garantía del derecho a la verdad; sin embargo, a más de un año de que se anunció la instalación del grupo de trabajo, no existe información alguna sobre los avances del proyecto y es evidente que las fechas anunciadas inicialmente no se cumplieron. Es importante que el INAI y las demás instituciones que participan en

este proyecto redoblen sus esfuerzos y se coordinen para que iniciativas como ésta se concreten.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juega un papel muy relevante en el caso de las masacres de San Fernando I y II, y Cadereyta, en relación con el derecho de acceso a la información y al reconocimiento de la calidad de víctima de familias de migrantes. En cuanto al derecho de acceso a la información, después de haber aceptado ejercer su facultad de atracción en las solicitudes 370/2014 y 338/2014, la SCJN tendrá que decidir sobre asuntos de extrema relevancia en la materia, tales como la interpretación de la excepción a la regla general de la reserva de la información integrada en averiguaciones previas, determinar qué órganos tienen las facultades para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad en términos de acceso a la información y decidir quién puede solicitar versiones públicas de las averiguaciones previas.

Aunque no relacionado con las familias de las 72 personas migrantes que perdieron la vida en agosto de 2010, es de suma importancia tener presente el rol que la SCJN juega en materia de reconocimiento de la calidad de víctima de familias de personas migrantes. En marzo de 2015, la SCJN reconoció ciertos derechos como víctimas a los familiares de dos migrantes salvadoreños identificados en las fosas clandestinas de San Fernando.

En diciembre de 2012, la Fiscalía General de la República de El Salvador le comunicó a la señora Bertila Parada que los restos de su hijo habían sido identificados entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. La señora Parada solicitó los documentos que acreditaran la identificación, pero no volvió a tener noticias.[116] En febrero de 2013, la Cancillería salvadoreña le informó que, a solicitud de México, se necesitaba que firmara una autorización para que los restos de su hijo fueran cremados y repatriados a El Salvador.[117] De acuerdo con la FJEDD, ante las solicitudes de la señora Bertila Parada, la PGR negó tener información del caso y le negó también todos sus derechos como

víctima.[118] La señora Bertila Parada no tuvo derecho a representantes legales, no pudo ejercer la coadyuvancia ni tener copias del expediente.[119] Por esta razón, el 8 de mayo de 2013, se presentó una demanda de amparo indirecto argumentando que las autoridades mexicanas habían "dejado a las víctimas en un total estado de indefensión en cuanto a la cremación de los cuerpos de sus familias, pues no aclararon en dónde se encuentran" y "la autoridad ministerial violentó sus derechos fundamentales, ya que no se les reconoció su carácter de víctimas".[120]

El 20 de septiembre de 2013, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal dictó sentencia en la que ordenó la suspensión de la orden de cremación; negó el amparo para uno de los casos, pues el cuerpo del hijo de la quejosa no se encontraba entre los cuerpos que se localizaron en la fosa clandestina, y concedió el amparo para el otro caso, ordenando a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que analizara si tenía el carácter de víctima y se le diera acceso al expediente de la averiguación previa.[121] Ante la sentencia, la agente del Ministerio Público de la Federación y las quejosas interpusieron recursos de revisión, admitidos por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El 16 de enero de 2014, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento. Después de que se repuso el procedimiento, el 4 de marzo de 2014, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal dictó una segunda sentencia de amparo en la que otorgó la suspensión de cremación de ambos cuerpos y le concedió el amparo a los dos casos. La SEIDO, así como la FJEDD y las dos víctimas, volvieron a interponer un recurso de revisión sobre esta sentencia.

El 19 de junio de 2014, los familiares víctimas y la FJEDD hicieron valer sus agravios hasta que se realizó la solicitud de atracción de la SCJN. El 23 de octubre de 2014, magistrados del Octavo Tribunal Colegiado solicitaron que la SCJN ejerciera su facultad de atracción porque "en la litis a resolverse en este expediente, concurren características especiales de importancia y trascendencia".

El 4 de febrero de 2015, la Primera Sala de la SCJN ejerció su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión, ya que el asunto reunía las características de importancia y trascendencia, pues permitiría reiterar criterios de la SCJN y así conformar jurisprudencia en el tema de acceso a la información pública contenida en averiguaciones previas; identificar cuándo una persona tiene la calidad de víctima en un asunto determinado y desde qué momento se le debe reconocer dicha calidad, particularmente en lo que se refiere al derecho de acceso al expediente de una averiguación previa; y continuar elaborando precedentes respecto a los alcances del interés legítimo.

El 2 de marzo de 2016, la Primera Sala de la SCJN otorgó el amparo por unanimidad de votos a favor de las dos familias de migrantes salvadoreñas, reconociendo su carácter de víctimas, y la posibilidad de obtener copia del expediente del caso. El proyecto de resolución del ministro Pardo Rebolledo fue aprobado; sin embargo, en atención al voto de cuatro ministros se determinó que se debía "modificar sobre los efectos del mismo para reconocer los derechos de una de las víctimas, y profundizar en el tema del acceso al expediente y la cremación de los restos".[122] El ministro Zaldívar Lelo de Larrea quedó a cargo de la realización del engrose, que hasta la fecha no ha sido publicado.

Debe señalarse que, aunque esta decisión constituye un gran paso, sus alcances aún son limitados. De acuerdo con los representantes de las víctimas, se espera que en el engrose se tomen en cuenta los puntos que han señalado como faltantes: debe reconocerse a las víctimas como migrantes y, con ello, las dificultades de acceso a la justicia desde otro país; debe considerárseles víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de desaparición. Asimismo, señalan que debe considerarse que son víctimas por los hechos ocurridos, sin importar que se haya decidido fraccionar el caso en la jurisdicción federal y local, y que fraccionar un caso "abona a la impunidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas".[123]

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

La Ley General de Víctimas (LGV), publicada el 9 de enero de 2013 en el *Diario Oficial de la Federación*, creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (en adelante Sistema Nacional) como instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, que propone, establece y supervisa las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, así como otras políticas públicas implementadas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.[124] La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es el órgano operativo de este Sistema Nacional, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y goza de autonomía técnica y de gestión.[125]

La LGV fue publicada el 9 de enero de 2013 en el *Diario Oficial de la Federación*, entrando en vigor 30 días después de su publicación.[126] La LGV fue posteriormente reformada mediante decreto el 3 de mayo de 2013.[127] La CEAV quedó debidamente constituida por Decreto Presidencial publicado el 8 de enero de 2014 en el *Diario Oficial de la Federación*; este decreto establece la modificación de "la denominación, objeto, organización y funcionamiento del organismo descentralizado Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos […] para transformarse en el organismo descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas".[128]

La CEAV en el caso de la masacre de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas

A pesar de que la masacre de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrió en agosto de 2010 y la CEAV quedó debidamente constituida hasta enero de 2014, este organismo tiene la obligación y las facultades para actuar en este caso. En los siguientes apartados se identificará la información a la que se tuvo acceso y se hará un análisis con el objetivo de entender cuál ha sido el papel de la CEAV en el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas de la masacre.

El 18 de marzo de 2016, el coordinador del proyecto envió una

carta dirigida al comisionado presidente de la CEAV en la que se solicitaba, entre otra información, el "expediente completo de las actuaciones llevadas a cabo por la CEAV para dar atención a las víctimas del caso". Desde esa fecha, se intercambiaron diversas comunicaciones con la CEAV, lo que permitió que se recibiera información de diferentes áreas de la CEAV, se entrevistara con funcionarios y pudiera consultar algunos expedientes en sus instalaciones. Se agradece especialmente el trabajo y la colaboración de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para lograr esto.

Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto

La Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto tiene un gran número de atribuciones, entre las que destacan realizar la primera entrevista a la víctima cuando ésta acude directamente a las instalaciones de la CEAV; recabar la información exigida en el Formato Único de Declaración (FUD) cuando éste no ha sido llenado con anterioridad; solicitar información complementaria a las instituciones del Sistema Nacional sobre las características del hecho victimizante para así integrar de manera completa la información que se incorporará al registro; identificar las condiciones específicas de la víctima tomando en cuenta el principio de enfoque diferencial, y tomar acciones inmediatas y expeditas para garantizar las medidas de asistencia, protección y atención; y hacer una evaluación interdisciplinaria de las medidas de emergencia que la víctima pudiera requerir con el objeto de hacer las canalizaciones respectivas a las instituciones del Sistema que resulten competentes.[129] Es claro que estas atribuciones son fundamentales para proveer una atención adecuada a las víctimas, pues de su correcta realización dependerá que sus derechos puedan ser garantizados de forma efectiva.

El 31 de marzo de 2016, se sostuvo una primera reunión con Mercedes Peláez Ferrusca, directora general de Atención Inmediata y Primer Contacto. En esa ocasión señaló que nos proporcionaría la información solicitada. Una vez que pasó el tiempo acordado para la entrega de información, se nos informó que no existían en la

Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto expedientes sobre las acciones realizadas por las áreas que la conforman. Esto impidió que pudiera determinarse si la Dirección General había estado o no cumpliendo con las atribuciones que tiene. Además, tampoco fue posible sostener entrevistas con el personal que atendía a las víctimas, ya que, cuando estas entrevistas fueron solicitadas, la CEAV indicó que esas personas habían dejado de trabajar en la institución.

El 6 de mayo de 2016, se tuvo acceso a una tarjeta informativa de fecha 16 de marzo de 2016 firmada por un Enlace de Alta Responsabilidad y dirigida a un Director de Área de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto. Este documento describe las atenciones que el área de trabajo social ha brindado en el caso de las 72 personas migrantes asesinadas. La CEAV informó que el 2 de marzo de 2016 dos trabajadores sociales de la CEAV acudieron a las instalaciones de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para brindarles atención de primer contacto a 16 integrantes de las familias de siete víctimas directas del caso "de los 72 migrantes encontrados en una de las fosas encontradas en el municipio de San Fernando Tamaulipas [*sic*]". El documento resalta que la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto solamente tenía conocimiento de siete víctimas directas y 16 indirectas vinculadas a este caso.[130]

Ante la aparente confusión existente entre los casos de San Fernando I y San Fernando II, se pidió información para aclarar si la información se refería a uno o a otro caso. En respuesta recibida el 13 de septiembre de 2016, la Dirección General de Atención Inmediata y Primer Contacto indicó las acciones realizadas en ambos casos. Confirmaron que en marzo de 2016 acudieron a las instalaciones de Servicios Periciales de la PGR en la Ciudad de México, "a fin de dar respuesta a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 80/2013 y atender a familiares de 7 víctimas directas del caso fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas; 5 víctimas de nacionalidad guatemalteca, 1 víctima de nacionalidad salvadoreña y 1 víctima de nacionalidad brasileña". En esa ocasión, recabaron información para llenar formatos únicos de

declaración.

Registro Nacional de Víctimas

El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) es "el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema [Nacional de Víctimas]".[131] Es la unidad administrativa de la CEAV encargada de "llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal".[132]

El ingreso al RENAVI es un prerrequisito para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstas en la Ley General de Víctimas, por lo que tiene un carácter esencial. Para ingresar al RENAVI, es necesario presentar una solicitud de ingreso —que es totalmente gratuita— ante la CEAV o ante los órganos competentes a nivel local.[133] El ingreso al RENAVI puede solicitarse y tramitarse de forma personal y directa por la víctima, o a través de un representante —que deberá estar inscrito en el padrón de representantes—.[134] De acuerdo con lo observado, la solicitud de ingreso al RENAVI puede hacerse desde diferentes instancias, lo que genera retrasos e inconsistencias, pues cada área maneja criterios de atención diversos.

La solicitud de inscripción no implica que la víctima haya quedado ingresada de oficio al RENAVI,[135] ya que antes será necesario que se haya proporcionado toda la información necesaria[136] y que los hechos ahí asentados sean valorados. La valoración de los hechos no se requiere cuando: *a)* existe una sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente; *b)* existe una determinación de la CNDH o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos; *c)* la víctima fue reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución; *d)* cuando la víctima cuenta con un informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de

protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia, y *e)* cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconoce tal carácter.

En el caso de las víctimas de la masacre de las 72 personas migrantes, la realización de una valoración previa fue innecesaria, ya que fueron reconocidas como víctimas en la Recomendación 80/2013 de la CNDH. De acuerdo con la lista proporcionada, hasta el 30 de mayo de 2016, habían ingresado al RENAVI nueve víctimas directas y 30 víctimas indirectas. Todas estas víctimas son representadas por la FJEDD, la que se ha encargado de llenar los FUD y/o de buscar que el personal de la CEAV recabe la información necesaria. Consiguientemente, en este caso solamente se ha logrado el ingreso en el RENAVI de las víctimas que reciben acompañamiento por la FJEDD.

De la lectura de los expedientes del RENAVI a los que se tuvo acceso en mayo de 2016, se detectó que carecían en la mayoría de las ocasiones de información detallada y actualizada. Si bien en este caso no es necesaria una valoración previa para lograr el ingreso al RENAVI, la CEAV tiene la obligación de recabar la información necesaria que le permita entender las circunstancias en torno al hecho victimizante y la caracterización socioeconómico de las víctimas. Sin esta información, es imposible otorgar una atención adecuada a las víctimas.

Entre la información que debe estar sistematizada en el RENAVI[137] y que no se aprecia en los expedientes, se encuentra la actualización del relato del hecho victimizante con los avances en la investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos, así como la descripción del daño sufrido. Por ejemplo, si bien en los expedientes se registra el número de la averiguación previa, no se identifica acción alguna por parte de la CEAV para obtener esta información, ya sea de la PGR o de las mismas víctimas. Asimismo, en la mayoría de los expedientes revisados la descripción del daño sufrido es muy limitada, señalando algunas de las afectaciones físicas, psicológicas y económicas que las víctimas indirectas han sufrido a raíz del asesinato de las víctimas directas. En los expedientes de víctimas indirectas menores de edad, se

establece que se necesita un peritaje especializado, pero no existen registros de que éste haya tenido lugar. No se tuvo acceso a ningún expediente que refleje que las víctimas hayan sido evaluadas por un profesional que evaluara el daño sufrido, ni se ha tenido conocimiento de que se haya proporcionado atención médica especializada a las víctimas.

Lo anterior fue confirmado en entrevista con la FJEDD, que nos informó que se había proporcionado la mínima información requerida para lograr el ingreso, pues el registro es visto como un mero trámite. Se solicitó el ingreso al RENAVI de las víctimas que llevan un proceso ante la Comisión Forense con el objetivo de acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstas en la LGV. Mencionaron que la CEAV no se ha acercado a las víctimas, por lo no se ha realizado un diagnóstico de necesidades, ni peritajes especializados para determinar los daños sufridos por las víctimas. Señalaron que en una reunión de trabajo con el comisionado presidente, Jaime Rochín, y personal de la CEAV, éste se comprometió a comenzar a implementar la reparación del daño en el caso de la masacre de los 72, pero que sigue sin haber un trabajo profesional para que se haga el estudio que se requiere para otorgar una reparación integral.

Observaciones

De acuerdo con los expedientes del RENAVI, fue hasta el 11 de enero de 2016 cuando la CEAV solicitó a la CNDH la copia certificada de la Recomendación 80/2013, es decir, más de dos años después de que la CEAV quedara debidamente constituida y empezara su funcionamiento. El 22 de enero de 2016, la CNDH entregó a la CEAV la copia certificada de la Recomendación 80/2013. El 26 de febrero de 2016, la CNDH entregó a la CEAV la lista de víctimas directas e indirectas de la Recomendación 80/2013. Este retraso en la solicitud y obtención de la información limitó las posibilidades de actuación de la CEAV, pues anteriormente a esa fecha no contaban con todos los nombres de las víctimas directas e indirectas vinculadas a la Recomendación 80/2013 y, consecuentemente, no podían otorgarles medidas de atención, asistencia y reparación integral.

De acuerdo con el artículo 109 de la LGV, “cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga”. La CNDH y la PGR solicitaron la inscripción de las víctimas en el RENAVI hasta el 22 de enero de 2016 y el 28 de enero de 2016, respectivamente. Al igual que en el punto anterior, se tiene un retraso considerable por parte de las autoridades. El resto de las familias que no son representadas por la FJEDD no han sido buscadas por la CEAV para iniciar el proceso de reparación del daño.

Comité Interdisciplinario Evaluador

El Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) tiene diversas funciones esenciales de las que depende el acceso de las víctimas a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (en adelante Fondo). El CIE está encargado “de emitir opiniones técnicas sobre la inscripción de las solicitudes de las víctimas al registro y de elaborar los proyectos de compensación subsidiaria para que sean aprobados, en su caso, por la Comisión Ejecutiva”.[138] Asimismo, para que la CEAV determine el apoyo o asistencia que corresponde otorgar a una víctima de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, es necesario tener previamente la opinión del CIE.[139]

El 31 de marzo de 2016, se sostuvo una entrevista con Marcela Benavides Hernández, directora general del CIE. De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, no existía en este caso ninguna resolución en materia de reparaciones por parte de la CEAV, ya que las víctimas no la habían solicitado. Asimismo, en esa fecha señaló que la CEAV no tenía la lista con los nombres de las 72 víctimas —ya que ni la PGR ni la CNDH les habían proporcionado la información— y, consiguientemente, sólo se tenía contacto con las familias que se habían acercado a ellos a través de la FJEDD. Sin embargo, la información contenida en los expedientes del RENAVI indica que en la fecha en la que se sostuvo la reunión, la CNDH ya había proporcionado a la CEAV una lista con los nombres de víctimas directas e indirectas vinculadas a la Recomendación 80/2013.

De acuerdo con el oficio CEAV/CIE/0345/2016 de fecha 13 de abril de 2016, el licenciado Josué Sansón Jáuregui, subdirector del CIE, informó a la maestra Miriam Morales Sanhueza, directora general de Vinculación Interinstitucional, que el CIE había emitido 11 proyectos de dictamen de medidas de ayuda inmediata por concepto de gastos funerarios relacionadas con el caso de San Fernando, Tamaulipas. Estos proyectos de dictamen fueron aprobados posteriormente por el pleno de la CEAV, dándose origen a las resoluciones sobre la materia. Con las resoluciones emitidas por el pleno se beneficiaron 27 víctimas (12 directas y 15 indirectas), otorgándoseles un total de $836 486.49 (ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos mexicanos con cuarenta y nueve centavos). No obstante, al analizar la tabla incluida en el oficio, se detectó que las víctimas de las que se informaba estaban relacionadas con el hallazgo, en abril de 2011, de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y no con la matanza de agosto de 2010.

En mayo de 2016, se tuvo acceso en las instalaciones de la CEAV a los expedientes del CIE relacionados con los casos de San Fernando I y San Fernando II, sobre gastos funerarios otorgados a las familias. De esos expedientes, únicamente uno de ellos trataba sobre los hechos de San Fernando I. Este expediente del CIE, bajo el registro CEAV/CIE/0194/2015 del 10 de diciembre de 2015, trata de medidas de ayuda inmediata por gastos médicos y de transporte a una víctima indirecta relacionada con la Recomendación 80/2013 de la CNDH. Esta víctima, de nacionalidad guatemalteca, es familiar de tres personas que perdieron la vida en los hechos de San Fernando.

El expediente evidencia que obtener recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas resultó largo. El 11 de enero de 2016, un mes después de la solicitud, la CEAV responde a la organización que solicita los recursos —la FJEDD— que no acreditó la personalidad como representante legal de la víctima. Dos meses después, el 18 de marzo de 2016, la organización acredita ante la CEAV la representación legal de la víctima. Es hasta el 7 de abril de 2016 —casi un mes después de que se acreditara la representación— cuando la Dirección del Fondo de Ayuda,

Asistencia y Reparación Integral de la CEAV autoriza el rembolso de los gastos ya efectuados por la víctima indirecta. El proceso tomó casi cuatro meses, entre retrasos de la CEAV y el proceso burocrático por el que tuvo que atravesar la víctima y la organización representante.

De acuerdo con entrevistas que se sostuvieron con la FJEDD, los requisitos que exige la CEAV para acreditar la representación de las víctimas son excesivos, obstaculizan el acceso de las víctimas a sus derechos y generan una revictimización. En un caso como éste, en el que las familias de las víctimas se encuentran en otro país y con escasos recursos para trasladarse constantemente, requerir nuevas prueba de la representación cuando ésta ya ha sido probada ante otras instancias del Estado resulta una carga excesiva para ellas.

Adicionalmente a lo anterior, en los expedientes se encuentra otra actuación para iniciar procesos de reparación. El 2 de marzo de 2016, la CEAV informa, en su boletín B016/2016,[140] que cubrió los gastos de traslado, hospedaje y alimentación de 16 personas "provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, familiares de los migrantes encontrados en una fosa clandestina en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010". Se trata de víctimas relacionadas con la Recomendación 80/2013 que son trasladadas para "darle seguimiento a los expedientes de sus casos y hacerse tomas de muestras genéticas como parte de la indagatoria del caso". Se tomaron los siguientes acuerdos:

- Se realizará el registro de las 16 personas víctimas provenientes de Guatemala, El Salvador y Brasil, así como de familiares que representan y que también son víctimas indirectas del caso, en el RENAVI, con base en lo indicado por el Ministerio Público Federal.
- La CEAV, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), realizará las gestiones necesarias para que reciban asistencia médica, psicológica y de trabajo social en sus países de origen.
- Se les seguirá apoyando con sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación durante las próximas visitas de

seguimiento que tuvieran que hacer a la Ciudad de México.

- Se cubrirán los gastos funerarios que pudieran originarse por la posible entrega de restos de sus seres queridos, en caso de resultar algún positivo en las pruebas de ADN.
- Se iniciará el proceso de reparación integral en los casos en que éste proceda.

A más de seis meses de que se llegara a estos acuerdos, la CEAV no ha actuado para darles cumplimiento. No se ha iniciado ningún proceso para garantizar la reparación integral y ni siquiera ha habido un acercamiento con las víctimas para explicarles cuáles son sus derechos. Por otra parte, el pago de gastos realizados por víctimas y sus representantes se da por reembolso, lo que resulta en muchos casos un obstáculo, puesto que no cuentan con esos recursos y porque se registran grandes retrasos en los pagos. Las víctimas no han recibido asistencia médica, psicológica y de trabajo social en sus países de origen. En entrevista realizada a una víctima, ésta expresó: “nosotros lo que queremos es que ellos cumplan con las palabras que ellos dicen, con los familiares, […] no hemos visto nada nada, ni siquiera nos han llamado, nos dijeron que nos iban a llamar, mandamos documentación de toda mi familia [...] No hemos recibido ninguna ayuda de nadie tampoco, ni medicina ni nada” .[141]

En cuanto a las gestiones que la CEAV indica que realizará con la Secretaría de Relaciones Exteriores para garantizar la asistencia a las víctimas en sus países de origen, se tiene conocimiento de que aún no se ha generado ningún mecanismo interinstitucional para ese fin. El 21 de julio de 2016, el director general adjunto para Frontera Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio respuesta al oficio enviado por la CEAV de fecha 1 de julio de 2016. La CEAV solicitó información sobre las acciones realizadas por la SRE, embajadas y consulados mexicanos en relación con las víctimas de la masacre de las 72 personas migrantes.

La SRE indicó que había actuado como enlace entre las autoridades mexicanas y los funcionarios consulares de los distintos países de origen de las víctimas para realizar las tareas de transmitir información para la identificación, entrega y repatriación de restos.

La Cancillería hizo mención en su respuesta a contactos que ha entablado con la Dirección General de Vinculación Interinstitucional y señaló que “apreciará avanzar en el establecimiento de un mecanismo interinstitucional, que permita fortalecer la colaboración en estos casos”.

En este sentido, es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 112 de la LGV, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene la obligación expresa de garantizar

> los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en México, firmando los convenios de colaboración correspondientes con las autoridades competentes del país donde la víctima retorne y con apoyo de los consulados mexicanos en dicho país.

Se solicitó información sobre estos convenios; sin embargo, el 10 de septiembre de 2016, la CEAV respondió que no ha firmado ningún convenio en esos términos con las autoridades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador.

Asesoría Jurídica Federal

La Asesoría Jurídica Federal es el área de la CEAV especializada en asesoría jurídica para víctimas.[142] Las funciones principales de la Asesoría Jurídica Federal son la coordinación del servicio de asesoría jurídica para víctimas en asuntos federales con el objetivo de garantizar sus derechos; y la coordinación del servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero federal, para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral.[143]

El 27 de abril de 2016, se recibió un documento que nos indicaron que provenía del Área de Asesoría Jurídica Federal a Víctimas. Es importante destacar que el documento no tiene las mismas características que los otros documentos que se han recibido de la CEAV, ya que no está membretado, no cuenta con número de oficio y tampoco se establece qué área lo elaboró ni el funcionario que lo firma. El documento tiene el título “72 migrantes (San Fernando,

Tamaulipas)", e indica que, en atención al "Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, que se lleva a cabo por la Comisión Forense", por acuerdo de la CEAV de fecha 12 de enero de 2016, fue acordado trasladar a víctimas indirectas de Guatemala, El Salvador y Brasil a la Ciudad de México, para la revisión de sus expedientes, así como la toma de muestras genéticas por parte de la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense. El documento contiene la lista de víctimas que estuvieron en la Ciudad de México del 28 de febrero al 5 de marzo de 2016: nueve de Guatemala, cuatro de El Salvador y tres de Brasil. Asimismo, indica que la Asesoría Jurídica Federal realizó los acuerdos para los traslados y solicitó a la Embajada de Brasil en México el apoyo de un traductor; y se proporcionó traslado con dos camionetas para el grupo de víctimas durante toda su estancia en la Ciudad de México.

El documento descrito ha sido la única información proporcionada por la Asesoría Jurídica Federal y nunca ha sido posible sostener una entrevista con personal de esa área. Debe señalarse que el 1 de julio de 2016, la Dirección General de Vinculación Institucional de la CEAV informó que el 5 de abril de 2016, mediante oficio CEAV/DGVI/079/2016, se había solicitado a la Asesoría Jurídica Federal acceso a los expedientes que tenían sobre el caso y aún no habían recibido respuesta alguna. Por esa razón, el 30 de junio de 2016, mediante oficio CEAV/DGVI/270/2016, se reiteró la solicitud. Hasta la fecha de publicación del informe, no se había recibido respuesta.

La atención médica recibida por las víctimas

De acuerdo con el documento *Atención médica a familiares de víctimas de la masacre de 72 migrantes y de fosas clandestinas: hechos, elementos positivos, retos y propuestas de acción*, presentado por la FJEDD a la CEAV, uno de los acuerdos principales a los que se llegó en la reunión de febrero de 2016, sostenida entre algunas familias y el comisionado presidente y su equipo de trabajo, fue "la activación inmediata de las medidas de asistencia por parte

de la CEAV para todas y todos los familiares de las víctimas directas de la masacre de 72 personas migrantes". Por esa razón, y dada la necesidad de recibir atención urgente, dos víctimas indirectas fueron valoradas por primera vez por un médico y se programó otra visita para que fuesen atendidas en mayo de 2016 (una cirugía para una de ellas y una valoración médica a profundidad para la otra). Ante la falta de seguimiento por parte de la CEAV, en mayo de 2016 la FJEDD tuvo que solicitar una reunión con la CEAV. En esa reunión se llegó a ciertos acuerdos puntuales a los que no se dio cumplimiento en su totalidad y se hicieron evidentes muchos de los problemas a los que se enfrentan las víctimas, especialmente si no son mexicanas, para recibir medidas de asistencia.

La FJEDD relata la falta de coordinación y eficacia por parte de la CEAV, pues no gestionaron adecuadamente las citas médicas, informaron de forma tardía sobre las fechas de vuelos y citas, y además, dado que no gestionaron adecuadamente el transporte terrestre de las víctimas, los representantes tuvieron que pagarlo. Durante la visita, se evidenció la falta de coordinación institucional entre la CEAV con el hospital que prestó el servicio médico, la revictimización por parte del personal médico —por ejemplo, un médico le dijo a una de las víctimas que "para qué seguía buscando a sus familiares, que mejor se buscara un marido".

En la respuesta de 21 de julio de 2016 dada por la CEAV a la FJEDD, se destaca que, si bien no se desechan las propuestas realizadas, tampoco se aprecia ningún tipo de urgencia para hacer frente a los obstáculos señalados. A pesar de los aspectos positivos que tuvo la visita y que destaca la FJEDD,[144] es esencial que se tomen acciones inmediatas para hacer frente a los obstáculos. Por ejemplo, la FJEDD ha solicitado a la CEAV que se firmen convenios para la atención médica de familias en países de Centroamérica y Estados Unidos, tanto con instituciones públicas como privadas, pero hasta la fecha esto no se ha realizado.

Aunque estas víctimas agradecen el apoyo otorgado por la CEAV, ya que les han dado "medicina, el viaje, pues nos pagan transporte de donde vivimos a la capital y los vuelos, y alimentos" y consideran que "esto que ellos han logrado, no lo hubieran logrado allá en

Guatemala", el traslado de un país a otro para recibir tratamiento médico no es fácil para ellas.[145] Una de ellas señala que tiene que dejar a sus hijos y buscar quién los cuide, por lo que no puede venir a México tantos días y tiene que planear la visita con anticipación.[146] A esta situación se le tienen que agregar los viajes y trámites que deben realizar para obtener una visa que les permita ingresar a México. Por ello, es fundamental que la CEAV lleve a cabo las acciones necesarias para que, cuando así lo deseen o necesiten las víctimas, puedan recibir una atención de calidad en sus países de origen.

Las autoridades del Estado de Tamaulipas: Procuraduría General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y elInstituto de Atención a Víctimas del Delito

Durante el curso de esta investigación, la única respuesta que se recibió por parte de alguna institución del estado de Tamaulipas fue la de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET). El 12 de abril de 2016, la CEAV solicitó a la CODHET las actuaciones que hubiesen llevado a cabo en relación con el caso de las 72 personas migrantes asesinadas en agosto de 2011. El 28 de abril de 2016, la CODHET respondió que la CNDH había iniciado de oficio una investigación sobre el caso el 25 de agosto de 2011 y emitido la Recomendación 80/2013 el 23 de diciembre de 2013, por lo que sugerían que se solicitara la información a ese organismo. A pesar de ello, la CODHET podría haber implementado acciones para buscar dar respuesta a una situación de graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas migrantes, como lo fue la masacre en agosto de 2010 y el hallazgo de las fosas clandestinas en 2011. La información disponible indica que la CODHET ha sido omisa en este sentido.[147]

Las autoridades de Tamaulipas han sido omisas en el cumplimiento de diversas de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Como puede observarse en la sección dedicada a la CNDH y al cumplimiento de la Recomendación 80/2013, la PGJET no realizó de manera adecuada la identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como también incumplió

procedimientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. Esta situación, al igual que el actuar de la PGR, dio lugar a la entrega inadecuada de restos, obstáculos en la identificación por el alto grado de descomposición de los cuerpos derivado del manejo y conservación inadecuados, así como a dudas sobre la certeza de las identificaciones realizadas.

Es también importante destacar que, a pesar de lo sucedido en agosto de 2011, la violencia en contra de personas migrantes en Tamaulipas no se ha detenido. El hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando en 2011 con 196 cadáveres dio cuenta de que la situación no mejoraba y que las autoridades seguían sin tomar medidas para prevenir estas graves violaciones de derechos humanos. Después de 2011, las desapariciones de personas migrantes continúan en Tamaulipas.[148]

Sociedad civil, medios de comunicación y academia

Desde que se hizo pública la noticia sobre el hallazgo de los cuerpos de 72 personas migrantes en el rancho El Huizachal en San Fernando, Tamaulipas, y en los años subsecuentes, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y la academia han mostrado la indignación y el horror que les ocasiona la masacre y se han generado diversas muestras de apoyo.

Para empezar, una gran cantidad de artículos, editoriales y reportajes han sido y siguen siendo publicados en diversos periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales. Uno de los esfuerzos más encomiables es, sin lugar a dudas, el realizado por el equipo de investigación de *Periodistas de a Pie* y otros periodistas invitados. *Periodistas de a Pie* creó el sitio web de investigación periodística "+de 72" para abordar las masacres de migrantes en México y lo presentan como:

> un intento de comisión de la verdad en tiempo real que plantea las preguntas que no han respondido las autoridades y devela los mecanismos de la impunidad que permiten que el horror continúe: las inconsistencias de las versiones oficiales de los hechos, el encubrimiento a funcionarios involucrados, los vacíos judiciales, los malos procedimientos forenses y las violaciones de los derechos de las víctimas al reconocimiento, a la justicia, a la verdad y a la

reparación.[149]

Es importante también mencionar el proyecto *72migrantes.com*, ya que es un reflejo del impacto y relevancia que esta masacre en particular tuvo para la sociedad. En noviembre de 2010, se creó un "altar virtual" con música, retratos, flores y textos. En la página web pueden encontrarse 72 textos —dedicados a cada una de las personas que murieron— redactados por escritores, periodistas, activistas, artistas y académicos, así como las fotos de veinte fotógrafos.[150] En 2011, bajo la coordinación de Alma Guillermoprieto, los textos e imágenes fueron publicados en el libro titulado *72 migrantes*.

En cuanto a la sociedad civil, si bien el caso ha generado muestras de solidaridad de un gran número de organizaciones y colectivos mexicanos e internacionales, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha apoyado más de cerca a las familias de varias de las personas que perdieron la vida en ese incidente. Como se ha mencionado en diversas ocasiones en este informe, la FJEDD ha acompañado y sigue acompañando a las víctimas en diferentes procedimientos ante autoridades mexicanas, tales como la PGR, la CNDH y la SCJN. Asimismo, junto con otras organizaciones, ha visibilizado el caso ante diferentes instancias internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos.

Deben mencionarse también los esfuerzos que se han generado con otras organizaciones de la sociedad civil mexicanas y centroamericanas. La Fundación para la Justicia coordina la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes, conformada por el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (Cofamipro), el Foro Nacional para la Migración en Honduras (Fonamih), la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), la Casa

del Migrante de Saltillo y la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (Nalaac).[151] La Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes tiene como objetivos principales apoyar en la consolidación local y regional de comités de familias de personas migrantes que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, “con la intención de que sean los familiares los protagonistas en la búsqueda de su derecho a la verdad y acceso a la justicia”; instaurar mecanismos regionales de búsqueda de personas migrantes desaparecidas; crear protocolos de identificación y búsqueda de personas migrantes; e implementar un marco legal regional que beneficie a todos los agentes involucrados en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad.[152]

Para la identificación de los restos, ha sido fundamental el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Centroamérica y México. Su *Proyecto Frontera*[153] ha impulsado la creación de “Bancos de Información Forense”, que es un mecanismo gubernamental y no gubernamental en donde participan los comités de familiares de desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de los países de origen y el EAAF, para documentar información forense sobre familiares de desaparecidos.[154] Al tener la información en los bancos, se permite que en cuanto se da el cruce de información de restos sin identificar proporcionada por una morgue con la información de familiares de migrantes desaparecidos que está en los Bancos de Información Forense, pueda darse una identificación. El trabajo previo del EAAF con organizaciones y comités de la región, principalmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, permitió que pudiera firmarse el Convenio de Comisión Forense, donde la mayor parte de la información de los familiares es proporcionada por los Bancos de Información Forense y por familiares de Guatemala —en donde hubo un ejercicio inicial de Banco Forense que después no fue ratificado por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala —.[155] Para las familias de personas migrantes desaparecidas, la presencia del EAAF es lo que constituye el elemento de confianza y legitimidad en las actividades de la Comisión Forense.[156]

La comunidad internacional

De forma inmediata, el caso generó condenas en contra del Estado mexicano por parte de la comunidad internacional. El 25 de agosto de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador emitió un comunicado de prensa en el que "lamenta profundamente y condena el asesinato de 72 migrantes latinoamericanos".[157] El 27 de agosto de 2010, el secretario general de la Organización de Estados Americanos expresó su enérgica condena y manifestó que esperaba que "este crimen colectivo sea esclarecido y confío en que el gobierno mexicano hará todo lo posible para ello".[158] Ese mismo día, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó también enérgicamente el asesinato y expresó su profunda consternación ante los asesinatos, que evidenciaban la situación crítica de las personas migrantes en el país.[159] La CIDH publicó un comunicado de prensa en el que "expresa su más profunda preocupación por la matanza de inmigrantes ocurrida en México, y urge al Estado a adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como para proteger a los migrantes en tránsito en el país y garantizar el respeto a sus derechos humanos".[160]

Más allá de las condenas ante los hechos, diversos organismos internacionales han continuado manifestando su preocupación por la situación general de los derechos de las personas migrantes en México, y específicamente por la falta de acciones efectivas por parte del gobierno mexicano para esclarecer los hechos en torno a la masacre, identificar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas y establecer medidas para garantizar la repetición de sucesos como éstos. En mayo de 2011, por ejemplo, el Comité de Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de Naciones Unidas, manifestó que le preocupaba que prevalecía la impunidad ante el alarmante número de secuestros y extorsiones, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones y muertes de que han sido víctimas personas migrantes en México, y "en especial en casos paradigmáticos como el secuestro y asesinato de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos en agosto de 2010 en Tamaulipas".[161]

En el informe *Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, la CIDH utilizó la masacre para evidenciar "la falta de medidas eficaces por parte del Estado para proteger a los migrantes".[162] Indicó también que hechos como éste mostraban "el nivel de deshumanización e instrumentalización del que son víctimas las y los migrantes en su paso por México" y que observaba "con suma preocupación que la masacre de los 72 migrantes no representó un hecho aislado, sino que encuadra dentro del contexto de violencia y discriminación que afecta a los migrantes en situación irregular que transitan por México".[163] Asimismo, en su informe *Situación de derechos humanos en México*, hizo mención del caso en relación con los "innumerables reportes de violencia a raíz de las actividades del crimen organizado en el contexto de la movilidad humana",[164] reconoció como un avance la creación de la Comisión Forense y volvió a instar al Estado "a adoptar las medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal".[165]

Debe destacarse también la preocupación demostrada y las recomendaciones realizadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en cuanto a las desapariciones de personas migrantes. Ha señalado que el Estado mexicano "debería, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas y la sociedad civil, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, perseguir penalmente a los responsables y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores".[166] Asimismo, ha precisado que el mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia que el Estado informó que se estaba diseñando, debería garantizar: "*a)* la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y, en caso de hallarse restos, su identificación y restitución; *b)* el relevamiento de información *ante mortem* y su integración a la Base de Datos *Ante Mortem - Post Mortem*; *c)* que los allegados de las personas

desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas".[167]

Notas

[1] Artículo 1º, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

[2] *Idem*. Énfasis añadido.

[3] *Idem*. Énfasis añadido.

[4] Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, párr. 174.

[5] Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 20, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 7 - Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 44º periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 173 (1992), párr. 14; Naciones Unidas, Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º periodo de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004), párr. 15; Roht-Arriaza, "State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in International Law", *California Law Review*, vol. 78, núm 2, marzo de 1990, p. 477.

[6] En ese sentido es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la contradicción de tesis 293/11: "Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado".

[7] Capítulo 3. "La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas", Manuel Pérez Aguirre. Disponible en <http://violenciaypaz.colmex.mx>.

[8] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas*, 23 de diciembre de 2013. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf >; véase Redacción, "A escondidas y tarde, la CNDH emite recomendación por la masacre de San Fernando", *Proceso,* 27 de diciembre de 2013. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/361203/a-escondidas-y-tarde-la-cndh-emite-recomendacion-por-la-masacre-de-san-fernando>.

[9] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op. cit.*, *Síntesis*, párr. 3.

[10] *Idem*.

[11] De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 3, 4, 6, fracción II, 15, fracciones I y III, y 24, fracción II, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 89 de su reglamento interno.
[12] Redacción, "Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas", *El Universal*, 25 de agosto de 2010. Disponible en <http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/704017.html>.
[13] Secretaría de Marina, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
[14] Así como de la consulta de la versión pública del expediente de la Recomendación 80/2013 al que se tuvo acceso.
[15] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, del 15 al 26 de septiembre de 2014, "Desaparición Forzada de migrantes en México" presentado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., TRIAL (*Track Impunity Always*), Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC), Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos - El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), mayo de 2014, párr. 180. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2014/06/Informe-CEDMexicoJune2014FINAL.pdf>.
[16] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op. cit., Síntesis*, Observación 16.
[17] CNDH, *Recomendaciones. Seguimiento de recomendaciones*. Disponible en <http://informe.cndh.org.mx/recomendaciones.aspx>.
[18] *Idem*.
[19] CNDH, *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales*, junio 2016, p. 187. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Recomendaciones.pdf>.
[20] Si se consulta el sitio web de la CNDH, *Recomendaciones. Seguimiento de recomendaciones* (en <http://informe.cndh.org.mx/recomendaciones.aspx>) y se busca la Recomendación 2013/80, aparece una tabla con las siguientes columnas: punto recomendatorio, texto del punto recomendatorio y seguimiento,

sin que se establezca el estado de cumplimiento de cada uno. Si se elige "Descargar recomendaciones", se descarga un archivo en Excel que contiene una tabla con más columnas y en relación con todas las recomendaciones (Recomendación, Estatus de la Recomendación, Fecha de emisión, Visitaduría, Autoridad, Clasificación de la autoridad, Estatus por autoridad, Nivel de cumplimiento, Fecha de respuesta, Punto recomendatorio, Texto del punto recomendatorio y Seguimiento). En esta tabla, aparecen todos los puntos recomendatorios, de acuerdo con estatus por autoridad como "en trámite". Dado que no existe información sobre la fecha de actualización de estas tablas y el *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales* fue publicado en junio de 2016, se toma la información ahí contenida para realizar este análisis. Asimismo, mediante oficio emitido por la CEAV de 4 de agosto de 2016, entregado a la CNDH el 8 de agosto de 2016, se solicitó "todo lo relacionado al seguimiento de cumplimiento por las autoridades mexicanas de la Recomendación 80/2013", pero no se recibió respuesta alguna.

[21] CNDH, *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, op. cit*, p. 372.

[22] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, del 15 al 26 de septiembre de 2014, "Desaparición Forzada de migrantes en México", *op. cit*., párr. 183.

[23] CNDH, *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, op. cit*., p. 187.

[24] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista de la adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de México durante la 7ª sesión del Comité, del 15 al 26 de septiembre de 2014, "Desaparición Forzada de migrantes en México", *op. cit*., párr. 183.

[25] Difusión Cencos, *Tribunal colegiado confirma admisión de amparo contra CNDH en el caso de la masacre de 72 migrantes*, 6 de junio de 2014. Disponible en <http://www.cencos.org/comunicacion/tribunal-colegiado-confirma-admision-de-amparo-contra-cndh-en-el-caso-de-la-masacre-de-72-migrantes>.

[26] Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Sentencia de 13 de septiembre de 2016, Juicio de amparo 38/2014, pp. 32-33.

[27] *Ibidem*, p. 43.

[28] *Idem*.

[29] Información proporcionada por la FJEDD en septiembre y octubre de 2016.

[30] Información proporcionada por la FJEDD en octubre de 2016.

[31] *Idem*.

[32] FJEDD, *Titular de la CNDH debe responder por violaciones a derechos humanos en la masacre de San Fernando*, 19 de marzo de 2014. Disponible en

<http://fundacionjusticia.org/titular-cndh-debe-responder-por-seguimiento/>; FJEDD, Casa del Migrante Saltillo, Hogar Refugio para Migrantes "La 72", *et al., Solicitud de punto de acuerdo por el que se exhorta a la mesa directiva del honorable Senado de la República a llamar a comparecencia pública a través de la Comisión pertinente, al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones graves a derechos humanos y omisiones en el caso de la masacre de 72 migrantes de San Fernando y restos cremados de fosas clandestinas de San Fernando*, 19 de marzo de 2014; *FJEDD, La CNDH responderá ante el Senado por violentar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en la masacre de 72 migrantes en San Fernando*, 19 de mayo de 2014. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/la-cndh-respondera-ante-el-senado-por-violentar-los-derechos-humanos-de-las-victimas-y-sus-familiares-en-la-masacre-de-72-migrantes-en-san-fernando/>.

[33] Majo Siscar, "Cuestionan senadores gestión de Plascencia por la masacre en San Fernando", *Animal Político*, 20 de mayo de 2014. Disponible <http://www.animalpolitico.com/2014/05/cuestionan-senadores-gestion-de-plascencia-por-la-masacre-en-san-fernando/>.

[34] Jorge Carrasco Arazaiga, "La CNDH se defiende… de las víctimas", *Proceso*, 5 de junio de 2014. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/?p=373893>; Majo Siscar, "La comparecencia del presidente de la CNDH en el Senado, en 11 frases", *Animal Político*, 21 de mayo de 2014. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2014/05/la-comparecencia-del-presidente-de-la-cndh-en-el-senado-en-11-frases/>; Redacción, "La CNDH reabrirá expediente sobre la matanza en San Fernando, Tamaulipas", *Expansión*, 20 de mayo de 2014. Disponible en <http://expansion.mx/nacional/2014/05/20/la-cndh-reabrira-expediente-sobre-la-matanza-en-san-fernando-tamaulipas>.

[35] Jorge Carrasco Arazaiga, "La CNDH se defiende… de las víctimas", *op. cit.*; Siscar Majo, "La comparecencia del presidente de la CNDH en el Senado, en 11 frases", *op. cit.*; Redacción, "La CNDH reabrirá expediente sobre la matanza en San Fernando, Tamaulipas", *op. cit.*

[36] TRIAL, FJEDD, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos. El Salvador, *Escrito presentado al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en vista del estudio temático sobre la desaparición en el marco de las migraciones*, enero de 2016. Disponible en <*https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe_a_GTDFI_2016.pdf*>.

[37] Información adicional para el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con motivo de su visita a México entre abril y mayo de 2013. "Las personas migrantes como grupo vulnerable", febrero de 2014, presentado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., TRIAL (*Track Impunity Always*), Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Coahuila (FUUNDEC), Comité

de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos - El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), párr. 64. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2014/02/InformeseguimientoRejecuciones2014.pdf>.

[38] CNDH, *Informe especial sobre los casos de secuestro de migrantes*, 15 de junio de 2009, pp. 11-12. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf>.

[39] CNDH, *Informe especial sobre los casos de secuestro de migrantes, op. cit*., p. 33.

[40] *Ibidem*, pp. 27, 30.

[41] CIDH, *Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos*, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 18.

[42] Artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[43] Artículo 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Diario Oficial de la Federación*, 29 de junio de 1992.

[44] LGV, artículo 2 de la LGV, *Diario Oficial de la Federación*, México, 9 de enero de 2013.

[45] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op. cit.*, párr. 223.

[46] *Ibidem*, párr. 179.

47 *Ibidem, op. cit*., párr. 223.

48 *Ibidem, op. cit*., punto recomendatorio quinto para PGR y punto recomendatorio quinto para el Gobierno de Tamaulipas.

49 *Ibidem, op. cit*., punto recomendatorio sexto para el Gobierno de Tamaulipas.

50 CNDH, *Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, op. cit*., p. 187.

51 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, *Pablo de Greif,* A/HRC/30/42, 7 de septiembre de 2015, párr. 25.

[52] Oficio CEAV/DGVI/283/2016 de 7 de julio de 2016.

[53] Véase *Expediente Caso Iguala*. Disponible en <http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala>.

[54] El 1 de agosto de 2016 se recibió la respuesta de la PGR a las solicitudes de información presentadas el 30 de julio de 2016, vía INFOMEX, en las que se solicitaron los expedientes de la averiguación previa que se sigue por el caso de la masacre de las 72 personas migrantes (folio 0001700206816) y el número de personas detenidas en relación con el caso, así como el estado procesal de cada una de ellas (folio 0001700206716). La respuesta en ambas solicitudes fue que “la

información solicitada se encuentra clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 110, fracciones VII y XII de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, en relación con el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales*.

[55] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op. cit*., párr. 104.

[56] *Ibidem*, párr. 105.

[57] *Ibidem*, párr. 106.

[58] *Ibidem*, párr. 104.

[59] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op.cit*., párr. 108.

[60] ACUERDO Específico A/009/11 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente en la identificación, localización, detención o aprehensión de los sujetos que planearon y ejecutaron el multihomicidio de 72 personas de origen extranjero, cometido en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas y los delitos que resulten, Procuraduría General de la República, *Diario Oficial de la Federación*, 31 de enero de 2011.

[61] *Idem*.

[62] A mediados de abril de 2011, la Secretaría de Marina presentó ante los medios de comunicación a Martín Omar Estrada Luna, *El Kilo*, considerado como jefe de los Zetas en San Fernando y quien presuntamente ordenó el asesinato de las 72 personas migrantes en agosto de 2010 (“San Fernando I”) y de las encontradas en fosas clandestinas en abril de 2011 (“San Fernando II”). En el momento de detener a Martín Omar Estrada, la Secretaría de Marina también aprehendió a otras 11 personas vinculadas a las masacres de San Fernando I y II. Todos los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la PGR. Édgar Huerta Montiel, *El Wache*, fue aprehendido el 17 de junio de 2011 por la Policía Federal. Fue arraigado por 40 días y luego enviado al Centro Federal de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas. Abraham Barrios Caporal, *El Erasmo*, fue detenido a finales de junio de 2011 y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, número 5 “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz. El 6 de octubre de 2012, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, *La Ardilla*, fue detenido por la Secretaría de Marina en Progreso, Coahuila. El 11 de octubre de 2012, se determinó que permanecería arraigado por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales en la Ciudad de México y, posteriormente, fue trasladado al penal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

[63] FJEDD, *Migrantes desaparecidos: la tortura permanente. Informe dirigido al relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita oficial a México en Abril*

y Mayo de 2014. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2014/05/INFORME-RELATOR-TORTURA-ENTREGADO.pdf>.
[64] *Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización*, Procuraduría General de la República, *Diario Oficial de la Federación*, 18 de diciembre de 2015.
[65] *Idem*.
[66] *Idem*.
[67] Disponible en <https://twitter.com/FJEDD>, 1 de marzo de 2016.
[68] Disponible en <https://twitter.com/FJEDD>, 24 de agosto de 2016.
[69] CNDH, *Recomendación 80/2013. Caso de privación de la vida de 72 personas migrantes y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, op. cit*., párr. 106.
[70] *Ibidem*, párr. 137.
[71] *Ibidem*, párr. 175.
[72] *Ibidem*, párr. 175.
[73] "+de 72", "Los cuerpos", *Capítulo 2*: *Después de la masacre*. Disponible en <http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/capitulo2.html>.
[74] *Idem*.
[75] *Idem*.
[76] *Idem*.
[77] *Idem*.
[78] Marcela Turati, "A 6 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, surgen nuevas revelaciones", *Aristegui Noticias*, 24 de agosto de 2016. Disponible en <http://aristeguinoticias.com/2408/mexico/a-6-anos-de-la-masacre-en-san-fernando-tamaulipas-surgen-nuevas-revelaciones/>. De acuerdo con la nota de prensa citada anteriormente, el ataúd no llegó. Sin embargo, otras notas indican que el cuerpo fue repatriado tres meses después. Véase "+de 72", "Los cuerpos", *Capítulo 2*: *Después de la masacre, op. cit*.
[79] Marcela Turati, "A 6 años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, surgen nuevas revelaciones", *op. cit.*
[80] Marcela Turati, "Viven en la incertidumbre víctimas de masacre", *En el camino. Migración más allá de las vías,* 10 de septiembre de 2015. Disponible en <http://enelcamino.periodistasdeapie.org.mx/ruta/viven-en-la-incertidumbre-victimas-de-masacre-2/>; Octavio García, "Exige madre de migrante desaparecida a autoridades mexicanas exhumar cadáver de su hija para corroborar identidad", *Noticias MVS*, 6 de marzo de 2016. Disponible en <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/exige-madre-de-migrante-desaparecida-a-autoridades-mexicanas-exhumar-cadaver-de-su-hija-para-corroborar-identidad-632>.
[81] Es importante destacar la primera acción internacional que se llevó a cabo con el objetivo de lograr el establecimiento de la Comisión Forense: la audiencia

pública “Situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México”, celebrada el 23 de marzo de 2012 en el marco del 144º Periodo de Sesiones de la CIDH. Disponible en <http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2012/03/032312_PVidal_3.wmv>.

[82] De acuerdo con lo señalado por FJEDD, tienen documentados casos en donde las familias recibieron restos cremados; se recibían los restos sin que se entregara ningún documento que acreditara que existió un procedimiento científico para lograr la identificación; se recibían cajones cerrados y se prohibía a las familias abrirlos, bajo amenazas de que de hacerlo estarían cometiendo un delito o se contagiarían de alguna enfermedad.

[83] FJEDD, *Migrantes desaparecidos: la tortura permanente. Informe dirigido al Relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita oficial a México en Abril y Mayo de 2014, op. cit*.

[84] Cláusula primera, *Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, que se llevará a cabo por conducto de una Comisión Forense, que celebran la Procuraduría General de la República, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C., la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. y el Foro Nacional para la Migración en Honduras*, *Diario Oficial de la Federación*, 4 de septiembre de 2013. Disponible en <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312887&fecha=04/09/2013>.

[85] Cláusula segunda del *Convenio*.

[86] Cláusula cuarta del *Convenio.*

[87] FJEDD, *Migrantes desaparecidos: la tortura permanente. Informe dirigido al Relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita oficial a México en Abril y Mayo de 2014, op. cit.*

[88] *ADENDA al Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, que se llevará a cabo por conducto de una Comisión Forense, que celebran la Procuraduría General de la República, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C., la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las*

Migraciones en Guatemala, la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. y el Foro Nacional para la Migración en Honduras, Diario Oficial de la Federación, 23 de octubre de 2014.

[89] *Idem*.

[90] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista del examen del informe de México durante la 8ª sesión del Comité, de 2 a 13 de febrero de 2015, presentado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., TRIAL (*Track Impunity Always*), Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Coahuila (FUUNDEC), Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos - El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), diciembre de 2014, párr. 86. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/cms/wp-content/uploads/2015/02/Informe-Adicional-a-CED-Dic-2014.pdf>.

[91] Informe de seguimiento presentado al Comité contra la Desaparición Forzada sobre el cumplimiento de las medidas recomendadas en las observaciones finales adoptadas el 13 de febrero de 2015 (CED/C/MEX/CO/1), presentado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. TRIAL (*Track Impunity Always*), Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Coahuila (FUUNDEC), Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos - El Salvador (Cofamide), Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), febrero de 2016, párr. 22. Disponible en <http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_NGS_MEX_23956_S.pdf>.

[92] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista del examen del informe de México durante la 8ª sesión del Comité, de 2 a 13 de febrero de 2015, *op. cit*., párr. 80.

[93] Informe de seguimiento presentado al Comité contra la Desaparición Forzada sobre el cumplimiento de las medidas recomendadas en las observaciones finales adoptadas el 13 de febrero de 2015 (CED/C/MEX/CO/1), *op. cit.*, párr. 23. La actualización de la cifra de personas identificadas fue proporcionada por la FJEDD en octubre de 2016.

[94] Informe alternativo presentado al Comité contra la Desaparición Forzada en vista del examen del informe de México durante la 8ª sesión del Comité, *op. cit.*, párr. 82.

[95] Informe de seguimiento presentado al Comité contra la Desaparición Forzada sobre el cumplimiento de las medidas recomendadas en las observaciones finales adoptadas el 13 de febrero de 2015 (CED/C/MEX/CO/1), *op. cit*., párr. 24.

[96] Entrevista realizada a una víctima, 9 de septiembre de 2016.

[97] *Idem*.
[98] Información proporcionada por la FJEDD en octubre de 2016.
[99] Véase CIDH, *Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13, 30 de diciembre de 2013, párrs. 206, 208 y 409 (recomendaciones "En materia de migrantes desaparecidos, no localizados y restos no identificados"). Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf>; Naciones Unidas, Comité contra la Desaparición Forzada, *Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, CED/C/MEX/CO/1, 5 de marzo de 2015, párr. 24. Disponible en <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fMEX%2fCO%2f1&Lang=en>; Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, *Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Adición. Misión a México,* A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014, párr. 49.
[100] En el caso de la solicitud realizada por la FJEDD, se pidió información sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, de agosto de 2010; el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 193 restos en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011; y la masacre de Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012.
[101] Información adicional para el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con motivo de su visita a México entre abril y mayo de 2013 "Las personas migrantes como grupo vulnerable", *op. cit*., párr. 113.
[102] Actualmente, el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (nueva ley publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de mayo de 2016) establece: "No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".
[103] Información adicional para el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con motivo de su visita a México entre abril y mayo de 2013 "Las personas migrantes como grupo vulnerable", *op. cit*., párr. 114.
[104] Sentencia, Juicio de Amparo 1371/2013, Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 11 de abril de 2014.
[105] *Idem*.
[106] *Idem*.
[107] FJEDD, *Primer caso de atracción a la SCJN*: *acceso a la información pública de averiguaciones previas de tres masacres de personas migrantes*, Disponible en <https://www.macfound.org/media/files/Actualizacion_casos_Fundacion_ante_SCJN.PDF>.
[108] Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 338/2014, Solicitante: Ministra

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 18 de febrero de 2015. Disponible en <http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=165821&SinBotonRegresar=1>.

[109] *Idem*.

[110] *Idem*.

[111] *Idem*.

[112] *Idem*.

[113] *Idem*.

[114] El grupo de trabajo está conformado en la primera fase tanto por instituciones de gobierno como por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones de educación superior: Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Universidad Iberoamericana, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Universidad Veracruzana, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Defensoría para Usuarios de Archivos Públicos, Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

[115] Artículo 19, *Proyecto Memoria y Verdad: difusión sobre violaciones graves a derechos humanos*, 18 de mayo de 2015. Disponible en <http://articulo19.org/proyecto-memoria-y-verdad-difusion-sobre-violaciones-graves-a-derechos-humanos/>; Leopoldo Hernández, "Lanzan INAI y Artículo 19 Proyecto Memoria y Verdad", *El Economista*, 19 de mayo de 2015. Disponible en <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/05/19/lanzan-inai-articulo-19-proyecto-memoria-verdad>.

[116] FJEDD, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras, *Primer caso de masacres de migrantes ante SCJN*: *Una oportunidad para proteger los derechos de víctimas y familiares,* 17 de febrero de 2016. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/conoce-scjn-caso-sobre-migrantes-victimas-de-masacre-en-san-fernando/>.

[117] *Idem*.

[118] *Idem*.

[119] *Idem*.

[120] FJEDD. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/4606-2/>.

[121] *Idem*.

[122] FJEDD, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso,

Honduras, *Primer caso de masacres de migrantes ante SCJN*: *Una oportunidad para proteger los derechos de víctimas y familiares, op. cit.*

[123] FJEDD, *Conoce SCJN caso sobre migrantes víctima de masacre en San Fernando*, 2 de marzo de 2016. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/conoce-scjn-caso-sobre-migrantes-victimas-de-masacre-en-san-fernando/>.

[124] LGV, *op. cit*., artículo 79.

[125] *Ibidem*, artículo 84.

[126] *Ibidem*, artículo primero transitorio.

[127] *Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y se reforma el primer párrafo del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 3 de mayo de 2013.

[128] Artículo primero del *Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 8 de enero de 2014.

[129] Artículo 35 del *Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Diario Oficial de la Federación*, 27 de junio de 2014.

[130] De acuerdo con la información proporcionada por el RENAVI, actualmente existen nueve víctimas y 30 indirectas en relación con la masacre de las 72 personas migrantes.

[131] LGV, *op. cit*., artículo 96.

[132] *Idem*.

[133] *Ibidem*, artículo 98.

[134] *Idem*.

[135] *Idem*.

[136] El artículo 99 de la LGV establece que, para poder inscribir los datos de la víctima, las autoridades deberán tener como mínimo la siguiente información: *i)* datos de identificación de la víctima; *ii)* nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al RENAVI y el sello de la dependencia; *iii)* firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; *iv)* las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes; *v)* el funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida; *vi)* los datos de la persona que solicita el registro, y *vii)* la información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso de que el ingreso lo solicite un servidor público, deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

[137] LGV, *op. cit*., artículo 104.

[138] Artículo 36 del Estatuto Orgánico de la CEAV.

[139] LGV, *op. cit*., artículo 139.

[140] La CEAV atiende a las víctimas de San Fernando. Disponible en <http://www.ceav.gob.mx/2016/03/la-ceav-atiende-a-las-victimas-de-san-fernando/>.
[141] Entrevista realizada a una víctima, 9 de septiembre de 2016.
[142] LGV, *op. cit.*, artículo 165.
[143] *Ibidem*, artículo 167.
[144] En el documento, la FJEDD señaló que la visita representaba un precedente importante, ya que, gracias al trabajo que se realizó junto con la CEAV, familias de los migrantes de la masacre pudieron recibir por primera vez atención médica. Asimismo, reconoció la disponibilidad del personal de la CEAV que realizó el acompañamiento, así como las condiciones del hotel y la alimentación que recibieron.
[145] Entrevista realizada a una familia guatemalteca el 30 de septiembre de 2016.
[146] *Idem*.
[147] Anabel Manzano, "CODHET da la espalda a migrantes: Solalinde", *Milenio*, 14 de enero de 2014. Disponible en <http://www.milenio.com/region/Codhet-da-espalda-migrantes-Solalinde_0_226777320.html>.
[148] "+de72", "A 5 años de la masacre en San Fernando, las desapariciones siguen en los camiones de Tamaulipas", 7 de abril de 2016. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2016/04/terror-en-carreteras-de-tamaulipas-historias-de-mexicanos-que-desaparecieron-en-esos-caminos/>.
[149] Véase <http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/>.
[150] Véase <http://72migrantes.com/>.
[151] Véase FJEDD, *Red regional verdad y justicia para personas migrantes*. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/red-regionalverdad-y-justicia/>.
[152] *Idem*.
[153] Véase María Eugenia Ludueña, "Forenses argentinos: La realidad de México 'es muy triste, vimos lo que no vemos en ningún lado'", *Sinembargo*, 26 de abril de 2016. Disponible en <http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1653141>; Lilia Saúl Rodríguez, "Proyecto Frontera: Buscando la identidad de 25 mil desaparecidos", *Animal Político*, 25 de marzo de 2013. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2013/03/proyecto-frontera-buscando-la-identidad-de-25-mil-desaparecidos/>.
[154] Véase P*rotocolo para la notificación de identificación de restos de personas no localizadas en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León*. Disponible en <http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/protocolo%20de%20notificaci%C3%B3n%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>.
[155] Información proporcionada por la FJEDD en octubre de 2016.
156 Véase por ejemplo, FJEDD, *Organizaciones de familiares y sociedad civil felicitan al Equipo Argentino de Antropología Forense por sus 30 años y agradecen su trabajo en favor de los derechos humanos*, 7 de julio de 2014.

Disponible en <http://fundacionjusticia.org/30-anos-eaaf/>.
[157] Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, *Cancillería lamenta y condena asesinato de migrantes en el norte de México,* 25 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=3&mailid=14-cancilleria-lamenta-y-condena-asesinato-de-migrantes-en-el-norte-de-mexico&Itemid=794>.
[158] Organización de los Estados Americanos, Comunicado de Prensa No. C-306/10. *Secretario General de la OEA condena masacre de 72 migrantes en México*, 27 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-306/10>.
[159] Centro de Información de las Naciones Unidas, Comunicado No. 10/211, *La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pide acciones urgentes ante los últimos asesinatos en México*, 27 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.cinu.mx/comunicados/2010/08/la-alta-comisionada-de-la-onu/>.
[160] CIDH, Comunicado de Prensa No. 86/10, *CIDH condena matanza de inmigrantes en México*, 27 de agosto de 2010. Disponible en <http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/86-10sp.htm>.
[161] Organización de las Naciones Unidas, Comité de Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, *Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 74 de la Convención. Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares*. *México, CMW/C/MEX/CO/2*, 3 de mayo de 2011, párr. 28. Disponible en <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/co/CMW.C.MEX.CO.2_sp.pdf>.
[162] CIDH, *Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 48/13, 30 de diciembre de 2013, párr. 151. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf>.
[163] *Ibidem*, párr. 153.
[164] CIDH, *Situación de derechos humanos en México,* OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 45. Disponible <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf>.
[165] *Idem*.
[166] Naciones Unidas, *Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, CED/C/MEX/CO/1, 5 de marzo de 2015, párr. 24. Disponible en <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fMEX%2fCO%2f1&Lang=en>.
[167] *Idem*.

Capítulo 5

LA TRAGEDIA EN LA REGIÓN FRONTERIZA DE COAHUILA: ALLENDE, LOS CINCO MANANTIALES Y PIEDRAS NEGRAS

Manuel Pérez Aguirre y Anuar Ortega Galindo

El estado de Coahuila se ubica en el noreste de la República Mexicana, en la frontera con Estados Unidos. Al norte colinda con el estado de Texas, al este con Nuevo León, al sur con San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, y al oeste con Chihuahua. Es la tercera entidad más extensa del país, con una superficie de 151 751 km^2, que representa 7.74% del territorio nacional, apenas detrás de Chihuahua y Sonora. Coahuila de Zaragoza, nombre oficial del estado, tiene 38 municipios y su capital es Saltillo.

Para 2010, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010,[1] la población del estado era de 2 748 391, lo que representaba 2.5% de la población nacional. La distribución por género era de 53.3% de hombres y 46.7% de mujeres. El municipio de Saltillo, situado en la frontera con Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, es el más poblado; en el año de referencia concentró 26.4% de la población estatal, seguido por Torreón, con 23.3%, y Monclova, con 7.9%. Según el INEGI, cada uno de estos municipios pertenece a una región metropolitana distinta; el primero a La Laguna, que también incluye a los municipios de Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo (los dos últimos pertenecen a Durango); el municipio de Saltillo da nombre a otra región metropolitana, que también incluye a los de Arteaga y Ramos Arizpe; en tanto, los municipios de Monclova, Castaños y Frontera integran la zona de Monclova-Frontera; el estado tiene otra zona metropolitana, la de Piedras Negras, integrada por el municipio del mismo nombre y el de Nava.

En 2012, Coahuila aportó 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, equivalente a 436 096 millones de pesos (a precios constantes de 2008). El sector secundario concentró prácticamente la mitad del PIB estatal (51.5%), seguido de cerca por el sector terciario (46.3%) y el sector primario concentró una proporción muy

baja de él, apenas 2.3%. No obstante, es el sector terciario el que concentra la mayor proporción de población ocupada, 57.7%, le sigue el sector secundario con 35% y después el primario, con 6.24%. La industria automotriz y la minera son las actividades económicas más importantes del estado.

Para 2012, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de este estado fue de 0.776,[2] lo que lo ubicó en el quinto lugar nacional, apenas por detrás de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León y Distrito Federal. Otros datos que pueden citarse para tener una idea de las condiciones del estado son, todos ellos para 2010: proporción de viviendas con agua entubada, 98.2%; proporción de viviendas con piso de tierra, 1.6% para el mismo año; porcentaje de población analfabeta, 2.6%.[3] En todos estos indicadores estadísticos, Coahuila tiene un mejor desempeño que el promedio nacional.

Como Tamaulipas, Coahuila se caracteriza por el control de un partido sobre la vida política local. En términos llanos, el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida la entidad desde hace ocho décadas. Más aún, ha conservado y adaptado la homogeneidad partidista que caracterizó al antiguo régimen posrevolucionario.[4] Esto se ve con claridad en la composición del Congreso local, en donde el PRI conservó la mayoría en todo momento: 57.14% en 2008, 60% en 2011 y 64% a partir de 2014.[5] Siguiendo a Casar,[6] la homogeneidad partidista ininterrumpida inhibe la división de poderes, así como las elecciones limpias y competitivas, y evidencia pluralismo limitado, en el sentido de un clásico de Linz.[7]

En materia de seguridad, puede mencionarse que Coahuila tiene cuatro órganos de seguridad y justicia por cada 100 mil habitantes, lo que coloca a este estado en rezago respecto del promedio nacional, ya que tal cifra es de siete órganos por cada 100 mil habitantes. En el tema del número de personas ingresadas a centros penitenciarios por presuntos delitos del fuero común, hay diferencias importantes entre el promedio nacional y el estatal, ya que, en 2013, hubo 105.2 personas recluidas por cada 100 mil habitantes en Coahuila, en tanto que el promedio nacional para ese año fue de 153.8 personas recluidas por cada 100 mil habitantes.

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal, esta entidad tiene cinco regiones geográficas.[8] La primera de estas regiones está compuesta por diez municipios: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. El clima en esta región es caluroso en primavera y verano, y frío en invierno. Los municipios de Acuña y Piedras Negras son los más importantes de esta región en términos económicos, ya que concentran la actividad manufacturera característica de la frontera norte de México, en tanto que, en otros municipios, como Guerrero, Hidalgo, Jiménez y Ocampo, se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería.

Al sur de la región anterior se encuentra la región carbonífera, integrada por los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas. Como lo indica su nombre, esta región se caracteriza por la presencia de importantes yacimientos minerales, principalmente carboníferos. Es la región menos poblada de la entidad.

La región Centro-Desierto comprende los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada. Es la región más extensa de la entidad, caracterizada por amplias zonas con ecosistemas desérticos. La extracción de mineral es la actividad predominante en la región.

La región Sureste colinda con Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Contiene los municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo, capital del estado. La principal actividad económica de esta región es industrial, debido a la presencia de un clúster automotriz, donde importantes empresas transnacionales producen sus autos. Es la segunda región más poblada del estado.

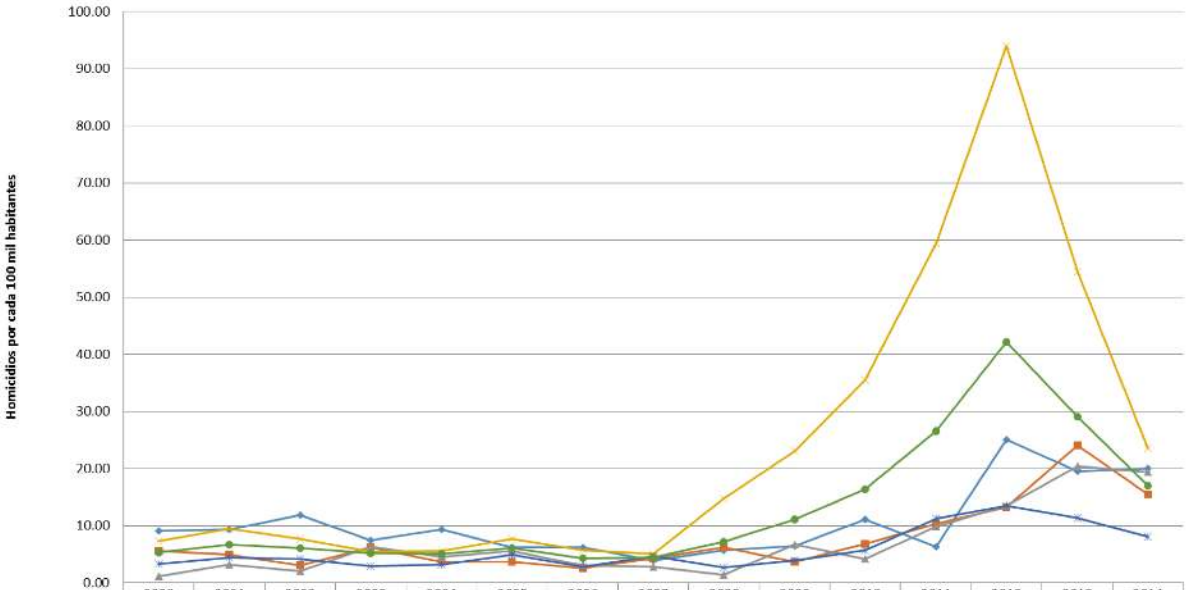
Finalmente, la región de La Laguna colinda con Durango. Los municipios que pertenecen a esta región son los de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca. En el pasado, esta región disponía de importantes recursos hídricos, 13 lagunas distribuidas en diferentes zonas de la región; sin embargo, obras de recolección pluvial, como algunas presas, provocaron que se

desecaran, por lo que el clima es árido. La principal actividad económica de la zona es industrial, con la presencia de empresas importantes dedicadas a sectores tan diversos como alimentación, minería o comercio.

Incidencia criminal en las regiones de Coahuila

Como se aprecia en la siguiente imagen, la violencia homicida se incrementó paulatinamente en la entidad desde 2007; alcanzó su nivel máximo en 2012 y descendió a partir de entonces. Sin embargo, como se observa, la dinámica es diferente entre las regiones, con La Laguna mostrando una tendencia muy clara que, además, determina el comportamiento de la entidad, y otras con trayectorias erráticas. Como se aprecia, La Laguna determina el comportamiento de la tasa de homicidios en la entidad, pues el resto de las regiones que componen el estado —Fronteriza, Carbonífera, Centro y Sureste— mantuvieron tasas de homicidios dolosos menores que las de La Laguna y las tasas estatales. Aun así, en términos generales, se aprecia un incremento significativo en la entidad desde la segunda mitad de la década pasada.

Tasa de homicidios dolosos en Coahuila por regiones (2000-2014)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fronteriza	9.05	9.36	11.86	7.49	9.36	6.22	6.22	3.96	5.66	6.50	11.07	6.33	25.04	19.51	20.03
Carbonífera	5.61	4.98	3.12	6.23	3.74	3.74	2.49	4.36	6.23	3.74	6.88	10.32	13.19	24.08	15.48
Centro	1.15	3.16	2.01	6.31	4.59	5.61	3.09	2.81	1.40	6.73	4.14	9.84	13.47	20.46	19.42
La Laguna	7.35	9.42	7.74	5.42	5.55	7.72	5.70	5.11	14.73	23.05	35.51	59.37	94.02	54.51	23.53
Sureste	3.32	4.48	4.19	2.89	3.18	4.99	2.82	4.74	2.69	3.97	5.68	11.25	13.52	11.36	8.07
Estatal	5.31	6.74	6.05	5.13	5.09	6.09	4.29	4.45	7.21	11.14	16.34	26.56	42.21	29.11	17.06

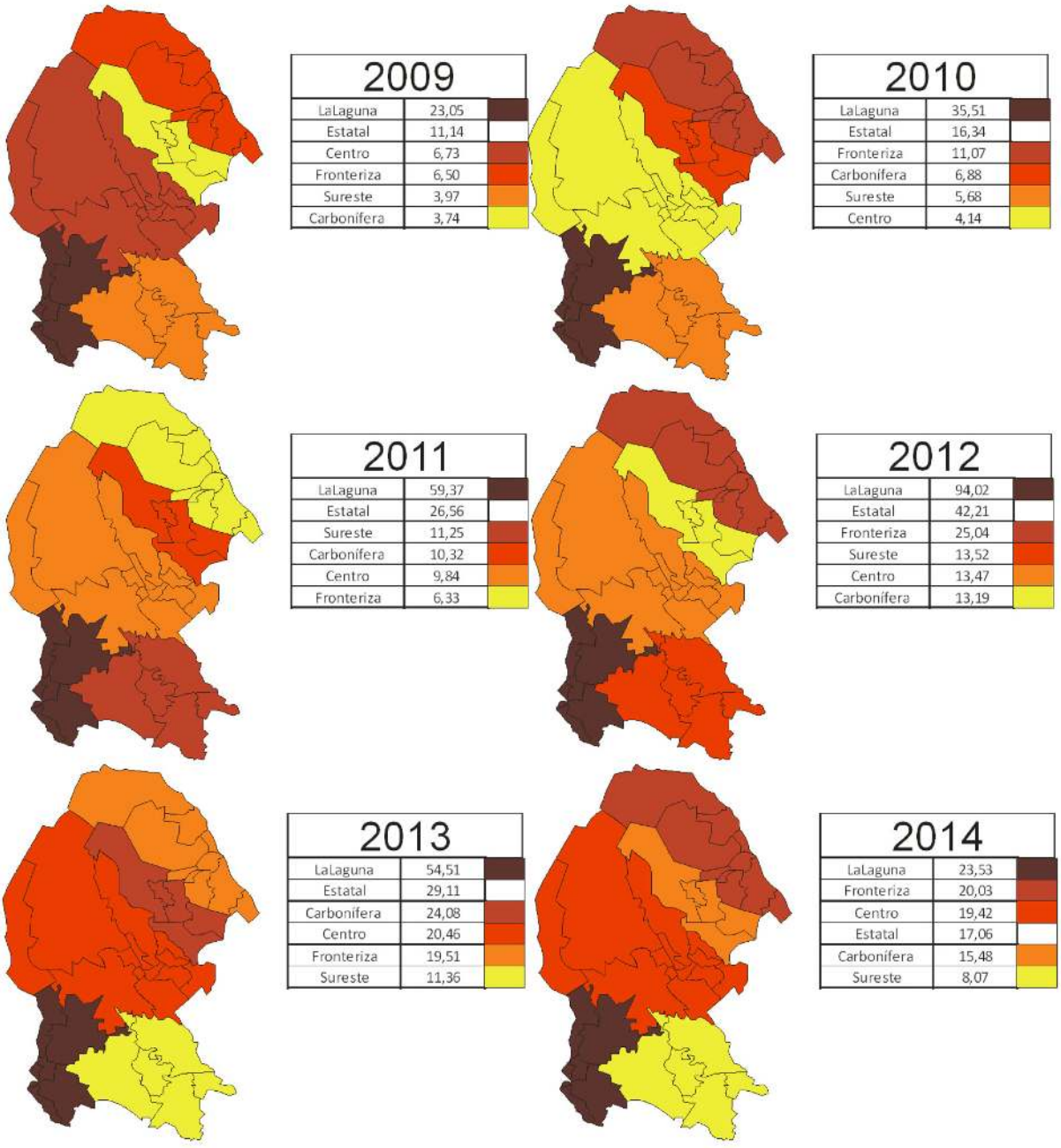
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

El incremento principal en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se dio en la región de La Laguna, ya que, de registrar en promedio 9.57 homicidios por cada 100 mil habitantes en el periodo 1990-2006, pasó a registrar 43.53 en el periodo 2007-2014. La mayoría de los homicidios en esta región se registraron en el municipio de Torreón. Para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, el número de homicidios por cada 100 mil habitantes en ese municipio fue de 45.34, 78.01, 122.42 y 53.16, respectivamente. El resto de los municipios de la región tuvieron un promedio de homicidios superior al de las otras cuatro regiones del estado.[9]

Particularmente, de las regiones cuyas tasas de homicidios fueron menores a las registradas a nivel estatal, destaca el caso de la región Fronteriza, la cual en el año 2010 mantuvo una tasa de homicidios similar a la tasa registrada en 2002, la cual fue de 11.07 (2010) y 11.86 (2002). Asimismo, en dicha región y para el año 2011, la tasa de homicidios disminuyó y se colocó en 6.33; no obstante, un año posterior volvió a incrementarse. Cabe mencionar

que en comparación con las otras regiones que integran el estado de Coahuila, la región Fronteriza y la región Centro son las únicas que destacan porque la tasa de homicidio siguió en aumento en 2014, en comparación con lo sucedido en las otras regiones, donde las tasas de homicidio fueron a la baja después del año 2012.

Tasas de homicidios en Coahuila por región (2009-2014)

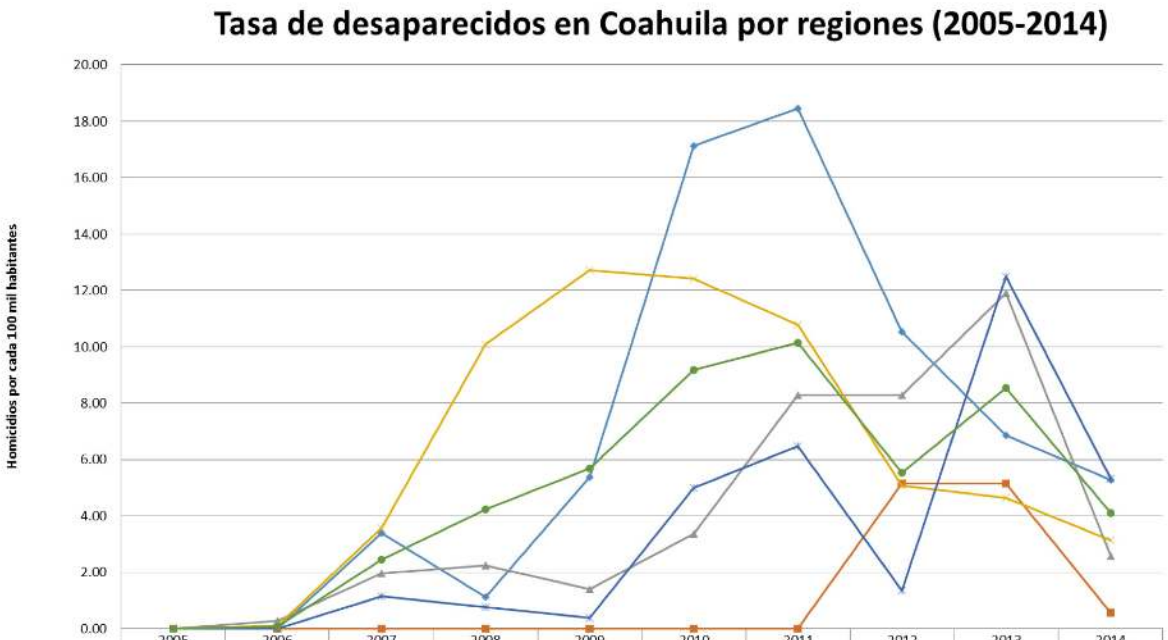


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Aunque los cambios en las tendencias son menos claros, la región Fronteriza presentó un incremento considerable en el número de homicidios registrados. Es importante mencionar que, en el periodo 1993-2004, el número de homicidios en esta región fue superior al del resto de regiones, pero entre 2005 y 2008 esta cifra disminuyó hasta alcanzar niveles similares al resto. La tasa de homicidios volvió a incrementarse en 2009, hasta alcanzar su máximo en 2012, registrando 25.04 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este caso, la mayoría de homicidios se registraron en el municipio de Piedras Negras, pero los municipios de Acuña y Allende también tuvieron una participación importante.

Llama la atención que en los 25 años de los que se tiene registro (1990-2014), en todos se registraron homicidios en Piedras Negras y Acuña. Además, siguiendo con el análisis regional, Allende registró un número muy alto de homicidios en 2012 y 2013, con 30.87 homicidios por cada 100 mil habitantes en ambos años. Como ocurrió con La Laguna y la entidad en general, la región Fronteriza presenta un declive a partir de 2013.

Las otras regiones muestran comportamientos interesantes. Carbonífera presenta un aumento sistemático desde 2010 hasta 2013, pero sus niveles siempre están por debajo de la tasa estatal. Centro, por su parte, presenta un comportamiento errático hasta 2010; a partir de ese momento se aprecia una tendencia ascendente. La región Sureste, donde se encuentra Saltillo, capital del estado, muestra una tendencia similar a la estatal, teniendo los años más difíciles entre 2011 y 2013. Aun así, podría decirse que esa zona se mantiene relativamente en paz, pues, a diferencia de La Laguna, no tuvo cambios abruptos y, a diferencia del resto de regiones por debajo de la media, se caracteriza por su estabilidad.

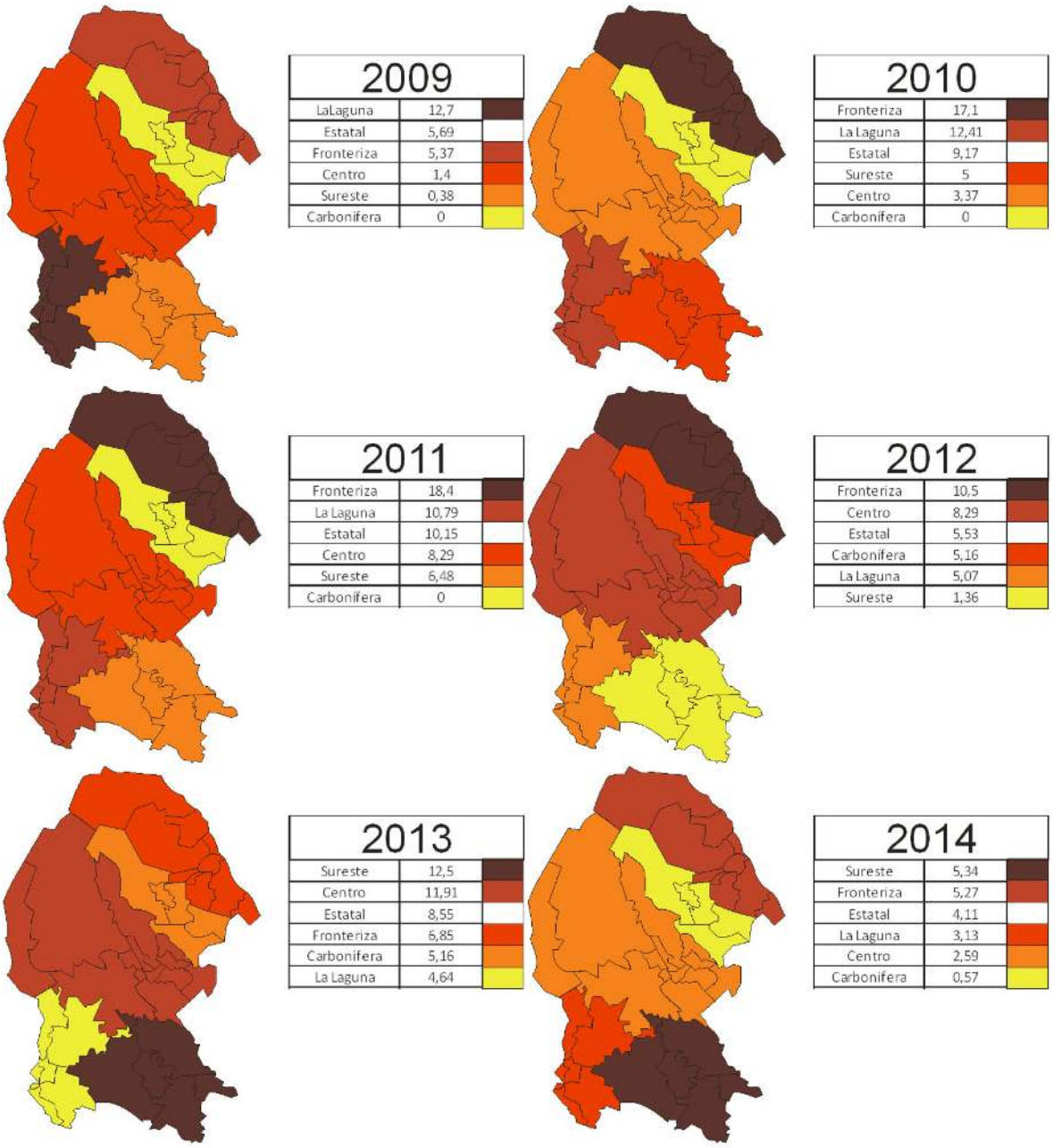


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fronteriza	0.00	0.00	3.39	1.13	5.37	17.13	18.45	10.54	6.85	5.27
Carbonífera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.57
Centro	0.00	0.28	1.96	2.24	1.40	3.37	8.29	8.29	11.91	2.59
La Laguna	0.00	0.12	3.56	10.10	12.71	12.41	10.79	5.07	4.64	3.13
Sureste	0.00	0.00	1.15	0.77	0.38	5.00	6.48	1.36	12.50	5.34
Estatal	0.00	0.08	2.44	4.25	5.69	9.17	10.15	5.53	8.55	4.11

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

En el tema de las personas reportadas como desaparecidas, los datos disponibles se limitan al periodo 2005-2014 y muestran una tendencia al alza más clara a partir de 2006. Si bien en la región de La Laguna creció de manera importante el número de desaparecidos por cada 100 mil habitantes, tal cambio no fue tan drástico como en el caso de los homicidios. El valor máximo que presentó esta región fue en 2009, con 12.71 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, muy similar a la cantidad registrada en 2010, que fue de 12.41. Para los nueve años que se registran en el gráfico, el promedio de personas desaparecidas por cada ١٠٠ mil habitantes en esta región fue de ٦.٢٥. En ٢٠١٢ se registró una baja considerable en el número de homicidios, respecto de ٢٠١١; en dicho año hubo 5.07 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes y la tendencia continuó hasta alcanzar el valor de 3.13 en 2014. Una vez más Torreón fue el municipio de la región que concentró el mayor número de desaparecidos.

Tasas de desaparecidos en Tamaulipas por región (2009-2014)



2009	
LaLaguna	12,7
Estatal	5,69
Fronteriza	5,37
Centro	1,4
Sureste	0,38
Carbonifera	0

2010	
Fronteriza	17,1
La Laguna	12,41
Estatal	9,17
Sureste	5
Centro	3,37
Carbonifera	0

2011	
Fronteriza	18,4
La Laguna	10,79
Estatal	10,15
Centro	8,29
Sureste	6,48
Carbonifera	0

2012	
Fronteriza	10,5
Centro	8,29
Estatal	5,53
Carbonifera	5,16
La Laguna	5,07
Sureste	1,36

2013	
Sureste	12,5
Centro	11,91
Estatal	8,55
Fronteriza	6,85
Carbonifera	5,16
La Laguna	4,64

2014	
Sureste	5,34
Fronteriza	5,27
Estatal	4,11
La Laguna	3,13
Centro	2,59
Carbonifera	0,57

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

La región Fronteriza registró los valores más altos en el indicador referente a los desaparecidos, alcanzando el valor máximo en 2011, con 18.45 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, cifra muy cercana a la que se registró en 2010, que fue de 17.13. En promedio, de 2005 a 2014, la región Fronteriza registró 6.82 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. No obstante,

en 2012 comenzó un descenso significativo respecto a los años previos, aunque sin alcanzar el nivel de 2009. A partir de ese año, la tendencia a la baja continuó, hasta llegar a 5.27 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes en 2014. El municipio que más contribuyó con los registros de personas desaparecidas en la región fue Piedras Negras. Sin embargo, vale la pena señalar que eso duró durante los años más álgidos de desapariciones, ya que al final del periodo fueron los municipios de Guerrero e Hidalgo los que registraron el mayor número de personas desaparecidas.

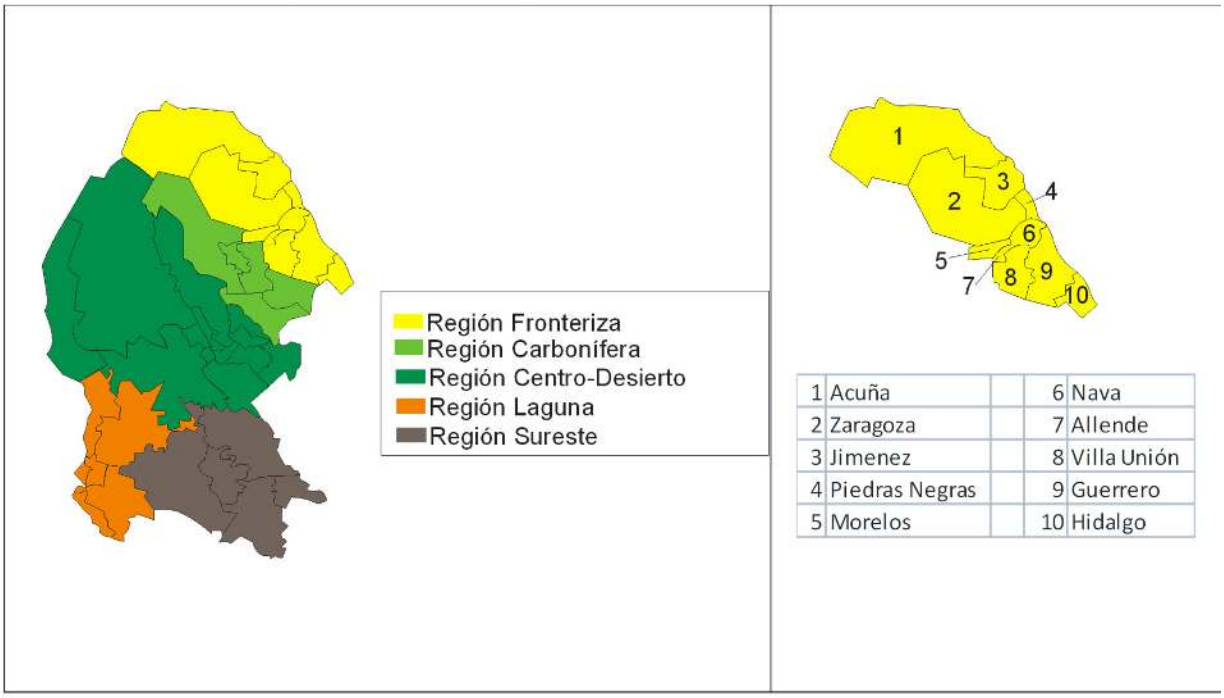
Un dato interesante es que el número de desapariciones se incrementa en el resto de las regiones conforme descendía en La Laguna y Fronteriza. Es importante diferenciar las tendencias de ambas regiones, ya que, si bien alcanzaron un valor muy similar en 2013, de 11.91 para la primera región y de 12.50 en la segunda, hay diferencias en las tendencias previas a ese año. Así, desde 2006 puede observarse un incremento constante, aunque moderado, en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes registrados en la región del Centro; alcanzó el valor de 8.29 en 2011, que se repitió el año siguiente, para llegar al máximo en 2013 y regresar en 2014 a un valor similar (2.59) al de 2008, cuando fue de 2.24 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. En la región Sureste las tendencias fueron menos claras, ya que hubo incrementos en 2007 y 2008, pero en 2009 el número de desaparecidos descendió para ser ligeramente mayor al de 2006, en tanto que en 2010 y 2011 también hubo alzas en las tasas, que se redujeron en 2012, cuando alcanzó el valor de 1.36 desapariciones por cada 100 mil habitantes, muy similar al de 2007 (1.15), y en 2014 esta región registró un valor de 5.34, casi el mismo que el que registró la región Fronteriza, que ese año fue de 5.27.

El municipio de Allende

El municipio de Allende se localiza al norte de Coahuila, en la región Fronteriza. Es uno de los municipios más pequeños del estado, pues apenas concentra 0.17% del territorio estatal. La población se distribuye entre una localidad urbana, la cabecera municipal, y 43 localidades rurales. El clima en este municipio es de tipo extremo,

con altas temperaturas en primavera y verano, y con un frío intenso en el invierno; además, el terreno es preponderantemente plano. La principal actividad económica es la agricultura y uno de los productos característicos del municipio es la siembra y cosecha de nueces.

Regiones de Coahuila y Municipios de la Región Fronteriza



1	Acuña	6	Nava
2	Zaragoza	7	Allende
3	Jimenez	8	Villa Unión
4	Piedras Negras	9	Guerrero
5	Morelos	10	Hidalgo

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A pesar de no ser muy extenso, este municipio concentraba 4.98% de la población estatal en 2010. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Allende tenía un IDH de 0.773, apenas 3 milésimas inferior al promedio estatal, por lo que ocupaba el octavo lugar en el estado. De las 6 322 viviendas habitadas que se registraron en el Censo de Población de 2010, 96.5% tenían piso diferente de tierra y 95.7% disponía de agua de la red pública. Lamentablemente, la información disponible sobre alfabetización o condiciones de seguridad y justicia es muy limitada, por lo que no se reportan cifras referentes a tales temas.

La tragedia de la región fronteriza de Coahuila

No se sabe el momento exacto del arribo de los Zetas a la región. Según Adolfo Efrén Tavira Alvarado, antiguo miembro de los Zetas

en Coahuila y testigo protegido en el juicio contra Marciano Millán, los Zetas llegaron a Coahuila en 2004.[10] A decir de un importante político de la entidad, Armando Luna, entrevistado por Martínez Ahrens,[11] los Zetas llegaron a Coahuila en 2005.

Donde sí hay coincidencia es en que llegaron como avanzada de *La Compañía* a colonizar esa parte del país. Antes de eso, según Tavira, "no existían los cárteles, cada quien podía comprar su mercancía".[12] Para Mario Alfonso Cuéllar Salazar, *El Poncho*, uno de los líderes más importantes en la región, "los Zetas impusieron el modelo de Alejandro Magno cuando conquistó el imperio persa",[13] afirmó como testigo protegido en el juicio contra José Treviño en Estados Unidos.

Cuenta Tavira que fue a presentarse con Galindo Mellado Cruz en 2004, Z10 o "Comandante Mellado", quien le explicó que las cosas habían cambiado drásticamente y que, a partir de ese momento, ellos le darían la droga y "todo lo que quisieran mover o comprar en Piedras Negras tenía que reportarlo".[14] En otras palabras, los criminales locales no debían pertenecer organizacionalmente a los Zetas para trabajar para ellos y generarles ganancia.

No queda claro cuándo, si fue durante el liderazgo del Z10 o con el de su sucesor, Lucio Hernández Lechuga, *El Lucky*, pero los Zetas establecieron un sistema que hizo de Piedras Negras una de las plazas más importantes para ellos, sólo detrás de Nuevo Laredo. En este punto vale la pena recordar que, aunque *La Compañía* también controlaba Reynosa y Matamoros, esos lugares eran gestionados por el Cártel del Golfo (CDG), en parte porque ésos eran sus bastiones históricos y en parte por la estrategia de Osiel Cárdenas para el manejo de su organización.[15] Es decir, los Zetas tuvieron que colonizar sus propios pasos fronterizos para acceder de verdad al negocio del tráfico de drogas.

Desde su visión militar, que implicó una verdadera revolución para la mecánica de las organizaciones criminales en el país, los Zetas seguían la premisa de conquistar y controlar territorios. En el norte de Coahuila, esa lógica se tradujo en cuatro cursos de acción. El primero fue mimetizarse con las familias notables de la zona, "como los Garza o los Moreno, gangrenaron el tejido social, se hicieron con

el poder".[16] Parte fundamental fue ingresar a los negocios legales del norte de Coahuila. Es decir, los Zetas colonizaron la zona y sus negocios, formales e informales. Rodrigo Humberto Uribe Tapia, antiguo miembro de los Zetas como operador económico en la región, declaró en el juicio contra Marciano Millán que "ayudó a los líderes de la organización a comprar de 30 a 40 propiedades y lavar 50 millones de dólares para los Zetas".[17] El Black City Mall, uno de los principales centros comerciales en Piedras Negras, era propiedad de uno de los líderes principales, según la declaración de Uribe Tapia.

El segundo es que el control de los Zetas en la región fronteriza era posible por la protección de las autoridades. Siguiendo con el testimonio de Uribe Tapia en el juicio contra Marciano Millán, muchos funcionarios de primer nivel en el gobierno de Humberto Moreira recibían pagos periódicos a cambio de protección contra autoridades federales —probablemente en labores de vigilancia y prevención de captura—, control carcelario —especialmente en el Cereso de Piedras Negras— y libertad de acción, en negocios que no se limitaban al tráfico de narcóticos sino que incluían empresas mineras y constructoras.[18]

Explícitamente, Uribe afirmó que los criminales utilizaron vehículos oficiales para trasladarse y evitar el arresto de autoridades federales.[19] Sus declaraciones adquieren fuerza al considerar que

> la descomposición del poder estatal facilitó a esta impunidad. La titular de la Procuraduría General en Coahuila, Claudia González López, sobre quien debería haber recaído la investigación de la matanza fue destituida un año después al destaparse que daba protección a los Zetas. El secretario estatal de Finanzas, Javier Villarreal, acabó entregándose en El Paso a las autoridades de EE UU por lavado de dinero; y el gobernador interino de la época, Jorge Torres, está ahora prófugo por el supuesto saqueo de las arcas estatales.[20]

El tercero fue montar la organización sobre las estructuras previas. Alfonso Cuéllar fue una figura fundamental en este proceso. Él traficaba drogas de Piedras Negras a Eagle Pass antes de la llegada de los Zetas a la región norte de Coahuila. Cuando los de "La Última Letra" arribaron a la región, convirtieron a Cuéllar en el

segundo al mando.[21] Finalmente, el cuarto fue establecer un sistema de subcontratación: “Entregaba droga a los cabecillas distribuidores pero exigía que respaldaran sus operaciones con inmuebles y negocios. Si fallaban o las autoridades de Estados Unidos les decomisaban los narcóticos, Los Zetas se quedaban con sus propiedades”.[22]

Un momento trascendental en la historia reciente del crimen organizado en Coahuila es el traslado de Lucio Hernández a Veracruz, en noviembre de 2008, “donde fue detenido por la Marina en diciembre de 2011 porque —afirmó *El Mamito* en el Juicio de Austin— el Z40 filtró su ubicación”.[23] Aparentemente, *Poncho* Cuéllar asume la jefatura de la plaza de Piedras Negras. Con este movimiento, los Treviño pretendían controlar toda la franja fronteriza del noreste que correspondía a los Zetas, incluida la región fronteriza de Coahuila y hasta llegar a Nuevo Laredo, bajo la dirección de Omar Treviño, Z42.[24]

Como se aprecia, Mario Alfonso Cuéllar era un personaje clave para la organización, uno de los lugartenientes centrales en el entramado y su importancia no debe ser menospreciada porque explica en buena parte los acontecimientos que siguieron a su huida. Cuéllar era capaz de transportar hasta tres toneladas de cocaína al mes, gracias a sus contactos en Texas, especialmente en Dallas.[25] “En un momento dado, *Poncho* estuvo al mismo nivel que Z42”, declaró Efrén Tavira durante el juicio contra Marciano Millán.[26]

Entre sus virtudes mercantiles estaba involucrar a las familias ricas de la zona, utilizando sus negocios para invisibilizar y transportar su mercancía. Uno de ellos era Héctor Moreno Villanueva, *El Negro*, un joven de familia prominente en la región, propietaria, entre otras cosas, de una empresa de transporte local. Moreno comenzó a trabajar con Cuéllar desde 2007 o 2008. *El Negro* estaba encargado de la operación logística para el tráfico de drogas en Piedras Negras. Se encargaba de empaquetar, contactar a los clientes y organizar la distribución mediante empresas transportistas —de hecho, su familia era propietaria de una empresa de transporte local.

Según el relato del mismo *Negro* Moreno, la droga se dividía en

pequeños paquetes que contrabandeaba por el río Bravo, llegaba a casas de seguridad de Eagle Pass y desde ahí se trasladaba por carretera a San Antonio, Austin y Dallas para su distribución al menudeo.[27] La droga se cruzaba en tráileres de empresas transportistas y se escondía en casas de seguridad en la ciudad vecina de Eagle Pass. La figura de Luis Garza Gaytán no queda del todo clara, aunque puede decirse que era subordinado a Moreno.

Llegando a Dallas, José Vázquez la revendía a las diversas pandillas estadounidenses que la distribuían por toda la Unión Americana. También era el encargado del envío de dinero y de la compra ilegal de armas de fuego que enviaría para los principales jefes zetas. Héctor Moreno "añadió que recibían unos cuatro millones de dólares cada ١٠ días por ٨٠٠ kilos de cocaína que se enviaban cada mes. Ese dinero llegaba a México escondido en tanques de combustible de vehículos en billetes de todas las denominaciones, pero las reglas para pagar al contador de *Z40* y *Z42* era entregarles sólo billetes de 20, 50 y 100 dólares".[28]

Todo marchaba a la perfección. El negocio prosperaba gracias a la tranquilidad que brindaba el control sobre el territorio y la colaboración estrecha con las autoridades, sin necesidad de disputar la plaza permanentemente. Parte del éxito radicaba en una red de comunicación entre los miembros principales —que incluía al Z40 y al Z42, a Cuéllar, a Moreno y, seguramente, a José Vázquez —, utilizando el sistema de mensajería encriptado de BlackBerry.[29]

Los recursos que generaba el paso fronterizo entre Piedras Negras, Nuevo Laredo y Acuña, por un lado, ayudaron a consolidar el lugar de los Zetas dentro de *La Compañía*, sobrepasando rápidamente a sus socios del CDG; por otro lado, ayudaron al crecimiento de la figura de Miguel Ángel Treviño en el interior de los Zetas. Cuando comenzó la guerra entre Zetas y CDG, la región fronteriza de Coahuila adquirió aún más importancia. La plaza de Piedras Negras generaba ganancias de 5 a 10 millones de dólares mensuales, indispensables para los esfuerzos de guerra en el noreste, sobre todo porque, según *El Mamito*, los Zetas tenían más dificultades para conseguir armamento que el CDG.[30] De hecho, los gastos operativos consumían cerca de dos terceras partes de los

ingresos y eran destinados a sobornos a las autoridades, gastos operativos, pagos a proveedores y salarios al personal.

La venganza de los Treviño

Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y Luis Garza desertaron a principios de 2011. Los tres se encuentran en la actualidad en Estados Unidos donde, al menos Cuéllar y Moreno, son testigos protegidos de la DEA (Administración para el Control de Drogas; en inglés: *Drug Enforcement Administration*). Su huida provocó una serie de desapariciones y asesinatos masivos en la región fronteriza, incluidos, por lo menos, Piedras Negras y los Cinco Manantiales (Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza).

¿Por qué se van? Hay dos versiones al respecto, aunque parecen complementarias. Cuéllar declaró que "en cierto momento, Héctor Moreno y José Vázquez estaban denunciando a la DEA y el ICE [Departamento de Inmigración y Control de Aduanas; en inglés: *Immigration and Customs Enforcement*] las operaciones de narcotráfico.[31] Esas dependencias les avisaron a las autoridades mexicanas. Pero las autoridades mexicanas les dijeron a los capos que alguien dentro de mi organización estaba traicionando. Por eso hui a los Estados Unidos".[32] Según el reportaje de Cedillo,[33] los mensajes que funcionarios de la PGR mostraron al Z40 provenían del celular de Treviño.

Con la información disponible, puede afirmarse que los Treviño se enojaron por tres razones. La primera es que, según el testimonio de Héctor, *El Negro*, Moreno durante el juicio contra José Treviño en 2013, los Treviño se enojaron después de algunos decomisos de las autoridades estadounidenses.[34] La segunda es que, antes de huir, Cuéllar avisó a sus cercanos que desertaría, dándole tiempo a Moreno y a Garza de llevarse consigo las ganancias del mes (5 a 10 millones de dólares) y un libro de contabilidad que detallaba las actividades de la organización en la zona, incluidos el tráfico de drogas, tráfico de personas y lavado de dinero mediante la compra de caballos de carrera, según la versión de Cedillo.[35] Esto limitaba los esfuerzos de los Zetas en la guerra contra el CDG y, a pesar de tener mucho control sobre las autoridades locales, dejaba en

posición de vulnerabilidad a los hermanos que controlaban el norte de Coahuila. Finalmente, la deserción de Cuéllar y Moreno también fue una afrenta personal, porque el primero era padrino del hijo de Omar Treviño, quien estaba casado con la hermana de Moreno.

¿Qué pasó? Hay dos formas de ver el asunto. Desde una perspectiva limitada, los hechos se reducirían al municipio de Allende y su temporalidad abarcaría poco más de un fin de semana. Desde esta visión, las víctimas apenas llegarían a 28, 11 asesinadas y 17 desaparecidas, según el procurador Homero Ramos,[36] y 48 viviendas destruidas. Sin embargo, ese número tan reducido ni siquiera concuerda con las víctimas que aparecen en el expediente al que tuvimos acceso, que da un total de 42 víctimas, al contabilizar las de antes y después del fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011 en Allende. Lo que pasa es que la Procuraduría sólo considera a aquéllas por las que recibió denuncia, sin investigar o considerar como tales a desaparecidos que figuran dentro del expediente. Por otro lado, aun si se redujera la tragedia al municipio de Allende, los relatos hablan de decenas de personas, hasta 150 sólo en Allende.[37] Finalmente, no deja de llamar la atención que el operativo estatal denominado “Búsqueda en Vida Coahuila Norte” no esté plasmado en su extensión geográfica en el expediente y apenas haya acelerado las indagatorias y causado la detención de unos cuantos presuntos perpetradores.

Desde una perspectiva más amplia, las dimensiones de la tragedia son mucho mayores. Es importante subrayarlo: la venganza cubrió el norte de Coahuila, donde Allende sería uno de los municipios afectados. La versión amplia deriva del trabajo de los periodistas nacionales y extranjeros —incluso antes de que la noticia se convirtiera en un escándalo nacional, tras los reportajes de Osorno[38] y Martínez Ahrens—,[39] de la información de las organizaciones de la sociedad civil en la región y de los testimonios de antiguos zetas en los juicios estadounidenses contra Marciano Millán y José Treviño. Su característica principal es que considera los acontecimientos como regionales, con una duración mayor a marzo de 2011, con un mayor número de criminales involucrados y, sobre todo, de víctimas.

La perspectiva limitada: el fin de semana negro en Allende

La versión reducida deriva del análisis del expediente al que nos dio acceso el gobierno de Coahuila, aunque contrastada con la información de las organizaciones de la sociedad civil, así como de los reportajes nacionales y extranjeros, sobre todo de aquéllos con testimonios de los juicios en Estados Unidos contra José Treviño, en 2013, y Marciano Millán, en 2016. Se limita casi por completo a dos acontecimientos: el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011 y el domingo 11 de marzo de 2012 en el municipio de Allende, aunque a veces menciona a Sabinas, Nava y Guerrero.

Allende era un municipio secuestrado por los Zetas antes de las desapariciones masivas de marzo de 2011. En el expediente de la Procuraduría hay casos que no parecen estar relacionados, pero que dejan ver el grado de descomposición de las autoridades en el municipio. Por ejemplo, el secuestro de un *halcón* de los Zetas y otra persona por parte de los policías municipales en enero de 2011, quienes lo entregan al jefe de la plaza de Allende, Fernando Ríos Bustos, *Comandante Pala* o *El Pala*,[40] quien los asesina y desaparece sus restos en el rancho San José,[41] mejor conocido como rancho de los Garza, ubicado a un costado de la carretera que comunica Allende y Villa Unión, en el kilómetro 7.5. Este incidente también deja ver que el lugar servía como *cocina* o centro de exterminio desde antes de la persecución a la familia Garza, con anuencia de alguno de sus miembros.

Unas semanas antes, en febrero de 2011, un grupo de zetas secuestraron a tres personas que trabajaban en una construcción en Allende; una de ellas era menor de edad. El hijo de uno de ellos era policía municipal de Allende. Al enterarse del secuestro de su padre, solicitó apoyo al comandante de la corporación, quien le notificó que no se metiera en esos asuntos y “que mejor se fuera a dormir temprano”.[42]

Como se ve, la corporación policial de Allende estaba relacionada con el grupo criminal, pues todos recibían dinero de los Zetas, desde el director hasta el policía de vialidad, según el expediente. Los policías funcionaban como *focas* o *halcones*, encargados de informar cualquier movimiento de otras autoridades en el municipio,

desde soldados y marinos hasta policías judiciales o miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).[43] Desde luego, los policías sabían que los Zetas se dedicaban "a extorsionar, *levantar*, secuestrar y matar gente",[44] pero no hacían nada para evitarlo. La complicidad del grupo criminal y de la policía municipal llegó al nivel de que entraban por detenidos a las celdas municipales: "se los llevaban si la persona tenía cuentas pendientes con ellos [los Zetas]".[45]

Básicamente, el expediente versa sobre el secuestro, el asesinato o desaparición de personas relacionadas con Luis Garza Gaytán, *La Güichina* o *El Güichín,* un joven radicado en Allende y miembro de la organización de Cuéllar, aunque su contacto más cercano era con Héctor Moreno, *El Negro*. De hecho, la información con la que se cuenta no deja claro su estatus dentro de la organización; sólo se sabe que estaba subordinado a Cuéllar y que trasladaba droga hacia José Vázquez, en Dallas.[46] Los preparativos criminales comenzaron en marzo de 2011, algunos días antes de la toma de Allende. El *Comandante Pala* implementó un operativo de vigilancia en las propiedades de la familia Garza. Un vigilante recuerda: "Recibí órdenes por parte del *Comandante Tintín* y éste a su vez me dijo que a él la orden se la había dado *El Pala*, de que fuéramos a checar todos los domicilios de la familia Garza". Había que vigilarlos porque los iban a *levantar* "a todos para matarlos".[47] Otro integrante del grupo criminal escuchó decir que iban a hacer "la fiesta en Allende […] con gentes de la familia Garza".[48] Naturalmente, en un municipio capturado por el crimen organizado, los mandos policiales estaban enterados de la planeación de los *levantamientos*. Los oficiales tenían la orden de "*levantar* a cualquiera de apellido Garza y llevarlo al *Comandante Pala* o *El Canelo*, miembros de los Zetas en Allende".[49]

Según el expediente, el operativo de los criminales comienza al atardecer del viernes 18 de marzo de 2011, cuando varias *estacas* toman el rancho de los Garza. Las estacas —comandos de personas fuertemente armadas transportadas en camionetas, son las unidades básicas de operación de los Zetas— incluían a sicarios apodados *El Panda, Chilero, Lalo, El Perro, El Rayas* y comandados

por José Manuel Díaz Guajardo, el *Comandante 7*. Después llegó el *Comandante Pala*, jefe de la plaza de Allende, junto a Gabriel Zaragoza, *El Flacamán*, y su hermano Germán Zaragoza, *El Canelo*, además de Juan Rafael Arredondo Oviedo, *El Cubano*, y varias patrullas de la policía municipal. Una camioneta tumbó el portón principal para que los sicarios entraran "tirando balazos y agarrando a quien[es] se encontraban presente[s]", de siete a diez personas.[50]

José Alfredo Jiménez, *El Pájaro*, narra que el *Comandante Pala*, el *Flacamán*, *El Canelo, El Cubano* y él amarraron con colas de rata a tres familiares de Luis Garza Gaytán y a dos trabajadores de la familia, en la casa de su padre. Después se fue a cargar gasolina para el vehículo; cuando regresó, "me di cuenta de que ya ahí habían llevado a otras personas", que incluían a familiares y trabajadores, al menos uno más, "cuatro mujeres, las cuales eran señoras grandes, pero no podría decir sus edades, a dos niños de entre tres y cuatro años, varios chavos jóvenes de entre 13 y 18 años más o menos y también a varios hombres que eran de entre 30 a 55 años de edad, algunos de éstos que según se habían traído de Piedras Negras".[51] Una de las referencias que hay en el expediente sobre otros municipios es que a las señoras de mayor edad y a los niños los llevaron al municipio de Zaragoza. ¿Qué pasó con ellas? No queda claro si la Procuraduría siguió esas pistas.

Mientras esto ocurría en el rancho de los Garza, que está a la mitad de la carretera 15 que comunica Allende con Villa Unión, una multitud de camionetas (cuyo número varía entre 40 y 50, dependiendo el autor)[52] tomaban la localidad. Considerando que cada camioneta usualmente transportaba a cuatro personas, estaríamos hablando de 160 a 200 personas fuertemente armadas. Según Cedillo,[53] los sicarios llegaron a la alcaldía por los registros de catastro a nombre de los familiares de Luis Garza y Héctor Moreno, una de las razones por las que sorprende que los familiares de *El Negro* casi no aparezcan en el expediente del gobierno de Coahuila. ¿Qué pasó con los Moreno y los Villanueva que radicaban en Allende?, ¿por qué no aparecen en el expediente? Según las narraciones de los periodistas, los sicarios llamaron a todos los empleados de Moreno y de los Garza para interrogarlos por accesos

secretos, cuartos ocultos o posibles cajas de seguridad. Posiblemente, los criminales estaban buscando el dinero de las ganancias robadas y ésa es la razón por la que también levantaron a muchos albañiles y empleados.

¿Qué hacían las autoridades? Entre las 11:00 y 11:30 de la noche, la policía municipal encuarteló a sus elementos, con excepción de cuatro muy cercanos a los Zetas: Rogelio Flores, *El Papaniquis*, Guadalupe Ávalos Orozco, *La Lupe*, Rosario Téllez, *La Chayo*, y Jesús Alejandro Bernal.[54] La orden fue no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran, según la declaración de varios policías municipales.[55] Los policías narran que escucharon muchas detonaciones de arma de fuego, seguidas de reportes de casas incendiadas. Los incendios se propagaron a lo largo de la localidad porque los bomberos de Allende también recibieron amenazas: "se acercaron dos camionetas de reciente modelo con personas vestidas de civil y gente armada […] nos iban a matar y también a nuestras familias" si apagaban algún incendio, declaró uno de los elementos.[56]

Resulta inconcebible aceptar que el alcalde Sergio Lozano no tenía conocimiento de la situación, como lo declaró por escrito. No sólo su policía estaba totalmente penetrada por la organización desde mucho tiempo atrás, sino que, durante un fin de semana, de acuerdo con la versión limitada del expediente, los Zetas asolaron el municipio, incendiaron y destruyeron sus casas, amenazaron a sus bomberos, mientras la policía no aparecía y, cuando lo hacía, era para secuestrar y entregar personas a los criminales. Cuenta una madre de uno de los desaparecidos de Allende: "El mismo alcalde nos lo dijo, lo repetía como buscando justificación: 'Me pidieron el pueblo o mi familia'... ¡Y entregó el pueblo! Claro, él tiene a su familia completa, los demás no".[57]

Al día siguiente, sábado 19 de marzo, miembros de la familia Garza acudieron a la comandancia de la policía municipal para solicitar auxilio por la desaparición de sus familiares, como haría cualquier ciudadano. Los uniformados contestaron que no le podían ayudar porque "no tenían ni gente ni armamento", que la ciudad estaba muy violenta.[58] Esas personas decidieron visitar el rancho de

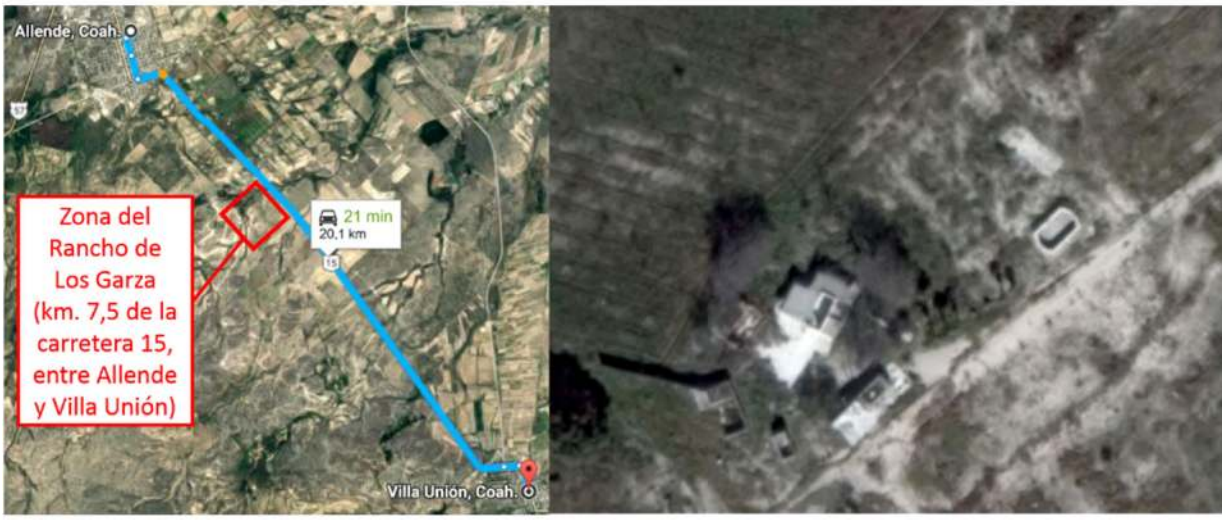
los Garza, pero no pudieron entrar, según la declaración de un familiar que pudo hablar por teléfono con ellos por última vez. Según declaraciones contenidas en el expediente, un policía municipal, al que identificaremos como PP20, presumió en una borrachera que los había detenido en un retén,[59] comenzando una balacera en las calles de Allende: "[V36] empezó a disparar y mató a tres, pero como eran muchos no pudo con todos y ahí lo mataron, y al parecer también a [V12]". Otra versión, de *El Pájaro*,[60] es que los vio en el rancho de los Garza "tirados en el piso y se veían heridos", junto a los familiares que buscaban, en condiciones salvajes y humillantes que no vale la pena narrar.

Hay un limbo en el expediente sobre qué pasó el 19 de marzo. El sentido común indica que continuaron los *levantones*, homicidios y desapariciones, pero no figura en los documentos a los que tuvimos acceso. La narración reinicia el 20 de marzo, cuando un comando armado, encabezado por el jefe de la plaza, el *Comandante Pala*, llegó al domicilio de otro Garza, ubicado en el centro de la cabecera municipal, llevándose a tres personas en una patrulla.[61] Los policías Jesús Alejandro Bernal y Guadalupe Ávalos Orozco, *La Lupe*, levantaron a otro Garza con su familia, los subieron en la parte trasera de la patrulla número 8220 y los entregaron a los Zetas en un lugar a la salida de Allende.[62]

A las 7:30 de la tarde se registró un incendio en una pequeña construcción del rancho de los Garza. Los bomberos llegaron al lugar y se percataron de que había muchas personas vestidas de civil con chalecos pasamontañas y armas largas, además de Guadalupe Avalos, *La Lupe*, y Jesús Alejandro Bernal Guerrero, elementos de la policía municipal. Desde el vehículo de bomberos lograron observar con vida a los detenidos: "les gritaban y los estaban golpeando y maltratando". De un camión con redilas bajaban "tambos metálicos grandes cerca de la bodega del rancho", y se percibía un fuerte "olor a diésel o gasolina". Al percatarse de la presencia de los bomberos, los Zetas los ahuyentaron y amenazaron de muerte. "Entonces, al momento de estarnos retirando del lugar, la gente de los Zetas metió a la bodega grande a toda la familia Garza", concluye un bombero.[63]

Según *El Pájaro*, diez sicarios sacaron de la casa a todos los detenidos y los llevaron caminando al interior de una bodega cercana a la casa.[64] Ahí los mataron a todos, "disparándoles en la cabeza".[65] Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, estuvieron presentes durante la desaparición de los cadáveres en el rancho Los Garza —aunque, debe apuntarse, también estuvieron presentes en Piedras Negras durante ese fin de semana, según los testimonios recogidos de la cobertura a los juicios en Estados Unidos—. En palabras de *El Canelo*: "a otros los quemaron en el rancho de los Garza […] pero ahí no estuve porque estaban presentes el 40 y el 42, y los escoltas no dejaban acercarnos. En esos hechos participaron como cinco estacas y con el 40 y el 42 entraron otras diez".[66] Este episodio permite apreciar la falta de jerarquía de los sicarios que asolaron Allende, sobre todo cuando se contrasta con los episodios de Piedras Negras, en el siguiente apartado.

Posible ubicación del Rancho San José o Rancho de los Garza



Fuente: Expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila

Dos criminales narran la forma en que quemaron los cuerpos en el rancho de los Garza. La primera narración, que podría denominarse tradicional y concuerda con la información disponible en internet o con entrevistas a sicarios,[67] habla del uso de tambos metálicos para basura. Según la declaración de PP21,[68] miembro de los Zetas, los criminales realizaron agujeros en los costados del tambo, colocaron los cuerpos en el interior, y los rociaron con diésel y gasolina

mientras los consumía el fuego. Los encargados de esa operación mantienen el fuego, rociando pequeñas cantidades de combustible a los toneles durante cinco o seis horas. “Las cenizas son enterradas en un pozo que se tapa con tierra y es aplanado para no dejar rastro”.[69] Según *El Pájaro*, la bodega del rancho de los Garza estaba repleta de pastura, por lo que los criminales sólo rociaron los cuerpos con combustible y prendieron fuego, manteniéndolo durante la noche hasta que los cuerpos desaparecen. Según esta versión, la intensidad del incendio fue tan alta que consumió el techo de la bodega.[70] Las muestras tomadas por los peritos en criminalística de campo en la bodega encontraron 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales carbonizados.[71]

Mientras esto ocurría, en el mismo 20 de marzo, familiares de los desaparecidos avisaron a los militares apostados en la garita del kilómetro 53 de que algo raro estaba ocurriendo en el rancho de los Garza. Un grupo de ellos acudió al lugar; rastrearon el sitio, “pero no encontraron a nadie”, [72] curiosamente.

Después vino el saqueo. Los Zetas alentaron a la población a que asaltara las mansiones atacadas. Los vecinos robaron muebles, puertas, aparatos electrodomésticos y demás artículos para el hogar. Según el expediente, 32 viviendas fueron destruidas y algunas de ellas incendiadas; de acuerdo con los testimonios, fueron saqueadas y vandalizadas por la población. Después, trajeron maquinaria pesada para demolerlas,[73] o de plano las incendiaron. La policía presenció el saqueo y “nomás se quedaron mirando”.[74] Cuenta Osorno: “Había gente que se llevaba desde macetas hasta refrigeradores. Uno de los casos más recordados es el de un labriego que se llevó una elegante sala negra de piel que tuvo que poner bajo un mezquite porque su tejabán era demasiado pequeño para meterla”.[75]

Según el expediente, los días de violencia extrema en Allende terminaron ese fin de semana. Después vino el miedo y el silencio para la población, en especial para unas víctimas estigmatizadas por los motivos de la venganza. Los documentos facilitados por las autoridades de Coahuila mencionan algunos casos más, como la aparición de unos niños desaparecidos y otros episodios de

violencia en municipios cercanos a Allende, de los que hablaremos en el siguiente apartado. La investigación de la Procuraduría sólo narra tres acontecimientos de violencia por parte de los Zetas en el municipio.

Los Zetas continuaron estremeciendo a la población y, en especial, a aquellos vinculados al apellido Garza. El 2 de enero de 2012, policías municipales de Allende secuestraron a D1, la primera persona que denunció legalmente la desaparición de sus familiares. Las autoridades sometieron a la persona y la subieron a la patrulla, según narraron testigos.[76] La persona continúa desaparecida.

Dos meses después, María Guadalupe Ávalos, *La Lupe*, ordenó a otros tres policías municipales, Ricardo Díaz Miranda, *El Richard*, Fernando Hernández Reyes, *El Panone*, y PP22, secuestrar a una familia completa de cuatro personas, contando a los dos padres y a dos hijos muy pequeños, en un negocio de telefonía celular en el centro de Allende.[77] T19 supo que "habían llevado a familiares de [V36] de apellido Garza, ya que ellos se habían alcanzado a escapar en aquel entonces y no les habían hecho nada, y yo creo que como los vieron que andaban en la ciudad se los llevaron, desconociendo por qué hayan regresado".[78] Los secuestradores entregaron a los padres a los Zetas, entre los que se encontraba *El Canelo*, en la Textilera, un lugar a las afueras de Allende. Ahí, en presencia del comandante Juan Ariel Hernández Ramos, Rosario Téllez, *La Chayo*, y Rogelio Flores Cruz, *El Paniques*, entregaron a los padres a los Zetas. *La Chayo* se llevó con ella a los niños.

La tragedia continuó para los Garza. V36 fue uno de los Garza que logró escapar, huyendo hacia Piedras Negras, aunque por lo menos dos de sus casas fueron saqueadas y destruidas. Regresó a Allende en marzo de 2012, casi un año después de la toma de la ciudad y sus familiares no volvieron a saber de él. Su hijo, V17, quien atravesaba una fuerte depresión por la tragedia familiar, entre otras cosas, también regresó a Allende.

> Una persona conocida de la familia, de quien no recuerdo nombre ni teléfono, habló vía telefónica a la casa para avisar que un [día] antes, es decir, el día sábado 04 de agosto de 2012, vieron a mi hermano en el interior de la casa de mis papás […] misma que al igual que otras en la ciudad, fue dañada y

> quemada en el mes de marzo de 2011, y me dicen que mi hermano está gritando y llorando, añorando a mis papás […] llegó una patrulla de la policía municipal de esa ciudad y dos policía[s] ingresaron a la casa, lo sacaron, lo abordaron a la patrulla y se lo llevaron de ahí con rumbo desconocido.[79]

La necesidad de una perspectiva amplia: la venganza en la región fronteriza de Coahuila

Desafortunadamente, la tragedia permaneció en silencio durante mucho tiempo y apenas están emergiendo las historias. Eso, entre otras cosas, imposibilita, por el momento, una versión amplia, sistematizada y coherente de los hechos. Los eventos en la región fronteriza de Coahuila involucran una gran cantidad de lugares, criminales y víctimas. Es un rompecabezas inmenso del que apenas se conoce una parte. La pieza más clara es el móvil de la matanza: quiénes causaron el enojo de los Treviño y por qué causas. La oscuridad se incrementa cuando se busca establecer las dimensiones de la masacre, de las que falta mucho, demasiado, por investigar. Así, más que la presentación de una perspectiva amplia, este apartado trata de la necesidad de su formulación, a partir de los indicios que surgen de la prensa, de los juicios en Estados Unidos y del mismo expediente de la Procuraduría de Coahuila.

El expediente que las autoridades coahuilenses nos permitieron revisar proporciona mucha información sobre la organización de los criminales y su funcionamiento, sobre los mecanismos que utilizan para la desaparición de cadáveres mediante zonas de exterminio —conocidas como *cocinas*—, y sobre la penetración y captura del aparato gubernamental en el ámbito municipal.

Así, puede decirse que el expediente trata de tres cosas, principalmente: del sadismo de los Zetas contra la familia Garza, del funcionamiento de la organización criminal y de la incapacidad de las autoridades para proteger a sus ciudadanos —ya sea por captura, como pasó claramente con la policía municipal, por falta de protección, como demuestra la inacción de los bomberos, o por desconocimiento o aquiescencia, de las autoridades municipales, estatales y federales—. ¿Qué nivel de corrupción o incompetencia es necesario para que no hicieran nada al respecto o, peor aún, ni

siquiera se enteraran? Enfocándonos en la parte más evidente en el expediente, ¿de verdad los soldados no vieron nada extraño cuando visitaron el rancho de los Garza?

Sin embargo, hay que decirlo, el expediente no sirve para esclarecer los hechos ni para explicar sus causas. Enfocándonos en lo primero, simplemente da detalles de eventos que deben ser considerados desde una perspectiva más amplia, piezas de rompecabezas que, aunque trágicas por sí mismas, no permiten dimensionar los acontecimientos. Hay tres tipos de limitaciones muy claras en la versión oficial: el número de víctimas, el alcance geográfico y los límites temporales.

Sin duda, el número de víctimas es el aspecto más controvertido del caso. La versión oficial afirma, en voz del procurador Ramos Gloria, que las víctimas apenas llegarían a 28, 11 asesinadas y 17 desaparecidas, y 48 viviendas destruidas.[80] Sin embargo, el mismo expediente contradice esa versión tan limitada sobre el número de víctimas. En realidad, la investigación de las autoridades coahuilenses sólo busca atender los casos por los que recibió denuncia, sin siquiera indagar un poco en las pistas que surgen de su expediente. Una forma de ejemplificarlo es decir que, sólo siguiendo los testimonios del expediente al que tuvimos acceso, estaríamos hablando de 35 víctimas, cifra superior a la que defienden las autoridades coahuilenses obstinadamente.

Nadie se atrevía a dar una cifra de las víctimas antes de 2013. Uno de los primeros trabajos periodísticos sobre la tragedia optó por utilizar el número de casas destruidas como manera de aproximarse a las dimensiones de la tragedia en el municipio de Allende:[81] entre 40, según el gobernador Rubén Moreira, y 80, según un padrón levantado por los vecinos del municipio por aquellas fechas. “Sólo en el municipio de Allende, según el alcalde [Reynaldo Tapia], desaparecieron entre 30 y 40 familias”.[82] El primero en utilizar una cifra fue Héctor Moreno durante su comparecencia contra José Treviño: “ellos [los Zetas y los Treviño, en particular] mataron 200 o 300 personas en Allende, Coahuila”.[83] Un texto que, sin duda, logró atraer la atención de la opinión pública hacia una tragedia hasta entonces olvidada fue el de Diego Osorno para *Vice* en 2014, “El

manantial masacrado", en el que se narra a partir del testimonio de uno de los pobladores: "Se habla de 300, pero yo creo que son más. Era un caos. Aquí la gente ya no se quiere acordar de lo que pasó".[84]

Los juicios en Estados Unidos contra José Treviño y Marciano Millán han contribuido significativamente a arrojar luz sobre la oscuridad del caso. Adolfo Efrén Tavira, exgerente de producción de Televisa y traficante de armas y drogas para los Zetas en Eagle Pass dijo, en su comparecencia en el juicio contra Millán, que "hubo mucha gente involucrada, más de 300. Esa noche, me dijeron, mataron a más de 40 personas".[85] Él vio a más de 30 personas arrodilladas, relacionadas laboral o personalmente con *Poncho* Cuéllar, en un predio de Piedras Negras que sirvió como zona de exterminio,[86] sólo en el lapso que estuvo secuestrado por su cercanía con Cuéllar, que no duró más de unas horas según puede inferirse de la narración.

La segunda limitación, ampliamente relacionada con la primera, es el alcance geográfico de la investigación. Por ejemplo, otro testigo en el juicio contra Millán, José Luis Rodríguez, *El Pollo*, "afirmó que los Zetas le informaron que alrededor de 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas con combustible o con ácido para desaparecer sus restos […] gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras [Negras], las áreas cercanas".[87] Como se aprecia, gran parte del problema es que las autoridades limitan el caso a un municipio, cuando su propia investigación arroja una multitud de pistas sobre acontecimientos vinculados en otros lugares. Por ejemplo, en el expediente se mencionan personas de Piedras Negras a punto de ser asesinadas en el rancho de los Garza, ataques a personas cercanas a Cuéllar en Sabinas, otra *cocina* en un rancho llamado Los Tres Hermanos en Zaragoza, etcétera. ¿Qué pasó con esos indicios?

Es importante considerar las dimensiones regionales de la masacre. No se trató sólo de Allende y de la desaparición de restos en el rancho de los Garza, sino de una matanza que involucró a Allende, Acuña, Piedras Negras, Nava y Guerrero, por lo menos. En este sentido, el enfoque que la justicia estadounidense utilizó en el

juicio contra Marciano Millán es un precedente importante que debe seguirse en futuras investigaciones. Por ejemplo, una parte de la declaración de Héctor Moreno, *El Negro*, dice lo siguiente:

> – ¿Señor Moreno, cómo vino a los Estados Unidos? —preguntó el fiscal.
> – En marzo del 2011 estaban sucediendo una gran cantidad de problemas en Coahuila y solicité asilo al gobierno de Estados Unidos —respondió el testigo.
> – ¿Cuando usted dice que había problemas a qué se refiere, podría especificar?
> – Un montón de muertes. Ellos comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Múzquiz, en Sabinas. Ellos también me querían matar. Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila.[88]

Es decir, las víctimas no sólo fueron de Allende, la hecatombe alcanzó otros municipios. En el mismo tenor, los lugares de desaparición o *cocinas* no se limitan al rancho de los Garza, sino que debe considerarse, por lo menos, el Cereso de Piedras Negras y, según uno de los primeros textos sobre el tema,[89] Guerrero. En el expediente se habla del rancho Los Tres Hermanos en Zaragoza. Además, Efrén Tavira señala un terreno en Piedras Negras como zona de ejecución, aunque no queda claro si ahí *cocinaban* los cuerpos.[90]

Posible ubicación del campo de exterminio, según el testimonio de Efrén Tavira



Fuente: Buch, Jason y Contreras, Guillermo, " A trial offered inside look at a violent, bloody cartel", *San Antonio Express News*, 23 de julio de 2016

En ese sentido, la utilización del término "La masacre de Allende" claramente conviene a una versión limitada del asunto. Es necesario

apuntar que los periodistas que han dado seguimiento a la tragedia han sido muy cuidadosos al respecto. Osorno habla de un manantial masacrado;[91] Cedillo en todo momento, incluso en el primero de sus textos,[92] mencionaba a Nava y, posteriormente, involucraba a Piedras Negras y los municipios de los Cinco Manantiales. “El escarmiento duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas, como Piedras Negras, en la salvaje frontera mexicana con Texas. Entre 200 y 300 personas desaparecieron”.[93] Lo mismo es válido para los periodistas de Estados Unidos, como Jason Buch y Guillermo Contreras, quienes en todo momento se refieren a un espectro amplio de municipios y, en buena medida, gracias a su trabajo conocemos más de las dimensiones geográficas del asunto.

La tercera limitación del expediente es temporal. Si bien los textos revisados parecen coincidir con el expediente en que los momentos más álgidos ocurrieron el fin de semana entre el 18 y el 20 de marzo, los *levantamientos* y desapariciones continuaron durante bastante tiempo. El mismo expediente menciona casos a mediados de 2012. Más aún, “el primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío”[94] y, posteriormente, sufrió la misma suerte que sus familiares. Una víctima más de la tragedia fronteriza de Coahuila.

Los periodistas, por su parte, han hecho esfuerzos por entender los acontecimientos desde un periodo más amplio. Según Cedillo, “la barbarie ocurrió entre marzo y agosto, ya que los sicarios estuvieron *levantando* a decenas de personas que tuvieran alguno de esos apellidos, además de sus amigos e incluso a sus empleados, a quienes se llevaron para desaparecer sus cuerpos en “narco cocinas”.[95]

Otro elemento es el periodo de destrucción y demolición de las casas. Si uno se atiene sólo al expediente, pareciera que la destrucción fue muy rápida, en cuestión de días. Sin embargo, se entiende que fue un lapso prolongado, entre la detención, tortura, ejecución y desaparición de cadáveres. Paralelamente, permitieron el saqueo y la vandalización de las propiedades, hasta que regresaron, aproximadamente una semana después, con maquinaria pesada para destruir paredes, techos y pisos. Los

criminales no tenían prisa, no serían molestados en sus actividades.[96]

Más allá de sus limitaciones para decirnos qué pasó, la principal deficiencia es que el expediente no da razones para explicar la matanza o, mejor dicho, no sigue las que surgen de sus documentos. Las razones que arroja el expediente son similares a las que han esbozado diversos periodistas o a las que se utilizaron en los juicios contra José Treviño, en 2013, y Marciano Millán, en 2016: miembros importantes de los Zetas estaban delatando a los Treviño con las autoridades estadounidenses y, cuando los descubren, huyen con dinero de la organización necesario para continuar los esfuerzos de la guerra contra el CDG. En ese sentido, vale la pena subrayar que la investigación de las autoridades de Coahuila no abunda sobre los vínculos familiares o de amistad que tenían los Treviño con Cuéllar y Moreno.

Sin embargo, los personajes que causan la ira de los Treviño no tienen el mismo peso en el expediente que en las investigaciones periodísticas o en los juicios en Estados Unidos. Así, aunque aparecen brevemente en los documentos, Alfonso Cuéllar y Héctor Moreno parecen personajes secundarios en la investigación. La centralidad notoria de la familia Garza genera la impresión de que Luis Garza Gaytán era un criminal fundamental en la organización de los Zetas. Sin embargo, el resto de las fuentes, tanto periodísticas como del sistema judicial de Estados Unidos, lo coloca en un papel subordinado a Cuéllar y, posiblemente, a Moreno. Sólo en el reportaje de Televisa transmitido en el programa *Punto de Partida*, conducido por Denise Maerker, tiene un lugar predominante en la jerarquía de la organización.[97] En los demás, es de subordinación, si es que aparece.

¿Cómo se explica esto?, ¿por qué no aparecen víctimas relacionadas con Cuéllar y Moreno en el expediente de las autoridades de Coahuila? Una respuesta tiene que ver con las limitaciones espaciales de la investigación. Así, considerando que Cuéllar radicaba y operaba en Piedras Negras, esos datos no estarían en un expediente dedicado al municipio de Allende. Sin embargo, esa limitación no alcanzaría a explicar por qué casi no

aparecen los apellidos Moreno o Villanueva en toda la investigación. Es decir, las víctimas se relacionan parcialmente con el móvil, dejando dudas sobre el paradero o existencia de otras.

Lo mismo ocurre con los victimarios. Llanamente, sólo los Treviño aparecen tanto en la versión de las autoridades de Coahuila como en los reportajes y los juicios en Estados Unidos. Ellos fueron los autores intelectuales de los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos masivos que asolaron a varios municipios de la región fronteriza de Coahuila. Sin embargo, los perpetradores son completamente distintos. No aparece *Dany* Menera o Marciano Millán, quien aparentemente sustituyó a Cuéllar como jefe de la plaza de Piedras Negras, quizá como premio a su brutalidad durante los acontecimientos que comenzaron en marzo de 2011.

Hay un episodio que, aunque parece irrelevante, muestra las actitudes diferenciadas del Z40 con su personal: “En ese momento llegó otro zeta, Daniel Menera —con un teléfono en la mano— y le dijo a Z40: “Comandante, ¿me permite? Tavira trabaja para nosotros, ya no trabaja para Cuéllar”, y le entregó el celular”.[98] Este relato contrasta claramente con la actitud que tenía el Z40 con los criminales de Allende. *El Canelo* narra que ni siquiera podían acercarse a él y que llegó con el doble de sicarios al rancho de los Garza. Surge una duda, ¿el expediente de las autoridades se centra en los personajes menores?

Comentarios finales

Como se aprecia, la matanza no se limita al municipio de Allende, sino que sus alcances fueron regionales y su duración fue mayor a sólo un fin de semana en marzo de 2011. Visto de otra forma, la masacre de Allende es un episodio muy trágico dentro de un ciclo de brutalidad en la región. En eso coincide con la masacre de los migrantes en San Fernando. Ésta es una similitud importante entre Allende y San Fernando: las dimensiones temporales y espaciales son mayores que las que tradicionalmente se les adjudican. O, si se quiere, sólo son un episodio más dentro de una serie de eventos lamentables que asolaron regiones enteras durante periodos extensos de tiempo.

¿Cómo se inserta la tragedia en el contexto de la guerra entre CDG y Z? Lo hace de manera lateral, sin ser determinante en la toma de decisiones. Es decir, la guerra sólo incrementó la urgencia por el dinero en efectivo para sostener a los sicarios, la compra de armas y el abastecimiento de la mercancía. Quizá, a falta de información al respecto, cabría suponer que aumentó los niveles de demencia entre ese grupo criminal. Sin embargo, vale la pena recordar que los Zetas, y en particular los Treviño, utilizaban la violencia extrema como mecanismo de intimidación. Eso podría explicar por qué impidieron la demolición total de casas destruidas y saqueadas en Allende y Piedras Negras, o que esporádicamente arrojaran cadáveres en esas construcciones. Se trataba, pues, de recordarle a la población y a las autoridades quiénes mandaban realmente en la frontera coahuilense.

Desafortunadamente, el objetivo de la masacre de Allende tiene un efecto revictimizador, pues la explicación oculta, de alguna forma, que la mayor parte de las víctimas eran gente sin vínculos con el crimen organizado: familiares o trabajadores con vidas normales. Más aún, Cuéllar y Moreno resultaron ilesos y permanecen protegidos, compareciendo contra la organización a la que pertenecían.

Esto vuelve a plantear consideraciones sobre la relación paradójica entre la justicia de Estados Unidos y el crimen organizado en el noreste mexicano. El juicio de Marciano Millán y el de José Treviño sirvieron para iluminar unos hechos particularmente oscuros. Sin embargo, vale la pena preguntarse cuánta responsabilidad tuvo el sistema de testigos protegidos en Estados Unidos para provocar esos acontecimientos, en un primer momento.

Notas

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Censo de Población y Vivienda 2010,* 2010. Disponible en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/>; consultado el 28 de septiembre de 2016.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología*, México, PNUD, 2014.

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Censo de Población y Vivienda*

2010, op. cit.

[4] Muchos académicos han estudiado el fenómeno en México. Véase Edward Gibson, "Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries", *World Politics*, 2005, vol. 58, núm. 1, pp. 101-132; Agustina Giraudy, *Subnational undemocratic regime continuity after democratization: Argentina and Mexico in comparative perspective*, tesis de doctorado, Estados Unidos, The University of North Carolina at Chapel Hill, 2009.

[5] Con información de la Dirección General de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/edos/index.htm>; consultado el 30 de septiembre de 2016. Y de la página electrónica del Congreso de Coahuila. Disponible en <http://congresocoahuila.gob.mx/portal/?page_id=13300>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[6] María Amparo Casar, "Las bases político-institucionales del poder presidencial en México", *Política y Gobierno*, 1996, vol. III, núm. 1, pp. 61-92.

[7] Juan Linz, *Totalitarian and Authoritarian Regimes*, Nueva York, Lynne Riener Pub, 2000.

[8] Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, *Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México*, México, INAFED, 2010. Disponible en <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/>.

[9] El promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes para los municipios que integran la región de La Laguna (Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca), excluyendo a Torreón, fue de 14.19, 16.41, 26.29 y 45.67 para el periodo 2010-2013, en tanto que, en el mismo periodo, el promedio para las cuatro regiones restantes de Coahuila (Fronteriza, Carbonífera, Centro y Sureste) fue de 6.94, 9.43, 16.30 y 18.85, respectivamente.

[10] Juan Alberto Cedillo, "Los Zetas, Reyes de Coahuila", *Proceso*, 23 de julio de 2016. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/448388/los-zetas-reyes-coahuila>, consultado el 29 de septiembre de 2016.

[11] Jan Martínez Ahrens, "Silencio, aquí se mata", *El País*, 5 de julio de 2014. Disponible en <http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/05/actualidad/1404594964_269006.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.

[12] Juan Alberto Cedillo, "Los Zetas, Reyes de Coahuila", *op. cit.*

[13] Juan Alberto Cedillo, "Historia de una matanza delirante", *Proceso*, 26 de abril de 2014. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/370694/historia-de-una-matanza-delirante>; consultado el 29 de septiembre de 2016.

[14] Juan Alberto Cedillo, "Los Zetas, Reyes de Coahuila", *op. cit.*

[15] Véase el Anexo 1, "Panorama de la violencia en el noreste mexicano".

[16] Jan Martínez Ahrens, "Silencio, aquí se mata", *op. cit*.

[17] Jason Buch y Guillermo Contreras, "A trial offered inside look at a violent, bloody cartel", *San Antonio Express News*, 23 de julio de 2016. Disponible en

<http://www.expressnews.com/news/local/article/Trial-offered-inside-look-at-a-violent-bloody-8405250.php?t=c0b75ea9cd6a5efc77&cmpid=twitter-premium>; consultado el 29 de septiembre de 2016.

[18] *Idem*.

[19] Redacción, "Líder Zeta confirma en EU que en tiempos de Moreira se usó prisión para disolver cuerpos en ácido", *Sin Embargo*, 9 de julio de 2016. Disponible en <http://www.sinembargo.mx/09-07-2016/3064758>; consultado el 29 de septiembre de 2016.

[20] Jan Martínez Ahrens, "Silencio, aquí se mata", *op. cit.*

[21] Juan Alberto Cedillo, "Historia de una matanza delirante", *op. cit.*

[22] *Idem*.

[23] *Idem*.

[24] A finales de la década pasada, por lo menos a partir de 2008, Heriberto Lazcano, Z3 o *El Verdugo*, delega las tareas de control del personal en Miguel Ángel Treviño Morales, Z40. Es un momento trascendental en la historia de la organización porque Z40 adquiere poder sobre las principales figuras de la organización. En un primer momento, parecía que Treviño estaba instalando un proceso de mejora de la calidad dentro de la organización, buscando maximizar las ganancias y optimizar los procesos. Jere Miles, agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, decía que "**al principio se puede decir que Lazcano estaba encantado de quedarse sentado y de que Treviño hiciera lo suyo**". En Dulce Ramos, "El 'Z-40' arrebata el liderazgo de los Zetas a 'El Lazca'", *Animal Político*, 27 de agosto de 2012. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2012/08/el-z-40-arrebata-el-liderazgo-de-los-zetas-a-el-lazca>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
Sin embargo, a largo plazo, más de un antiguo líder de los Zetas acusó a Treviño de filtrar información a las autoridades para debilitar el entorno de Lazcano. Entre otras cosas, las autoridades detuvieron o dieron de baja a muchos de los allegados a *El Verdugo*, como *El Hummer*, *La Ardilla* o *El Mamito*; diversas narcomantas hicieron referencia a una supuesta proclividad de Treviño por delatar a sus compañeros, sin contar las numerosas referencias en redes sociales sobre la traición de Treviño. Véase Óscar de Tagle, "Así es el 'Z-40' (semblanza)", *Animal Político*, 16 de julio de 2013. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2013/07/asi-es-el-zeta-40-semblanza>; consultado el 29 de septiembre de 2016.

[25] Jason Buch y Guillermo Contreras, "A trial offered inside look at a violent, bloody cartel", *op. cit*.

[26] Juan Alberto Cedillo, "Los Zetas, Reyes de Coahuila", *op. cit.*

[27] Redacción, "Allende, la matanza que nadie olvida", *El Diario de Coahuila*, 18 de noviembre de 2015. Disponible en <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2015/11/18/allende-matanza-nadie-olvida-544761.html>, consultado el 29 de septiembre de 2016.

[28] Juan Alberto Cedillo, “Los Zetas, Reyes de Coahuila”, *op. cit.*
[29] *Idem*.
[30] Véase la entrevista de la PGR a *El Mamito* durante su presentación. “Entrevista a el Mamito, presunto fundador de los Zetas”. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=HacDTEn2TDs>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
[31] Como se recordará, ésa es una práctica habitual para las autoridades estadounidenses, penetrando a las organizaciones criminales para que los miembros se delaten entre sí sin tener que detenerlos y hasta permitiendo que continúen con sus actividades ilícitas. En otro momento, se trató de la colaboración entre Osiel Cárdenas y la DEA, por medio de Juan Jesús Guerrero Chapa, a quien permitían operar dentro de *La Compañía* y traficar droga. Véase Alfredo Corchado y Kevin Krause, “Mexico’s Drug Violence: Deadly Deal”, *The Dallas Morning News*, 14 de abril de 2016. Disponible en <http://interactives.dallasnews.com/2016/cartels/>; consultado el 29 de septiembre de 2016.
[32] Juan Alberto Cedillo, “Los Zetas, Reyes de Coahuila”, *op. cit.*
[33] *Idem*.
[34] Jason Buch, “Zetas brutality bred informants”, *San Antonio Express News*, 27 de abril de 2013. Disponible en <http://www.mysanantonio.com/news/local_news/article/Zetas-brutality-bred-informants-4469695.php>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[35] Juan Alberto Cedillo, “Historia de una matanza delirante”, *op. cit.*
[36] Redacción, “Comparece Procurador Homero Ramos Gloria”, *El Diario de Coahuila*, 20 de julio de 2016. Disponible en <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2016/7/20/comparece-procurador-homero-ramos-gloria-591973.html>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[37] Juan Alberto Cedillo, “Historia de una matanza delirante”, *op. cit.*
[38] Diego Enrique Osorno, “El manantial masacrado”, *Vice*, febrero de 2014. Disponible en <http://www.vice.com/es_mx/read/el-manatial-masacrado>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[39] Jan Martínez Ahrens, “Silencio, aquí se mata”, *op. cit*.
[40] PP 11.
[41] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[42] Declaración testimonial de T6, obtenida el 31 de julio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[43] Declaración ministerial de Juan Rafael Arredondo Oviedo, *El Cubano*, obtenida el 9 de julio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende. En el mismo sentido

declara T9, en la declaración testimonial del 11 de noviembre de 2014, que consta en el expediente de la PGJEC sobre Allende.

[44] Hay más de una declaración al respecto en el expediente de la PGJEC sobre Allende. Declaración testimonial de T13, obtenida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende; Declaración testimonial de T11, obtenida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende; Declaración testimonial de T16, obtenida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[45] Declaración testimonial de T13, obtenida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[46] Testimonio de Héctor Moreno ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, *United States of America vs Frederick Wayne Anderson*, 17 de mayo de 2012.

[47] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[48] Ellos utilizaban el término fiesta para referirse a la desaparición de personas y la destrucción de casas. Declaración testimonial de T8, obtenida el 19 de septiembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[49] Declaración testimonial de Juan Ariel Hernández Ramos (comandante de la Policía Municipal de Allende), obtenida el 28 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[50] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[51] *Ídem*.

[52] Martínez Ahrens reporta 40, Cedillo 42 y Osorno 50. Véase Jan Martínez Ahrens, “Silencio, aquí se mata”, *op. cit*.; Juan Alberto Cedillo, “Historia de una matanza delirante”, *op. cit*.; Diego Enrique Osorno, “El manantial masacrado”, *op. cit.*.

[53] Juan Alberto Cedillo, “Historia de una matanza delirante”, *op. cit.*

[54] Declaración testimonial de T10, obtenida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[55] Declaración testimonial de T7, obtenida el 12 de agosto de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[56] Declaración testimonial de T17, obtenida el 10 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[57] Sanjuana Martínez, "El alcalde que entregó al pueblo tiene completa a su familia, nosotros no", *La Jornada*, 24 de julio de 2016. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2016/07/24/politica/007n1pol>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[58] Declaración de D9, obtenida el 4 de noviembre de 2011 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[59] Declaración de D10, obtenida el 11 de noviembre de 2011 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[60] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[61] *Idem*.
[62] Declaración testimonial de Juan Ariel Hernández Ramos (comandante de la Policía Municipal de Allende), obtenida el 28 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[63] Declaración testimonial de T14, obtenida el 23 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[64] Incluidos *El Pala, El Russo, El Blue, Chalan, Cabe, Meño, Flacamán, Cubano, Canelo* y *El Pájaro.*
[65] Declaración de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, ff. 431-434.
[66] Declaración ministerial de Germán Zaragoza Sánchez, *El Canelo*, obtenida el 8 de abril de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[67] Diego Enrique Osorno, *La Guerra de los Zetas: viaje por la frontera de la necropolítica, op. cit*.
[68] Declaración testimonial de PP21, obtenida el 19 de septiembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[69] *Idem*.
[70] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[71] Informe técnico en materia de antropología forense, elaborado por la Coordinación Criminalística de la División Científica de la Policía Federal el 11 de abril de 2014. Expediente de la PGJEC sobre Allende.

[72] Declaración de D9, obtenida el 4 de noviembre de 2011 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[73] Declaración ministerial de José Alfredo Jiménez Aguilar, *El Pájaro*, obtenida el 13 de junio de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[74] Declaración testimonial de T18, obtenida el 10 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[75] Diego Enrique Osorno, "El manantial masacrado", *op. cit.*
[76] Denuncia de D7, recogida el 29 de agosto de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[77] Declaración ministerial de Fernando Hernández Reyes, *El Panone*, obtenida el 25 de febrero de 2015, por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[78] Declaración testimonial de T19, obtenida el 25 de febrero de 2015, por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[79] Denuncia de D11, recogida el 12 de noviembre de 2014 por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Expediente de la PGJEC sobre Allende.
[80] Redacción, "Comparece Procurador Homero Ramos Gloria", *op. cit*.
[81] Juan Alberto Cedillo, "El apocalipsis en Coahuila", *Proceso*, 24 de diciembre de 2012. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/328697/el-apocalipsis-en-coahuila-2>; consultado el 30 de septiembre de 2016.
[82] Jan Martínez Ahrens, "Silencio, aquí se mata", *op. cit.*
[83] Jason Buch, "Zetas brutality bred informants", *op. cit.*
[84] Diego Enrique Osorno, "El manantial masacrado", *op. cit*.
[85] Jason Buch y Guillermo Contreras, "A trial offered inside look at a violent, bloody cartel", *op. cit*.
[86] Juan Alberto Cedillo, "Exempleado de Televisa confiesa que Zetas entregaron a Rubén Moreira una Suburban 'atestada de maletas de dinero'", *Proceso*, 14 de julio de 2016. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/447353/exempleado-televisa-confiesa-zetas-entregaron-a-ruben-moreira-una-suburban-atestada-maletas-dinero>; consultada el 1 de octubre de 2016.
[87] Redacción, "Fueron 300. Los disolvieron y quemaron en hornos por una venganza entre narcos, narra testigo en EU", *Sin Embargo*, 13 de julio de 2016. Disponible en <http://www.sinembargo.mx/13-07-2016/3066473>; consultado el 1 de octubre de 2016.
[88] Juan Alberto Cedillo, "Los Zetas mataron y quemaron a más de 300 personas en Coahuila: testigo", *Proceso*, 13 de julio de 2016. Disponible en

<http://www.proceso.com.mx/447092/los-zetas-mataron-quemaron-a-300-personas-en-coahuila-testigo>; consultado el 1 de octubre de 2016.

89 Juan Alberto Cedillo, “El apocalipsis en Coahuila”, *op. cit.*

90 Vale la pena detenerse un poco en la importancia del Cereso de Piedras Negras. Ese lugar era una pieza fundamental en el tablero zeta en el norte de Coahuila. No sólo se trató de la fuga masiva en 2012, sino que el penal sirvió de centro de operaciones de la organización. Según Uribe y un testigo no identificado durante el juicio de Marciano Millán, la cárcel tenía funciones de casa de seguridad, crematorio, almacén, taller para la modificación de vehículos y hasta escuela de sicarios.

91 Diego Enrique Osorno, “El manantial masacrado”, *op. cit.*

92 Juan Alberto Cedillo, “El apocalipsis en Coahuila”, *op. cit.*

93 Martínez Ahrens reporta 40, Cedillo 42 y Osorno 50. Véase Jan Martínez Ahrens, “Silencio, aquí se mata”, *op. cit*.

94 *Idem*.

95 Juan Alberto Cedillo, “Investigan a exfuncionarios por masacre de Allende, Coahuila”, *Proceso,* 29 de abril de 2014. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/370896/investigan-a-exfuncionarios-por-masacre-de-allende-coahuila>; consultado el 3 de octubre de 2016.

96 Redacción, “Gobierno de Coahuila difundirá identidad de víctimas de masacre de Allende”, *Proceso*, 14 de noviembre de 2014. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/387624/gobierno-de-coahuila-difundira-identidad-de-victimas-de-masacre-de-allende>; consultado el 3 de octubre de 2016.

97 Raymundo Pérez Arellano y Marco Tinoco, “La Venganza de los Zetas”, *Noticieros Televisa*, 28 de febrero de 2014. Disponible en <http://noticieros.televisa.com/mexico/1402/venganza-zetas0/>; consultado el 3 de octubre de 2016.

98 Juan Alberto Cedillo, “Los Zetas, Reyes de Coahuila”, *op. cit.*

Capítulo 6

DESARROLLO DEL EXPEDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA SOBRE EL CASO ALLENDE

Anuar I. Ortega Galindo

2011

Mayo	• Primera denuncia por desapariciones ocurridas durante los acontecimientos de marzo de 2011. • Inspección en los domicilios destruidos en Allende. • Agentes de investigación interrogan a pobladores; sobresale el interrogatorio de una persona que publicó en internet imágenes de las viviendas destruidas.

2012

Abril	• Orden de investigar lo sucedido en Allende; la Policía de Investigación debe: 1. Recabar testimonios. 2. Garantizar la seguridad de las víctimas y preservar evidencias. 3. Determinar quiénes fueron los responsables.
Mayo	• Ratificación de la denuncia por desaparición levantada en mayo de 2011.
Julio	• Solicitud de información a la autoridad local (al presidente municipal Sergio Alonso Lozano Rodríguez y al director y comandante de la Policía Municipal de Allende, Roberto Guadalupe Treviño Martínez) sobre los acontecimientos de marzo de 2011. • Declaración por escrito del presidente municipal de Allende en funciones durante marzo de 2011; no aporta nada relevante para la investigación. • Segunda denuncia por desapariciones ocurridas durante los acontecimientos de marzo de 2011.
Agosto	

	• Declaración por escrito del director de la Policía Municipal de Allende en funciones durante marzo de 2011; no aporta nada relevante para la investigación. • Primera declaración de Juan Ariel Hernández Ramos, comandante de la Policía Municipal de Allende en funciones durante marzo de 2011. La declaración es similar a las declaraciones del presidente municipal y del director de la policía.
Noviembre	• La Policía de Investigación indaga entre la población de Allende sin obtener información relevante; los pobladores tienen miedo y "no confían en las autoridades".

2013

Marzo	• La Policía de Investigación indaga entre la población de Allende sobre el paradero de los propietarios de las viviendas destruidas en marzo de 2011. Los pobladores no saben nada; algunos sólo señalan que hubo *levantones* y que algunas personas huyeron a Estados Unidos.
Julio	• La Policía de Investigación indaga entre la población de Allende sobre los perpetradores o responsables, testigos y afectados de los acontecimientos de marzo de 2011. Los pobladores guardan silencio, pues temen por lo ocurrido.
Noviembre	• Inspección en Allende de 28 viviendas y un rancho dañados durante los acontecimientos de marzo de 2011.

2014

Enero. Inicio del operativo "Búsqueda en vida, Coahuila norte"

Enero	• Es asignado un perito de campo para inspeccionar los sitios dañados en Allende durante marzo de 2011. • Es inspeccionado el rancho Los Garza; con la actuación de un binomio canino, son tomadas muestras de ceniza. • La Policía de Investigación indaga entre los pobladores y consigue

	información sobre los integrantes del crimen organizado pertenecientes al grupo de los Zetas en la localidad activos durante 2011. • Declaración de funcionario público trabajador de la oficina de vialidad; esgrime complicidad entre la Policía Municipal e integrantes del grupo delictivo los Zetas. • Solicitud de información a la autoridad local (presidencia municipal) sobre los integrantes de la Policía Municipal de Allende en activo durante marzo de 2011.
Febrero	• Las muestras tomadas en el rancho Los Garza son turnadas a la policía científica para su análisis.
Abril	• Detención de Germán Zaragoza Sánchez, alias *El Canelo*, por el grupo GATES de la Policía Estatal de Coahuila; rinde su declaración. El integrante de los Zetas en Allende dice que los *levantados* fueron asesinados y quemados en presencia de los líderes zetas Z40 (Miguel Ángel Treviño Morales) y Z42 (Omar Treviño Morales) en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos. • Los resultados del análisis de las muestras obtenidas en el rancho Los Garza arrojan: 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales con alto grado de carbonización que imposibilita, en el caso de los primeros, la identificación de la región anatómica a la que pertenecen. • El perito de campo inspecciona 27 domicilios destruidos en Allende en marzo de 2011. La mayoría de los sitios se encuentran en ruinas y con signos de incendio. • Son tomadas 24 nuevas muestras por el perito de campo en el rancho Los Garza.
Mayo	• Tercera denuncia por desaparición ocurrida durante los acontecimientos de marzo de 2011. • Declaración testimonial y denuncia por la desaparición de la persona que realizó la primera denuncia, de mayo de 2011. Presuntamente fue *levantado* por policías municipales en enero de 2012.
Junio	• Detención de José Alfredo Jiménez Aguilar, alias *El Pájaro*, por el

	grupo GATES de la Policía Estatal de Coahuila; rinde su declaración. Dice que los *levantados* fueron asesinados y quemados en la bodega del rancho Los Garza. • Peritos de campo realizan una inspección en el rancho Los Tres Hermanos, sin tomar muestra alguna. • Declaración testimonial en defensa por acusaciones que hizo *El Canelo* en su declaración. • Segunda declaración del comandante de la Policía Municipal de Allende en funciones en marzo de 2011; arroja otra versión; brinda información sobre una red de complicidad entre los Zetas y la corporación policial.
Julio	• Detención de Juan Rafael Arredondo Oviedo, alias *El Cubano*, por el grupo GATES de la Policía Estatal de Coahuila; rinde su declaración. Dice que las personas *levantadas* fueron asesinadas y *cocinadas* en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos. • Dos policías municipales en activo durante marzo de 2011 rinden declaración testimonial y ratifican la complicidad de la corporación con el grupo delictivo los Zetas: “todos estábamos amenazados”. • Cuarta denuncia por desaparición ocurrida durante los acontecimientos de marzo de 2011.
Agosto	• Un integrante de la Policía Municipal en activo durante marzo de 2011 rinde declaración testimonial; declara que recibieron la orden de no atender los llamados de auxilio de la población. • Detención del expolicía municipal de Allende Jesús Alejandro Bernal Guerrero, quien es señalado como perpetrador de los acontecimientos de marzo de 2011; se acoge al artículo 20 de la Constitución; no declara. • Quinta denuncia por desapariciones ocurridas durante los acontecimientos de marzo de 2011.
Septiembre	• En su declaración testimonial, un integrante del grupo delictivo los Zetas dice que los *levantados* los días 18 y 20 de marzo de 2011 fueron asesinados y *cocinados* en los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos.
Octubre	• Detención de la expolicía municipal de Allende María Guadalupe

	Avalos Orozco, alias *La Lupe*, quien es señalada como perpetradora de los acontecimientos de marzo de 2011; se acoge al artículo 20 de la Constitución; no declara. • Sexta denuncia por desaparición ocurrida durante los acontecimientos de marzo de 2011.
Noviembre	• Inspección del perito de campo a uno de los domicilios afectados durante los acontecimientos de marzo de 2011; se encuentra en ruinas y con muestras de incendio. • Son recibidas cuatro denuncias por desapariciones ocurridas durante los acontecimientos de marzo de 2011; suman diez denuncias. • Siete policías municipales en activo durante marzo de 2011 presentan sus declaraciones testimoniales. Ratifican que recibieron órdenes de no acudir a los llamados de auxilio; sin embargo, saben que se produjeron *levantones* y destrucción de domicilios en el poblado. • La Policía de Investigación obtiene 14 testimonios de vecinos de Allende sobre los acontecimientos de marzo de 2016. • Declaración testimonial de un voluntario de bombero en Allende que afianza la versión de que las personas levantadas fueron trasladadas al rancho Los Garza y que en dicho lugar fueron llevados implementos para *cocinar* los cuerpos. • La Policía de Investigación realiza la búsqueda y detención de Gabriel Zaragoza Sánchez, alias *El Flacamán*, miembro del grupo delincuencial los Zetas y presunto perpetrador de los acontecimientos de marzo de 2011. • Se ejerce acción penal en contra de 36 presuntos responsables por el delito de secuestro calificado en contra de 11 personas —siete de ellos fueron miembros de la Policía Municipal de Allende— por los acontecimientos del 18, 19 y 20 de marzo de 2011. • Es enviado un grupo de agentes de investigación y peritos de campo para continuar con las investigaciones: 1. Localizar testigos presenciales. 2. Garantizar la seguridad de las víctimas y preservar evidencias. 3. Investigar la identidad de los responsables.
Diciembre	• Tres bomberos rinden declaración testimonial: el 20 de marzo de 2011 acudieron al rancho Los Garza ante un reporte de incendio y observaron que algunos de los *levantados* estaban ahí. Logran identificar en fotografías a personas reportadas como desaparecidas que estaban ese día en el rancho Los Garza.

2015

Enero	• La información derivada de las declaraciones de los bomberos da a la Policía de Investigación una guía para localizar a los presuntos responsables. • Detención de Ari Nahum Cervantes Garza, integrante de los Zetas y señalado como partícipe en los *levantones*. • La esposa de Jesús Olvera Rangel, alias *El Chilero*, manifiesta que lleva cinco años separada de él; desconoce su paradero.
Febrero	• Declaración de dos extrabajores de la familia Garza y vecinos de Allende. • Una víctima de *levantón* en Sabinas, Coahuila, denuncia la desaparición de su patrón a finales de marzo de 2011: “cuando a mí me liberaron, a él lo plagiaron”. • Tres policías municipales de Allende rinden su declaración; dos de ellos son señalados como presuntos responsables de los secuestros de los días 18 al 20 de marzo de 2011; amplían su declaración ministerial de 2014. Los testimonios de los policías revelan que el *levantón* del 11 de marzo de 2012, cuando uno de los Garza junto con toda su familia fueron detenidos, fue efectuado por policías municipales, quienes los entregaron a integrantes de los Zetas. • Solicitud de información a la Dirección de Policía Municipal de Allende sobre exintegrantes de la corporación señalados como presuntos responsables del acontecimiento del 11 de marzo de 2012. • Los familiares de Bertha Rosario Téllez Vega, alias *La Chayo*, Ricardo Díaz Miranda, alias *El Richard*, y Rogelio Javier Flores Cruz, alias *El Paniques*, expolicías municipales de Allende, testifican que sus parientes no residen en el domicilio conocido en Allende.
Marzo	• Tercera declaración ministerial del comandante de la Policía Municipal, en relación con el *levantón* del 11 de marzo de 2012; no es presentada, pues se suscribe al derecho del artículo 20 de la Constitución. • En el Centro de Readaptación Social varonil y femenil de Piedras Negras, son tomadas declaraciones a presuntos culpables por el acontecimiento del 11 de marzo de 2012. Los señalados como presuntos culpables niegan cualquier participación o responsabilidad. • Se ejerce acción penal en contra de 13 presuntos responsables por el

[redacted]

delito de secuestro calificado en contra de 12 personas —cinco de ellos fueron miembros de la Policía Municipal de Allende— por los acontecimientos del 18, 19 y 20 de marzo de 2011.

- Se ejerce acción penal en contra de siete presuntos responsables por el delito de secuestro calificado en contra de cuatro personas (dos de ellas menores de edad) —seis de ellos fueron miembros de la Policía Municipal de Allende— por el acontecimiento del 11 de marzo de 2012.

Capítulo 7

LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN ALLENDE, COAHUILA, A PARTIR DE MARZO DE 2011. EL ESTADO MEXICANO

Delia Sánchez del Ángel

El gobierno del Estado de Coahuila

A finales de julio de 2016, el gobierno del Estado de Coahuila autorizó al equipo de investigación la consulta de la averiguación previa sobre la desaparición de personas en Allende, Coahuila, que iniciaron en marzo de 2011.[1] En agosto de 2016, el equipo de investigación consultó el expediente correspondiente a la averiguación previa penal 045/2012, a cargo de la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (en adelante PGJE) —a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la PGJE del 22 de enero de 2016, su nombre cambió a Subprocuraduría de Personas Desaparecidas—,[2] en las instalaciones de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La información contenida en el expediente proporcionado será contrastada con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a las investigaciones de este tipo de hechos. Debe destacarse que el análisis estará limitado a lo que puede apreciarse de la lectura del expediente, a la información disponible en medios de comunicación y a información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil. Dado el objeto y alcance de esta investigación, no se hará un análisis sobre los peritajes ahí contenidos en materia de criminalística de campo y antropología forense.

Desapariciones forzadas en Allende

El derecho internacional establece requisitos específicos que deben ser cumplidos en investigaciones de desaparición forzada, por lo que es fundamental entender qué es la desaparición forzada y

cuáles son sus elementos antes de proceder a analizar las acciones y omisiones del Estado en torno a los hechos. Asimismo, posteriormente se indicará por qué, de acuerdo con la información que se obtuvo durante el curso de esta investigación, puede afirmarse que existen elementos para considerar que los hechos de marzo de 2011, y que se prolongan durante meses, constituyen desaparición forzada.

Las siguientes definiciones de desaparición forzada, contenidas en la *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas* y en la *Convención Interamericana sobre desaparición forzada*, reflejan los estándares internacionales en la materia:

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas	Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas
Artículo 2. […] se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de **privación de libertad** que sean obra de **agentes del Estado** o por **personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado**, seguida de la **negativa a reconocer dicha privación de libertad** o del **ocultamiento de la suerte o el paradero** de la persona desaparecida, **sustrayéndola a la protección de la ley.**	Artículo II. […] se considera desaparición forzada la **privación de la libertad** a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por **agentes del Estado** o por **personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado**, seguida de la **falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero** de la persona, con lo cual se **impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes**.

De las dos definiciones internacionales, se destacan los siguientes tres elementos en común:

- Privación de la libertad de una persona
- Cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado
- Seguida de la falta de información sobre el paradero de la

persona o de la negativa a reconocer la privación de la libertad

Es fundamental destacar también que la desaparición forzada tiene una naturaleza **permanente y continuada,** así como un carácter **pluriofensivo**. De acuerdo con la Corte IDH, esto implica que la desaparición forzada permanece "mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, los Estados tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los responsables".[3]

En la legislación mexicana se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada. El artículo 215-A del Código Penal Federal establece que "comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención". Como lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en *Radilla Pacheco vs. México*, esta tipificación penal no es compatible con los estándares internacionales en la materia, pues la autoría del delito de desaparición forzada se restringe a "servidores públicos", cuando debería asegurar la sanción de todos los autores y encubridores de este delito, aunque no sean agentes del Estado, pero que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia.[4] Asimismo, tampoco contempla que la desaparición forzada puede haberse cometido con la aquiescencia o tolerancia de un servidor público.[5]

Por otra parte, el Código Penal del Estado de Coahuila contempla el delito de desaparición de persona como aquel que comete el "servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma, a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley". Es sancionado de la misma forma el particular "que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos descritos".

Tomando en cuenta los elementos aceptados a nivel internacional, los hechos de marzo de 2011 y meses posteriores constituirían desaparición forzada:

- Diversas personas fueron sacadas de sus casas o lugares de trabajo, detenidas cuando iban en sus automóviles, entre otras circunstancias, y privadas de la libertad
- La privación de la libertad fue realizada por integrantes del grupo de los Zetas, con la participación directa o con el apoyo de policías municipales de Allende. Debe agregarse que los Zetas actuaron también con la aquiescencia de otras autoridades, entre las que destaca el presidente municipal de Allende que, sabiendo lo que estaba sucediendo, no hizo nada para evitarlo
- Cuando las primeras familias comenzaron a denunciar lo sucedido y cuando las autoridades ministeriales empezaron sus indagaciones, el presidente municipal y la Policía Municipal negaron siquiera saber que había pasado

De la información disponible se desprende que diversas autoridades municipales que sabían lo que había sucedido e incluso de que se trataba de hechos de desaparición forzada, no presentaron ninguna denuncia ante las autoridades competentes e incluso ocultaron información por mucho tiempo. Las primeras declaraciones presentadas por escrito ante el Ministerio Público por el presidente municipal de Allende (julio de 2012), así como por el director y el comandante de la Policía Preventiva Municipal (agosto de 2012), no solamente son casi idénticas, sino que expresamente señalan que ante la información de los hechos acontecidos, en sesión privada de cabildo solamente se acordó que “se intensificaran los rondines de vigilancia” e “implementaran acciones de disuasión al o los que pudieran estar cometiendo actos ilícitos”. Justifican no haber tomado ningún otro tipo de acciones porque la investigación y la procuración de justicia dependían de la PGJE y/o de la Procuraduría General de la República (PGR). Debe recordarse que, en casos de desaparición forzada, la Corte IDH ha determinado

que “en cualquier caso, **toda autoridad estatal, funcionario público o particular** que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas **deberá denunciarlo inmediatamente**”.[6]

La investigación

El artículo 1º constitucional establece que las autoridades deben “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. A pesar de esta obligación constitucional, también establecida en diversos tratados internacionales ratificados por México, aún no existe una respuesta estatal adecuada para hacer frente de forma efectiva a las violaciones de derechos humanos y específicamente a las desapariciones de personas. A continuación, se indicarán los estándares que las investigaciones, y particularmente aquellas de desaparición forzada, deben cumplir de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

La obligación de investigar es una de las medidas positivas que los Estados tienen que adoptar para garantizar los derechos humanos.[7] Es importante destacar que, aunque el deber de investigar es de medios y no de resultado, eso no puede ser entendido de tal forma que la investigación sea emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” o “como una mera gestión de intereses particulares”.[8] La Corte IDH ha determinado que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, “la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida”.[9]

Cuando el actuar del Estado genera que la violación permanezca en la impunidad y no restablece a la víctima, en cuanto es posible, sus derechos, puede afirmarse “que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”. La Corte IDH ha manifestado que esto sucede también

cuando tolera “que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos”,[10] pues si los hechos no son investigados con seriedad, “resultarían, en cierto modo, *auxiliados* por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.[11] Consiguientemente, la obligación de investigar se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares”.[12]

Para poder cumplir con la obligación de investigar con debida diligencia, “el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue”.[13] Asimismo, “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.[14]

En su sentencia del *Caso de la Masacre La Rochela vs. Colombia*, la Corte IDH destaca que la obligación de debida diligencia es particularmente importante en casos de graves violaciones de derechos humanos, y que por ello, “tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron [su] comisión”.[15] Una investigación que se conduce con debida diligencia debe tomar “en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.[16]

En diversas sentencias, la Corte IDH ha indicado que, en casos de desaparición forzada, “la investigación tendrá ciertas connotaciones específicas que surgen de la propia naturaleza y complejidad del fenómeno investigado, esto es que, adicionalmente, la investigación debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero”.[17]

Asimismo, es importante retomar una de las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en relación con las investigaciones. En la recomendación se indica que debe aplicarse "el Protocolo de Minnesota para guiar las investigaciones de las desapariciones forzadas, ya que las ejecuciones extrajudiciales son una forma de consumación de las desapariciones forzadas".[18] Mediante el uso del Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota), se asegura "una investigación seria en los casos de desaparición forzada, la protección de las escenas, el adecuado resguardo y registro de la evidencia, sobre todo cuando se encuentran los cadáveres o restos óseos de las víctimas".[19] Debe precisarse que el Protocolo de Minnesota es un instrumento desarrollado para ejecuciones,[20] por lo que respetar los estándares ahí contenidos no puede significar que se presuma que se está ante un caso de ejecución; a esa conclusión podrá llegarse hasta que se determine que los cadáveres o restos encontrados corresponden a los de una persona que se consideraba desaparecida. La búsqueda de personas desaparecidas deberá ser principalmente en vida.

En el caso de la desaparición forzada de personas que tuvo lugar en Allende y municipios aledaños a partir de marzo de 2011, el expediente de la averiguación previa demuestra que la investigación no se llevó a cabo de acuerdo con los estándares internacionales aplicables a graves violaciones de derechos humanos, ni tampoco conforme los aplicables de forma específica a casos de desaparición forzada. Si bien la investigación en este caso fue también contraria a disposiciones establecidas en la legislación mexicana y especialmente en instrumentos desarrollados recientemente, como el *Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada* (2015),[21] el análisis se enfocará en contrastar lo actuado con los estándares internacionales en la materia.

Incumplimiento con los estándares internacionales

Primera fase de la investigación

La primera denuncia registrada en el expediente en relación con los hechos es del 25 de mayo de 2011, cuando D1 compareció ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. En esa ocasión, la denuncia fue registrada por el delito de secuestro y extorsión. De acuerdo con el denunciante, su hermana (V2), su cuñado (V1) y sus sobrinos (V3 y V4) habían sido secuestrados el 20 de marzo de 2011 por el **grupo criminal de los Zetas** cuando se encontraban en su domicilio en la ciudad de Allende, Coahuila. Manifestó que sabía que siete familias más de apellidos Garza y Pérez —aproximadamente 25 personas— también habían desaparecido. Señaló que tenía conocimiento de esto porque la noticia había sido divulgada por internet.

Además de narrar cómo se enteró de lo sucedido, el denunciante manifestó saber que **habían *levantado*** a V5 y **que su cuerpo** se encontraba "en el interior de un refrigerador, pero que ya estaba calcinado, estando esto en el **rancho** de su propiedad, el cual se ubica en las afueras de Allende […], así como el rancho de los garza [*sic*] son varios pero todos están pegados y son muchas propiedades".

Como puede observarse, en la primera denuncia —presentada dos meses después de los hechos— había un claro señalamiento a la desaparición de un gran número de personas a manos del grupo criminal de los Zetas. Asimismo, se indicaba la ubicación de restos calcinados de una persona en un rancho. A pesar de información tan grave como ésta, las autoridades ministeriales no actuaron de forma pronta e inmediata para buscar a la familia del denunciante ni para obtener información de las otras familias que presuntamente también habían desaparecido.

En casos de desaparición forzada, "es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades judiciales y del Ministerio Público ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima".[22] Mientras más tiempo pasa, más se limita la posibilidad de obtener pruebas y/o testimonios, "dificultando y aun tornando nugatoria o ineficaz la

práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación".[23] La Corte IDH ha sido clara al determinar que "luego de una denuncia de desaparición o secuestro, **los Estados deben actuar con prontitud en las primeras horas y días**".[24] En este caso no puede apreciarse que las autoridades hayan actuado con dilación, ni que hayan tomado las medidas necesarias para preservar y recolectar pruebas.

El 25 de mayo de 2011 se dictó el acuerdo de inicio de la averiguación previa y se acordó girar oficio a los elementos de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro para que realizaran la investigación de los hechos. Sin embargo, fue hasta **seis días después**, el 31 de mayo de 2011, cuando dos agentes de la Policía Investigadora del Estado adscritos a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro, se trasladaron a la ciudad de Allende, Coahuila, para cerciorarse de que el domicilio señalado por D1 efectivamente se encontraba dañado en su exterior por acción de fuego directo, deshabitado y saqueado.

Los agentes de la Policía Investigadora indican, en el parte informativo de 31 de mayo de 2011, que una persona que caminaba por la calle, la cual no se identificó por miedo a represalias, manifestó que "los hechos que han ocurrido en esa población fueron perpetrados por la delincuencia organizada" y que "en la ciudad **había otros domicilios que se encontraban en similares condiciones**". Esta persona les proporcionó las direcciones de las otras viviendas y manifestó que lo que "decía no era ningún secreto, pues ya era del dominio público, que incluso se decía que por la red circulaban fotografías de los inmuebles dañados, que una persona que sólo conoce con el nombre de [T1] las había subido a su *facebook* [*sic*]". Cuando entrevistaron a T1, ella señaló que habían desaparecido de ocho a nueve familias de apellido Garza, así como a sus empleados, y que corría el rumor que en uno de los ranchos de la familia se habían quemado a las personas desaparecidas. Los dos agentes se trasladaron a las direcciones de cinco viviendas más, tres de ellas que pertenecían presuntamente a personas de apellido Moreno y a una de apellido Garza. Todas las viviendas

estaban quemadas, destruidas y deshabitadas.

De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, uno de los aspectos más importantes de una investigación cabal e imparcial es la reunión y el análisis de pruebas, siendo por ello esencial la recuperación y conservación de las pruebas físicas y la entrevista a posibles testigos para aclarar las circunstancias que rodean a los hechos.[25] De lo descrito en el parte informativo y en documentos subsecuentes del expediente, se desprende que el Ministerio Público no tomó ninguna acción para impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran los datos o indicios que pudiesen encontrarse en el lugar de los hechos. Asimismo, no se realizó una inspección adecuada de las casas que habían sido destruidas, ni del rancho mencionado en la primera denuncia y en el testimonio de T1. Tampoco se practicó peritaje alguno hasta el 2014. La evidencia presente en las casas y en el rancho pudo haberse adulterado, contaminado y/o destruido gracias a la falta de diligencia de las autoridades involucradas en la investigación.

Mediante acuerdo de 1 de junio de 2011, el agente investigador del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro determinó que, dado que en los hechos objeto de la denuncia intervenían miembros de la delincuencia organizada, específicamente del grupo de los Zetas, y que éstos realizaban conductas que encuadran dentro del ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se remitía copia certificada de las actuaciones a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR. De acuerdo con el oficio 175/2011 de fecha 1 de junio de 2011, se remitieron copias certificadas de la A.P.P. CEYCS/012/2011 a la licenciada Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la SIEDO. Después de este oficio, no se registra ninguna actividad en el expediente hasta el 30 de abril de 2012, ya con el nuevo gobierno estatal. En mayo de 2014, el exprocurador de Coahuila, Jesús Torres Charles —cuya gestión terminó en diciembre de 2011— justifica la falta de acciones a partir de junio de 2011 porque era competencia de la PGR investigar el tema y la PGJE había cumplido con darles vista.[26]

Segunda fase de la investigación

Después del **periodo de inactividad**, el 30 de abril de 2012, la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos[27] de la PGJE emitió un acuerdo de inicio y determinó continuar con la investigación de los hechos denunciados, bajo el número estadístico 045/2012.

En esta segunda fase, se detecta también una investigación que no se desarrolló de conformidad con los estándares internacionales en la materia. A pesar de que durante mayo y julio de 2012, la PGJE vuelve a recibir información en denuncias[28] de la desaparición de un número de personas mayor a las identificadas por sus familias en las denuncias, no realiza acciones tendientes a determinar quiénes eran ni su paradero. Asimismo, sigue sin ordenarse la inspección de las casas que habían sido destruidas o quemadas, ni del rancho que es mencionado en la primera denuncia y, consiguientemente, no se resguarda la evidencia que pudiese encontrarse en estos lugares.

De acuerdo con el Protocolo de Minnesota, quien investiga debe identificar y **entrevistar a todos los posibles testigos**: sospechosos, parientes y amigos de la víctima, personas que conocían a la víctima, personas que residen en la zona en que tuvo lugar el crimen, personas que conocían a los sospechosos, personas que pueden haber observado el crimen, el lugar, la víctima o los sospechosos en la semana anterior a los hechos, y personas que tuvieran conocimiento de posibles motivos. Estas entrevistas deben tener lugar **lo antes posible**. De los documentos que conforman el expediente entregado al equipo de investigación, únicamente puede determinarse que en un primer momento los agentes de la Policía se concentraron únicamente en entrevistar a algunos vecinos y pocos de éstos proporcionaron alguna información por miedo a represalias. No se buscó entrevistar a las familias, amigos y conocidos de las víctimas, ni a otras —incluidas autoridades— que pudiesen tener conocimiento de los hechos, hasta mucho después de que éstos tuvieron lugar.

Más de un año después de las desapariciones, se aprecia un intento en la averiguación previa de obtener el testimonio de algunas autoridades municipales de Allende, a pesar de que por el tipo de hechos —entre los que se incluye la destrucción masiva de decenas

de domicilios— es evidente que tendrían que tener conocimiento sobre lo sucedido. El 3 de julio de 2012, el agente del Ministerio Público acordó que se girara un citatorio al ingeniero Sergio Alonso Lozano Rodríguez, presidente municipal de Allende, para recabar su declaración testimonial. El 6 de julio de 2012, Lozano Rodríguez compareció para presentar su declaración por escrito. Indicó que, aunque se encontraba en la ciudad, no fue testigo presencial de los hechos y que el 19 de marzo de 2011 se enteró de lo sucedido "por comentarios aislados hechos por personas que incluso no presenciaron los mismos". Como ya fue señalado, Lozano Rodríguez manifestó no haber ordenado a la Policía Municipal más que intensificar rondines, porque hacer otra cosa estaba fuera de su competencia, incurriendo en una clara omisión. El 23 de agosto de 2012, el Ministerio Público giró citatorio al director de la Policía Preventiva Municipal y al comandante de la Policía Municipal para que rindieran su declaración testimonial. El 30 de agosto de 2012, ambos presentaron su declaración testimonial y argumentaron lo mismo que el presidente municipal y en palabras casi idénticas.

El 19 de marzo de 2013, los mismos agentes regresaron a la ciudad de Allende para entrevistarse con varias familias de casas aledañas a las viviendas dañadas en marzo de 2011. De acuerdo con los agentes, los vecinos se negaron a identificarse y, al preguntarles en dónde podían localizar a los familiares de las viviendas afectadas, manifestaron "que a estas gentes no las han visto, ya que se tiene sabido que varios desaparecieron en los hechos de Marzo [*sic*] de 2011, y otras personas se fueron a vivir a los Estados Unidos, pero igualmente no quisieron proporcionar los apellidos de las personas a las que hacían referencia".[29]

El 23 de julio de 2013, los agentes se entrevistaron nuevamente con habitantes de la ciudad de Allende, buscando obtener información en relación con los probables responsables, testigos y afectados. Los agentes indican haberse entrevistado con varias personas que se negaron a identificarse por miedo a represalias. Las personas entrevistadas indicaron que "toda la población de Allende tenía temor por los hechos ocurridos en el mes de Marzo [*sic*] del año 2011" y que no podían proporcionar la información

requerida por los agentes.[30]

Inspecciones y peritajes

Las viviendas afectadas y el rancho "Los Garza"

El 19 de noviembre de 2013, los agentes de la Policía Investigadora se trasladaron a la ciudad de Allende con el objetivo de investigar información sobre todas las viviendas afectadas en marzo de 2011. Identificaron 28 domicilios afectados. Los agentes también fueron al rancho "Los Garza". Indicaron que en el rancho "se aprecian vestigios de que una bodega fue quemada y la construcción del rancho se aprecia dañada". A pesar de que, desde mayo de 2011, a través de denuncias y testimonios, las autoridades a cargo de la investigación habían tenido conocimiento de que varias viviendas habían sido destruidas y que en el rancho presuntamente habían sido quemadas personas, no fue hasta más de dos años después cuando la totalidad de las viviendas fue identificada y acudieron al rancho. Nuevamente no se aprecia ninguna acción por parte de la autoridad responsable para preservar la escena del crimen.

De igual forma, la recolección de la evidencia que pudiera encontrarse en los inmuebles no se da de forma inmediata. Fue hasta el 28 de enero de 2014 (dos años y siete meses después de la primera denuncia y dos meses después de que los agentes de la Policía Investigadora fueran al rancho por primera vez) cuando el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría determinó que de la información con la que contaban se advertía "la necesidad de la intervención de un profesionista con conocimientos especiales en materia de criminalística de campo", para que se trasladara al rancho de los Garza y localizara, fijara, recolectara, embalara y transportara aquellas evidencias, indicios, huellas o vestigios que se relacionaran con los hechos investigados.[31] Un perito adscrito a la PGEC fue designado con esta finalidad y se presentó ese mismo día en el rancho de los Garza, haciendo un recorrido por el lugar para buscar y localizar posibles restos óseos. Dos años y diez meses después de los hechos, un perito hizo la inspección del lugar, y el personal de Servicios Periciales de la PGJE procedió a realizar la identificación de indicios, y luego recolectó, embaló y etiquetó las

evidencias asociadas a los hechos investigados (fragmentos de metal y ceniza).

El 3 de febrero de 2014, el agente del Ministerio Público recibió un oficio de 28 de enero de 2014 del perito de criminalística de campo en el que rinde el dictamen en materia de criminalística de campo que practicó en el rancho “Los Garza”. El 5 de febrero de 2014, el agente del Ministerio Púbico hizo entrega de las evidencias recolectadas y aseguradas en el rancho “Los Garza” al agente del Ministerio Público en el área de Genética Forense. Este último tenía el encargo de remitir las evidencias al área de Genética Forense de la Policía Federal Científica para que se realizaran las periciales pertinentes.

El 6 de febrero de 2014 se determinó la necesidad de la intervención de un profesional con conocimientos de genética, antropología y química forense para que realizara un estudio a los restos de ceniza y metal recabados en el rancho “Los Garza”. Se buscaba que determinara si en estos restos “se encuentra o no material biológico útil para la identificación de alguna persona, debiendo obtener el perfil genético de los mismos para su ingreso o confronta en la base de datos respectiva”. Consiguientemente, se gira oficio al jefe de la División Científica de la Policía Federal para que asigne un perito en esa especialidad.

El 15 de abril de 2014, el agente del Ministerio Público recibió el informe técnico en materia de antropología forense realizado por la Coordinación de Criminalística de la División Científica de la Policía Federal. En el informe técnico se concluye: *i)* “que los elementos hallados durante el tamizado corresponden a 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales, los cuales por sus características corresponden a la especie humana”; *ii)* “debido a que los fragmentos de restos óseos y órganos dentales presentan un alto grado de carbonización, impide determinar la región anatómica a la cual pertenecen”; y *iii)* “se recuperaron 68 órganos dentales y fragmentos de órganos dentales, de los cuales, siete se encuentran anatómicamente completos. También se hallaron 31 coronas de diferentes órganos dentales, 24 restos radiculares (raíces), pertenecientes a diferentes órganos dentales, y seis restos de

molares tratados endodónticamente, así como cuatro coronas con restauraciones metálicas". En el expediente no se encuentra información sobre pruebas practicadas sobre los fragmentos de restos óseos y órganos dentales tendientes a determinar la identidad de las personas a quienes les pertenecieron.

El 22 de abril de 2014, se designó a un perito en materia de criminalística de campo para que se trasladara a 27 domicilios[32] y "localice, fije, recolecte, embale y transporte todas aquellas evidencias, indicios, huellas o vestigios que se relacionen con los hechos investigados". Los días 22, 23 y 24 de abril de 2014, el perito acudió y reportó que los 27 domicilios se encontraban deshabitados, sin puertas y sin ventanas, con escombros de concreto y basura; algunos presentaban vestigios de que el inmueble había sido incendiado; en otros se registraba que no tenían cableado eléctrico y tenían grafitis en las paredes. Un perito acudió a los domicilios destruidos casi **tres años después** de que recibieron la primera denuncia.

El 26 de abril de 2014, el perito en materia de criminalística de campo volvió a presentarse en el rancho "Los Garza". Dado que ya se había realizado una inspección del lugar, se concentró en la tercera construcción "con la finalidad de recolectar la totalidad de la ceniza y metal" que ahí se localizaba. La División Científica de la Policía Federal recolectó y embaló todos los restos de metal y ceniza. El 27 de abril de 2014 se entregó la evidencia en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la PGJE.

El rancho "Tres Hermanos"

El 8 de febrero de 2014, los agentes de la Policía Investigadora informan al agente del Ministerio Público que ese día recibieron reporte vía radio del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATES) sobre la detención de una persona de nombre PP1, quien fue puesto a disposición de la PGR. Dado que se tenía información de su participación en los hechos ocurridos en marzo de 2011 en Allende, los agentes de la Policía Investigadora se presentaron en las instalaciones de la PGR en Saltillo, Coahuila, y se entrevistaron con PP1. Éste manifestó en su declaración ministerial que, aunque

había estado presente en los hechos, no había participado en las privaciones de libertad ni en la muerte de aproximadamente 20 personas en el rancho "Tres Hermanos" en Zaragoza. Indicó que ahí "*cocinaron*" a las personas para erradicar la evidencia.

A pesar de la declaración anterior, no se observa ninguna acción inmediata de las autoridades para realizar las diligencias necesarias en el rancho "Tres Hermanos". El 14 de junio de 2014 —cuatro meses después de que recibieran información sobre presuntos delitos ahí cometidos— se acordó designar a un perito en materia de criminalística de campo con el objetivo de que se trasladara al rancho denominado "Tres Hermanos", conocido también como "Los Menonas", para localizar, fijar, recolectar, embalar y transportar todas las evidencias, indicios, huellas o vestigios relacionados con los hechos investigados. Ese mismo día, se llevó a cabo la inspección ministerial del rancho.

La participación de la Policía Municipal en los hechos

El 14 de noviembre de 2012, dos agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, se trasladaron a la ciudad de Allende con el objetivo de investigar sobre los hechos ocurridos en marzo de 2011. Los agentes se entrevistaron con diversos habitantes que no quisieron identificarse y, al preguntarles sobre lo ocurrido en marzo de 2011

> no quisieron proporcionar ningún tipo de información ya que la mayoría de la gente nos hizo saber que no confiaban en las autoridades, por lo que **sabían que la policía municipal de allende** [*sic*] **estaba involucrada con la delincuencia organizada**, específicamente con el grupo delictivo de los zetas [*sic*], y que inclusive se veía que gente de los zetas [*sic*] andaba trabajando en dicha ciudad de Allende, por tal motivo no quisieron proporcionar ninguna información por temor a una represaría [*sic*].[33]

El 28 de enero de 2014, agentes de la Policía Investigadora informaron al agente del Ministerio Público que, en el marco del operativo "Coahuila búsqueda en vida Norte", y en relación con la orden que tenían de investigar, se habían entrevistado con

habitantes del municipio de Allende —quienes no se identificaron por miedo a represalias—, que manifestaron que en los años 2010 y 2011 los Zetas controlaban todo en el municipio y que parecía que incluso habían tenido el control de la Policía Municipal.[34] Esta información es reafirmada en la declaración testimonial que se toma a T2, quien se acerca a ellos cuando se encontraban en las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal, vestido de policía y diciendo ser encargado de mantenimiento de vialidad en la ciudad de Allende.[35]

A pesar de que desde noviembre de 2012 los habitantes de Allende señalan el vínculo entre la Policía Municipal y los Zetas, no se aprecia ninguna acción dirigida a tratar de esclarecer estos posibles vínculos hasta más de un año después. El 30 de enero de 2014 se giró un oficio al director de Seguridad Pública Municipal de Allende, solicitándole un listado con el nombre completo y los domicilios de los policías municipales activos en el año 2011. El 4 de febrero de 2014, el director de Seguridad Pública Municipal de Allende presentó la información requerida por el agente del Ministerio Público. En la lista aparecen los nombres de 21 hombres y una mujer.

Los vínculos entre la Policía Municipal de Allende y los Zetas fueron señalados en diversas declaraciones testimoniales, declaraciones ministeriales y denuncias.[36] Quienes fueran policías municipales e integrantes de los Zetas manifestaron que en esa época los policías recibían dinero de los Zetas para ignorar los reportes de la ciudadanía e informarles cuando el Ejército o la Marina se encontraran cerca y en qué lugares estaban.

La primera vez que se encontraron indicios de que la Policía Municipal no solamente había sido omisa, sino que había participado de forma directa en los hechos, fue el 13 de junio de 2014. Ese día, la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos fue informada de la detención de una persona de nombre PP2 por parte del GATES. En su declaración ministerial, de esa misma fecha, PP2 manifestó que diversos integrantes de los Zetas habían ido a la casa de V1 y que, con la ayuda de dos policías

municipales —PP3 y PP4—, lo habían sacado a él, a su esposa y a uno de sus hijos, para luego subirlos a la patrulla. La participación de estos dos policías vuelve a ser señalada el 28 de junio de 2014 en la declaración testimonial de PP5, comandante de Seguridad Pública Municipal en Allende durante el periodo de 2010 a 2013, quien aseguró haberle informado al director, pero no haber hecho nada por estar amenazado. Igualmente, el 22 de julio de 2014, T3 —policía municipal en activo durante marzo de 2011— manifestó en su declaración testimonial que un mes después de los hechos, un policía de nombre PP18 le dijo que tanto él como PP3 habían levantado a V1, V2, V3 y V4, y que se los habían entregado a los Zetas.

El 13 de agosto de 2014, PP4 rindió su declaración ministerial, en la que se reservó su derecho a declarar. El 8 de octubre de 2014, PP3 también se reservó su derecho a declarar.

Los testimonios de bomberos

Un elemento fundamental en la averiguación previa, al ser una de las razones principales para señalar que se encuentra acreditada la responsabilidad penal de los presuntos responsables, son los testimonios de personas que pertenecieron al cuerpo de bomberos de Allende en la época de los hechos. De estos testimonios se desprende la participación directa en los hechos de diversos policías municipales de Allende y se identifican los nombres de varias víctimas, incluso algunas que no aparecen en ninguna de las denuncias que contiene el expediente. Es importante destacar que es hasta tres años y ocho meses después de los hechos que se registra el primer testimonio de un bombero, a pesar de que, por testimonios y evidencia encontrada previamente a esa fecha, las autoridades deberían haber buscado recabar el testimonio de los integrantes del cuerpo de bomberos: los domicilios fueron quemados y en los ranchos se registró fuego. ¿Nadie reportó algún incendio? ¿Acudieron a apagar alguno?

El 10 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Investigadora acudieron a la ciudad de Allende a entrevistarse con vecinos de los domicilios afectados. Uno de los entrevistados manifestó que en la

fecha de los hechos laboraba como bombero “y que cuando sucedieron los hechos que se denuncian se recibieron en la base varios reportes de domicilios incendiados, pero que al momento de querer ir a atender los reportes llegaron hasta el exterior de la base dos vehículos de modelo reciente con civiles armados los cuales los amenazaron que sin [*sic*] salían a atender algún reporte los iban a matar y a sus familias y que por temor no salieron de la base, haciendo mención que los elementos de la Sedena nunca intervinieron en estos hechos”.[37]

El 10 de noviembre de 2014, B1 rindió su declaración testimonial, en la que manifestó que cuando recibieron un reporte de incendio de un rancho que está en la carretera Allende-Villa Unión, se acercaron a la base dos camionetas con personas vestidas de civiles y gente armada, que les dijeron que si salían los iban a matar y también a sus familias. Menciona también que “elementos de Sedena jamás intervinieron en ningún enfrentamiento y sí tuvimos muchos reportes de incendio pero por miedo no salimos”.[38] En la declaración testimonial de 12 de noviembre de 2014, T4 —policía municipal de 2004 a 2011— indica que en la fecha de los hechos recibieron órdenes de no hacer nada y que a los bomberos se les dio la orden de no apagar incendios.

De forma contradictoria a la primera declaración de B1, B2 manifiesta en su declaración testimonial del 23 de noviembre de 2014 que, cuando el 20 de marzo de 2011 recibieron un reporte de un incendio en una casa en el rancho de los Garza, acudieron a atenderlo. Señala que en la entrada del rancho había unidades de la Policía Municipal y elementos de esa corporación. Identifica por nombre a dos policías municipales (PP3 y PP4) y a ocho víctimas (V1, V5, V2, V4, V15, V13, V6 y V7), y por apodo a cuatro integrantes de los Zetas. De acuerdo con B2, al lado de una bodega grande bajaban de un camión tambos grandes y se percibía el olor a diésel o gasolina. Menciona que cuando se dieron cuenta de la presencia de los bomberos, los amenazaron y que, antes de irse, vieron que los Zetas metieron en la bodega a la familia Garza.

En la segunda declaración testimonial de B1, el 17 de diciembre de 2014, dio un testimonio casi igual al de B2, salvo porque reconoce a

un mayor número de policías (cinco) e integrantes de los Zetas (11). Indica que obedecieron a los Zetas porque tenían miedo y los policías los estaban cuidando. El agente del Ministerio Público le enseñó a B1 fotografías de personas que estaban reportadas como desaparecidas en la región de Coahuila Norte. B1 identificó a una mujer (V25) y tres hombres (V26, V27, V28 y V29), y mencionó que el 20 de marzo de 2011 todas ellas estaban en el rancho de los Garza y los Zetas las metieron a la bodega. Ésta es la primera vez que los nombres de V25, V26, V27, V27 y V29 aparecen en el expediente, ya que no constan en él las denuncias de sus desapariciones.

Las declaraciones de los otros dos bomberos son similares y solamente se diferencian en cuanto al número de personas que reconocen. B3 manifestó en su declaración ministerial de 17 de diciembre de 2014 que identificaba a cinco policías municipales (PP4, PP3, PP6, PP7 y PP8) y a nueve integrantes de los Zetas (PP10, PP1, PP2, PP9, *El Chango, El Chueco, La Lagartija, El Pollo* y a PP15). Indica también que pudo ver que metían a una bodega grande a miembros de la familia Garza (V5, V15, V1, V2, V4, V10, así como a otros de los que no recordaba su nombre), empleados de los Garza (entre ellos reconoce a V10), personas que no conocía y gente de edad avanzada. El agente del Ministerio Público le enseñó diversas fotos de personas que están desaparecidas y que fueron privadas de la libertad en las fechas en que tuvieron lugar los hechos. B3 reconoció a tres hombres que conocía de Allende (V1, V18, V20) y a un hombre que no conocía (V24). Ésta es la primera vez que los nombres de V20 y V24 aparecen en el expediente, pues en él no se encuentran las denuncias presentadas por su desaparición.

En su declaración testimonial de 17 de diciembre de 2014, B4 manifiesta que identifica en el lugar de los hechos a cinco policías municipales (PP4, PP3, PP8, PP6 y PP7), a 11 integrantes de los Zetas (PP11, PP1, PP10, PP2, PP9, *El Chango, El Chueco, El Pollo, La Lagartija, El Jordan* y PP12) y a cinco miembros de la familia Garza (V5, V1, V2, V13 y V15). El agente del Ministerio Público le enseñó fotografías de personas que estaban reportadas como

desaparecidas en la región de Coahuila Norte, y B4 identificó a seis hombres (V3, V18, V26, V27, V28 y V24) y a una mujer (V25), y mencionó que todas ellas estaban el 20 de marzo de 2011 en el rancho de los Garza y los Zetas las metieron a la bodega.

La búsqueda de los presuntos perpetradores

El 21 de enero de 2015, en atención a la información proporcionada por los tres bomberos, los agentes de la Policía Investigadora procedieron a la búsqueda y localización de *El Chango, El Chueco, El Pollo, La Lagartija, El Chilero, El Jordan* y PP12. Encontraron a PP12, quien manifestó en su declaración ministerial haber trabajado un tiempo para los Zetas, pero no haber participado en los hechos, pues ese día había estado encargado de reportar si venían soldados.

Con el objetivo de encontrar a las demás personas, hicieron visitas a los domicilios que tenían registrados y se entrevistaron con familiares de algunas de ellas, que indicaron no saber de ellos desde hace un tiempo o que se habían ido a trabajar a otra parte. Asimismo, en marzo de 2015 solicitaron a los directores de los Ceresos Varonil y Femenil en Piedras Negras su colaboración para recabar los testimonios de PP3, PP4 y PP1, quienes se encontraban ahí internados. Los tres indican en sus declaraciones ministeriales del 4 de marzo de 2015 que no tuvieron nada que ver con los hechos que se les imputaban.[39] Ese mismo día, PP13 manifestó en su declaración ministerial que desconocía los hechos que se le imputaban, por lo que se reservaba su derecho a declarar.

Vistas de ejercicio de acción penal

El expediente contiene dos vistas de ejercicio de acción penal, una del 24 de noviembre de 2014 y otra del 5 de marzo de 2015. La primera vista de ejercicio de acción penal establece que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de PP2, PP9, PP1, PP11, PP10, PP3, PP4 y PP14 por la comisión del delito de **secuestro calificado**[40] en perjuicio de V5, V6, V7, V1, V2, V4, V36, V13, V15, V12 y V10. Las constancias y anexos que integran la indagatoria fueron turnados al agente del Ministerio Público adscrito

al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal en turno para que ejercitara la acción penal correspondiente en contra de los presuntos perpetradores.

Después de recibir los testimonios de los bomberos, se emitió la segunda vista de ejercicio de acción penal de 5 de marzo de 2015. De acuerdo con la vista, se encuentra acreditada la probable responsabilidad de P4, P3, PP6, PP7, PP8, P11, PP10, PP1, PP2, PP9, PP15, PP12 y PP16, por la comisión del delito de **secuestro calificado**[41] en agravio de V3, V18, V19, V24, V25, V26, V27, V28, V35, V32, V33, V34. Establece también que se encuentra acreditada la probable responsabilidad de PP17, PP18, PP3, PP7, PP13, PP6 y PP1 por el delito de **secuestro calificado** en contra de V16, V29, V30 y V31. Asimismo, se acuerda la reserva del ejercicio de la acción penal en contra de *El Chango, El Chueco, El Pollo, La Lagartija*, PP19 y de quienes resulten responsables por el delito de **secuestro** y/o de más que resulten en agravio de V14 y V11.

Observaciones

Respecto de la vista de ejercicio de acción penal del 5 de marzo de 2015, resulta importante destacar que es en este documento cuando los nombres de V32, V33, V34 y V35 aparecen por primera vez en el expediente, ya que no existe en él registro alguno de denuncias presentadas en relación con la desaparición de estas cuatro personas ni de testimonios en los que se les haga mención. Algo similar sucedió, como ya se había mencionado, con V19, V24, V25, V26, V27 y V28, que son mencionados en el expediente únicamente en los testimonios de los bomberos y en el ejercicio de vista de acción penal, pero tampoco constan las denuncias de sus desapariciones. Esto genera la interrogante de si la PGJE tiene otros expedientes en los que sí puedan encontrarse las denuncias presentadas por la desaparición de V32, V33, V34, V35, V19, V24, V25, V26, V27 y V28, así como testimonios u otras evidencias que apunten a la probable responsabilidad de las personas señaladas en las vistas de ejercicio de acción penal. En caso de ser así, se estaría ante un expediente fragmentado. De acuerdo con la experiencia de organizaciones como el Centro Diocesano para los Derechos

Humanos “Fray Juan de Larios”, aun cuando las autoridades tienen conocimiento de desapariciones, no abren una investigación hasta no existir una denuncia expresa.

Debe señalarse también que del expediente no se desprende un análisis del contexto en el que ocurrieron las desapariciones ni de los patrones sistemáticos que permitieron y explican su comisión, requisitos esenciales para la conducción de una investigación con debida diligencia en este tipo de casos.[42] Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para poder entender la estructura de las personas involucradas en la planeación y la ejecución de las desapariciones, pues, como se ha explicado en este informe, para que esto sucediera no solamente se requirió de la participación directa de muchas personas, sino también del apoyo o colaboración de otras, entre las que se incluían agentes estatales. Tal como lo señalara el GIEI en sus recomendaciones generales en torno a la desaparición en México, “como criterios para orientar la investigación se deben tener en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos”.[43] Las diversas diligencias que componen el expediente al que se tuvo acceso no demuestran que la Subprocuraduría haya realizado acciones tendientes a entender lo anterior, ni a situar los hechos en el contexto generalizado de violencia y desapariciones que afectaba a la región durante la época en cuestión. Asimismo, investigaciones como éstas, donde parece existir fragmentación de expedientes, imposibilitan que pueda entenderse verdaderamente el contexto, las estructuras y motivaciones detrás de los perpetradores y su organización, así como establecer relaciones entre los diversos delitos cometidos.

Debe destacarse que el expediente se compone casi en su totalidad de declaraciones testimoniales y ministeriales, y no existe un mayor trabajo de investigación. La Corte IDH ha señalado que interrogar a decenas de personas en una investigación judicial no constituye un esfuerzo suficiente “para la debida diligencia de la investigación de una desaparición forzada, pues es necesario que se investiguen los elementos que surgen de dichas declaraciones de

forma tal que se profundice el trabajo investigativo".[44] En este caso, lo que abundan son declaraciones, y de aquellas acciones de las que podría haberse obtenido más elementos para determinar el paradero y suerte de las víctimas —como lo es el análisis de los restos encontrados en el rancho "Los Garza"— no se cuenta con información sobre sus resultados.[45]

Otro aspecto fundamental que se destaca de la averiguación previa es que el delito que se investiga, y el que finalmente se busca imputar a los probables responsables, no es el de desaparición forzada, sino el de secuestro calificado. Una situación similar sucedió en el caso Ayotzinapa, pues los hechos fueron calificados como secuestro y no como desaparición forzada.[46] En este caso en particular, el delito de desaparición de personas se encuentra tipificado en el Código Penal de Coahuila desde 2014, por lo que debe recordarse que, como lo ha señalado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, "la desaparición forzada es un delito continuado y, por lo tanto, puede sancionarse sobre la base de una legislación posterior sin vulnerar el principio de no retroactividad, mientras la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se haya esclarecido".[47] Asimismo, debe destacarse que, en el momento de emitirse la segunda vista de ejercicio de acción penal, el 5 de marzo de 2015, ya se encontraba tipificado el delito de desaparición en el artículo 212 BIS del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.[48]

Operativo de "Búsqueda en vida Coahuila Norte"

El operativo "Búsqueda en vida Coahuila Norte" se desarrolló del 26 de enero al 4 de febrero de 2014 en los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Monclova y Sacramento.[49] De acuerdo con información de la PGJE, estos municipios fueron seleccionados principalmente por su índice delictivo, llamadas anónimas y denuncias relacionadas con la desaparición de personas y la supuesta presencia de miembros de la delincuencia organizada.

La PGJE indicó a la CNDH que los esfuerzos se centraron en el

municipio de Allende por los hechos de marzo de 2011. Señaló que en Allende se establecieron dos grupos: *i)* uno a cargo de la investigación y declaraciones ministeriales, que realizó 32 entrevistas a funcionarios y exfuncionarios municipales, testigos y público en general; y *ii)* un segundo grupo encargado de la investigación de trabajo de campo, que realizó una búsqueda y recolección de evidencias en ranchos, casas de seguridad y campamentos del crimen organizado, y campos de entrenamiento de los miembros de la delincuencia organizada (*diestras*). A su vez, indicó a la CNDH que en el operativo participaron 250 elementos de diferentes corporaciones de seguridad, tales como la Sedena, la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), la Secretaría de Gobernación (Policía Federal), la PGJE y la Comisión de Seguridad Pública, y que se contó además con el trabajo de un georadar y tres binomios (hombre-perro).

En el informe presentado a la CNDH, la PGJE señala que en el Operativo la Policía Científica recolectó y aseguró 2 429 muestras biológicas que estarían siendo procesadas, clasificadas y analizadas por diversos departamentos de la División Científica de la Policía Federal, con el objeto de obtener los perfiles genéticos e identificar a personas desaparecidas.

El Grupo Autónomo de Trabajo

Después de la visita en marzo de 2011 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el gobierno de Coahuila "atendió el llamado de las familias [de personas desaparecidas] y sus aliados de la sociedad civil e incluyeron en su agenda reuniones en Saltillo, Coahuila".[50] El 9 de septiembre de 2012 se firmó el *Acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo en el estado de Coahuila de Zaragoza, para el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.*[51]

El Grupo Autónomo de Trabajo (GAT) "es un órgano de carácter ciudadano, autónomo y profesional que está integrado por personas defensoras de Derechos Humanos, académicos o expertos en la

materia y en ningún caso podrán ser funcionarios públicos".[52] Actualmente, el GAT se encuentra conformado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), el Centro de Derechos Humanos "Juan Gerardi" A.C., el Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" A.C., la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En su informe de 2015, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias señala los avances de la PGJE e indica que éstos son "un precedente positivo de trabajo con la organización de Familiares Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila/México", en los que se "incluye reuniones con el gobernador del estado para la revisión directa del cumplimiento de los compromisos establecidos por el personal ministerial en las investigaciones, en esta reuniones participan servidores públicos federales que coadyuvan con las investigaciones de la instancia local".[53] Hasta 2015, el GAT había emitido seis informes.[54]

El GAT ha permitido desarrollos importantes. Por ejemplo, se convirtió en una plataforma para presionar al gobierno para revisar las carencias presentes en el Código Penal del Estado de Coahuila en cuanto al delito de desaparición forzada (tipificado en 2012), lo que generó su revisión en noviembre de 2013 y reformas en 2014 que crearon una institución estatal para prestar cuidados a familias de personas desaparecidas.[55] Asimismo, dio lugar a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila,[56] que busca "abrir la posibilidad a las familias de acceder al patrimonio a nombre de la persona desparecida, mantener su personalidad jurídica y sus derechos laborales, y suspender las obligaciones financieras contraídas en tanto no se determine su paradero".[57]

Sin embargo, a pesar de que el gobernador ha reconocido la existencia en Coahuila de un problema en materia de desapariciones y de las mejoras legislativas, debe señalarse que "las familias que participaron en el GAT comenzaron a frustrarse por

la falta de avances en sus casos. Aunque para mayo de 2015, el gobierno estatal declaró que había encontrado a 871 personas desaparecidas (821 vivas y 50 muertas), las estadísticas del gobierno mezclan las personas desaparecidas por motivos criminales y no criminales, y las familias sospechan que la mayoría de los que han sido hallados con vida corresponden a esta segunda categoría". En este sentido, debe mencionarse que muchas de las personas que el gobierno de Coahuila ha registrado como desaparecidas fueron realmente víctimas de desplazamiento y volvieron posteriormente, razón por la que se encuentran vivas. Estas personas, que realmente no pueden ser consideradas víctimas de una desaparición, suman los números de "personas encontradas" reportados por el gobierno.[58]

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Coahuila

El 2 de mayo de 2014 fue publicada en el *Diario Oficial* la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza*. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila (CEEAV) es el órgano operativo del Sistema Estatal de Víctimas y tiene "la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal".[59] El 23 de septiembre de 2014, mediante decreto número 581, el Congreso del Estado de Coahuila designó a los comisionados que integrarían la CEEAV.[60]

Buscando entender cuál ha sido el papel de la CEEAV en torno a los hechos objeto de análisis, el 5 de agosto de 2016 se solicitó al comisionado presidente de la CEEAV que proporcionara información sobre las solicitudes que ha recibido la institución en relación con casos de desaparición de personas en los municipios de Allende, Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Zaragoza, Sabinas, Guerrero, Morelos y Acuña, así como sobre las acciones que ha realizado la CEEAV para dar atención a las víctimas de estos casos. El 22 de agosto de 2016, se recibió una respuesta firmada por Gabriela Noguez Sandoval, directora general ejecutiva de la CEEAV.

La CEEAV comienza su respuesta reconociendo que lo sucedido en marzo de 2011 en Allende es indudablemente una grave violación a

derechos humanos y que es necesario proteger los derechos de las víctimas vinculadas a los hechos, así como reparar de manera integral los daños producidos en su contra. En su respuesta hace mención al GAT y al Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade),[61] indicando las actividades en las que el comisionado presidente participó de forma previa a la creación de la CEEAV en relación con los casos de desaparición de personas en Allende y municipios aledaños, como Piedras Negras, Nava, Villa Unión, Sabinas, Guerrero, Morelos y Acuña. Sin embargo, dado que el objeto de análisis de este apartado es únicamente la CEEAV, a continuación sólo se hará mención a las acciones emprendidas por ésta.

El documento indica que FUNDEM y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" solicitaron una reunión con el GAT para mostrar su inconformidad con los operativos de búsqueda en el municipio de Allende. Ante ello, el 2 de noviembre de 2014, la CEEAV se pronunció sobre el caso Allende mediante un documento titulado "Por un trato digno a las víctimas", haciendo referencia a las notas periodísticas relacionadas con la investigación que realizaba la PGJE. En el documento, la CEEAV califica lo sucedido en Allende en 2011 como "una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Estado de Coahuila", reconoce la responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas e indica que, en estos casos, "el manejo, tratamiento, publicación y difusión de la información" debe darse "bajo un enfoque de derechos humanos para evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes con información innecesaria o desproporcional al trato digno de las víctimas". Con base en lo anterior, la CEEAV hace un llamado

> a la comunidad en general, a los medios de comunicación, a las autoridades estatales y federales y a todas las personas y autoridades involucradas en estos lamentables hechos a adoptar, en su sentido más amplio, el principio *pro persona* y, a partir de ello, comprometerse con el manejo adecuado de la información sensible de las víctimas, a fin de no afectar el derecho de ninguna persona a ser tratada con dignidad.

Finalmente, ofrece a las familias de las víctimas, a los periodistas y

medios de comunicación,

> proveer los elementos para que el acompañamiento de la tarea periodística en este caso constituya un elemento más que ayude, de mejor manera, a lograr el propósito que todos compartimos: que el caso sea esclarecido; que los culpables sean identificados y castigados; que se repare integralmente el daño con medidas apropiadas pero, sobre todo, que NUNCA MÁS vuelvan a suceder en nuestro país y, particularmente, en nuestro Estado de Coahuila de Zaragoza, estos hechos violatorios a los derechos humanos.

En cuanto a los casos en que la CEEAV ha tenido conocimiento y en los que ha acompañado a víctimas directas e indirectas de los hechos, la CEEAV proporcionó información sobre solicitudes concretas y las necesidades registradas en casos de desaparición en Piedras Negras (2), vinculados a la organización Familias Unidas, y en Allende (24), vinculados a la organización Alas de Esperanza. Aunque ninguno de los casos registrados parece corresponder a las desapariciones perpetradas en marzo de 2011 por los Zetas con la participación, apoyo y aquiescencia de autoridades, la información proporcionada es relevante para analizar el papel que la CEEAV juega en la atención de casos de personas desaparecidas en la región, solicitudes concretas y las acciones que se han realizado a partir de las mismas.

En Piedras Negras, la CEEAV indica tener registradas dos víctimas directas y seis indirectas. En cuanto a las necesidades de las víctimas indirectas, se menciona atención médica, becas de estudios, apoyo con útiles escolares, y “que se le tome en cuenta en programas sociales que brinda el gobierno”. En Allende, reportan 24 víctimas directas y 41 víctimas indirectas.[62] Las necesidades que reportan las víctimas indirectas son becas de estudios, útiles escolares, “arreglar la situación de un terreno que le habían prometido”, apoyos económicos, “ayuda para que se le otorgue la pensión del IMSS”, atención médica, apoyo psicológico, “pensión alimenticia por parte del trabajo de la víctima directa”, “apoyo para sacar documentos originales de sus nietos como actas de nacimiento”, “apoyo para el reconocimiento de paternidad”, “apoyo para regularizar la posesión de su vivienda y de ser posible una reparación y afiliarse al seguro popular”. Las 26 solicitudes —de

acuerdo con el número de víctimas indirectas— fueron registradas entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2016.[63]

Además de lo anterior, la CEEAV señala que diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre los cuales se encuentran las de la ciudad de Allende y Piedras Negras, han solicitado ingresar a los diversos centros penitenciarios de la entidad, buscando localizar a alguno de sus familiares u obtener información que llevara a conocer su paradero. Indican que en las brigadas realizadas el 13 de agosto de 2016, los representantes de los colectivos solicitaron el acompañamiento por parte de la CEEAV.[64]

Debido a que la respuesta proporcionada por la CEEAV no especificaba si ya habían realizado acciones para dar respuesta a las necesidades de las víctimas, el 30 de agosto de 2016 se solicitó a la Comisión una aclaración de la información que había presentado. En su respuesta de 2 de septiembre de 2016, contestó que su área de Atención Inmediata "se puso en contacto con las 24 familias de personas desaparecidas en Allende para revisar el estatus de cada una ellas e informarles el procedimiento por seguir. Con base en lo anterior, se enviaron oficios para dar trámite a sus peticiones en materia de educación y vivienda (SEP, CAIF de Allende, Seguro Popular, DIF y Secretaría de Desarrollo Social)". Asimismo, señaló que "las víctimas señaladas en la tabla [que aparece en la primera respuesta], hasta este momento no han recibido apoyo del Profade, incluso tampoco han sido beneficiarias de alguna medida de asistencia en los términos establecidos en la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila; sin embargo, como le comento se les han gestionado apoyos en materia de salud y educación".

Es así como puede concluirse que, hasta la fecha, la CEEAV no ha realizado aún acciones tendientes a proporcionar una reparación integral a las víctimas, es decir, "medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica".[65] Además, y aunque no debe olvidarse que "las medidas de atención y asistencia no sustituyen, ni reemplazan a las medidas de reparación integral",[66] la CEEAV tampoco ha implementado acciones en ese sentido, aunque son medidas que

pudiesen ayudar a satisfacer las necesidades básicas de las víctimas. En este sentido, es importante señalar que ni la CEEAV ni el Profade cuentan aún con un fondo que brinde los recursos necesarios para otorgar las medidas, por lo que los pequeños apoyos que se han otorgado hasta la fecha son tomados de los gastos de operación de la institución.

Por otra parte, debe señalarse que es preocupante que más de dos años después de su creación, la CEEAV no cuente con un sitio web y no se tenga información sobre la existencia de campañas de difusión sobre sus actividades, lo que limita que la sociedad esté enterada de qué es la CEEAV, dónde se encuentra ubicada, quién la conforma y cómo pueden acceder a ella.

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila

Mediante oficio de fecha 11 de abril de 2016, la CEEAV solicitó a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) el acceso a los expedientes relacionados con desapariciones cometidas en Allende, Coahuila, durante marzo de 2011. La CDHEC respondió el 25 de abril de 2016 "que revisados los archivos y registros […] no se cuenta con expediente en el que se documente lo relativo a las personas desaparecidas en Allende, Coahuila de Zaragoza, en marzo de 2011". Sin embargo, hizo referencia a la versión pública de la Recomendación 109/2014,[67] de 28 de agosto de 2014, por la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en su modalidad de dilación en la procuración de justicia, respecto del caso de dos personas desaparecidas en Allende durante abril de 2011.

El 17 de agosto de 2011 fue remitida a la CDHEC una queja por la desaparición del cuñado y el padre del quejoso, originarios de Jalisco, quienes llegaron a Allende el 1 de abril de 2011 buscando dedicarse a la venta ambulante. La desaparición fue realizada presuntamente por la Policía Municipal de Allende. Los últimos mensajes que recibió el quejoso indicaban que la policía había detenido a sus familiares y que éstos no sabían ni el motivo de la detención ni a dónde los llevarían. El quejoso fue a la ciudad de Allende a buscarlos, pero nadie quería darle información; sin

embargo, el segundo día de su búsqueda una señora vecina de la casa en la que habitaban sus familiares le dijo: “muchacho, te voy a decir qué pasó, pero no le digas a la policía que yo te dije”. La señora le dijo que sus familiares “salieron de la casa con sus carritos para ir a vender X y sobre la calle principal que es la X, ya los esperaba una patrulla de la policía municipal de Allende con dos policías, quienes sin existir motivo aparente los detuvieron y subieron los carritos a la patrulla y desde ese momento la señora ya no los volvió a ver”. En su queja también manifestó:

> **esa ciudad de Allende parece zona de guerra, ya que al parecer grupos de delincuentes armados derribaron casas y desaparecieron mucha gente**, que sus fotos aparecían en la base de la policía; por otro lado quiero comentar que a la mayor parte de la gente del pueblo de Allende que le preguntaba por mis familiares me respondía que por mi seguridad no anduviera preguntando por ellos, ya que a la gente de afuera alguien no la quería y los desparecían.

A pesar de acudir a la Comandancia de la Policía para darles la información que tenía, el comandante negó que sus elementos se hubiesen llevado a sus familiares y le sugirió que presentara una denuncia por su desaparición. El quejoso presentó la denuncia y llamó de forma constante a la Agencia del Ministerio Público, recibiendo siempre la misma respuesta: “no sabían nada del paradero de mis familiares y que siguiera llamando para preguntar por ellos”. Después de analizar las diligencias llevadas a cabo por las autoridades, la CEDHEC concluyó que el personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de la PGJE “incurrió en violación a los derechos humanos, de legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de **dilación en la procuración de justicia**”. Las recomendaciones emitidas son en el sentido de esclarecer los hechos para determinar la verdad histórica y que se garantice una adecuada procuración de justicia.

Los hechos plasmados en la Recomendación 109/2014 demuestran que lo sucedido en Allende no puede únicamente circunscribirse a aquellas desapariciones vinculadas a la supuesta

venganza perpetrada por los Zetas en contra de ciertas familias. Aporta además indicios sobre la comisión generalizada de desapariciones forzadas por parte de la Policía Municipal y el miedo extendido en la población. Asimismo, da cuenta de que, desde agosto de 2011, otra institución del estado de Coahuila tuvo conocimiento de los hechos perpetrados en Allende durante marzo de 2011 y no actuó para atender lo sucedido.[68]

Memorial de víctimas y entrega "simbólica" de tierra

En diciembre de 2014, la abogada Ariana García de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras (en adelante "Familias Unidas"), señaló en entrevista en el programa de televisión *Segunda Emisión de Noticias MVS* que las autoridades de Coahuila habían caído en contradicciones en el caso de desapariciones masivas de personas en los municipios de Allende y Piedras Negras.[69] Indicó que las autoridades habían entregado actas de defunción y pequeñas cajas con presuntas cenizas a integrantes de la organización Alas de Esperanza y les habían solicitado que lo mantuvieran en secreto. A pesar de que inicialmente se les había dicho que era imposible identificar los restos hallados por el grado de calcinación que presentaban.[70] Por lo anterior, Familias Unidas manifestó que solicitarían a organismos internacionales y antropólogos forenses que verificaran la identidad de los restos que de acuerdo con la PGJE pertenecían a 11 personas calcinadas en 2011.[71]

Ante la declaración anterior, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, manifestó que lo que habían entregado era tierra del lugar en donde se localizaron algunos de los restos. De acuerdo con el gobernador, se llegó previamente a un consenso con las familias "para hacer una entrega de duelo".[72] Indicó que las actas de defunción fueron entregadas, pues en los casos en los que es imposible recuperar los cuerpos de las víctimas, pero hay certeza de su muerte, la ley permite la emisión de actas de defunción.[73] En este caso, señaló que se habían entregado 11 actas de defunción, pues había certeza sobre la muerte de esas personas, al existir declaraciones en ese sentido por parte de quienes participaron en

los hechos.[74] En este sentido, debe recordarse que “la obligación de investigar persiste hasta que se encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos”,[75] y que meras declaraciones —de las que incluso no existe prueba de que se hayan realizado sin que mediara coacción alguna— no pueden constituir la única prueba para determinar que existe certeza sobre la muerte de una persona.

Unos meses más tarde, en marzo de 2015, el gobierno de Coahuila anunció la construcción de un obelisco en memoria de las personas desaparecidas en Allende.[76] En el acto protocolario de inicio de la construcción se encontraron presentes el gobernador Rubén Moreira, representantes de los gobiernos municipal y estatal, así como integrantes de la organización Alas de Esperanza.[77] De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno, el gobernador señaló que el monumento representaba cuatro aspiraciones: “encontrar a las personas en calidad desaparecidas; hacer justicia, no tomar venganza; garantizar que nunca vuelva a suceder un acto así y tener una reconciliación de todos”.[78] En octubre de 2015, el memorial fue inaugurado por Rubén Moreira, y al igual que en el acto de inicio de la construcción, estuvieron presentes representantes de los gobiernos estatal y municipal, e integrantes de Alas de Esperanza.[79] El gobernador ofreció una disculpa a Alas de Esperanza porque las cosas a veces no eran tan rápidas como él desearía, pero recalcó que no podía olvidarse lo que había sucedido y ofreció seguir trabajando por la justicia.[80]

Es sumamente importante que el gobierno de Coahuila cumpla con su obligación de proporcionar una reparación integral a las víctimas. De acuerdo con la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, la reparación integral se compone de diferentes tipos de medidas, entre ellas las de satisfacción, que tienen el objetivo de “reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas”,[81] y entre las que se encuentran la “disculpa pública del Estado […] que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades” y la “realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas”.[82] Si bien el memorial mencionado en el párrafo anterior podría caber dentro de las medidas de satisfacción, no puede olvidarse que la generación

de iniciativas como la construcción de memoriales deben ser transparentes y estar sujetas a una consulta genuina con aquéllos más afectados por la violencia; todas las víctimas deben estar directamente involucradas en la forma en que debe recordarse lo sucedido.[83] Debe destacarse que este tipo de medidas no pueden ser las únicas implementadas por el Estado y no significarán nada si no están acompañadas de acciones adecuadas y efectivas tendientes a alcanzar la verdad y la justicia.

En cuanto a las disculpas ofrecidas por Rubén Moreira, no hubo una aceptación de responsabilidad por los hechos perpetrados y únicamente manifestó que lamentaba que las acciones implementadas no dieran resultados tan rápido como quisiera. Para que una disculpa sea considerada como una medida de satisfacción de acuerdo con la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila y con estándares internacionales como los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, es necesario que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.[84] Asimismo, incluso si se ofreciera una disculpa con estas características, si no es una medida que va acompañada de otras acciones, no debe ser considerada como suficiente en casos de graves violaciones de derechos humanos: las disculpas no pueden sustituir otras medidas materiales de reparación.[85]

Coahuila tiene que tomar las acciones que sean necesarias para asegurar que las víctimas obtengan una reparación integral que satisfaga los estándares internacionales. Las autoridades tienen que ir más allá de la construcción de un memorial, así como de la entrega de ayudas a través de programas sociales, para realmente cumplir con sus obligaciones en la materia. Asimismo, es fundamental que se realice un trabajo para asegurar que las víctimas conozcan cuáles son sus derechos y qué implica una reparación integral, para así evitar que acepten medidas que se encuentran muy por abajo de lo que deberían recibir.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

En septiembre de 2014, el antiguo titular de la CNDH informó públicamente que estaban investigando el caso de Allende desde meses atrás, recabando testimonios y recorriendo el lugar de los hechos.[86] De acuerdo con el presidente municipal de Allende, Reynaldo Tapia, esto no fue así y manifestó que la CNDH se había presentado en Allende tan sólo unos días antes de la rueda de prensa.[87] Al respecto, la revista *Proceso* publicó un documento de fecha 30 de junio de 2014 firmado por Gerardo Montfort Ramírez, director general de la Sexta Visitaduría, dirigido al diputado Edmundo Gómez Garza, en el que se indica:

> después de analizar y valorar los actos constitutivos de queja, se observó que éstos le son atribuidos, exclusivamente, a servidores públicos adscritos al Gobierno del estado de Coahuila; esto es, a una autoridad de carácter local; y es por esa razón, que atendiendo a la restricción que en materia de competencia establecen los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 9 y 15, último párrafo, de su reglamento interno, su caso fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila, a efecto de que con base en las facultades que tiene conferidas, resuelva lo que en derecho proceda.

Independientemente de cuándo exactamente haya iniciado su investigación, a más de dos años de que la CNDH expresara públicamente que emitiría una recomendación sobre el caso y a más de cinco años de los hechos, esto aún no ha sucedido. En un caso como éste, en el que las autoridades de todos los niveles de gobierno han actuado de manera deficiente y tardía, y en el que existe una clara participación por parte de autoridades en los hechos, es especialmente preocupante que la CNDH siga sin pronunciarse sobre el caso. Si se compara con el tiempo que se tardó en emitir la recomendación en el caso de la masacre de las 72 personas migrantes, podría decirse que aún está dentro del tiempo que suele tardarse en emitir recomendaciones; sin embargo, debe destacarse que en los cuatros casos que la CNDH ha clasificado como graves violaciones de derechos humanos, el tiempo que ha tardado en emitir las recomendaciones ha sido considerablemente

menor: entre dos y 15 meses después de los hechos.[88]

Acceso a lo actuado por la CNDH hasta agosto de 2016

El equipo de investigación agradece a la CNDH el que haya permitido en septiembre de 2016 el acceso al expediente de la investigación que conduce la Primera Visitaduría General en relación con la desaparición de personas en Allende, Coahuila, cometidas a partir de marzo de 2011.

De acuerdo con el expediente, la queja fue presentada por un tercero a la CNDH el 20 de mayo de 2014 y registrada el 5 de junio de ese año. La indagatoria de la CNDH se inicia tomando en cuenta el contenido de notas de prensa de diversos periódicos, tanto locales como nacionales, en los que "se desprende que en marzo del 2011, un grupo armado se presentó en Allende, Coahuila, destruyendo 40 residencias y 7 ranchos, aunado a lo anterior desaparecieron aproximadamente 300 personas, lo que motivo que la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa iniciara la indagatoria correspondiente, sin que a la fecha se hayan esclarecido esos actos". A continuación, se hará un recuento del contenido del expediente.

La PGR

Entre las notas de prensa que consultó la CNDH al inicio de su investigación, se encuentran algunas que señalan que el fiscal de Coahuila y la PGR tenían conocimiento de lo sucedido desde 2011, y que no tomaron las medidas necesarias. Consiguientemente, la CNDH —mediante oficio de 10 de julio de 2014— informa a la PGR que decidió ejercer su facultad de atracción para conocer del caso debido a la importancia de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos y a que, por su naturaleza, el caso trascendía el interés de la entidad federativa e incidía en la opinión pública nacional. Basándose en lo anterior, pregunta a la PGR sobre las actuaciones que ha realizado en torno a los hechos.

El 25 de julio de 2014, la CNDH recibe un oficio de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR con la respuesta a lo solicitado. La PGR responde

que “no cuenta con averiguación previa alguna iniciada por los hechos requeridos, ni ha recibido desglose de la Procuraduría General de Justicia del Estado”. El 3 de agosto de 2016, la CNDH solicita una ampliación a la información proporcionada por la PGR: *i)* un informe detallado y completo en el que se precisen las diligencias que llevaron a cabo servidores públicos de la SIEDO; y *ii)* si la PGR inició alguna averiguación previa o acta circunstanciada con motivo del operativo de “Búsqueda en vida Coahuila Norte”.

La PGJE

En oficio de 10 de julio de 2014, la CNDH comunica a la PGJE que ha decidido ejercer su facultad de atracción para conocer del caso y solicita un informe detallado y completo sobre los hechos del caso y las acciones emprendidas por la institución. Con ese oficio se da inicio a un largo proceso en el que la PGJE le da largas constantemente a la CNDH para proporcionarle información.

Mediante oficio de 12 de agosto de 2014, la CNDH reitera la solicitud de información realizada a la PGR y a la PGJE. El 13 de agosto de 2014, el visitador adjunto asignado al caso pregunta vía telefónica a la PGJE sobre la información solicitada en el oficio de 10 de julio de 2014 y le indica que la información ya fue solicitada a la Subprocuraduría de Personas no Localizadas, que en cuanto recaben la información le será enviada y que no podrán proporcionarle copia de la averiguación previa, pues es información confidencial, pero que se gestionaría para que pudiera acudir a las instalaciones a realizar la revisión. El 15 de agosto de 2014, el visitador adjunto vuelve a preguntar telefónicamente sobre la fecha en que podrá consultar la averiguación previa, y la respuesta es que deberá hacer la petición por escrito al procurador.

El 28 de agosto de 2014, la CNDH recibe información referente al caso por parte de la Dirección de Atención y Seguimiento a Colaboraciones y Derechos Humanos de la PGJE. En el documento de respuesta se señala que la Subprocuraduría de Personas no localizadas desarrolló, junto con otras autoridades gubernamentales, el operativo “Búsqueda en vida Coahuila Norte” que tuvo lugar del 26 de enero al 4 de febrero de 2014. Asimismo, indica que en junio

de 2011 se remitieron copias certificadas de la indagatoria a la SIEDO y que implementaron medidas para atender a las personas que fueron afectadas por los delitos.

En oficio de 6 de noviembre de 2014, la CNDH agradece la información proporcionada a la PGJE y reitera sus solicitud sobre la información que aún no le han proporcionado sobre las acciones emprendidas, pregunta el día en que podría presentarse personal de la CNDH a consultar la averiguación previa y solicita copia del oficio que la PGJE dice haber enviado a la PGR. El 21 de noviembre de 2014, el visitador adjunto se comunica telefónicamente con la PGJE en relación con el oficio de 6 de noviembre y le indican que aún no tienen la fecha en la que podrá consultar la averiguación previa. El 25 de noviembre de 2014, el visitador adjunto llama en diversas ocasiones a la PGJE y le indican que esa misma semana podría hacer la consulta, una vez que el director de Colaboración, Atención y Seguimiento de la PGJE precisara los días. Los días 26 y 28 de noviembre, 2 y 8 de diciembre de 2014, y 5, 13 y 14 de enero de 2015, el visitador adjunto intenta mediante llamada telefónica que le indiquen la fecha de consulta, pero la respuesta es siempre la misma: aún no se ha definido la fecha en que podrá consultarse el expediente.

Mediante oficio de 12 de diciembre de 2014, la CNDH reitera su solicitud a la PGJE, y pide información además sobre el contenido de una nota de prensa publicada en *La Jornada*, en la que se indica que solamente desaparecieron 28 personas, que 11 fueron asesinadas y quemadas, y que dos agentes de la policía municipal habían sido ya detenidos y consignados por su complicidad con los Zetas.

El 14 de enero de 2015, la CNDH recibe un oficio del subprocurador jurídico de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales de la PGJE, que indica que la información solicitada forma parte de una investigación de un expediente que ya no es competencia de la PGJE, pues la averiguación previa ya fue consignada y quien tiene toda la información ahora son los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal.

El 27 de febrero de 2015, la CNDH recibe documentos de la PGJE

sobre las órdenes de aprehensión del caso y un disco compacto con la base de datos de personas no localizadas y localizadas en Coahuila. El 27 de abril de 2015, el visitador adjunto de la CNDH vuelve a realizar llamada telefónica a la PGJE para verificar si ya tienen la fecha y hora en la que podrá consultar la averiguación previa.

El 11 de junio de 2015, el visitador adjunto y otro funcionario de la CNDH se presentaron en las instalaciones de la PGJE, anunciando que estaban ahí para allegarse de mayores elementos de la investigación. Ahí los comunicaron por teléfono con un funcionario de la PGJE, que preguntó que quiénes eran ellos y qué hacían ahí; que si alguien de Allende había presentado una queja ante la CNDH; que él sabía que eso no era así porque la gente de Allende desconfiaba de la CNDH porque una persona que trabajaba ahí lo hacía al mismo tiempo en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM). El visitador adjunto le explicó el motivo de su presencia y le pidió que le indicara quién era la persona que causaba desconfianza en los pobladores. El funcionario de la PGJE indicó que la siguiente semana se iba a realizar una rueda de prensa para dar información sobre la investigación y que la información se remitiría a la CNDH. Asimismo, manifestó que una parte de la investigación ya había sido consignada y, por lo tanto, no podían proporcionárselas.

El 3 de agosto de 2016, la CNDH pide a la PGJE un informe detallado y completo de las órdenes de aprehensión emitidas por el Juzgado de Primera Instancia, y que indique si la PGJE inició alguna averiguación previa o acta circunstanciada con motivo de la implementación del operativo “Búsqueda en Vida Coahuila Norte”. Solicitó también información para determinar si se había iniciado una averiguación previa en relación con la diligencia practicada en el rancho “Los Garza” con apoyo de peritos de la Policía Federal, en donde “se recolectaron diversas cenizas que se encontraban en el interior de 24 contenedores de 200 litros”. Asimismo, solicitó información sobre todas las diligencias que ha realizado la PGJE para integrar dos indagatorias, una por la desaparición de ciertas víctimas y otra iniciada en contra de personas cuyos nombres

aparecen testados,[89] así como que indicara cuáles diligencias estaban pendientes.

El 15 de agosto de 2016, personal de la CNDH se presenta en la PGJE para solicitar que les proporcione la información que habían requerido anteriormente y les den una copia certificada de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos de marzo de 2011 en Allende, o en su defecto que les permitan consultar los expedientes. El 16 de agosto de 2016, el visitador adjunto firma un acta de entrega de expediente y un acuerdo de confidencialidad para poder recibir el expediente. El 17 de agosto de 2016, la PGJE entrega finalmente a la CNDH una copia del expediente. Ese mismo día, la CNDH es informada por personal de la PGJE que no existían otras indagatorias que se hubiesen iniciado con motivo de los hechos;[90] que en el momento en que las familias de las víctimas acudieron a denunciar las desapariciones no fue posible recabarles ninguna muestra biológica por falta de recursos, pero que actualmente ya había sido recabada a la mayoría de los familiares. Le informaron también que con motivo del operativo "Búsqueda en vida Coahuila Norte" no se inició averiguación previa y que a la fecha "**no han obtenido ningún resultado de los peritos de la Policía Federal, respecto de las 2 459 muestras biológicas recolectadas en dicho operativo**". Esta última afirmación no es precisa; sin embargo, el expediente de la CNDH no contiene información que permita entender a qué se refiere el individuo entrevistado con no haber obtenido ningún resultado: ¿aún no han recibido respuesta de la Policía Federal? ¿Fue imposible obtener información relevante de las muestras?

Poder Judicial

El 23 de febrero de 2015, el Juzgado de Primera Instancia que conoce del caso remite a la CNDH la averiguación previa penal. El 24 de febrero de 2015, la CNDH solicita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal que conoce del caso que señale el lugar, fecha y hora para consultar las constancias que se encuentran dentro de la causa penal.

La CNDH recibe una copia de una resolución de solicitud de orden

de aprehensión de 29 de noviembre de 2014. De esa copia puede percibirse que, basándose en denuncias, declaraciones testimoniales y ministeriales, partes informativos, inspecciones ministeriales, informes de criminalística de campo y de antropología forense, la jueza determinó que existían indicios graves que concurrían y concordaban para aseverar que tuvo lugar la privación de la libertad y que esta privación "tenía por objeto *causar daño a los ofendidos para obligar a terceras personas a realizar un acto*". La jueza concluye que los ocho indiciados "actuaron con conocimiento y voluntad de contenido típico, como autores materiales" y que, por ello, se concedía la orden de aprehensión en su contra.

El 10 de junio de 2015, la CNDH solicita al Juzgado de Primera Instancia el acceso de su personal a las constancias que integren la causa. El 11 de junio de 2015, el visitador adjunto y otro funcionario de la CNDH se presentaron en el Juzgado para solicitar la consulta del expediente. La jueza accedió a la consulta y les permitió tomar fotografías al expediente. Un año después de iniciada la indagatoria de la CNDH es que logra tener acceso a un expediente que le permita analizar las acciones emprendidas por la PGJE.

El 11 de agosto de 2016, la CNDH solicitó al Poder Judicial un informe detallado y completo en el que se precise el estado que guarda la causa penal; un informe del estado procesal que guarda la causa penal radicada con motivo de la consignación de la averiguación previa, y una copia certificada de todas las constancias que integraban la causa penal, o, en su caso, la fecha y hora para acudir a consultar el expediente.

Mediante oficio de 16 de agosto de 2016, el Poder Judicial informa que se ejercitó acción penal el 25 de noviembre de 2014 y el 16 de marzo de 2015. En el documento se indica que se dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro agraviado, y que el auto fue recurrido y confirmado en segunda instancia. Asimismo, indica que, en relación con otro proceso, se encontraba suspendido por motivo de un juicio de amparo promovido en contra de la sentencia dictada. El 18 de agosto de 2016 informa a la CNDH que "la averiguación aludida fue consignada ante el extinto [información testada] el cual según registros que obran en el libro de apelaciones la causa penal

que se tenía [información testada] y actualmente se encuentra promovido por las partes [información testada].

Gobiernos municipales

El 24 de agosto de 2014, personal de la CNDH se entrevistó con los presidentes municipales de Piedras Negras y de Allende, quienes narraron la situación que se había vivido en los últimos años en su municipio. De acuerdo con el presidente municipal de Allende, en los hechos de marzo de 2011 se quemaron alrededor de 46 viviendas y se llevaron a muchas más de 300 personas. Asimismo, indicó también que la Policía Municipal había tenido un papel importante en lo ocurrido, y que a pesar del dolor que representaban para todos, hasta ese momento sólo habían podido derrumbar unas cinco o seis casas.

En oficio de 6 de noviembre de 2014, la CNDH solicita al presidente municipal de Allende un informe detallado y completo de los hechos y de las acciones tomadas al respecto. El 4 de febrero de 2015 se recibe la respuesta del presidente municipal de Allende, quien indica que no cuenta con registro alguno sobre la información solicitada, pues la anterior Administración Pública Municipal se negó a hacer la entrega de la Administración.

CDHEC

El 15 de agosto de 2016, personal de la CDHEC se presenta en las instalaciones de la CNDH para presentarles un oficio en el que se les informa que ejercieron facultad de atracción del caso de Allende y que solicitan acceso al expediente de la Recomendación 109/2014. El 16 de agosto de 2016, la CDHEC entrega copia certificada a la CNDH del expediente completo de la Recomendación 109/2014.

Otras autoridades

El 11 de agosto de 2016, la CNDH solicitó a la Policía Federal, División Científica y a la Sedena información sobre su participación en el operativo “Búsqueda en vida Coahuila Norte”. También solicitó a la Sedena información sobre el batallón que se encuentra en la localidad de Allende, el nombre de los servidores públicos que se

encontraban al mando el 18 de marzo de 2011 e información sobre las acciones que tomó el Ejército Mexicano una vez que tuvo conocimiento de los hechos.

Mediante oficio de 12 de agosto de 2016, la CNDH solicita a la Dirección General del Registro Público del Estado de Coahuila un informe detallado y completo de los antecedentes registrales de 39 inmuebles. El 15 de agosto de 2016, personal de la CNDH se presenta en las instalaciones del Registro para solicitar un informe sobre la situación actual que guardan los domicilios de las casas dañadas en el municipio de Allende

Observaciones

Como puede observarse en los párrafos anteriores, la CNDH comenzó su indagatoria en el caso un poco más de tres años después de los hechos, una vez que lo sucedido se volvió de conocimiento público y un tercero presentó una queja. Un mes después de registrada la queja, comienza a enviar oficios a la PGJE y a la PGR.

En el expediente pueden apreciarse un gran número de oficios enviados en los últimos dos años a diversas autoridades y, en particular, es evidente la reticencia por parte de la PGJE para responder a las preguntas de la CNDH y de forma especial para permitir la consulta del expediente. Incluso puede notarse el rechazo y el cuestionamiento por parte de personal de la PGJE a la participación de la CNDH. Sin duda alguna, la dilación por parte de la PGJE para proporcionar información es una obstrucción al trabajo de la CNDH.

A pesar de lo anterior, debe notarse que no se aprecian esfuerzos considerables por parte de la CNDH para poder acceder a fuentes alternativas de información. En el expediente aparecen entrevistas realizadas a los presidentes municipales de Allende y Piedras Negras, pero ninguna a vecinos del lugar o a otros actores que pudieran proporcionar información. Si bien fue hasta ese mismo mes que la PGJE finalmente entregó copia del expediente, la CNDH tuvo acceso al expediente de la averiguación previa y del proceso judicial desde el 10 de junio de 2015. Sin embargo, no se registra que

hayan implementado acciones derivadas de la información ahí contenida hasta agosto de 2016. A partir de agosto es que puede observarse que la CNDH se acerca a hacer preguntas por primera vez a la CDHEC, al Registro Público de la Propiedad, la Policía Federal y la Sedena.

De lo anterior se aprecia que, si bien en una etapa inicial la CNDH realizó ciertos esfuerzos para obtener información sobre los hechos y se enfrentó a la reticencia de la PGJE, se reporta un claro periodo de inactividad en el expediente de más de un año: junio de 2015 a agosto de 2016. A pesar de los obstáculos enfrentados para acceder a la información, la CNDH debió haber tomado las acciones necesarias para continuar con su indagatoria.

Procuraduría General de la República

El papel de la PGR es destacable en este caso porque no ha ejercido su facultad de atracción sobre él a pesar de las diversas solicitudes que se han realizado en ese sentido.

La primera ocasión en la que lo sucedido fue hecho del conocimiento de la PGR está registrada en el expediente de la averiguación previa. En acuerdo de 1 de junio de 2011, el agente investigador del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro determinó que dado que "en los hechos narrados intervienen miembros de la delincuencia organizada que el denunciante ubica como parte del Cártel de los Zetas, quienes realizan diversas conductas que encuadran dentro del ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada", debía remitirse copia certificada de actuaciones a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Consecuentemente, mediante oficio núm. 175/2011 del mismo 1 de junio de 2011, se remitieron copias certificadas de la A.P.P. CEYCS/012/2011 a la licenciada Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la SIEDO.

En mayo de 2014, el gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Moreira, manifestó públicamente que la PGR había ignorado la alerta que el gobierno estatal hiciera en 2011.[91] De acuerdo con notas de prensa, Edmundo Gómez Garza —exdiputado en Coahuila del

Partido Acción Nacional— solicitó en 2014 a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, una copia del documento que fuera enviado a la SIEDO. La respuesta de la PGR fue que no tenían el documento entre sus archivos:[92]

> Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende […]. Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito.

El 13 de noviembre de 2014, los diputados federales Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, plantearon un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados. En el punto de acuerdo propuesto se exhortaba al procurador general de la República para que "en el ámbito de sus respectivas competencias atraiga la investigación para esclarecer los hechos de desapariciones forzadas de personas ocurridos en el municipio de Allende, Coahuila, entre marzo y agosto de 2011".[93] De forma similar, en julio de 2016, la senadora panista Silvia Garza Galván presentó un punto de acuerdo para que la PGR atrajera las investigaciones de los hechos.[94]

Sociedad civil y medios de comunicación

La sociedad en general fue en un primer momento reacia a prestar apoyo a las familias de personas desaparecidas de distintos lugares del país, principalmente por el estigma que existía y aún sigue existiendo alrededor de las personas que son "*levantadas*". Por esa razón, inicialmente los esfuerzos de búsqueda de verdad, justicia y reparaciones se concentraron en pocas organizaciones de la sociedad civil.

En Coahuila, es fundamental el trabajo que desde 2009 realiza el Centro Diocesano "Fray Juan de Larios" y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), los que, a través de diversas actividades, han dado acompañamiento a un gran número de familias. Posteriormente, se crearon otros colectivos en los que se agrupan familias de personas desaparecidas en

diferentes regiones de Coahuila. En 2012, diversas familias se organizaron y así es como surge Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas ubicada en Piedras Negras, Coahuila. En 2013, comienzan los trabajos de Grupo VIDA en Torreón, Coahuila. Al año siguiente, en 2014, después de la realización del operativo "Búsqueda en vida Coahuila Norte", surge la organización Alas de Esperanza.

A pesar de las diferentes actividades y enfoques que cada una de las organizaciones realiza, y que no siempre coinciden, todas tienen en común su trabajo por las personas desaparecidas y la participación de sus familias en ellas. De acuerdo con información obtenida en entrevistas y medios de comunicación, una de las más grandes fuentes de discordia entre las organizaciones han sido las acciones que ha tomado el gobierno de Coahuila como respuesta a los casos de personas desaparecidas en la entidad. Después de la entrega de tierra a familias de desaparecidos de la agrupación Alas de Esperanza, se generaron cuestionamientos por parte de otras organizaciones que representan también a víctimas de Allende; por ejemplo, se manifestó que con este tipo de acciones las autoridades se habían encargado de dividir a las familias.[95] Esto también es evidente cuando se observa que tanto en el acto de inicio de construcción como en la inauguración del memorial en Allende, estuviese únicamente presente una de las organizaciones.

En cuanto a los medios de comunicación, si bien el conocido como caso Allende cobró mayor relevancia durante el 2016 a raíz del juicio seguido en contra de Marciano Millán Vázquez en San Antonio, Texas, la cobertura desde que se empezó a hacer público lo sucedido a nivel nacional e internacional en 2014 no es comparable a la que se ha dado en otros casos, a pesar de tratarse de graves violaciones de derechos humanos con un número de cientos de víctimas. Esta situación nos remite a lo señalado al inicio de este apartado, el estigma que aún prevalece en una buena parte de la sociedad mexicana en contra de las víctimas de actos perpetrados por la delincuencia organizada.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

La comunidad internacional, fuera de acciones aisladas como notas de prensa o el informe *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México* publicado en 2016 por Open Society Justice Initiative, no se ha pronunciado sobre el caso de las desapariciones de Allende en marzo de 2011. A pesar de su representatividad, ningún organismo internacional lo ha mencionado ni en comunicados de prensa ni en informes.

El Comité Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sin embargo, sí han señalado en sus informes una enorme preocupación no solamente por la falta de implementación de medidas para enfrentar los problemas estructurales en materia de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, sino también por el deterioro de la situación.[96] De la misma forma, la CIDH tampoco se ha pronunciado sobre el caso, aunque destaca que en el informe *Situación de derechos humanos en México* (2015) se dedicara un apartado a las desapariciones y desapariciones forzadas, reconociendo "la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de los mismos".[97]

CEAV

La CEAV no cuenta con ningún expediente vinculado a la desaparición de personas en Allende de marzo de 2011 y meses subsecuentes. De manera general, sin embargo, representantes de familias de víctimas de personas desaparecidas en Coahuila en otras fechas han reportado que se han enfrentado a muchas dificultades para obtener su ingreso en el RENAVI ante la falta de mecanismos ágiles, pérdida de documentos por funcionarios de CEAV y falta de organización entre las oficinas de CEAV en la Ciudad de México y Torreón. Asimismo, mencionan los obstáculos a los que se enfrentan para obtener recursos que permitan a las víctimas y/o a sus representantes viajar a la Ciudad de México.

Notas

[1] En el expediente al que el equipo de investigación tuvo acceso aparecen registradas desapariciones que tuvieron lugar primordialmente en marzo de 2011; sin embargo, hay algunas registradas en agosto de 2011, enero de 2012 y marzo de 2012, entre otras.
[2] Decreto núm. 338 publicado el 22 de enero de 2016 en el *Periódico Oficial del* Gobierno del Estado de Coahuila, transitorio tercero. Disponible en <http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/07-SS-22-ENE-2016.PDF>.
[3] Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 145.
[4] *Ibidem*, párr. 320.
[5] *Idem*.
[6] *Ibidem*, párr. 43; Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C núm. 212, párr. 193.
[7] Corte IDH. *Caso Rosendo Cantú y otra vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C núm. 216, párr. 175.
[8] Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C núm. 209, párr. 192.
[9] Corte IDH. *Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C núm. 186, párr. 115.
[10] Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, para. 176.
[11] Corte IDH. *Caso Luna López vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C núm. 269, párr. 155; Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, para. 177. Véase también Ferrer Mac-Gregor y Pelayo Möller, "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos", en Steiner y Uribe (eds.), *Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario*, Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014, párr. 52.
[12] Corte IDH. *Caso Luna López vs. Honduras.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C núm. 269, párr. 155.
[13] Corte IDH. *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C núm. 163, párr. 156.
[14] Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C núm. 209, párr. 192.
[15] Corte IDH, *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia*. Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C núm. 163, párr. 156.

[16] *Ibidem*, párr 158.

[17] Corte IDH. *Caso Contreras y otros vs. El Salvador.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C núm. 232, párr. 129; Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C núm. 209, párr. 191; Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C núm. 217, párr. 152.

[18] GIEI, *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, párr. 351. Disponible en <http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe->.

[19] *Idem*.

[20] Es también importante destacar que el Protocolo de Minnesota está formalmente en proceso de actualización desde abril de 2015. Véase <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionExtraLegalArbitrary.aspx>.

[21] P*rotocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 23 de septiembre de 2015. Véase <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409180&fecha=23/09/2015> y <http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo%20Desaparici%C3%B3n%20Forzada.pdf>. Asimismo, a nivel estatal existen hoy en día el *Protocolo para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas o ausentes* y el *Protocolo de búsqueda y localización inmediata de personas desaparecidas, de la PGJE. Respuesta del Estado de Coahuila de Zaragoza al informe "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México",* publicado por Open Society Foundations, agosto de 2016, pp. 53-54. Disponible en <http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/Docs%20consulta/Informe-Open%20Society%20Foundations-web.pdf>.

[22] Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C núm. 209, párr. 215.

[23] *Idem*.

[24] Corte IDH. *Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador.* Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C núm. 247, párr. 91; Corte IDH. *Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C núm. 205, párr. 284.

[25] *Protocolo Modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales,*

arbitrarias y sumarias. Protocolo de Minnesota, p. 57. Disponible en <http://www.hchr.org.co/publicaciones/libros/Protocolo%20de%20Minesota.pdf>.

[26] Leopoldo Ramos, "PGR supo con 'oportunidad' de 'levantones' en Allende, Coahuila: ex fiscal", *La Jornada*, 15 de mayo de 2014. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/15/pgr-supo-con-oportunidad-de-levantones-en-allende-coahuila-ex-fiscal-5064.html>; Camelia Muñoz, "Ex procurador de Coahuila contradice a Rubén Moreira en matanza de Allende, *Noticias MVS*, 14 de mayo de 2014. Disponible en <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/siguen-contradicciones-sobre-desapariciones-en-allende-ex-procurador-de-coahiila-inculpa-a-z-40-981>.

[27] Debe destacarse que la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila fue creada en abril de 2012.

[28] El 5 de mayo de 2012, D2 presentó una denuncia por la desaparición de su hermana V2, su cuñado V1 y sus sobrinos V3 y V4. El denunciante manifestó que el 20 de marzo de 2011, un vecino le informó que personas armadas irrumpieron en el domicilio de su hermana, sacaron a los cuatro miembros de la familia, los subieron a la camioneta y quemaron la casa. Indicó que nunca más volvieron a saber de sus familiares y que quería que quedara asentado que en esos mismos días "un grupo armado estuvo levantando a gente de toda la ciudad de Allende y de igual manera se llevan sus vehículos y quemaban las casas". El 16 de julio de 2012, la señora D3 presentó una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada y los que resulten. De acuerdo con la denuncia, su esposo V6 —quien apoyaba al señor V5, de la familia Garza— desapareció el 18 de marzo de 2011. La denunciante manifiesta haberse enterado también de la desaparición de un amigo de su esposo, V7, y de que buscando a su esposo se había enterado de que las esposas de varios trabajadores de los Garza también buscaban a sus esposos que estaban desaparecidos, y de que habían tumbado y quemado varias casas de esa familia.

[29] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora adscritos a la Subprocuraduría de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 19 de marzo de 2013.

[30] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora adscritos a la Subprocuraduría de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 23 de julio de 2013.

[31] Acuerdo, Designación de Perito en Criminalística de Campo, Agente Investigador del Ministerio Público de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 28 de enero de 2014.

[32] El 19 de noviembre de 2013, los agentes de la Policía Investigadora identificaron **28** domicilios. No existe una explicación en el expediente de por qué no se revisaron todos.

[33] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del estado adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 14 de noviembre de 2012.
[34] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del Estado adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 28 de enero de 2014.
[35] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 29 de enero de 2014; Declaración testimonial de T2, 29 de enero de 2014.
[36] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 14 de noviembre de 2012; Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 28 de enero de 2014; Denuncia presentada por D4, 23 de mayo de 2014; Denuncia presentada por D2, 31 de mayo de 2014; Declaración testimonial de PP5, 28 de junio de 2014; Declaración ministerial de PP20, 28 de junio de 2014; Declaración ministerial de PP10, 9 de julio de 2014; Declaración testimonial de T5, 22 de julio de 2014; Declaración testimonial de T6, 31 de julio de 2014; Declaración testimonial de T7, 12 de agosto de 2014; Denuncia presentada por D7, 29 de agosto de 2014; Declaración testimonial de T8, 19 de septiembre de 2014; Declaración testimonial de T9, 11 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T10, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T11, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de PP18, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T4, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T12, 12 de noviembre de 2014; Denuncia presentada por D11, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T13, 12 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T14, 23 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de T15, 10 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de B2, 23 de noviembre de 2014; Declaración testimonial de B3, 17 de diciembre de 2014; Declaración testimonial de B4, 17 de diciembre de 2014.
[37] Parte informativo de agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos a la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, 10 de noviembre de 2014.
[38] En la declaración ministerial de 28 de junio de 2014 de un policía municipal, se menciona también que elementos de la Sedena presenciaron algunos de los hechos (saqueo de domicilios y de un negocio), pero que no hicieron nada para evitar que tuvieran lugar.
[39] Declaración Ministerial de PP1, 4 de marzo de 2015; Declaración Ministerial de PP4, 4 de marzo de 2015; Declaración Ministerial de PP3, 4 de marzo de 2015.
[40] La vista de ejercicio de acción penal establece que se encuentra acreditada la

probable responsabilidad en la comisión del delito de **secuestro calificado** previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c) y 10, fracción I, incisos b), c) y d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Estos artículos establecen lo siguiente:
Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: […]
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros;
Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: […]
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
c) Que se realice con violencia;
d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;

[41] La vista de ejercicio de acción penal establece que se encuentra acreditada la probable responsabilidad en la comisión del delito de **secuestro calificado** previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c) y 10, fracción I, inciso b) y fracción II, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. El inciso a) de la fracción II del artículo 10 establece:
II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;

[42] Corte IDH, *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C núm. 163, párr. 158.

[43] GIEI, *op. cit.*, párr. 345.

[44] Corte IDH. *Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C núm. 240, párr. 238.

[45] Como puede observarse en la sección sobre el expediente proporcionado por la CNDH, no hay información sobre los resultados que haya arrojado esta muestra. Asimismo, en la respuesta del gobierno del Estado de Coahuila al informe de Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, se establece que del rancho “Los Garza” se recolectó diversa evidencia que fue analizada por la Policía Federal División Científica. Sin embargo, no proporciona información sobre el contenido del análisis realizado por la Policía Federal. *Respuesta del Estado de Coahuila de*

Zaragoza al informe: "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México" publicado por Open Society Foundations, agosto de 2016, p. 19. Disponible en <http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/Docs%20consulta/Informe-Open%20Society%20Foundations-web.pdf>.

[46] GIEI, *op. cit.*, párr. 195.

[47] Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, A/HRC/27/49, 4 de agosto de 2014, párr. 66.

[48] El 20 de mayo de 2014 se publicó en el *Periódico Oficial* del Gobierno del Estado de Coahuila el Decreto núm. 491, mediante el cual se reformaron diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila, entre ellos el artículo 212 BIS y 212 BIS 1 que tipifican la **desaparición de personas** y establecen las circunstancias agravantes del delito de desaparición de personas. Véase <http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/40-PS-20-MAY-2014.PDF>. Anteriormente a esta reforma, el 29 de diciembre de 2013 se adicionó el artículo 212 BIS y 212 BIS 1 al Código Penal del Estado de Coahuila, tipificándose el delito de **desaparición forzada de personas**. Sin embargo, en esta reforma inicial el tipo penal era mucho más limitado y no contenía diversos elementos reconocidos por los estándares internacionales. Véase <http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/96-PS-29-NOV-2013.PDF>.

[49] Oficio de 25 de agosto de 2014 de la Dirección de Atención y Seguimiento a Colaboraciones y Derechos Humanos de la PGJE dirigido a la Subdirectora Jurídica, Consultiva y Encargada de la Subdirección de Derechos Humanos de la PGJE.

[50] Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, p. 161. Disponible en https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/undeniable-atrocities-esp-20160602.pdf.

[51] Véase https://fuundec.org/gta/.

[52] *Idem*.

[53] United Nations, General Assembly, *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Addendum. Follow-up report to the recommendations made by the Working Group. Missions to Mexico and Timor Leste,* A/HRC/30/38/Add.4, 11 de septiembre de 2015.

[54] Véase <https://fuundec.org/gta/>.

[55] Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, *op. cit.*, p. 161.

[56] Decreto No. 490. Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, *Periódico Oficial*, 20 de mayo de 2014. Disponible en <http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/40-PS-20-MAY-2014.PDF>.

[57] Michael Chamberlain, *La legislación para la atención a víctimas en el Estado de Coahuila,* 2015.
[58] Información proporcionada por Michael Chamberlain, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”.
[59] *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza*, artículos 67 y 69.
[60] Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Decreto número ٢٣ ,٥٨١ de septiembre de ٢٠١٤. Disponible en <http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/Decreto581-14.pdf>. El 28 de octubre de 2014, el decreto fue publicado en el *Periódico Oficial* del estado.
[61] El 11 de diciembre de 2013, se emitió el decreto por el cual se creaba el Profade. Su objeto fue “garantizar de manera integral el derecho a la reparación efectiva de las familias de las personas desaparecidas, en especial para que las autoridades del Estado de Coahuila de Zaragoza tomen las medidas apropiadas para asegurar de manera real y efectiva los derechos de alimentación, trabajo, educación, salud, vivienda y demás derechos humanos que resulten vulnerados con motivo de las desapariciones de personas que prohíbe la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes”. Fue resultado del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas en México (junio de 2013), así como de la Mesa de Atención Humanitaria y la Mesa de Armonización Legislativa ahí generadas e integradas por familias de FUUNDEC/M, miembros del Centro Diocesano de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, miembros del Grupo Autónomo de Trabajo y autoridades estatales y federales. Michael Chamberlain, *La legislación para la atención a víctimas en el Estado de Coahuila*, 2015.
[62] Una de las víctimas de Allende tiene un registro doble, pues cuenta con dos familiares desaparecidos.
[63] De todo este universo de víctimas, únicamente **diez** que pertenecen al colectivo Alas de Esperanza están registradas en el Registro Estatal de Víctimas. Las restantes se encuentran en una etapa de “pre-registro”, pues “después de haberlas visitado en la ciudad de Allende, y solicitado la documental mínima, no se ha logrado recabar ésta”. En este sentido, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila, si las víctimas no están ingresadas en el Registro Estatal no pueden tener acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral.
[64] En relación con estas brigadas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, y ahora en México (FUUNDEC-FUNDEM), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Alas de Esperanza de Allende, así como colectivos de familias de Centroamérica, como el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) y el Colectivo de Familias de Guatemala, participaron en la primera “Jornada de Búsqueda en Vida en Cárceles de Coahuila”. Visitaron los

siete Ceresos del Estado de Coahuila (dos en Piedras Negras, dos en Saltillo, uno en San Pedro, otro en Torreón y el último en Acuña) con el objetivo de buscar "personas que están desaparecidas y que haya posibilidades de que se encuentren en estos centros de readaptación social". Véase *Comunicado/Familiares de personas desaparecidas realizan jornadas de búsqueda en vida en cárceles de Coahuila*, 12 de agosto de 2016. Disponible en <http://fundacionjusticia.org/comunicado-familiares-personas-desaparecidas-realizan-jornada-busqueda-en-vida-en-carceles-coahuila/>.

[65] Artículo 5, fracción XIV de la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.*

[66] Artículo 10, fracción II de la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.*

[67] Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Recomendación 109/2014. Disponible en <http://cdhec.org.mx//archivos/pdf/Recomendaci%C3%B3n%20109%202014.pdf> .

[68] De acuerdo con el artículo 19 de la Ley, "la Comisión tiene competencia en todo el territorio del Estado, y conocerá **de oficio** o a petición de parte, de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público". El artículo 69 establece que los Visitadores Regionales tienen la atribución de **"iniciar de oficio**, previo acuerdo del Presidente, el trámite de investigación cuando un acto de autoridad o de servidores públicos, estatales o municipales, se presuma como **violación grave de los Derechos Humanos y se haga del conocimiento público por cualquier medio de información o comunicación**". Asimismo, se establece en el artículo 101 que "cuando por algún medio se haga del conocimiento público un acto u omisión de alguna autoridad o servidor público, estatal o municipal, que se presuma como violación grave de los Derechos Humanos de alguna persona o grupo de ellas, el Presidente instruirá al Visitador o Visitadores que estime necesarios para que, de inmediato, inicien una investigación preliminar".

[69] Redacción, "Entregan cenizas para dar carpetazo al caso de desaparecidos en Allende, denuncian", *SDP noticias*, 22 de diciembre de 2014. Disponible en <http://www.sdpnoticias.com/estados/2014/12/22/entregan-cenizas-para-dar-carpetazo-a-caso-de-desaparecidos-de-allende-denuncian>.

[70] *Idem*. Además, Redacción, "Entregan tierra por cenizas a familias de desaparecidos", *El Diario de Coahuila*, 24 de diciembre de 2014. Disponible en <http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2014/12/24/entregan-tierra-cenizas-familias-desaparecidos-476742.html>.

[71] Redacción, "Entregan cenizas para dar carpetazo al caso de desaparecidos en Allende, denuncian", *op. cit.*

[72] Redacción, "Entregan tierra por cenizas a familias de desaparecidos", *op. cit.*

[73] *Idem*; Camelia Muñoz Alvarado, "Fue tierra lo que entregaron a deudos de

desaparecidos", *Magazine Mx*, 23 de diciembre de 2014. Disponible en <http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=16418>.
[74] *Idem*.
[75] Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México.* Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C núm. 209, párr. 143.
[76] Camelia Muñoz, "Construirán obelisco en memoria de desaparecidos en Allende", *Noticias MVS,* 16 de marzo de 2015. Disponible en <http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/construiran-obelisco-en-memoria-de-desaparecidos-en-allende-709>.
[77] Gobierno del Estado de Coahuila, *Erigirán en Allende obelisco en memoria de desaparecidos; llaman a reconciliación*, 15 de marzo de 2015. Disponible en <http://coahuila.gob.mx/noticias/index/erigiran-en-allende-obelisco-en-memoria-de-desaparecidos-llaman-a-la-reconciliacion>.
[78] *Idem*.
[79] Gobierno del Estado de Coahuila, *Se inaugura Memorial alusivo a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas*, 22 de octubre de 2015. Disponible en <http://coahuila.gob.mx/noticias/index/se-inaugura-memorial-alusivo-a-las-personas-que-se-encuentran-en-calidad-de-desaparecidas-22-10-15>.
[80] *Idem*; José Rodríguez, "Pide disculpas RMV a familiares de desaparecidos; se compromete a que no se repita masacre de Allende, Coahuila", *Vanguardia*, 22 de octubre de 2015. Disponible en <http://www.vanguardia.com.mx/articulo/pide-disculpas-rmv-familiares-de-desaparecidos-se-compromete-que-no-se-repita-masacre-de>.
[81] Artículo 10, fracción V de la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza*.
[82] Artículo 55, fracciones IV y VI de la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza*.
[83] Judy Barsalou y Victoria Baxter, "The Urge to Remember. The Role of Memorials in Social Reconstruction and Transitional Justice", *United States Institute of Peace*, Stabilization and Reconstruction Series, núm. 5, enero 2007, p. 13. Disponible en <https://www.usip.org/sites/default/files/srs5.pdf>.
[84] Artículo 55, fracciones IV y IV de la *Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza*; Naciones Unidas, Asamblea General, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, Resolución aprobada el 16 de diciembre de 2005, Principio 22, fracción e).
[85] International Center for Transitional Justice, *More Than Words. Apologies as a Form of Reparation*, diciembre de 2015, p. 8. Disponible en <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf>.

[86] Véase Redacción, "CNDH investiga caso de Allende", *El Siglo Coahuila*, 12 de septiembre de 2014. Disponible en <https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/18599.cndh-investiga-caso-de-allende.html>.
[87] Juan Alberto Cedillo, "Tres años después, la CNDH comienza a investigar la masacre de Allende", *Proceso*, 17 de septiembre de 2014. Disponible en <http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=382282>.
[88] La *Recomendación 1VG/2012. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero* fue publicada el 27 de marzo de 2012, es decir, poco más de tres meses después de los hechos. La *Recomendación 2VG/2014. Sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos iniciada con motivo de los Hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el Municipio de Ocoyucan, Puebla* fue publicada dos meses después de los hechos, el 11 de septiembre de 2014. La *Recomendación 3VG/2015. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de V44, V45, V46, V47 y V52, así como la ejecución extrajudicial de V49, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán* fue publicada el 24 de noviembre de 2015, diez meses después de los hechos. La *Recomendación 4VG/2016. Sobre la investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 24 civiles y la privación de la vida de un civil; la tortura de dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos, atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el "Rancho del Sol", Municipio de Tanhuato, Michoacán* se emitió el 18 de agosto de 2016, es decir, un año y tres meses después de los hechos (15 meses). Disponibles en <http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Violaciones_Graves>.
[89] En el oficio de 3 de agosto de 2016, se hace referencia a dos indagatorias. No se tiene información sobre lo que pueda contener la segunda.
[90] Debido al testado del documento no es clara la siguiente frase que contiene: "y que respecto de los expedientes de las averiguaciones previas y actas circunstanciadas consistentes en [información testada] señaladas en el petitorio signado por este Organismo Nacional, todos están acumulados dentro de las constancias de la averiguación previa [información testada] y que actualmente hay [información testada] que consiste en un [información testada] de la cual únicamente se han realizado entrevistas a otros probables responsables de quienes en este momento no cuenta mayores datos".
[91] Juan Alberto Cedillo, "La PGR ignoró alerta sobre masacre en Allende, asegura Rubén Moreira", *Proceso*, 16 de mayo de 2014. Disponible en <http://www.proceso.com.mx/372369/la-pgr-fue-notificada-de-la-masacre-en-allende-asegura-ruben-moreira>.

[92] Juan Alberto Cedillo, “Coahuila tuvo su Ayotzinapa”, *Proceso*, 19 de diciembre de 2014. Disponible en <http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=391049>.
[93] Proposición con punto de acuerdo, relativo a los casos de desaparición forzada de personas ocurridos en Allende, Coahuila, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, *Gaceta Parlamentaria*, núm. 4155-V, 13 de noviembre de 2014. Disponible en <http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/nov/20141113-V/Proposicion-23.html>.
[94] Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senado de la República, LXIII Legislatura, Boletín 462, *Demanda senadora Silvia Garza que PGR atraiga investigación sobre masacre en Allende, Coahuila*, 24 de julio de 2016. Disponible en <http://www.pan.senado.gob.mx/2016/07/demanda-senadora-silvia-garza-que-pgr-atraiga-investigacion-sobre-masacre-en-allende-coahuila/>.
[95] Redacción, “Entregan cenizas para dar carpetazo al caso de desaparecidos en Allende, denuncian”, *op. cit.*
[96] United Nations, General Assembly, *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Addendum. Follow-up report to the recommendations made by the Working Group. Missions to Mexico and Timor Leste, op. cit*., párr. 6; Naciones Unidas, Asamblea General, *Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México*, A/HRC/32/39/Add.2, 6 de mayo de 2016, párr. 7; Naciones Unidas, Asamblea General, Comité contra la Desaparición Forzada, *Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*, CED/C/MEX/CO/1, 5 de marzo de 2015, párr. 10.
[97] CIDH, *Situación de derechos humanos en México*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 100. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf>.

Capítulo 8

RECOMENDACIONES HACIA LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL

Delia Sánchez del Ángel y Jacobo Dayán Askenazi

La Ley General de Víctimas (LGV) dedica uno de sus capítulos al derecho a la verdad, indicando que es un derecho que corresponde tanto a las víctimas como a la sociedad en general.[1] En su artículo 22 establece que, buscando que las víctimas, sus familias y la sociedad ejerzan plenamente el derecho a la verdad, el Estado puede "generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente". Estos mecanismos deben cumplir con diversos objetivos, entre ellos, "el esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica; […] la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos; […] el debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas; […] la contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas de investigación, y […] la recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos". Para efectivamente cumplir con estos objetivos, deben realizarse "consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares".

En el artículo 23 de la LGV se contempla la participación de organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, para que aporten a las autoridades competentes la información que se derive de sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, para así contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Para ello, "las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente".

La investigación realizada por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, como institución académica, busca con esta investigación contribuir a entender lo sucedido, y hacer un recuento de las acciones y omisiones del Estado mexicano vinculadas a los dos hechos objeto de estudio. Asimismo, tomando en cuenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) goza de funciones y facultades que le permiten hacer cambios en su interior y realizar recomendaciones a diferentes instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (en adelante Sistema Nacional),[2] así como a otras que juegan un papel fundamental en el respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas, este informe contiene una serie de propuestas de recomendaciones que espera que la CEAV haga suyas. Entre aquellas funciones y facultades relativas al objeto central de la presente investigación y que deberían tomarse en cuenta, se encuentran las siguientes:[3]

> **III**. Elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;
>
> **IV.** Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
>
> **XVII**. Hacer recomendaciones al Sistema, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;
>
> **XX**. Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
>
> **XXI**. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de

su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;

XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño.

¿Por qué una explicación enfocada en la CEAV?

I. Marco legal. Estándares internacionales versus realidad

El marco internacional en materia de reparaciones es amplio y claro. A través de instrumentos internacionales, tales como principios, declaraciones y tratados, así como mediante la jurisprudencia de diversos organismos internacionales, se ha construido el contenido y el alcance de las reparaciones por violaciones de derechos humanos, los derechos que tienen las víctimas y las consiguientes obligaciones de los Estados. En esta sección se mencionarán brevemente cuáles son estos estándares y se indicará lo establecido en la legislación mexicana.

Derechos de las víctimas y reparaciones

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, mediante la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* (en adelante *Principios y directrices básicos*).[4] Éstos definen a una víctima como "toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales

de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario".[5] Asimismo, también pueden considerarse víctimas a "la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización". [6] Es importante destacar que "una persona será considerada **víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado** y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima".[7]

Estos *Principios y directrices básicos* establecen también que las víctimas "deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos", y los Estados tienen que adoptar "las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias". Consiguientemente, existe la obligación de que, "en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma".

Establece que entre los derechos de las víctimas se encuentra el disponer de recursos contra las violaciones de derechos humanos, tales como "acceso igual y efectivo a la justicia […] reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido […] [y] […] acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación". Es por ello que los Estados tienen el deber de dar a conocer, de forma privada y pública, información sobre todos los recursos disponibles para hacer frente a las violaciones; adoptar medidas para minimizar los inconvenientes de las víctimas y sus representantes; facilitar asistencia apropiada a las víctimas que buscan justicia; y utilizar todos los medios posibles para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos.

En cuanto a reparaciones, los *Principios y directrices básicos* determinan que "una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones" y que

deberá ser “proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”. Los Estados, en conformidad con su derecho interno y sus obligaciones jurídicas internacionales, deben conceder “reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”. Con la finalidad de dar cumplimiento a esta obligación, deben “procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones”. Asimismo, “los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar daños”.

Los *Principios y directrices básicos* proporcionan una definición de las formas de reparación:

a. La **restitución**, siempre que sea posible, debe devolver a la víctima a la situación anterior a la violación y comprende, según corresponda, “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”;
b. La **indemnización** debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a sus circunstancias, por todos los perjuicios económicamente evaluables, tales como “*a)* El daño físico o mental; *b)* La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; *c)* Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; *d)* Los perjuicios morales; *e)* Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”;
c. La **rehabilitación**, que debe incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales;
d. Para **la satisfacción** deben realizarse, en la medida de lo posible, todas o parte de las siguientes medidas: “*a)* Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; *b)*

La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; *c)* La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; *d)* Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; *e)* Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; *f)* La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; *g)* Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; *h)* La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles";

e. En cuanto a las **garantías de no repetición**, los *Principios y directrices* establecen una lista, no limitativa, de acciones como: "*a)* El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; *b)* La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; *c)* El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial; *d)* La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; *e)* La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto

de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; *f)* La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; *g)* La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; *h*) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan".

La Corte Interamericana ha determinado que "en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es propio del Estado, por lo que, si bien las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación en el derecho interno, este deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios". En el emblemático caso de *Campo Algodonero vs. México*, también determinó que en situaciones de discriminación estructural, "las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también correctivo".[8]

En muchas ocasiones las víctimas cuestionan, con razón, la reparación económica, es decir, la *indemnización*, como un hecho insuficiente y perverso. Por ello es importante la integralidad de las medidas de reparación en conjunto con procesos judiciales efectivos. De acuerdo con el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, debe tenerse presente que:

> las reparaciones no son simplemente un mecanismo de intercambio, similar a una póliza de seguro contra actos delictivos o a un sistema de indemnización para resarcir a las víctimas cuando se violan sus derechos. Para que algo cuente como reparación, como medida de justicia, tiene que ir acompañado del reconocimiento de la responsabilidad y debe estar vinculado, precisamente, a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.[9]

Consiguientemente, no pueden existir reparaciones sin garantías de no repetición; el Estado debe adoptar reformas institucionales, cambios legislativos, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales.[10] Adicionalmente, debe contemplarse la realización de actos públicos tendientes a la condena oficial a las violaciones de los derechos humanos y un compromiso con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Todo ello, como decisión de Estado contribuye a fortalecer la relación de confianza entre Estado y sociedad.[11]

El derecho a la verdad

Es importante realizar un análisis más a fondo sobre el derecho a la verdad. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo suyo, en febrero de 2005, el *Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad* (en adelante *Conjunto de principios*).[12] Dentro de dichos principios se encuentra el derecho inalienable a la verdad, y no sólo de las víctimas sino de la sociedad en su conjunto, sobre hechos de violencia.[13] La verdad es uno de los elementos centrales para iniciar la garantía de no repetición.[14] En ese sentido, corresponde al Estado el buen funcionamiento del Poder Judicial y adicionalmente pueden incluirse procesos no judiciales, como comisiones de la verdad o investigaciones específicas sobre hechos violentos.[15]

En su *Estudio sobre el derecho a la verdad*, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que

> el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los

> derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un **derecho autónomo e inalienable**, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar porque haya recursos efectivos y se obtenga reparación. Este derecho, estrechamente vinculado con otros derechos, tiene aspectos tanto individuales como colectivos, y ha de considerarse como **un derecho que no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones**.[16]

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que el derecho a la verdad es aquel que "asiste a las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron".[17]

Aunque el derecho a la verdad no aparece de forma expresa en los instrumentos interamericanos de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana han determinado cuál es su contenido y las obligaciones que los Estados tienen respecto a él, a través de un análisis de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[18] En ciertos casos, han determinado también que "el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana".[19] Consiguientemente, el derecho a la verdad tiene una **doble dimensión**, pues no sólo comprende el derecho de las **víctimas y sus familias** a conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a graves violaciones de derechos humanos y la identidad de quienes participaron en ellos, sino que también es un derecho que corresponde a la **sociedad en su conjunto**, en tanto resulta esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.[20] De acuerdo con la CIDH, la información a la que

debe garantizarse el acceso tanto a las víctimas y sus familias como a la sociedad en general comprende:

> *(i)* la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o sistematicidad; *(ii)* los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; *(iii)* [los] elementos para establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles; *(iv)* [la identificación de] las víctimas y sus grupos de pertenencia así como a quienes hayan participado de actos de victimización; y *(v)* [la comprensión del] impacto de la impunidad.[21]

El derecho a la verdad en el sistema interamericano se vinculó inicialmente con las desapariciones forzadas; es por ello que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han determinado que los Estados tienen "como obligación establecer la verdad de lo sucedido, localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo".[22] Incluso, la Corte Interamericana ha señalado que "la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos".[23] Asimismo, "ha sostenido que establecer lo sucedido devela una verdad histórica que contribuye a cerrar un proceso de duelo y sienta un precedente para que violaciones graves, masivas y sistemáticas no vuelvan a suceder".[24]

Dado que el derecho a la verdad es una obligación de los Estados que se deriva de las garantías de justicia, "el derecho a la verdad también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos". De acuerdo con la CIDH, garantizar el derecho a la verdad es en sí mismo una reparación, como medida de satisfacción y garantías de no repetición.[25] A pesar de ello, es importante destacar que, aunque la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son complementarias, tienen un contenido y alcance propios, por lo que "la verdad no puede ser un sustituto de la justicia, la reparación o las garantías de no

repetición".[26] En ese sentido, aunque mediante informes de mecanismos como comisiones de la verdad se alcanzara la "verdad histórica", ésta "no completa o sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad y asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales a través de los procesos pertinentes".[27]

El deber de recordar

El *Conjunto de principios* establece como uno de éstos el deber de recordar.[28] La memoria es un patrimonio de los pueblos y los Estados tienen la obligación de preservar los archivos y la información, así como facilitar el conocimiento de los hechos.[29] La CIDH ha indicado que el deber de recordar, "como corolario del derecho a la verdad, resulta de suma importancia a fin de evitar la recurrencia de violaciones en el futuro y constituye una garantía indispensable para asegurar la implementación de medidas de no repetición de los hechos del pasado".[30]

Dentro de los procesos de verdad, resultan muy importantes los actos de reconocimiento público, la construcción de memoriales, museos, monumentos y archivos públicos en los que participen las víctimas y la sociedad. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado que participación de representantes de la sociedad civil en el diseño y ejecución de proyectos de reparaciones simbólicas es especialmente importante dada su función semántica y representativa.[31] Sin la participación de víctimas y sociedad, los espacios destinados a la memoria carecen del simbolismo para el que fueron creados y generan mayor molestia en las víctimas y jamás son abrazados por la sociedad; tal es el caso del Memorial a las víctimas de la violencia en México que se encuentra en avenida Reforma de la Ciudad de México y que fue inaugurado en 2012.

Marco jurídico mexicano: Ley General de Víctimas

El marco legal mexicano en materia de derechos de las víctimas se encuentra establecido en la LGV, publicada en el *Diario Oficial de la*

Federación el 9 de enero de 2013.[32] En el presente apartado, se hará un énfasis particular en las regulaciones en materia de reparaciones contenidas en la LGV hasta la fecha de publicación del informe.[33]

De acuerdo con el artículo primero de la LGV, todas las autoridades están obligadas —en el ámbito de sus competencias— "a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral a las víctimas". En ese mismo artículo se reconoce, de manera acorde con los estándares internacionales, que "la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica". Asimismo, se indica que estas medidas deberán implementarse "a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante".

El artículo cuarto define a las **víctimas** como "aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos". Determina que son **víctimas indirectas** "los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella". La calidad de víctimas se adquiere cuando se acredita el daño o el menoscabo de los derechos en los términos que establece la LGV y, de forma similar a lo indicado en los *Principios y directrices básicos*, no es necesario que "se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo".

El artículo 7 de la LGV establece que son derechos de las víctimas, entre otros,

> ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva […] conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones […] a la

> verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces […] a una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño […] a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición.

Además del reconocimiento que hace de los derechos a la reparación integral, a la justicia y a la verdad, la LGV prevé también **medidas de ayuda inmediata** para las víctimas, entre las que se encuentran medidas en materia de alojamiento y alimentación, transporte, protección y asesoría jurídica; **medidas de asistencia y atención**, entre ellas medidas económicas y de desarrollo, y en materia de procuración y administración de justicia.

La LGV contiene disposiciones en conformidad con altos estándares internacionales en materia de reparaciones y atención de víctimas; sin embargo, su problema se encuentra en la estructura y operación del Sistema Nacional, específicamente de la CEAV, que es el que se encarga de su operación y del cumplimiento de sus atribuciones. Los siguientes párrafos contienen reflexiones enfocadas a la CEAV, retomándose algunas de las observaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)[34] en su informe publicado en abril de 2016, que son aplicables de igual forma a los dos casos estudiados en esta investigación.

II. Estructura

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y goza de autonomía técnica y de gestión.[35] De la Comisión Ejecutiva depende el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la Asesoría Jurídica Federal y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).[36] Sin embargo, y como lo señalara el GIEI, es necesario que, de forma real, la CEAV "tenga la necesaria independencia y autonomía frente a las autoridades que han podido tener responsabilidades por acción u omisión en los hechos de violencia. Si esto no se presenta, se

pueden generar conflictos de interés, además de una visión desde las víctimas de falta de independencia que compromete su cometido".[37]

El artículo 85 de la LGV establece que la CEAV estará integrada por siete comisionados, elegidos por el Senado entre una terna propuesta por el Ejecutivo federal, previa convocatoria pública. Con el objeto de garantizar la representación de colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas: cuatro comisionados deberán ser especialistas en derecho, psicología, derechos humanos y sociología, o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de la LGV, propuestos por universidades públicas; y tres comisionados deberán representar a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales o por los organismos públicos de derechos humanos. Si bien en sus inicios la CEAV contaba con siete comisionados, actualmente únicamente se encuentran en funciones cuatro: Jaime Rochín del Rincón, como comisionado presidente, Adrián Franco Zevada, Julio Antonio Hernández Barros y Susana Thalía Pedroza de la Llave.

De entrevistas sostenidas con personal de la CEAV y de las observaciones realizadas en el transcurso de la investigación, se ha detectado que actualmente existe una división en el interior de la CEAV. Debido a los enfoques diferentes de atención de cada uno de los comisionados, no trabajan de forma coordinada y existe una evidente falta de comunicación. Consecuentemente, el trabajo de la CEAV es ineficiente y quienes resultan afectadas son las víctimas. Esta observación fue realizada también por el GIEI, quien señaló en su informe presentado en abril de 2006:

> Varios de los problemas de relación con las víctimas en el caso Ayotzinapa han venido de actitudes y criterios distintos por parte de diferentes comisionados y la ausencia de una política e interlocutores claros. Se necesita una estructura más dinámica, y un liderazgo con experiencia contrastada en el trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos, por parte de una persona independiente y con estructuras de consulta flexibles y claras respecto la aprobación de medidas específicas.[38]

III. Procedimientos

Para obtener sus derechos, las víctimas tienen que atravesar diversos procedimientos dentro y fuera de la CEAV. Lamentablemente, estos procedimientos se caracterizan por ser lentos e ineficientes, así como por poner cargas innecesarias en las víctimas. Es el caso de las víctimas indirectas centroamericanas del caso San Fernando I. Es importante destacar que, de acuerdo con la información recabada con víctimas de ambos casos del presente informe, cuando las víctimas se acercan a la CEAV no reciben información adecuada sobre cuáles son sus derechos, ni acerca de qué es lo que puede ofrecer la CEAV, de qué forma lo hará y cuánto tiempo tardará. La información que llegan a recibir incluso varía dependiendo del área que las atienda. Como lo señalara el GIEI, esta situación "genera confusión en las víctimas y una falta de claridad de las ofertas del Estado o la posibilidad de hacer un plan específico de atención o reparación con criterios claros, que no dependan de ofrecimientos genéricos y poco concretos o en ocasiones contradictorios".[39]

IV. Recomendaciones

La CEAV, en sus pocos años de vida, ha venido operando sin cumplir plenamente sus funciones, y las que realiza se han hecho con muchos problemas y de manera ineficiente. Las razones detrás de esta situación son diversas y muchas se originan en el diseño mismo de la institución y en la falta de voluntad dentro de la misma CEAV y de otras dependencias que no colaboran de forma plena para dar una atención adecuada a las víctimas, así como de la inexistencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas ante la sociedad. Evidentemente, esto ha desatado un gran número de críticas por parte de la sociedad en general, la pérdida de credibilidad de la institución y víctimas cuyos derechos no son garantizados.

En estos años, la CEAV ha operado, en el mejor de los casos, como ventanilla de atención a víctimas, cumpliendo un trabajo burocrático de reparaciones centradas en la indemnización individual, así como medidas de ayuda provisional, asistencia y atención, y ha dejado a un lado las grandes responsabilidades que le han sido asignadas.

La reparación económica no es, y no debe plantearse de esta forma a las víctimas, un sustituto de la reparación integral, la verdad o la justicia. Las funciones de la CEAV no pueden quedarse en las de asistencia o en las de dar trámite administrativo a demandas de víctimas; sus funciones son la obligación moral y legal del Estado de reconocer y garantizar la dignidad y los derechos de las víctimas, de la sociedad en su conjunto y de las causas de la victimización. Como se establece en la propia LGV, "las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral".[40]

El mejor funcionamiento de todo el Sistema Nacional requiere de una mayor coordinación y trabajo en conjunto entre las instituciones que lo conforman. Es imposible garantizar un trabajo eficiente en materia de reparaciones integrales sin la participación, evitando duplicidades, de todos los actores de la Federación y de las entidades federativas. Este trabajo debe ser liderado por la CEAV, la que, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, debe ejercer su independencia de manera responsable. Por otra parte, es necesario que se replantee el diseño institucional de la CEAV. Como ya fue señalado, ésta no ha funcionado adecuadamente como órgano colegiado, por lo que modificar su dirección a un órgano unipersonal podría mejorar la falta de coordinación e inadecuada aplicación de la LGV que existe actualmente.[41]

La participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia es necesaria para la correcta implementación de todo el Sistema Nacional. Claro ejemplo es el convenio de colaboración que dio origen a la presente investigación. Es fundamental que la CEAV redoble sus esfuerzos para establecer mecanismos que permitan una participación real y efectiva de las víctimas, y la colaboración de los demás sectores de la sociedad.

La CEAV debe ser un espacio de y para las víctimas. Para ello, es imprescindible generar espacios de confianza, privacidad y respaldo institucional a ellas; informarles de manera clara los alcances de la institución; generar una estructura profesional, sólida, ágil y armónica en el interior con directrices y procedimientos

homogéneos, claros y ágiles; realizar registros adecuados y evitar duplicidades; ofrecer respuestas en el menor tiempo posible. De no lograrlo, la CEAV seguirá siendo percibida como parte del aparato institucional que generó o permitió la victimización, y que lo continúa haciendo al negar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

La disposición de atención a las víctimas debe ser mostrada desde el primer contacto. Los procesos burocráticos tienen que transformarse en oportunidades de atención y reparación. Iniciando con el registro e ingreso de víctimas en el RENAVI, debe escucharse y registrarse la información que, desde ese momento, se convierte en acervo para la verdad de los hechos. Lograr esto no debe significar que se agreguen cargas innecesarias a las víctimas; como lo señaló el GIEI, el RENAVI "tiene que ser repensado en su integridad para permitir mejores soluciones y no sobrecargar a las víctimas con nuevos procesos de registro, toma de testimonios, etc. sin tener claridad, además, del nivel de prestaciones o atención que les correspondería".[42]

Uno de los más grandes obstáculos a los que se enfrentan las víctimas es el ser reconocidas como tales. Ellas se ven seriamente afectadas cuando no tienen este reconocimiento, ya que éste y su ingreso al RENAVI constituyen un prerrequisito para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y a las medidas de atención, asistencia y reparación integral. De acuerdo con el artículo 110 de la LGV, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por las determinaciones del juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; por el juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; por el juzgador en materia de amparo, civil o familiar, que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; por los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia y por la CEAV. Para que esta última reconozca la calidad de víctima, puede tomar en consideración las determinaciones realizadas por el Ministerio Público, la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter, los organismos públicos de

protección de los derechos humanos o los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

Los participantes del Conversatorio “Derechos de las Víctimas en México”, celebrado el 24 de agosto de 2016 como parte de las discusiones en torno a una reforma de la LGV, consideran que una de las principales deficiencias de la LGV es “la dificultad para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos de ingresar al Registro Nacional de Víctimas(RENAVI), al condicionarles su ingreso a la presentación de una denuncia penal o la emisión de una recomendación por parte de una comisión de derechos humanos, lo cual en muchos de los casos acentúa la situación de vulnerabilidad de las víctima”.[43] Es necesario que se replanteen las formas de ingreso al RENAVI, generando procedimientos más rápidos y eficientes en los que se garanticen los derechos de las víctimas y se eviten mayores afectaciones.

Una vez que lograron obtener su ingreso en el RENAVI, las víctimas tienen que enfrentarse a diversas cargas operativas para poder acceder a recursos o a algún otro tipo de atención por parte de la CEAV. Debe evaluarse la forma de otorgar recursos a las víctimas para gastos menores (atención médica, gastos funerarios, traslados, alimentación) y que éstos sean sujetos a una comprobación posterior, pues sería una forma mucho más ágil y se generaría confianza. El modelo actual de rembolso es lento y en ocasiones imposible de afrontar por las víctimas. Deben ser revaluadas las reglas de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Retomando las palabras del GIEI, “las cargas operativas de la atención se ponen en las víctimas en lugar de ser asumidas por la CEAV”.[44] De la revisión que se realizó a expedientes de la CEAV, fue notorio lo lento y difícil que resultó para las víctimas de San Fernando I poder acceder a recursos, y los gastos que tuvieron que asumir sus representantes ante la falta de una respuesta ágil. Asimismo, es importante que, de conformidad con los estándares internacionales ya mencionados, los procedimientos destinados a conceder reparaciones den consideración y atención especiales a las víctimas. En este caso, por ejemplo, se detectaron retrasos

porque los representantes no comprobaban su representación en los términos solicitados por la CEAV.

En cuanto a medidas de rehabilitación, como se observó en las secciones sobre los casos de San Fernando y Allende, la CEAV y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila suelen limitarse a concertar citas médicas para las víctimas, a hacerles rembolsos por gastos médicos o a inscribirlas en programas sociales. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado que "la prestación de servicios médicos como medida de reparación **no debería concebirse simplemente en términos de ofrecer a las víctimas servicios médicos que ya existían**. Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos suelen necesitar servicios especializados, que tal vez no se encuentran con facilidad".[45] Asimismo, es importante destacar que, más allá de servicios especializados, "las experiencias previas de las víctimas afectan a la forma en que deben prestarse los distintos tipos de servicios, y por tanto es preciso desplegar grandes esfuerzos para que los proveedores, en todos los niveles, sean conscientes de esas necesidades especiales". Por ejemplo, en el caso de las víctimas de la masacre de las 72 personas migrantes, un médico le dijo a una víctima indirecta en una visita médica que "para qué seguía buscando a sus familiares, que mejor se buscara un marido".[46]

Deben otorgarse medidas de reparación que no se restrinjan a la indemnización. Los estándares internacionales y la misma LGV así lo reconocen. Según sea el caso y apegados a las mejores prácticas internacionales, deben contemplarse medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y aquellas que abonen a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, teniendo siempre presente las dimensiones individual, colectiva, material y simbólica. Actualmente, de forma contraria a los estándares internacionales, las víctimas en México reciben —en el mejor de los casos— indemnizaciones y acceso a programas sociales y a servicios médicos que no fueron creados tomando en cuenta sus situaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de las familias de

San Fernando I, lo único a lo que han logrado acceder, además del rembolso de gastos médicos, es a una consulta médica en la que sufrieron revictimización.

Es fundamental que la CEAV tome las medidas necesarias para dar una atención adecuada a las víctimas migrantes y/o a sus familias, y a las víctimas con familiares desaparecidos, como son los casos analizados en el presente informe. Cada una de estas víctimas se encuentra en situaciones distintas, tiene características y necesidades distintas. Sin diagnósticos que permitan entender estos fenómenos, sin un acercamiento a las víctimas para entender sus necesidades y sin crear modelos de atención con un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas no serán adecuadamente garantizados.

En relación con lo anterior, por ejemplo, nada se ha hecho con las víctimas de desplazamiento forzado producto de los hechos violentos que rodean el caso de Allende y otros muchos que han tenido lugar en el país. La CNDH emitió en mayo de 2016 el *Informe especial sobre desplazamiento forzado (DFI) en México*.[47] En él se establece que el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, aprobado por el pleno del Sistema Nacional, incluye la estrategia de "promover una atención adecuada a víctimas de desplazamiento interno forzado". Pese a ello, indica que "las personas desplazadas se encuentran en situación de desprotección y con la posibilidad de ser revictimizadas por cualquier autoridad que se niegue a reconocer su condición de desplazamiento y la protección o ayuda correspondiente".

Se sugiere crear dentro de la CEAV una estructura que se centre en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, así como en las recomendaciones a otras instancias del Estado mexicano para las garantías de no repetición. Sobre todo, sería necesario este tipo de acciones para casos de gran impacto o violaciones graves a los derechos humanos. En este rubro, es central la colaboración estrecha con la PGR, la CNDH, el INAI y sus equivalentes en el ámbito estatal. En los casos que así lo considere, la CEAV podrá recurrir a mecanismos similares a los que dieron origen a la presente colaboración con El Colegio de México, cuyo objetivo es contribuir al

derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, así como proponer una serie de recomendaciones en materia de reparación integral. Otro de los ajustes necesarios es que los recursos provenientes para la realización de investigaciones que abonen al derecho a la verdad no provengan del presupuesto de operaciones de la CEAV, sino que, al ser una medida de reparación, puedan ser obtenidos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Estos mecanismos deberán permitir que la voz de las víctimas sea escuchada y tomada en cuenta, sin importar su nacionalidad.

Hasta ahora, la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad que intenta ser alimentada desde la prensa, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o entregados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas por Estado y sociedad, ausencia por los desplazamientos forzados, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos, organizaciones de la sociedad civil relegadas, medios de comunicación en su mayoría ausentes, presencia internacional diferenciada. En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos.

La CEAV debe poner en práctica de manera efectiva sus facultades, entre las que destacan:

> **IV.** Proponer al Sistema una política nacional integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
>
> **XX**. Formular propuestas de política integral nacional de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
>
> **XXXI**. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

A pesar de las limitaciones que la misma LGV y su reglamento imponen en la CEAV, desde el interior debe existir un impulso para trabajar de la mejor manera posible, aprovechando las amplias funciones y facultades que tiene.

v. Otras recomendaciones

Con fundamento en las funciones y facultades de la CEAV, establecidas en el artículo 88 de la LGV y arriba descritas, incluimos una serie de recomendaciones que la CEAV podría transmitir a otras instituciones y órganos del Estado mexicano.

La CNDH y otros organismos públicos de derechos humanos

La CNDH y sus homólogas estatales tienen una responsabilidad fundamental en materia del respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en México. Desgraciadamente, en los casos analizados no han cumplido con sus funciones de manera eficiente y no han tenido presente a las víctimas. Sus procesos deben ser revisados para que actúen de forma diligente, y se permita la participación real y efectiva de las víctimas en ellos, pues solamente así sus intereses serán verdaderamente reflejados en las recomendaciones que emiten.

La CNDH y los organismos públicos de derechos humanos deben trabajar para formular recomendaciones que den respuesta a todos los problemas que deben atenderse, y que puedan incidir y generar un verdadero cambio. Asimismo, deben utilizar y entender adecuadamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos, para así generar recomendaciones que puedan incidir en los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones, así como generar verdaderas garantías de no repetición. El lenguaje utilizado en los puntos recomendatorios debe ser lo suficientemente claro y directo para que no se generen confusiones en las autoridades y no se reduzca el impacto de las recomendaciones. Es también necesario que se busquen nuevas formas de dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones; la forma de hacerlo actualmente da por cumplidos o parcialmente cumplidos puntos recomendatorios con haber recibido oficios de autoridades

en los que no se reflejan resultados algunos.

Procuradurías y fiscalías

Es muy importante que la PGR, así como las procuradurías y fiscalías de los estados, asuman una actitud de mayor transparencia, rendición de cuentas y colaboración con los derechos de acceso a la información y a la verdad. En el caso de la masacre de las 72 personas migrantes, como ha sido descrito anteriormente, la negativa a proporcionar una versión pública del expediente ha hecho que dos asuntos estén siendo actualmente conocidos por la SCJN. Como parte de esta investigación, se solicitó acceso al expediente a través de la CEAV y mediante solicitud de acceso a la información; sin embargo, por los dos medios se recibió la misma respuesta: "la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 110, fracciones VII y XII de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, en relación con el artículo 16, del *Código Federal de Procedimientos Penales*". Esa misma respuesta se recibió cuando se solicitó el número de personas detenidas en relación con este caso y el estado procesal de cada una de ellas. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a la verdad y las instituciones de procuración de justicia deben cumplir con sus obligaciones en ese sentido.

Por otra parte, pudo observarse que en los dos casos objeto de estudio, existió una clara falta de colaboración con los organismos públicos de derechos humanos por parte de la PGR y la PGJE del Estado de Coahuila. La dilación para proporcionar información y, en algunos casos, la negativa a proporcionarla fueron evidentes. Estas instituciones tienen que asumir un compromiso con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, y eso implica una colaboración real y eficiente con los organismos públicos de derechos humanos.

En cuanto a las investigaciones que realizan las procuradurías o fiscalías en México, es importante retomar las recomendaciones emitidas por el GIEI en su último informe. De la información a la que se tuvo acceso durante el transcurso de la investigación, se detectó que la gran mayoría de las recomendaciones son igualmente

aplicables a los dos casos objeto de estudio:[48]

- Disminuir la formalidad y burocracia
- Limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones
- Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones
- Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva
- Rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR y de sus homólogas estatales
- Potenciar la capacidad analítica de las pruebas
- Realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades
- Incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos
- Evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada
- Cualificar y valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados
- Integrar las averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos
- Promover un sistema de información periódica a las víctimas
- Acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación
- Investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales
- Uso de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos
- Realizar la exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, permitiendo el acceso a las familias de las víctimas a los sitios donde se localicen los restos conforme a su derecho a la verdad
- Evitar la revictimización y criminalización de las víctimas
- Practicarse informes médicos a los detenidos, adecuados a estándares internacionales
- Garantías médicas durante la detención

- Actitud cooperativa frente a asistencia internacional

SCJN

La SCJN, como máximo tribunal constitucional del país, juega un papel esencial en cuanto al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en México. Es necesario que realice su trabajo no solamente de forma rápida, sino también teniendo en consideración los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por esa razón, es importante que no siga retrasando las decisiones en los dos asuntos sobre acceso a la información relacionados con la masacre de las 72 personas migrantes, ni tampoco en el relativo al amparo interpuesto en contra del proceso de investigación y la recomendación 80/2013 de la CNDH. Las sentencias que eventualmente emita tendrán un impacto que trascenderá estos casos y pueden significar un avance en materia de derecho de acceso a la información, derecho a la verdad y derechos de las víctimas.

Debe señalarse que el retraso que la SCJN ha mostrado en los casos de personas migrantes y sus familias se refleja también en que, a pesar de que desde marzo de 2016 se concedió el amparo a la madre y a la hermana de personas migrantes encontradas en las fosas clandestinas en abril de 2011 (San Fernando II) para efectos de que fueran reconocidas como víctimas y tuvieran acceso a la averiguación previa, han pasado siete meses y siguen sin haberse realizado las modificaciones acordadas al proyecto del ministro Pardo Rebolledo.[49] Consiguientemente, aún no se ha notificado a la PGR la orden de abrir los expedientes y el derecho a la justicia de las víctimas sigue obstaculizado.

INAI

El INAI es el organismo constitucional autónomo responsable de garantizar, en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. Es necesario que asuma esta responsabilidad para garantizar el acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general en casos de violaciones graves a derechos

humanos y crímenes de lesa humanidad. Por esa razón, sus resoluciones deben tener siempre como base los más altos estándares internacionales.

Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la posibilidad de actuar para que las víctimas de nacionalidades distintas a la mexicana puedan acceder a sus derechos, generando mecanismos de cooperación con instituciones mexicanas y con otros países. Actualmente, la CEAV y la SRE no tienen un mecanismo interinstitucional que permita una colaboración eficiente en los casos en los que estén involucradas víctimas extranjeras. Es necesario que ambas instituciones trabajen lo antes posible para generarlo.

Notas

[1] Ley General de Víctimas, artículos 18 y 20. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>.

[2] El artículo 82 de la LGV establece que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas está integrado por las siguientes instituciones, entidades, organismos y demás participantes, incluidas, en su caso, las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal: I. Poder Ejecutivo: *a)* el presidente de la República, quien lo preside, *b)* el presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores y *c)* el secretario de Gobernación. II. Poder Legislativo: *a)* El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, *b)* El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores y *c)* un integrante del Poder Legislativo de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. III. Poder Judicial: *a)* el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Organismos públicos: *a)* el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y *b)* un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos de los estados y del Distrito Federal. V. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de las comisiones ejecutivas locales.

[3] Ley General de Víctimas, artículo 88.

[4] Naciones Unidas, Asamblea General, *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2015, A/RES/60/147. Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>.

[5] "Principio V. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario", en *idem*.
[6] *Idem*.
[7] *Idem*.
[8] CIDH, *Derecho a la verdad en América*, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 de agosto de 2014, párr. 123. Disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.
[9] Naciones Unidas, Asamblea General, *Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, A/69/518, 14 de octubre de 2014, párr. 11.
[10] Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2015. Principio 35. Disponible en <http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1>.
[11] *Idem*.
[12] *Idem*.
[13] *Ibidem*, Principio 2.
[14] *Idem*.
[15] *Ibidem*, Principio 5.
[16] Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, *Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, E/CN.4/2006/91. Disponible en <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement>.
[17] OEA, Asamblea General, Resolución AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) "El derecho a la verdad", 4 de junio de 2012. Disponible en <http://www.oas.org/es/sla/docs/AG05796S04.pdf>.
[18] CIDH, *Derecho a la verdad en América, op. cit*., párrs. 53 y 69.
[19] *Ibidem*, párr. 69.
[20] *Ibidem*, párrs. 71, 70 y 107.
[21] *Ibidem*, párr. 108.
[22] *Ibidem*, párr. 60.
[23] *Ibidem*, párr. 66.
[24] *Ibidem*, párr. 66.
[25] *Ibidem*, párr. 124.
[26] *Ibidem*, párr. 39.
[27] *Ibidem*, párr. 135.
[28] Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos

Humanos, *Conjunto de principios, op. cit.*, Principio 3.
[29] *Idem*.
[30] CIDH, *Derecho a la verdad en América*, *op. cit.*, párr. 109.
[31] Naciones Unidas, Asamblea General, *Promoción de la verdad, op. cit.*, párr. 34.
[32] Ley General de Víctimas, disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>.
[33] En el momento de la redacción de este texto se discute una nueva Ley General de Víctimas en el Congreso.
[34] En octubre de 2014, después de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas y sus familias solicitaron a la CIDH asistencia técnica para la búsqueda, la investigación y el apoyo a las familias. El 12 de noviembre de 2014, se acordó que el GIEI realizaría "una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas".
[35] Ley General de Víctimas, artículo 84.
[36] *Idem*.
[37] GIEI, *Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a víctimas, 24 de abril de 2016*, p. 373. Disponible en <http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!informe-/c1exv>.
[38] *Ibidem*, p. 373.
[39] *Ibidem*, p. 374.
[40] Ley General de Víctimas, artículo 9.
[41] Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, "Un Sistema de Atención a víctimas que funcione", *Animal Político*, 19 de septiembre de 2016. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2016/09/19/sistema-atencion-victimas-funcione/>.
[42] GIEI, *Informe Ayotzinapa II, op. cit.*, pág. 375.
[43] Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, "Un Sistema de Atención a víctimas que funcione", *op. cit*.
[44] GIEI, *Informe Ayotzinapa II, op. cit.*, pág. 374.
[45] Naciones Unidas, Asamblea General, *Promoción de la verdad, op. cit.*, párr. 36.
[46] Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, *Atención médica a familiares de víctimas de la masacre de 72 migrantes y de fosas clandestinas: hechos, elementos positivos, retos y propuestas de acción*, Documento presentado por la FJEDD a la CEAV en junio de 2016.
[47] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Informe especial sobre desplazamiento forzado en México*. Disponible en <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf>.
[48] GIEI, *Informe Ayotzinapa II, op. cit.*, págs. 579-605.
[49] Manuel Ureste, "A 6 años de la masacre en San Fernando, las víctimas aún no

acceden a la investigación", *Animal Político*, 26 de agosto de 2016. Disponible en <http://www.animalpolitico.com/2016/08/masacre-migrantes-san-fernando-investigacion/>.

Capítulo 9

LA MASACRE DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, Y LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN ALLENDE, COAHUILA: UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Delia Sánchez del Ángel

El análisis de estos dos casos desde el derecho penal internacional puede resultar de gran utilidad para enfrentar la crisis de derechos humanos a la que nos enfrentamos actualmente. El derecho penal internacional cuenta con herramientas creadas específicamente para combatir la impunidad y enfrentar crímenes que, entre otros, se dan en un contexto de sistematicidad y/o generalidad, en los que existen estructuras criminales organizadas de alta complejidad. Los siguientes párrafos son una breve reflexión sobre la masacre de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y la desaparición forzada de personas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011, tomando como base los estándares del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante Estatuto de Roma) —ratificado por México en 2005— y la jurisprudencia existente en la materia.

El análisis de esta sección busca aportar elementos en relación con estos dos casos que abonan a la conclusión de la existencia de fundamentos razonables para considerar que en México se han cometido y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Dado que el objeto y alcance de este informe es de carácter preliminar y no busca demostrar la responsabilidad individual de los actores involucrados en los hechos, el análisis solamente toma en cuenta los elementos requeridos para mostrar que se han cometido crímenes de lesa humanidad y no aquéllos necesarios para atribuir la responsabilidad de individuos en particular.

Definición de crímenes de lesa humanidad

De acuerdo con el Estatuto de Roma, se entienden como crímenes de lesa humanidad una serie de actos —entre los que se encuentran el asesinato, la esclavitud, la tortura y la desaparición

forzada— que son cometidos "como parte de un **ataque generalizado o sistemático** contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".[1] Como "ataque **contra una población civil**" se entiende "una línea de conducta que implique la comisión de múltiples actos" en contra de una población civil, "de conformidad con la política de un Estado o de una **organización** de cometer ese ataque o para promover esa **política**".[2]

Los Zetas como una organización

De acuerdo con la información disponible, los perpetradores tanto de la masacre como de la desaparición forzada fueron integrantes del grupo de la delincuencia organizada de los Zetas, con la participación directa, el apoyo o la aquiescencia de autoridades del Estado mexicano.

Si se toma en cuenta el criterio que han sostenido la mayor parte de los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de la situación de Kenia, como lo hace el informe *Atrocidades innegables*, puede presumirse que los Zetas en México cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados una organización.[3] Como puede observarse con mayor detalle en la sección de esta investigación titulada "La violencia en el noreste mexicano", los Zetas —especialmente en el momento en el que se cometieron los hechos (2010 y 2011) y en la región del país en la que fueron cometidos— cumplen con estas características. Para que un colectivo de personas sea considerado como organización para efectos que puedan ser considerados como responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, deben satisfacerse al menos los siguientes requisitos: la existencia de un mando responsable, el que el grupo cuente con una organización suficiente y que pueda imponerse la organización como autoridad *de facto* en un determinado territorio, en un periodo definido. En lo que se refiere a los eventos sobre los que versa este estudio, los Zetas se encontraban bajo un **mando responsable**, tenían la **organización suficiente** "para planear y ejecutar operaciones militares de manera sostenida y concertada, así como para imponer disciplina en nombre de una autoridad *de facto*".[4] Asimismo, tenían los **recursos**, **medios**

y **capacidad** suficientes y efectivos para llevar a cabo un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; ejercían un **control** sobre parte del **territorio** de un estado, como pueden ser Coahuila y Tamaulipas en México; dirigían sus actividades criminales **contra la población civil** como un objeto principal;[5] y el grupo articulaba, explícita o implícitamente, una **intención** de atacar a una población civil.

La política de los Zetas

Los Zetas actuaban con una clara **política** de **control territorial**, que puede observarse por la gran diversidad de acciones mediante las cuales **aterrorizaron a la población civil** (secuestros, extorsiones, torturas, ejecuciones masivas, cuerpos colgados en puentes, cabezas en lugares públicos) y controlaron sus actividades (por ejemplo, el cobro de derecho de piso). Además, realizaron una serie de acciones con el objetivo de **expulsar a los grupos rivales y controlar a las autoridades gubernamentales** en las zonas donde buscaban ejercer su control.

Ataque dirigido contra la población civil

Un ataque se define como “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos”.[6] Una “línea de conducta” requiere la existencia de una “serie de eventos generalizados, a diferencia de actos aleatorios meramente agregados”; es necesario “un cierto patrón de comportamiento, que indique un nivel de planeación, dirección u organización por parte del grupo que ejecuta el ataque”.[7]

La masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, es parte de una serie de actos cometidos por los Zetas para reclutar forzadamente a personas migrantes, buscando que se integren a la organización, y para torturar y asesinar a quienes no aceptan trabajar con ellos.[8] Es también parte de una política de control del territorio mediante la intimidación de sus enemigos al cometer asesinatos masivos.[9]

La desaparición masiva de personas[10] en Allende, Coahuila — realizada a partir de marzo de 2011 y relacionada con la venganza de altos mandos de los Zetas por la traición cometida por unos de

sus operadores—, no solamente fue una acción que implicó una clara y deliberada planeación por parte de integrantes de los Zetas, que actuaron con la colaboración de la policía municipal de Allende para privar de la libertad a población civil que estuviese vinculada a quienes los habían traicionado;[11] este caso se enmarca en un contexto de desapariciones de personas perpetradas por los Zetas con la participación, apoyo y/o aquiescencia de las autoridades, que se extendía a todo el estado de Coahuila.[12]

Ataque generalizado y sistemático

Para que ciertos actos se consideren crímenes de lesa humanidad, deben haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático. Puede concluirse que entre 2008 y 2011, los Zetas fueron "responsables de las muertes de cientos de civiles con el objetivo de controlar la actividad criminal de un territorio determinado, sobrepasando el número de víctimas en situaciones fácticas examinadas por la CPI".[13] Es decir, "el ataque a gran escala fue masivo, frecuente, llevado a cabo colectivamente con una seriedad considerable y dirigido contra una multiplicidad de víctimas civiles".[14] Desde el criterio de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de la situación de Kenia, "un ataque generalizado puede ser efecto acumulativo de una serie de actos inhumanos o el efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria magnitud".[15] Por otra parte, "la comisión persistente de actos de violencia por parte de los Zetas con el objetivo de controlar territorio y extraer 'cuotas' en relación con las ganancias obtenidas de actividades criminales llevadas a cabo en las regiones concernientes de México" puede utilizarse como un elemento para demostrar que el ataque fue también sistemático.[16]

La propuesta de *Atrocidades innegables*[17]

Para que el Estado mexicano demuestre su voluntad política y genere esperanzas verdaderas para poner fin a la crisis de atrocidades e impunidad, es necesario que busque el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a la situación. Por esa razón, resulta factible e indispensable que se constituya una

entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga “el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”.[18] Asimismo, este órgano tendría también como mandato “brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República/Fiscalía y a la Policía de Investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.[19]

Notas

[1] Estatuto de Roma, artículo 7.1.

[2] *Ibidem*, artículo 7.2 (a).

[3] Open Society Justice Initiative, *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México*, Open Society Foundations, 2016, pp. 94-99.

[4] *Ibidem*, p. 95.

[5] En el caso de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, los Zetas dirigieron un ataque claro contra población civil: migrantes de diferentes nacionalidades que buscaban cruzar a Estados Unidos. Esto se enmarca en un contexto de elevada violencia, secuestros y reclutamiento forzado en contra de migrantes, así como de la impunidad generalizada en la que permanecen estos crímenes. En el caso de Allende, los Zetas —con el apoyo y la participación de la policía municipal— privaron de la libertad a un número indeterminado de civiles, de los que hasta hoy en día no se sabe su paradero, y destruyeron sus casas y negocios. La información existente indica que esto se enmarcaba en un contexto en el que situaciones similares habían ocurrido y seguirían ocurriendo en esa región después de marzo de 2011.

[6] Estatuto de Roma, artículo 7. 2.

[7] Open Society Justice Initiative, op. cit., pág. 100. Traducción del original en inglés: *The expression “course of conduct” already embodies a systemic aspect as it describes a series or overall flow of events as opposed to a mere aggregate of random acts. […] since the course of conduct requires a certain “pattern” of behaviour, evidence relevant to proving the degree of planning, direction or organisation by a group or organisation is also relevant to assessing the links and commonality of features between individual acts that demonstrate the existence of a “course of conduct”.* International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire in the case of *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo. Decision on the Confirmation of Charges against Laurebt Gbagbo*, ICC-02/11-01/11, 12 de junio de 2014, párrs. 209-210. Disponible en: < https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_04777.PDF. >.

[8] Véase la sección de este informe: “La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas”; Open Society Justice Initiative, *op. cit*., p. 100.
[9] Véase la sección de este informe: “La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas”.
[10] Los hechos reúnen los elementos de “desaparición forzada de personas” establecidos en el artículo 7.2 (i) del Estatuto de Roma. Un número indeterminado de personas fue privado de su libertad por integrantes de los Zetas y por policías municipales que colaboraban con los Zetas; inicialmente, ante las denuncias interpuestas por las familias de las personas desaparecidas y las investigaciones estatales, las personas presuntamente involucradas negaron tener conocimiento de los hechos y sobre la suerte o paradero de estas personas. Fue hasta más de tres años después de que se cometieron las desapariciones cuando se empezó a tener información de lo sucedido proveniente de testigos y presuntos perpetradores. Hasta hoy en día aún no hay certeza de la suerte o el paradero de las personas que desaparecieron.
[11] Véanse las secciones de este informe: “La tragedia en el norte de Coahuila: Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras” y “La desaparición de personas en Allende, Coahuila, a partir de marzo de 2011”.
[12] Véanse las secciones de este informe: “Panorama de la violencia en México” y “La tragedia en el norte de Coahuila: Allende, los Cinco Manantiales y Piedras Negras”.
[13] Open Society Justice Initiative, *op. cit*., p. 102.
[14] Traducción del original en inglés: “*Insofar as the “widespread” element is concerned, this has long been defined as encompassing “the large scale nature of the attack, which should be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims”.* International Criminal Court, Pre-Trial Chamber II*, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Autorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya*, ICC-01/09, 31 de marzo de 2010, párr. 95. Disponible en <https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_02399.PDF >
[15] Traducción del original en inglés: *a widespread attack may be the “cumulative effect of a series of inhumane acts or the singular effect of an inhumane act of extraordinary magnitude. Idem*.
[16] Open Society Justice Initiative, *op. cit*., p. 102. Véase también la sección de este informe “Panorama de la violencia en México”.
[17] El 7 de junio de 2016, Open Society Justice Initiative, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, presentó el informe *Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.*

[18] Open Society Justice Initiative, *op. cit*., p. 21.
[19] *Ibidem*, p. 168.

En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)
se terminó en enero de 2017
Cuidó la edición Ulises Martínez.
Tipografía, formación y portada de Pablo Reyna
en la Dirección de Publicaciones de El Colegio de México.



Documento de trabajo del
Centro de Estudios Internacionales
de El Colegio de México, realizado con el
auspicio de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV)

EL COLEGIO DE MÉXICO
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES | CEI